



*Universidad Carlos III de Madrid*  
*Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”*

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS  
HUMANOS  
CURSO ACADÉMICO 2011-2012**

**Trabajo de fin de máster**  
**La Reparación a las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de Derechos  
Humanos en el marco de una sociedad post-transicional: El caso del Perú.**

**Autora**  
**Sinthya Rubio Escolar**

**Director**  
**Carlos Lema Añón**  
**Profesor Titular de Filosofía del Derecho**

**Getafe, Madrid, 3 de septiembre de 2012.**



A todas y todos los *SuperVivientes*, seres extraordinarios que a lo largo de los años me han demostrado que la vida tiene mucho sentido y me motivan a seguir luchando por lo que tantos consideran una causa perdida.

“El tikkun evocado por la tradición judía, la reparación, no consiste únicamente en velar por la memoria de los desaparecidos, incluso cuando es esencial que los vivos presten su aliento a la nominación de los desaparecidos, conocidos o desconocidos. El tikkun, como vocación por reparar todo lo que ha roto el mal, implica una responsabilidad infinita para con la fragilidad del mundo”

Catherine Chaliel (Prefacio en La herencia del olvido, Reyes Mate, 2008)

## TABLA DE CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>8</b>
<b>CAPÍTULO 1. UNA APROXIMACIÓN A LA JUSTICIA TRANSICIONAL .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Transiciones político-democráticas. ....</b>	<b>14</b>
<b>2. Revisión conceptual sobre la justicia transicional.....</b>	<b>19</b>
<b>3. Rasgos históricos de la justicia transicional.....</b>	<b>21</b>
3.1 Primera etapa: la internacionalización de la justicia .....	22
3.2 Segunda etapa: respuestas nacionales .....	31
3.2.1 Sur de Europa.....	32
3.2.2 América Latina.....	35
3.2.3 Europa del Este.....	40
3.2.4 África.....	45
3.2.5 Esfuerzos internacionales .....	48
3.3 Tercera etapa: la normalización de la justicia transicional.....	51
<b>4. Finalidades de la justicia transicional .....</b>	<b>55</b>
<b>5. Características de la justicia transicional .....</b>	<b>57</b>
<b>6. Los mecanismos de la justicia transicional .....</b>	<b>65</b>
6.1 Verdad .....	66
6.1.1 Comisiones de la verdad .....	67
6.1.2 Memoria .....	70
6.2 Administración de justicia como mecanismo de justicia transicional.....	72
6.2.1 Justicia penal .....	74
6.3 Reformas institucionales .....	78
6.3.1 Descalificación (Vetting) .....	80
6.3.2 Reformas en el sector seguridad.....	82
<b>7. Perspectiva internacional de la justicia transicional.....</b>	<b>84</b>
<b>8. Retos de la justicia transicional.....</b>	<b>87</b>
 <b>CAPÍTULO 2. REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES SISTEMÁTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 90</b>	
<b>1. Origen de la normativa internacional sobre reparación a víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. ....</b>	<b>90</b>
<b>2. Análisis del desarrollo de la normativa internacional de reparación a víctimas.....</b>	<b>92</b>
<b>3. Establecimiento de la normativa internacional de reparación a víctimas .....</b>	<b>94</b>
3.1 Noción de víctima y de violaciones graves de derechos humanos y del DIH.....	95
3.2 Hacia la construcción de un marco normativo sobre reparación a víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y del DIH. ....	97
3.2.1 Las directrices de Van Boven: el primer paso sólido hacia la construcción de un marco normativo internacional sobre el derecho de reparación a víctimas.....	98
3.2.2 Antecedentes del trabajo de actualización de M. Cherif Bassiouni: el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.....	105

3.2.3 Revisión de los principios y directrices básicos por M. Cherif Bassiouni .....	107
3.2.4 Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (RES 60/147) .....	110
<b>4. Las reparaciones.....</b>	<b>112</b>
4.1 Formas de reparación en el derecho internacional .....	112
4.1.1 Restitución.....	114
4.1.2 Compensación/indemnización .....	116
4.1.3 Rehabilitación.....	118
4.1.4 Satisfacción .....	120
4.1.5 Garantías de no repetición.....	122
4.2 Programas (masivos) de reparación (administrativa).....	125
4.2.1 Objetivos de los programas de reparación .....	128
4.2.2 Reparaciones materiales y simbólicas.....	129
4.2.3 Reparaciones individuales y colectivas.....	133
4.2.4 Aspectos estructurales de los programas de reparación .....	136
4.2.5 Reparación de la violencia sexual .....	144
4.2.6 Reflexiones sobre los programas de reparación .....	146
<b>5. Consideraciones generales sobre la reparación .....</b>	<b>148</b>

### **CAPÍTULO 3. REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES Y SISTEMÁTICAS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: EL CASO DEL PERÚ Y SU PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES**

.....	152
<b>1. Antecedentes del conflicto armado .....</b>	<b>152</b>
<b>2. El conflicto armado interno.....</b>	<b>153</b>
<b>3. La transición democrática .....</b>	<b>159</b>
3.1 El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.....	163
3.2 Verdad .....	171
3.3 Justicia.....	174
<b>4. El Plan Integral de Reparaciones .....</b>	<b>179</b>
4.1 Los componentes del Plan Integral de Reparaciones .....	182
4.1.1 Programa de restitución de derechos ciudadanos.....	182
4.1.2 Programa de reparaciones en educación .....	183
4.1.3 Programa de reparaciones en salud .....	184
4.1.4 Programa de reparaciones simbólicas .....	185
4.1.5 Programa de promoción y facilitación al acceso habitacional .....	186
4.1.6 Programa de reparaciones colectivas .....	187
4.1.7 Programa de reparaciones económicas.....	190
4.2 Reparaciones y género .....	192
4.3 La población en situación de desplazamiento forzado .....	194
4.4 Las medidas regionales .....	195

<b>5. La voz de las víctimas del conflicto armado en el Perú: sobre la implementación del PIR</b>	<b>197</b>
5.1 Caracterización de la población .....	198
5.2 La percepción de las víctimas sobre la implementación del PIR .....	205
5.2.1 La afectación por el conflicto armado .....	205
5.2.2 Sobre la reparación.....	222
5.2.3 Sobre la justicia .....	236
5.2.4 Repetición de los hechos de violencia.....	249
5.2.5 Acciones de memoria .....	261
<b>6. El caso del Perú: un proceso de reparación difuso en el marco de una transición a medias</b>	<b>268</b>
<b>7. Una mirada al Plan Integral de reparaciones: la falta de voluntad política, la incapacidad estatal y los distintos mensajes enviados por el Estado.....</b>	<b>271</b>
<b>8. Las víctimas .....</b>	<b>276</b>
<b>9. ¿Cuál será el futuro de las reparaciones en el Perú? .....</b>	<b>278</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>283</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>292</b>
<b>LISTA DE ABREVIATURAS .....</b>	<b>329</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>330</b>
Precisiones metodológicas del estudio empírico .....	330
<b>TABLAS Y GRÁFICOS</b>	
Tabla 1. Número de personas entrevistadas por centro poblado/distrito. ....	199
Tabla 2. Número de inscritos Registro Único de Víctimas por centro poblado/distrito .....	200
Tabla 3. Proyectos de reparaciones colectivas aprobados por la CMAN .....	200
Tabla 4. Guía de preguntas para la entrevista .....	204
Tabla 5. Académicos, expertos y funcionarios entrevistados .....	332
Gráfico 1. Sexo de los entrevistados .....	201
Gráfico 2. Personas inscritas en el RUV.....	201
Gráfico 3. Tipo de víctima .....	202
Gráfico 4. Perpetrador de la violación .....	203
Gráfico 5. Mapa de Huancavelica (Perú).....	333

## INTRODUCCIÓN

En la actualidad la necesidad de reparar a las víctimas que han sufrido graves y sistemáticas violaciones de sus derechos, ya sea en el marco de un conflicto armado o de un régimen autoritario, es incuestionable. Así, la reparación se ubica en el contexto de la justicia transicional como un instrumento que permite restaurar la dignidad de aquellos supervivientes que han padecido enormes abusos en el pasado y a quienes se les debe reivindicar en su condición de ciudadanos. Aunque la noción de reparar el daño tiene sus raíces en el principio de *restitutio in integrum*, la reparación como mecanismo de la justicia transicional se consolida como respuesta al legado de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los procesos de transición implican entonces el reconocimiento de que hay un pasado por enfrentar, suponen la implementación de mecanismos judiciales y extrajudiciales que tienen el propósito de remediar el mal ocasionado, prevenir la repetición de las violaciones, construir la paz, promover la reconciliación y consolidar el Estado de derecho.

En la práctica la historia de las reparaciones a las víctimas dista bastante de ser ideal. Aunque existe el reconocimiento de que ha habido flagrantes violaciones a las normas de derechos humanos, lo cual confirma que éstas se encuentran vigentes, la realidad interna de los Estados, su entorno sociopolítico, su estructura institucional y sus características económicas, por mencionar solo algunos aspectos, se convierten en obstáculos para el goce efectivo de los derechos a la justicia, verdad y reparación.

Esta investigación tiene como eje central el tema de la reparación a las víctimas enmarcado en un contexto transicional. Partiendo desde una mirada amplia de la justicia de transición, que permite explorar su evolución, características, finalidades y retos, se dirige hacia el estudio de la reparación a víctimas desde una perspectiva del derecho internacional público y su incidencia en la aplicación nacional a través de los programas administrativos de reparaciones. Asimismo, reconociendo el papel primordial que tienen, y deben tener, las víctimas en el proceso a través de cual el Estado enfrenta los abusos cometidos en el



pasado; considerando el deber que tiene la comunidad académica, como agente activo de la sociedad de dar a conocer la voz de las personas más vulnerables a quienes se les ha causado un daño irreparable y de contribuir a la construcción de un conocimiento socio-jurídico inclusivo, se lleva a cabo un estudio de caso sobre el proceso transicional en el Perú centrado en las víctimas y el Plan Integral de Reparaciones. Es precisamente el estudio de caso, y en especial la perspectiva de las víctimas, lo que se considera como uno de los aportes más significativos de esta investigación. Poder contar con conocimiento de base sobre el tema de reparación a víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y los diferentes actores involucrados, y poder contrastarlo con los enfoques teóricos predominantes en la doctrina internacional sobre justicia transicional, es muy valioso para hacer un análisis más preciso.

En cuanto a la estructura, esta tesina se compone de tres capítulos. En un capítulo inicial se construye una aproximación teórica de la justicia transicional, desarrollando en un primer lugar un acercamiento conceptual. Posteriormente, se lleva a cabo una revisión de los rasgos históricos de la justicia de transición viajando en el tiempo y el espacio a partir de la segunda mitad del siglo XX - exponiendo casos emblemáticos como los de Argentina, Chile, Sudáfrica y algunos no tan conocidos pero interesantes como el de Checoslovaquia - concluyendo con los esfuerzos internacionales que se han llevado a cabo, en especial los tribunales Ad hoc, y con el período actual de normalización. También se hace un análisis de las finalidades y características de la justicia transicional. Aquí se destaca su naturaleza compleja en donde priman las razones políticas y de oportunidad, que no son necesariamente las mismas que se tienen en cuenta a la hora de luchar por la justicia.

En este mismo capítulo se analizan los mecanismos de la justicia transicional: la verdad, haciendo énfasis en las comisiones de la verdad y en la memoria; la administración de justicia materializada a través la justicia penal; y las reformas institucionales revisando el *vetting* o descalificación y las reformas en el sector seguridad como reformas significativas, sin ser las únicas, en el proceso de reconstrucción y de una nueva legitimación institucional. Se cierra este capítulo analizando la perspectiva internacional y los retos de la justicia de transición dentro de un marco jurídico-político internacional, encontrándose atrapada entre

las analogías de la guerra y la paz, y de manera paralela, entre el derecho internacional y el derecho local.

El segundo capítulo se centra en el tema de las reparaciones. Como mecanismo de la justicia transicional es un requisito primordial de la justicia y en definitiva no se puede llegar a entender un proceso transicional sin un profundo enfoque reparador. En primer lugar se hace una revisión del origen de la normativa internacional sobre reparación a víctimas de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se da inicio con la influencia que tiene la normativa del derecho romano con el principio de *restitutio in integrum* a través del cual se pretende rescindir los efectos de un acto y restablecer la situación existente que se ha modificado por dicho acto; se tienen en cuenta también en este punto la noción tradicional de reparación entre Estados, así como la responsabilidad internacional entre estos. Posteriormente se analiza el desarrollo de la normativa internacional de reparación a víctimas, el cual está estrechamente vinculado a la Organización de las Naciones Unidas y a la construcción de un marco legal que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos – y los numerosos tratados subsiguientes – que junto a los avances realizados por diferentes sistemas regionales de derechos humanos, han determinado que la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario no es un asunto de exclusiva jurisdicción nacional.

El establecimiento de la normativa internacional de reparación a víctimas se estudia partiendo de la base del fenómeno de “victimización humana” que señala Bassiouni y que se conjuga con la gravedad de la violación y su carácter inderogable de los derechos humanos afectados y la vulneración de normas imperativas del *jus cogens*. Es así que se configura la construcción de un marco normativo internacional, con antecedentes como la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de Naciones Unidas (que hace un buen desarrollo del concepto de víctima, sus condiciones y el ámbito de aplicación personal), se da el primer paso sólido hacia la elaboración de este marco normativo con las directrices de Van Boven. A partir de ese estudio sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de

violaciones flagrantes de los derechos humanos y libertades fundamentales que inició en 1989, se abre el camino para que se concluya después de más de 15 años con los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, comúnmente reconocidos como los Principios Van Boven/Bassiouni.

Las reparaciones traen consigo el interrogante de si en circunstancias donde se han cometido flagrantes violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la justicia restaurativa puede ser más efectiva por medio de litigios y sentencias basadas en demandas individuales o a través de la implementación de programas y medidas masivas. Son precisamente estos dos planteamientos los que complementan el desarrollo del segundo capítulo.

Las formas de reparación en el derecho internacional se constituyen en primer lugar por la restitución, entendida como restablecer el *status quo ante*, claro está en la medida que sea posible. En segundo lugar por la compensación o indemnización, cada daño -sea económico, mental o moral- que sea resultado de una violación del derecho internacional de los derechos humanos o del DIH y que pueda ser contabilizado debe ser compensado. En tercer lugar por la rehabilitación, destinada a ayudar física y mentalmente a la víctima para que se sobreponga del daño que le causó la violación. En cuarto lugar por la satisfacción, el Estado responsable está en la obligación de proporcionar “satisfacción” por el daño ocasionado a la víctima, bien sea a través del cese de las violaciones, la verificación de los hechos, las disculpas públicas, la aceptación de responsabilidad, una decisión judicial – que debe devolver a la víctima su dignidad, su reputación y sus derechos – la identificación de los muertos o los restos de los desaparecidos, las conmemoraciones y homenajes a las víctimas, entre otros. En último lugar por las garantías de no repetición, comprendidas como medidas estructurales (en muchos casos a través de mecanismos legislativos) que debe tomar el Estado para prevenir los abusos y asegurar que los hechos que vulneraron los derechos de sus ciudadanos no volverán a ocurrir.

Por su parte, los programas masivos de reparaciones administrativas se refieren a los intentos de proporcionar beneficios directos a las víctimas de ciertos crímenes. En situaciones de violencia y represión a larga escala, las reparaciones se conceptualizan como proyectos políticos basados en derechos con el propósito de reparar (parcialmente) las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y del DIH. Atendiendo a la propuesta de De Greiff, las reparaciones no deben pensarse términos de compensación en proporción al daño, sino en términos de crear un “paquete” de beneficios que promueva el reconocimiento, la confianza cívica y la solidaridad social. Por ejemplo, es imposible pensar en compensar a todas las víctimas de acuerdo con los precedentes establecidos por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en términos de montos, cuando el número de víctimas supera los 69.000 como en el caso de peruano. Entonces las reparaciones pueden ser vistas como un método para lograr uno de los objetivos de un Estado justo: la inclusión, en la medida en que todos los ciudadanos son participantes de un proyecto político común. En síntesis, a través de reparaciones materiales, simbólicas, individuales, colectivas y con enfoque de género, todos los programas deben enviar un mensaje de inclusión; deben ser capaces de llegar a todas las víctimas; deben ser coherentes e integrales y deben tener en cuenta las necesidades y preocupación de las víctimas.

La brecha que existe entre el marco normativo internacional de la justicia reparativa y la cruda realidad en terreno presenta un reto importante. Si bien la doctrina sobre justicia transicional está en un período de afianzamiento, la bibliografía sobre estudios empíricos en el ámbito de las reparaciones es en general insuficiente. La implementación del Plan Integral de Reparaciones en el Perú se convierte en este caso en la posibilidad de adentrarse en la realidad de las víctimas y analizar los posibles resultados del proceso transicional que vivió este país a partir del año 2000. En este tercer capítulo se analiza el papel que desempeñaron los mecanismos de justicia transicional en el Perú, haciendo énfasis en un Plan Integral de Reparaciones en presente ejecución desde el 2007. Teniendo como base un muy completo Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que da cuenta de manera profunda la magnitud del conflicto armado interno que tuvo lugar en ese país desde 1980 al 2000, se profundiza en la significación que los diferentes programas de

reparaciones tienen para las víctimas, así como su percepción de la justicia, de la construcción de memoria y sus clamores por una justa reparación que desde hace muchos años se les antoja esquiva. El compromiso con la justicia transicional significa enfrentar una serie de resistencias muy poderosas en el Perú: el rencor y la hostilidad de grupos de interés social y político muy influyentes, la incapacidad institucional seguida de la apatía de las autoridades gubernamentales e inclusive la indiferencia de un sector de la población. Por esta razón, conocer el impacto real que puede tener en una comunidad y sus miembros la implementación de un programa de reparación, analizar las variables institucionales que participan en este proceso de cara a cara con sus protagonistas y escuchar a las víctimas/supervivientes hablar sobre su sufrimiento y sus pérdidas se configura en una responsabilidad y un compromiso que debe responder a esa demanda de reconocimiento, inclusión y resarcimiento.

Finalmente, esta investigación no hubiera sido posible sin la colaboración y apoyo de muchas personas. En primer lugar, quiero agradecer de manera especial a mi director de trabajo de fin de máster Carlos Lema Añón por su guía y apoyo constante. También a la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad Carlos III de Madrid por creer en mi proyecto y concederme una de las ayudas para iniciativas de cooperación al desarrollo y movilidad, sin la cual no se hubiera podido materializar el estudio empírico. Asimismo, al Instituto de Defensa Legal, en especial a su Área de Gobernabilidad y Derechos Humanos, que me brindaron todo el apoyo institucional y logístico necesario para mi estancia de investigación en el Perú y muy afectuosamente me integraron en su equipo durante los 3 meses de la estancia. A Maura Galeas, por su asistencia en el trabajo de campo y por revelarme el maravilloso mundo de Julcamarca. A todos los expertos, académicos y funcionarios que amablemente dedicaron su tiempo a contestar todas mis preguntas, en algunos casos muy incisivas, y pusieron a mi disposición material valioso para el estudio. Y siendo ellas y ellos la razón de ser de este estudio, un agradecimiento muy especial a cada una de las personas que compartieron conmigo su historia, sus tristezas, sus temores, sus dudas, sus sueños y que al final de cada entrevista me daban las gracias (siendo yo la más agradecida) con una sincera sonrisa.

## CAPÍTULO 1. UNA APROXIMACIÓN A LA JUSTICIA TRANSICIONAL

¿Cómo podremos vivir con el mal? ¿Cómo podremos responder a las masivas violaciones de derechos humanos cometidas por actores estatales o por otros con el consentimiento y la tolerancia de sus gobiernos? Conviene hacerse estas dos preguntas que surgen ante tanta crueldad y barbarie. En palabras de Carlos S. Nino, en la introducción de su obra *Radical Evil on Trial*, las violaciones masivas de derechos humanos suponen lo que Kant consideraba el “mal radical”, es decir, ofensas contra la dignidad humana tan generalizadas, persistentes y organizadas, que la valoración corriente que se hace desde la moral parece inapropiada.<sup>1</sup>

### *1. Transiciones político-democráticas.*

Antes de entrar en materia sobre la justicia transicional, hay que detenerse, de manera sucinta, a ubicar las variables de justicia y democracia en el contexto de las transiciones. Sin entrar a profundizar en un concepto de justicia (que no es el caso de estudio), se debe partir de que el significado de “justicia” en el contexto de las transiciones tiene matices distintos a los que tendría ésta en un escenario “ordinario”. Pero, ¿hasta qué punto las teorías ideales de la justicia son pertinentes en tiempos de transición? Teitel afirma que las teorías ideales no son adecuadas para juzgar legalmente acciones en estos periodos,<sup>2</sup> ya que en estos tiempos la teoría de la justicia se calificaría de “no ideal” debido a las condiciones en que se desarrolla.

Para Ramírez-Barat, el significado de justicia en momentos de transición se manifiesta en dos tendencias: en primer lugar, se comprenden sus prácticas resaltando de forma prioritaria o exclusiva su vertiente legal, y especialmente, su versión penal; y en segundo lugar, se refiere a ella como un tipo de justicia genuino, como si su uso fuera especial y

---

<sup>1</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, Yale University Press, New Haven, 1996.

<sup>2</sup> R. TEITEL, *Transitional Justice*, Oxford University Press, Nueva York, 2000, p.227.

distinto al que se asumen normalmente en todas las circunstancias.<sup>3</sup> Es así que se piensa que el procesamiento penal es el más importante (tema que se discutirá más adelante) en detrimento de los demás componentes de la justicia en época de transición política. Por su parte, en cuanto a lo “transicional” es probable que se interprete como una cualidad especial y distinta de la justicia común, que se lleva a cabo en casos particulares.

Los académicos ubican el inicio de las llamadas “transiciones a la democracia” a partir de lo que Huntington denominó “la tercera ola”,<sup>4</sup> la cual representaba los procesos de democratización que surgieron a partir de 1974 con el golpe de estado que condujo el proceso de democratización que tuvo lugar en Portugal. Es justamente a partir de ese momento en el que empiezan a surgir y tomar forma los mecanismos de democratización, los cuales hoy se conocen como mecanismos de justicia transicional. El punto crítico en el proceso de democratización estaba en el reemplazo de un gobierno que no fue elegido por uno que lo haya sido en unas elecciones limpias, libres y abiertas.<sup>5</sup> Por supuesto, el proceso era, y sigue siendo en la actualidad, largo y complejo e intervenían diversas variables políticas y sociales.<sup>6</sup>

Entre las características principales de las transiciones de finales del siglo XX, se debe mencionar que éstas se llevaron a cabo utilizando métodos democráticos, se lograron a través de negociaciones, compromisos y acuerdos. Huntington planteó que las negociaciones y los compromisos entre las elites políticas formaron parte de los núcleos de los procesos de democratización; que los líderes de las fuerzas políticas y de los grupos sociales claves pactaron entre ellos, explícita o implícitamente, y trabajaron sobre acuerdos

---

<sup>3</sup> C.RAMÍREZ-BARAT, *La justicia en el tiempo: una aproximación al concepto de justicia en los procesos de transición a la democracia*, Directores: Carlos Thiebaut Luis-André, Pablo de Greiff, Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguas, Teoría de la Literatura y Estudios Clásicos, 2007, p.4.

<sup>4</sup> Vid. S. HUNTINGTON, *La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX*, Paidós, Barcelona, 1998.

<sup>5</sup> Ibid., p.22.

<sup>6</sup> Aquí debe hacerse una aclaración terminológica ya que las transiciones democráticas de las últimas tres décadas del siglo XX, denotaban precisamente el paso de regímenes dictatoriales a gobiernos democráticos. En la actualidad cuando se hace referencia a transiciones, se describen transiciones políticas en un ámbito más amplio teniendo en cuenta que las transiciones no solamente se llevan a cabo desde gobiernos autoritarios hacia la democracia, y que los mecanismos de justicia transicional se hacen evidentes en circunstancias de diversa naturaleza.

aceptables para la transición a la democracia.<sup>7</sup> Obviamente esos grupos poderosos deciden en palabras del autor “lo que el gobierno puede o no puede hacer”,<sup>8</sup> y a eso se reduce la acción política definitiva.

En cuanto a una definición de una sociedad transicional, esta es aquella en la que un sistema de gobierno democrático está siendo instituido o (re)construido, política y legalmente, después de un período de gobierno autoritario, represión social o conflicto armado, durante el cual se han llevado a cabo abusos, atropellos y violaciones de derechos humanos desde el propio gobierno o con su apoyo, beneplácito y aquiescencia.<sup>9</sup> En la misma línea, Chinchón propone que la transición se refiere al intervalo que se extiende entre un régimen político y otro, ya al propio proceso de cambios entre ambos, ya, de forma más concreta, al periodo de tiempo en que los valores, las normas, las reglas de juego y las instituciones de “antiguo régimen” han dejado de existir plenamente sin que el conjunto de valores, normas, instituciones y reglas que integran el “nuevo régimen” hayan surgido por entero.<sup>10</sup>

Por su parte, la determinación de ejecutar medidas para un proceso de transición es una decisión fundamentalmente política. Pueden existir factores externos como el seguimiento de un orden normativo internacional, ya establecido y en proceso de consolidación (sobre el cual se discutirá más adelante), y presiones por parte de la sociedad civil; pero lo que prima al momento de rectificar los hechos que llevaron a perpetrar sistemáticas violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es la voluntad política de los gobiernos en el poder. Son esas fuerzas políticas locales y los objetivos asociados con el establecimiento de un régimen democrático, los que se convierten en los factores principales para definir el curso político de la transición y para darle forma a la concepción

---

<sup>7</sup> S. HUNTINGTON, *La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX*, cit., p.154.

<sup>8</sup> S. HUNTINGTON, “The third wave: democratization in the late twentieth century” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol. 1, Estados Unidos, 1995, p.71.

<sup>9</sup> C. RAMÍREZ-BARAT, *La justicia en el tiempo: una aproximación al concepto de justicia en los procesos de transición a la democracia*, cit., p.56.

<sup>10</sup> J. CHINCHÓN, *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia Iberoamericana*, Parthenon, Sevilla, 2007, p.290.



de una justicia post-conflicto.<sup>11</sup> Adicionalmente, para lograr un cambio normativo, éste depende de la redefinición de la concepción del estatus del individuo, de sus derechos y deberes, así como de los parámetros que limiten el poder del Estado.<sup>12</sup>

La tarea primordial en la transición es reconocer que existe un pasado y que hay que tenerlo en cuenta, este no se puede negar ni olvidar. La naturaleza de la transición hacia la democracia significa en sí misma, que hay asuntos sin concluir con respecto a cómo resolver los retos del presente y los traumas de un pasado reciente.<sup>13</sup>

La naturaleza y la dimensión de la represión política es otra variable importante. Aquí, lo clave es la magnitud de las violaciones, los métodos utilizados y la complicidad de las diferentes estancias de la sociedad que se tuvieron lugar durante el tiempo de represión. Cuanto más amplia e intensa haya sido la represión, mayor será la necesidad de las políticas de verdad y justicia.<sup>14</sup> Es decir, que un régimen autoritario de larga duración tiende a hacer más difícil que el nuevo sistema democrático lleve a cabo políticas de investigación y justicia retrospectiva. Es así, que las políticas de verdad y justicia dependen del modo de transición. Por lo tanto, cuanto más derrotada y debilitada llega la elite del antiguo régimen a la transición, más amplio es el campo de maniobra para esas políticas<sup>15</sup>.

Al enfrentarse a situaciones de transición, se reflejan las graves injusticias e innumerables abusos cometidos en el pasado. Reparar el mal causado a través de violaciones de derechos humanos no es solo una obligación legal y un imperativo moral impuesto a los Estados, también es una buena acción política para la transición.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> A. CARRILLO, "Justice in context: the relevance of Inter-American human rights law and practice to repairing the past" en P. DE GREIFF (ed.), *Handbook of reparations*, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2006, p.505.

<sup>12</sup> R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p. 227.

<sup>13</sup> J. MÉNDEZ, "In defense of transitional justice", en J. McADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1997, p. 3.

<sup>14</sup> A. BARAHONA DE BRITO et al, *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Istmo, Madrid, 2002, p.443.

<sup>15</sup> Ibid., p.41.

<sup>16</sup> J. MÉNDEZ, "In defense of transitional justice", en J. McADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, cit., p. 1.

Igualmente, para la consecución de la justicia transicional, conviene mencionar el concepto de solidaridad social. Éste se refiere a un tipo de empatía característica de aquellos que tienen la buena voluntad de ponerse en el lugar de los otros. Esta actitud es una condición para la justicia que debe ser vista de la siguiente manera: una perspectiva imparcial<sup>17</sup>, un requisito indispensable de justicia, que no se logrará a menos que la persona que juzga esté preparada para asumir el lugar de las partes en disputa.<sup>18</sup>

Desafortunadamente, la instauración de un proceso transicional no garantiza que las violaciones de los derechos humanos cesen. El supuesto de que la transición significa un movimiento de una dictadura hacia una democracia ignora el problema de que los abusos pueden seguir teniendo lugar en circunstancias en las cuales, en teoría, prevalecen las normas de responsabilidad de un sistema democrático.<sup>19</sup>

Las situaciones de transición son muy complejas. Lo que se considera justo e imparcial durante periodos de innovación política radical, no es necesariamente lo que se consideraría justo bajo condiciones ideales y procesos regulares.<sup>20</sup> Teitel establece, que no se puede esperar que la capacidad del estado de derecho de sociedades en transición opere al mismo nivel que los Estados que tienen un aparato jurídico liberal consolidado.<sup>21</sup> Inclusive, se llega a presentar el caso en el cual las condiciones institucionales que permitieron violaciones masivas sigan sin transformaciones, aunque un gobierno más democrático y menos abusivo tome el poder.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup>En este punto hay que remitirse a la justicia como imparcialidad de Rawls en la que los principios de la justicia para la estructura básica de la sociedad son el objeto de un acuerdo original, a través del cual las personas libres y racionales aceptarían dichos principios en una posición inicial de igualdad definitoria de los términos fundamentales de su asociación. Vid. J. RAWLS, *Teoría de la justicia*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997, p.24.

<sup>18</sup>P. DE GREIFF, "Justice and reparations" en P. DE GREIFF (ed.), *Handbook of reparations*, cit., p.464.

<sup>19</sup>F. NÍ AOLÁIMN y C. CAMPBELL, "The paradox of transition in conflicted democracies", *Human Rights Quarterly* 27, 2005, p. 175.

<sup>20</sup>R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p. 224.

<sup>21</sup>R. TEITEL, "Genealogía de la justicia transicional", trad. de Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, en *Harvard Human Rights Journal*, vol. 16, 2003, p.26.

<sup>22</sup>P. HAYNER, *Unspeakable Truths, facing the challenge of truth commissions*, Routledge, Nueva York, 2002, p.11.

Después de más de treinta años de estudio en materia de transiciones, ha surgido una corriente crítica que vale la pena mencionar, aunque sea de manera sucinta. Existe un paradigma dominante para entender la democratización dentro de la comunidad internacional. Éste asume que para salir de un régimen dictatorial, lo que es entendido como la esencia de una sociedad transicional, inevitablemente supone una democratización. Pero la “transición”, como se concibe dentro de la teoría de la justicia transicional supone una concepción particular y limitada de la democratización, basada en una formulación liberal y occidental de la democracia.<sup>23</sup> Consecuentemente, estos teóricos y activistas insisten en que los valores y las ideas que denotan justicia deben ser articulados dentro de cada comunidad, basadas en sus realidades y necesidades específicas, por razones conceptuales, pero sobre todo, prácticas.

En conclusión, a lo largo de los años se ha podido observar que el desarrollo de los procesos de transición está inmerso en un ambiente de inestabilidad política constante y que se involucran diversas variables según las circunstancias. Razón por la cual, resulta difícil determinar en la mayoría de los casos, cuándo una transición ha sido superada y se está en presencia de un Estado democrático consolidado.

## 2. Revisión conceptual sobre la justicia transicional

La justicia transicional está asociada con periodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores.<sup>24</sup> La justicia transicional se refiere a procedimientos formales o informales implementados por un grupo o institución de aceptada legitimidad en el momento de transición en la que se sale de un orden social opresivo o violento, para

---

<sup>23</sup> P. LUNDY y M. MCGOVERN, “The role of community in participatory transitional justice” en K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, Hart publishing, Oxford, 2008, p.101.

<sup>24</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.1.

impartir justicia a los perpetradores de las violaciones y sus colaboradores, al igual que a sus víctimas.<sup>25</sup>

Según la Nota Guía de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre una aproximación a la Justicia Transicional, ésta consiste en procesos y mecanismos judiciales y extrajudiciales, que incluyen procesos penales, búsqueda de la verdad, programas de reparación, reformas institucionales o una apropiada combinación de estos elementos.<sup>26</sup> Cualquier combinación que sea escogida debe estar en conformidad con los estándares y obligaciones internacionales.

Es interesante que este documento hace referencia a que la justicia transicional debe tener en cuenta las causas que originaron el conflicto y las violaciones relacionadas con todos los derechos, incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esforzándose por tratar el amplio espectro de las violaciones en una forma integrada e interdependiente, la justicia transicional puede contribuir a lograr la prevención de futuros conflictos, la construcción de la paz y la reconciliación.<sup>27</sup>

La justicia transicional se refiere entonces, a un conjunto de medidas diseñadas para enfrentar el legado de abusos sistemáticos de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que tienen como propósito administrar justicia de manera integral y promover la reconciliación. El diseño e implementación de estas medidas, llevan consigo el reconocimiento de que ha habido flagrantes violaciones a las normas de derechos humanos y del derecho internacional, y que éstas se encuentran vigentes. En cuanto a sus elementos, mientras el “paquete” de la justicia transicional fue inicialmente conocido por las comisiones de la verdad, éste se ha ampliado, y contiene tribunales penales internacionales, procesos de justicia local, reparaciones, lustración (veto) y memoriales, entre otros.<sup>28</sup> Y en

---

<sup>25</sup> M. KAMINSKI et al. “Normative and strategic aspects of transitional justice”, *The Journal of Conflict Resolution*, vol. 50, núm. 3, 2006, pp. 295-302.

<sup>26</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, Nueva York, marzo, 2010, p.3.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> L. WALDORF, “Linking DDR and transitional justice” en A. CUTTER PATEL et al. (ed.), *Disarming the past: transitional justice and ex-combatants*, Social Science Research Council, Estados Unidos, 2009, p.22.

todos los intentos de traducir los conceptos a la práctica, existen diversos debates sobre la mejor manera de implementar estas medidas.<sup>29</sup>

Para sintetizar, la justicia transicional, como conjunto de mecanismos, comprende varios elementos que diferentes autores han definido y estudiado a lo largo de las últimas décadas. Estos han evolucionado a lo largo de los años y no hay uniformidad estricta al momento de señalarlos, pero sí existe un consenso sobre los componentes básicos que debe incluir un proceso de justicia transicional: verdad, justicia y reparación.<sup>30</sup> Igualmente, las reformas institucionales han entrado recientemente a hacer parte de este grupo esencial de mecanismos incuestionables.<sup>31</sup>

### 3. Rasgos históricos de la justicia transicional

Aunque autores como Elster llegan a situar el origen de la justicia transicional en el siglo XVI<sup>32</sup>, para efectos de este estudio se considera que ésta surge a partir del fin de la segunda guerra mundial en 1945, ya que a partir de ésta fecha se inicia la consolidación del derecho internacional. Tomando como marco de referencia el artículo “la genealogía de la justicia transicional”,<sup>33</sup> se llevará a cabo una revisión histórico-conceptual de los procesos transicionales.

Se distinguirán tres etapas o fases de desarrollo: la primera, en la cual se destaca el fortalecimiento del derecho internacional, luego de la segunda guerra mundial; la segunda etapa, en la cual su inicio coincide con los procesos de transiciones hacia la democracia en el sur de Europa a partir de 1974<sup>34</sup> y se caracteriza porque vuelve la mirada hacia esquemas

---

<sup>29</sup> P. DE GREIFF, “Transitional justice, security and development”, Security and justice thematic paper, *World Development Report 2011 (Background paper)*, Banco Mundial, octubre, 2009, p.2. Disponible en: <http://wdr2011.worldbank.org/transitional%20justice>

<sup>30</sup> Estos conceptos fueron introducidos en la doctrina de la justicia transicional de manera sistemática por Theo Van Boven.

<sup>31</sup> Este conjunto de mecanismos de justicia transicional será desarrollado más adelante.

<sup>32</sup> Vid. J. ELSTER, *Rendición de cuentas, la justicia transicional en perspectiva histórica*, Katz Editores, Buenos Aires, 2006.

<sup>33</sup> Vid. R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit.

<sup>34</sup> Vid. S. HUNTINGTON, *La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX*, cit.

nacionales de justicia; y la tercera etapa, que surge a finales de los años noventa, y se caracteriza por una estandarización de los mecanismos de justicia transicional y un intento de armonizar los esfuerzos jurídico-políticos internacionales y nacionales para afrontar no solo sociedades en transición política, sino también sociedades post-conflicto, e inclusive en las que se presentan conflictos vigentes.

El propósito de esta sección de revisión histórica es explorar la respuesta al legado de las violaciones sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como el rol del proceso de rendición de cuentas, para establecer, a manera de contexto, las características de la justicia transicional presentes en este capítulo de la historia. La revisión será breve, sin intención de abarcar en su totalidad el universo de casos, sino con el objetivo de destacar episodios puntuales que lleguen a ser representativos. Igualmente cabe resaltar, que muchos de los procesos de justicia transicional han ido evolucionando con el tiempo y las circunstancias sociopolíticas, por lo cual no se puede considerar este acercamiento histórico como un capítulo cerrado.

### 3.1 Primera etapa: la internacionalización de la justicia

La primera etapa de la justicia transicional se caracterizó por dar respuestas a los atroces abusos cometidos durante la segunda guerra mundial, desde un naciente sistema jurídico internacional. La decisión de establecer procedimientos internacionales reflejó las circunstancias políticas predominantes, especialmente los límites que existían sobre la soberanía nacional y la gobernabilidad internacional reconocida en aquel periodo.<sup>35</sup>

Mientras que la finalidad de la justicia transicional en esta fase fue la determinación de responsabilidades, la gran innovación en ese momento fue el giro que se tomó hacia el derecho penal internacional y la extensión de su aplicabilidad más allá del Estado, es decir, al individuo.<sup>36</sup> Como el derecho internacional no es un sistema pasivo o definitivo, ciertos sucesos, particularmente aquellos de una magnitud inconmensurable como las dos grandes

---

<sup>35</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.4.

<sup>36</sup> Ibid., p.5.

guerras que tuvieron lugar en el siglo XX, hicieron que el derecho internacional se constituyera en una respuesta válida y necesaria para impartir justicia.

Los criminales de guerra han sido procesados al menos desde los tiempos de los antiguos griegos, y probablemente desde antes de esa época.<sup>37</sup> Pero si se debe establecer un hecho en la historia que haya marcado un paso definitivo en el enjuiciamiento de crímenes de guerra, y como antecedente de la justicia transicional, indudablemente se debe mencionar el Tratado de Versalles de 1919. Como lo plantea M. Cherif Bassiouni,<sup>38</sup> la primera comisión investigadora de crímenes de guerra<sup>39</sup> fue establecida al final de la Primera Guerra Mundial por los aliados victoriosos, cuando éstos y los poderes asociados convocaron en París a una conferencia de paz preliminar en la cual, posterior a las negociaciones con Alemania, se firma el Tratado de Versalles.<sup>40</sup>

Pero un poco más de dos décadas después, en el curso de la historia vuelve a suceder un acontecimiento de grandes proporciones que marcó un hito en cuanto al enjuiciamiento de los crímenes de guerra: los Tribunales de Núremberg y Tokio. En la declaración de Moscú del 1 de noviembre de 1943,<sup>41</sup> sobre las atrocidades cometidas por los alemanes en los territorios ocupados, los cuatro poderes aliados afirmaron su determinación de enjuiciar y castigar a los criminales de guerra, particularmente los líderes del régimen nazi.<sup>42</sup> Pero es en la conferencia de Londres, al terminar la guerra, en donde los cuatro poderes establecieron la base para el Tribunal de Núremberg en agosto de 1945.<sup>43</sup>

---

<sup>37</sup> W. SCHABAS, *An introduction to the International Criminal Court*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p.1.

<sup>38</sup> C. BASSIOUNI, "From Versailles to Rwanda in seventy five years: the need to establish a permanent International Criminal Court", *Harvard Human Rights Journal*, vol. 10, 1997, p.14.

<sup>39</sup> Comisión sobre la responsabilidad de los autores de la guerra y la ejecución de las sanciones.

<sup>40</sup> El mencionado tratado estipulaba tribunales ad hoc para juzgar al Káiser Guillermo II por la suprema ofensa en contra de la moral internacional y la santidad de los tratados, pero ninguno fue establecido.

<sup>41</sup> Vid. G. METTRAUX, *Perspectives on the Nuremberg trial*, Oxford University Press, Nueva York, 2008, p.730.

<sup>42</sup> C. BASSIOUNI, "From Versailles to Rwanda in seventy five years: the need to establish a permanent International Criminal Court", cit., p.23.

<sup>43</sup> Los tribunales de Núremberg fueron desarrollados con base al acuerdo para el enjuiciamiento y castigo de los mayores criminales de guerra del eje europeo y a la carta de los tribunales militares internacionales. Vid. W. SCHABAS, *An introduction to the international criminal court*, cit., p.5.

Consecuentemente, en octubre del mismo año se formularon cargos contra veinticuatro líderes nazis. El juicio terminó un año después con la condena de diecinueve acusados y la imposición de la pena de muerte en doce casos.<sup>44</sup> La jurisdicción del tribunal no estuvo limitada solamente a los crímenes de guerra, sino que el derecho internacional se aplicó también para juzgar los crímenes contra la paz (o delito de agresión) y los crímenes de lesa humanidad.<sup>45</sup> El juicio inicial fue seguido por otros doce juicios de los aliados en Núremberg, así como por aquellos conducidos por cada uno de los poderes ocupados. Posteriormente, la responsabilidad de perseguir a los criminales nazis fue dejada en manos de las autoridades alemanas.<sup>46</sup>

En cuanto a los juicios de Tokio, el 26 de julio de 1945 los aliados emitieron la declaración de Potsdam anunciando la intención de juzgar a los oficiales japoneses por los crímenes cometidos durante la guerra.<sup>47</sup> Posteriormente el 19 de enero de 1946, el general Douglas MacArthur aprobó la carta de Tokio estableciendo la constitución, la jurisdicción y el funcionamiento del tribunal militar internacional para el lejano oriente, el cual se encargaría de juzgar a los responsables por los delitos ya establecidos en la anterior carta de Núremberg.<sup>48</sup>

En este tribunal veintiocho líderes japoneses fueron juzgados por crímenes contra la paz, después de un largo juicio, en noviembre de 1948, siete acusados fueron sentenciados a muerte, dieciséis a cadena perpetua y otros dos a pagar condenas menores en prisión.<sup>49</sup> Se discute si el objetivo principal del tribunal de Tokio fue hacer públicos los crímenes cometidos y aplicar la justicia de los vencedores,<sup>50</sup> pero los resultados de este proceso

---

<sup>44</sup> Ibid., p.6.

<sup>45</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.6.

<sup>46</sup> Ibid., p.9.

<sup>47</sup> Vid. Declaración de Potsdam, Foreign Relations of the United States: The Conference of Berlin, 2 vols. (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1960), II, 147-1476, en R. FERRELL (ed.), Harry S. Truman Library and Museum.

<sup>48</sup> A. CASSESE et al, *The Rome statute of the International Criminal Court: a commentary*, Oxford University Press, vol.1, Nueva York, 2002, p.7.

<sup>49</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.13.

<sup>50</sup> En este documento no se pretende discutir esta posición tan conocida y controvertida, sino ilustrar los acontecimientos históricos. Vid: O. KRANZBUHLER, "Nuremberg eighteen years afterwards" en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, cit., pp. 433-444. A. GOODHART, "The legality of



demuestran que no se cumplió con el objetivo de impartir justicia. Como evidencia, un criminal de guerra sentenciado a prisión luego se convirtió en ministro de relaciones exteriores. Por otra parte, en el año 1950 todos los criminales de guerra fueron liberados y exonerados.<sup>51</sup>

El periodo inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial se considera el apogeo de la justicia internacional, lo que Teitel ha llamado el triunfo de la justicia transicional dentro del esquema del derecho internacional.<sup>52</sup> A pesar de las críticas en su momento,<sup>53</sup> el tribunal de Núremberg se estableció a lo largo del tiempo como precedente del derecho internacional. Éste fue concebido y solo puede ser entendido, como un evento revolucionario en el desarrollo del derecho internacional.<sup>54</sup>

El legado del tribunal de Núremberg es indiscutible. Aunque sigue siendo criticado por la naturaleza de sus procedimientos y por contradecir la doctrina jurídica, los principios de Núremberg han contribuido al desarrollo de un cuerpo jurídico penal internacional, del derecho de los derechos humanos y al perfeccionamiento del derecho de la guerra.<sup>55</sup> Para Kranzbuhler, no tendría sentido aplicarle a Núremberg pruebas y estándares que no fueran aplicados a acontecimientos revolucionarios. Esos acontecimientos siempre están relacionados con ciertas medidas de injusticia y ciertas medidas de fuerza, y éstos deben ser juzgados por los resultados que tienen para la humanidad.<sup>56</sup>

---

the Nuremberg trials” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, cit., p.627. A. CASSESE (ed.), *The Oxford companion to international criminal justice*, Oxford University Press, Nueva York, 2009, p.443. C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.7.

<sup>51</sup> C. NINO, *Radical Evil on Trial*, cit., p.14.

<sup>52</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.2.

<sup>53</sup> El argumento de Hans Kelsen al respecto se basa en que la decisión del tribunal de Nuremberg no constituyó un verdadero precedente porque no creó una nueva norma de derecho, sino que simplemente aplicó normas pre-existentes fijadas en el acuerdo internacional de Londres para el establecimiento de un tribunal militar internacional, vid. H. KELSEN, “Will the judgement in the Nuremberg trial constitute a precedent in international law?” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, cit., pp.274-289.

<sup>54</sup> O. KRANZBUHLER, “Nuremberg eighteen years afterwards” cit., p.435.

<sup>55</sup> M. LIPPMAN, “Nuremberg forty five years later” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, cit., p.544.

<sup>56</sup> O. KRANZBUHLER, “Nuremberg eighteen years afterwards” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, cit., p. 435.

En Europa después de la segunda guerra mundial, hubo procesos nacionales significativos en los que se implementaron elementos de justicia transicional tales como reparaciones y purgas.<sup>57</sup> Igualmente, hubo procesamientos en tribunales locales, aunque con poco éxito debido a factores legales y políticos internos típicos de sociedades post-conflicto.

En Alemania, el problema fue cómo reemplazar a los nazis y sus colaboradores por demócratas, o por lo menos por no nazis, en la mayoría de los sectores como el gubernamental, político, administrativo, judicial, en la educación y en la vida cultural.<sup>58</sup> Una tarea difícil en un régimen autoritario y represivo de más de una década. Las cortes alemanas fueron indulgentes y extremadamente sensibles a los asuntos legales, tales como no juzgar dos veces por la misma causa, lo cual impidió el enjuiciamiento de aquellos que habían sido indultados por los juicios llevados a cabo por los aliados, o la aplicación de leyes retroactivas, cuestionándose por qué los miembros del régimen nazi debían ser juzgados por un conjunto de leyes que no estaban promulgadas cuando los sucedieron los hechos.<sup>59</sup> En más de mil casos procesados durante diez años entre 1959 y 1969, menos de trescientos de los declarados culpables recibieron cadena perpetua y menos de trescientos recibieron términos limitados en prisión.<sup>60</sup>

Lo anterior evidencia la polémica entre Gustav Radbruch y H.L.A. Hart en la cual este último ataca la posición que Radbruch sostiene, posterior a la experiencia nacionalsocialista, de que una ley que atenta contra los principios básicos de la moralidad no es derecho, aunque sea formalmente válida.<sup>61</sup> Mientras Radbruch establece que el derecho nacionalsocialista eludió la exigencia característica de la justicia, el tratamiento igual de lo igual, y que por esto no es un derecho injusto sino que no es derecho;<sup>62</sup> Hart

---

<sup>57</sup> Los procesos de purga, especialmente el fenómeno de descalificación, tuvieron un interesante resultado posteriormente en los países del bloque comunista durante su proceso de transición a la democracia. Éstos se plantearán más adelante en la segunda etapa de la historia de la justicia transicional.

<sup>58</sup> J. HERZ, "The purge of Nazi personnel" en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995, p.19.

<sup>59</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.10.

<sup>60</sup> J. HERZ, "Desnazification and related policies" en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.18.

<sup>61</sup> Vid. G. RADBRUCH, *Arbitrariedad legal y derecho suprallegal*, trad. de M. Azareto, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1962.

<sup>62</sup> Ibid., p.39.

estipula que las normas jurídicas que son moralmente inicuas, pero que han sido sancionadas en la forma establecida, tienen un significado claro y satisfacen todos los criterios de validez reconocidos del sistema.<sup>63</sup> A pesar de lo anterior este autor sostiene que puede haber motivos para desobedecerlas, inclusive por encima de los principios de no retroactividad, pero deja claro que “si se ha de introducir fisuras al principio *nulla poena sine lege* para impedir algo que se considera un mal mayor que su sacrificio, es vital que las cuestiones en juego sean identificadas claramente”.<sup>64</sup>

Asimismo, se puso en movimiento un amplio proceso de purga (desnazificación) por parte de los aliados, pero debió ser restringido por resultar impracticable. Este proceso también fue puesto luego en manos de los mismos alemanes, quienes mostraron poco interés en ajustar cuentas con su pasado.<sup>65</sup> Mientras, en la zona alemana de ocupación soviética las cosas fueron algo distintas. Se estima que quinientos veinte mil ex miembros del partido nazi fueron despedidos del sector público, el número real posiblemente sea menor, pero no cabe duda de que las purgas fueron más exhaustivas que en otras zonas de ocupación.<sup>66</sup>

El consenso general es que la mejor respuesta para enfrentar el legado del nazismo fue a través de reparaciones. Alemania ofreció, de manera extensiva, indemnización por los daños materiales y restitución de propiedades. A través de la ley federal de restitución de 1956 se estableció un elaborado esquema de compensación para las víctimas del régimen nazi, éste funcionó muy bien y las cifras fueron significativas.<sup>67</sup> Adicionalmente, se restauró la ciudadanía, los grados académicos y algunas posiciones profesionales a individuos que fueron perseguidos durante la guerra.<sup>68</sup> Y aquellos condenados por razones políticas o raciales bajo el régimen nazi fueron, en su mayoría, rehabilitados.<sup>69</sup>

---

<sup>63</sup> H. HART, *El concepto de derecho*, trad. de G. Carrio, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1977, p.256.

<sup>64</sup> *Ibid.*, p.261.

<sup>65</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.73.

<sup>66</sup> *Ibid.*, p.74.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.9.

<sup>69</sup> J. HERZ, “Desnazification and related policies” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.47.

Por otra parte, también se llevaron a cabo algunos mecanismos de justicia transicional en países europeos que estuvieron bajo la ocupación alemana durante la guerra tales como Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega y en otros que habían prestado colaboración al gobierno alemán como Austria y Hungría. Algunos de estos países adoptaron una novedosa acusación llamada indignidad nacional, una forma de traición castigada con la “degradación nacional”, que significaba la pérdida de los derechos civiles y políticos.<sup>70</sup>

En Francia, el alcance del crimen de indignidad nacional consistía en cualquier manera de participación en el régimen nazi o en el gobierno de Vichy desde el armisticio hasta la liberación, la producción o distribución de propaganda en nombre de ellos, la participación en la comisaría de asuntos judíos y la participación o membresía en cualquier organización que apoyara la colaboración.<sup>71</sup> Las descalificaciones por la degradación nacional incluían la pérdida del derecho al voto y al desempeño de cargos electivos, la prohibición de trabajar en instituciones estatales, la exclusión en puestos directivos de organizaciones semi-públicas y la prohibición de ejercer el derecho y la enseñanza.<sup>72</sup> El desmantelamiento del gobierno de Vichy tuvo a través de un proceso de eliminación física; despidos y exclusiones; pérdida de propiedades; nacionalizaciones y la toma del poder sobre las actividades económicas por parte del Estado; procesos judiciales y sanciones.<sup>73</sup> Teniendo en cuenta las cifras extraoficiales así como las acciones legales, más de cuatrocientas mil personas fueron afectadas por la “gran purga” durante la posguerra en Francia.<sup>74</sup>

Las “*cours de justice*” establecidas por el gobierno provisional en el momento que Francia fue liberada, fueron una pequeña versión de las “*cours d’assises*”, los tribunales tradicionales franceses para los delitos graves. A pesar de su semejanza básica, las cortes tuvieron modificaciones significativas en cuanto a la organización de los procedimientos de

---

<sup>70</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.77.

<sup>71</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.12.

<sup>72</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., 2006, p.77.

<sup>73</sup> R. MACRIDIS, “France from Vichy to the fourth republic” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.73.

<sup>74</sup> N. KRITZ, *Transitional justice: how emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.72.

las nuevas jurisdicciones.<sup>75</sup> Estas cortes de justicia no satisficieron a la opinión pública, para juristas estrictos que la selección de los jueces fuera aprobada por los grupos de resistencia fue un asunto parcial, ya que pudo haber veteranos que se desempeñaron como jueces que juzgaron a sus victimarios.<sup>76</sup>

En cuanto a la restitución y compensación, en Francia se creó una comisión pública para evaluar las pérdidas económicas sufridas por los judíos durante la guerra. La compensación por las empresas que fueron expropiadas al mencionado colectivo y a sus herederos resultó bastante significativa, ya que se restituyó el setenta y cinco por ciento de las propiedades confiscadas.<sup>77</sup>

En muchos de los países ocupados de Europa como Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega, entre otros, se implementaron también medidas transicionales, aunque en diferentes proporciones. En Bélgica, los procedimientos administrativos fueron llevados a cabo contra oficiales y miembros de las agencias del gobierno, lo que dio como resultado la purga de muchos colaboradores de sus puestos de trabajo.<sup>78</sup> Adicionalmente, hubo procesos de investigación que dieron como resultado la pérdida de derechos civiles y políticos, la cual podía ser impuesta directamente o ser consecuencia de la condena por medio de una instancia penal.<sup>79</sup>

Asimismo, en Dinamarca y Holanda se implementaron medidas de purga en las cuales estos mismos derechos se vieron afectados. En Dinamarca, en 1945 el nuevo gobierno adoptó una ley bajo la cual toda persona que fuera encontrado culpable de colaboración con el régimen nazi recibía una sentencia de cuatro años en prisión y la pérdida de derechos civiles. En total, treinta y cuatro mil daneses fueron arrestados por colaboración, setenta y

---

<sup>75</sup> P. NOVICK, "The resistance versus Vichy: the purge of collaborators in liberated France" en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.91.

<sup>76</sup> H. LOTTMAN, "The purge: the purification of French collaborators after World War II" en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.93.

<sup>77</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.79.

<sup>78</sup> N. KRITZ, *Transitional justice: how emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.142.

<sup>79</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.77.

ocho fueron sentenciados a muerte de los cuales cuarenta y seis fueron ejecutados.<sup>80</sup> En Holanda los tribunales podían privar a los colaboracionistas del derecho al sufragio activo y pasivo, de integrar las fuerzas armadas y de desempeñar cargos en instituciones estatales. Como medida aislada, a cuarenta mil holandeses hombres y, como consecuencia automática, a sus mujeres, les fue retirada la ciudadanía, y por consiguiente, la pérdida de sus bienes.<sup>81</sup>

Algunas de las lecciones que nos dejan estos procesos indican que el valor de la justicia, su contenido y aplicación, varía entre individuos y grupos, así como dependiendo de las circunstancias socio-políticas en que éstos se encuentran. Existe el riesgo de simplificar excesivamente este asunto tan complejo, sin embargo, es correcto decir que los valores sociales contemporáneos en casi cada sociedad incluyen la aspiración de alcanzar justicia a nivel internacional.<sup>82</sup>

Se ha mencionado que conocer la historia colectiva de un pasado represivo ayuda a sentar las bases necesarias para la construcción de un nuevo orden democrático. La narrativa histórica contribuye a establecer el entendimiento del orden político de un Estado. Es así, que la justicia transicional está vinculada a la preservación de la identidad política de un Estado a lo largo del tiempo.<sup>83</sup> Desafortunadamente, un sistema internacional de justicia penal puede que no detenga futuros conflictos y horrores, pero podría tener cierto efecto disuasivo. Si se logra conseguir un efecto disuasivo en estas circunstancias, podrían salvarse vidas y prevenir depredaciones humanas.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> N. KRITZ, *Transitional justice: how emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.128.

<sup>81</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.78.

<sup>82</sup> C. BASSIOUNI, "The Nuremberg legacy" en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, cit., p.597.

<sup>83</sup> R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p.117.

<sup>84</sup> C. BASSIOUNI, "The Nuremberg legacy" en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, cit., p.598.

### 3.2 Segunda etapa: respuestas nacionales

La segunda etapa, como se mencionó anteriormente, surge con los procesos de democratización a partir del año 1974. En este periodo, desde una perspectiva jurídica, la tendencia se inclina hacia resolver los asuntos del pasado desde el ámbito del nuevo régimen nacional. Asimismo, hacen presencia fenómenos como la transición de regímenes totalitarios a regímenes democráticos, las amnistías, la ruptura con el comunismo y la reconciliación. La ola de transiciones fue un conjunto de procesos políticos complejos que implicaron gran variedad de grupos de lucha por el poder, por la democracia y en contra de ella, y también por otros objetivos.<sup>85</sup> Los nuevos gobiernos elegidos tuvieron que afrontar la tarea de construir una sociedad justa y sostenible y juntar a una nación dividida, mientras impartían justicia y sanaban las heridas abiertas de un pasado reciente.<sup>86</sup>

En la segunda fase, la modernización y el Estado de derecho fueron equiparados con someter a proceso penal, por parte del Estado-nación, a los responsables para legitimar el nuevo régimen y hacer avanzar la reconstrucción de la nación.<sup>87</sup> Los nuevos gobiernos enfrentaron enormes limitaciones políticas. En muchos países aquellos que gobernaron como dictadores, o los antiguos bandos beligerantes que se enfrentaron en conflictos armados internos, permanecieron como fuerzas rivales mucho después de que se llevaran a cabo elecciones democráticas o que se dieran negociaciones de acuerdos de paz. En otros, donde las divisiones étnicas o religiosas fueron el motivo de las luchas políticas o guerras civiles, hicieron que fuera muy difícil lograr la unidad nacional y la rendición de cuentas por los crímenes del pasado.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> S. HUNTINGTON, *La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX*, cit., p.117.

<sup>86</sup> J. ZALAQUETT, *Inaugural annual lecture on transition to democracy*, New York University, noviembre 18, 2004, p.3. Disponible en: [http://www.cdh.uchile.cl/conferencias\\_charlas/zalaquett/NYU\\_lecture.pdf](http://www.cdh.uchile.cl/conferencias_charlas/zalaquett/NYU_lecture.pdf)

<sup>87</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.8.

<sup>88</sup> J. ZALAQUETT, *Inaugural annual lecture on transition to democracy*, cit., p.4.

### 3.2.1 Sur de Europa

A mediados de la década de los setenta tuvieron lugar las caídas de las dictaduras en Grecia, Portugal y España. Cada país tuvo que lidiar con justicia retroactiva por violaciones de derechos humanos, pero los intentos culminaron en una tregua entre grupos políticos.<sup>89</sup>

En julio 23 de 1974, los siete años de dictadura militar de George Papadoupoulos (1967 - 1973) y Demetrios Ioannides (1973-1974) llegaron a un abrupto final.<sup>90</sup> El colapso de régimen autoritario griego supuso la imposibilidad de superar las dificultades originadas al instaurar el proceso de liberalización con la democratización, antes que la institucionalización y la legitimación fueran aseguradas.<sup>91</sup> Luego de la caída del régimen militar, al asumir el poder el gobierno de Karamanlis implementó rápidamente un programa de “desjuntificación”.<sup>92</sup> Éste introdujo una serie de decretos con el propósito de liquidar los desastrosos programas de la dictadura y encaminar a Grecia hacia la democracia.<sup>93</sup>

Karamanlis despidió o reemplazó a más de cien mil personas en el ejército, en la administración a nivel local y en organizaciones estatales. Al cabo de seis meses, se iniciaron procesos penales contra más de cien antiguos oficiales por su participación en el incidente del politécnico de 1967<sup>94</sup> o por la tortura de detenidos.<sup>95</sup> A pesar de todos los juicios, el gobierno enfrentó críticas por el castigo inadecuado que se les dio a aquellos responsables por las violaciones de derechos humanos.<sup>96</sup>

---

<sup>89</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.18.

<sup>90</sup> H. PSOMIADES, “Greece: from the colonels’ rule to democracy” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.254.

<sup>91</sup> P. DIAMANDOUROS, “Regime change and the prospects for democracy in Greece: 1974-1983” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.244.

<sup>92</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.80.

<sup>93</sup> H. PSOMIADES, “Greece: from the colonels’ rule to democracy” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.259.

<sup>94</sup> El 14 de noviembre de 1973 se llevó a cabo la ocupación de la Universidad Politécnica de Atenas por parte de los estudiantes como protesta en contra del régimen de Papadopoulos. Tres días después, las fuerzas militares entran al recinto y con extrema brutalidad provocan la masacre conocida como la revuelta de la politécnica de Atenas. Vid. “Greece” en N. KRITZ, *Transitional justice: how emerging democracies reckon with former regimes*, cit., pp. 241-282.

<sup>95</sup> N. KRITZ, *Transitional justice: how emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.242.

<sup>96</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.20.



El accionar ambiguo de la justicia se percibió en el hecho de no otorgar compensación a las víctimas de tortura, aunque los empleados estatales que la Junta había despedido recuperaron sus empleos en muchos de los casos, o se les actualizó o devolvieron sus pensiones.<sup>97</sup> A pesar de todo lo anterior, los académicos le dieron crédito a Karamanlis por castigar los peores criminales de la dictadura y purgar la administración pública, y este proceso de transición griego ha sido calificado como un éxito.<sup>98</sup>

El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia, por el hecho que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional.<sup>99</sup> El General Francisco Franco salió victorioso de la guerra civil en 1939 y proclamó un estado totalitario con la misión de “dar dirección a la gente”,<sup>100</sup> que culminó con su muerte en 1975. En 1976, el gobierno declaró una amnistía parcial y puso en libertad a aproximadamente cuatrocientos presos políticos. Posteriormente, la ley de amnistía de octubre de 1977 logró que la mayoría de los presos políticos fuera puesto en libertad, incluidos los acusados de delitos de sangre, y que se aprobara un “punto final” para evitar el procesamiento de los miembros del régimen saliente.<sup>101</sup> La demanda de la izquierda de un rompimiento con el pasado franquista falló y la transición tuvo lugar sin una ruptura radical.<sup>102</sup> El nuevo régimen fue descrito como una democracia frágil o difícil, y la presencia de ciertos elementos de continuidad causó especulación sobre si el cambio había sido completo o no.<sup>103</sup>

En España no se purgaron las principales instituciones civiles y militares heredadas de la dictadura, ni se crearon comisiones de la verdad que investigaran las violaciones de derechos humanos que habían tenido lugar bajo el franquismo, ni se celebraron juicios

---

<sup>97</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.80.

<sup>98</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.18.

<sup>99</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.80.

<sup>100</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.297.

<sup>101</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.81.

<sup>102</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.298.

<sup>103</sup> J. MARAVALL y J. SANTAMARÍA, “Political change in Spain and the prospects for democracy” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.299.

contra los responsables de las muertes, torturas, detenciones ilegales producidas.<sup>104</sup> Pero se debe tener en cuenta, las aspiraciones de una sociedad que demandaba que se produjera un cambio pacífico, paulatino y sin rupturas bruscas con el pasado. Dicha sociedad preferiría fingir que olvidaba el pasado antes que pedir ningún tipo de rendimiento de cuentas por el mismo.<sup>105</sup> El modelo español de justicia de transición ha sido un modelo de impunidad y olvido absoluto de los crímenes perpetrados durante la guerra civil y la dictadura franquista, con rehabilitación parcial de las víctimas. Un modelo fruto de la necesidad y la coyuntura social en el que se desarrolló.<sup>106</sup>

El 26 de diciembre de 2007 se promulgó la Ley 52/2007<sup>107</sup> por la cual, genéricamente, se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Esta ley de “memoria histórica”, ha sido bienvenida por las organizaciones de víctimas; pero a pesar de esto, no ha dado satisfacción a todas las reivindicaciones de estos grupos, sobre todo la más importante: la anulación por ley de las sentencias por delitos políticos o las dictadas sin garantías procesales.<sup>108</sup> Las indemnizaciones, en algunos casos denominadas incorrectamente “reparaciones”<sup>109</sup> se conceden en España de forma parcial y fuera del contexto de un marco transicional.

Como lo expresa Gil en su informe sobre España,<sup>110</sup> la idea de revisar el pasado sigue siendo polémica hasta el día de hoy. La mayoría de la doctrina, los partidos políticos y la sociedad en general opina que no es el momento de buscar responsabilidades penales, pero

---

<sup>104</sup> P. AGUILAR, “Justicia, política y memoria: los legados del franquismo en la transición española” en A. BARAHONA DE BRITO et al (ed.), *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Istmo, Madrid, 2002, p.136.

<sup>105</sup> Ibid., p.152.

<sup>106</sup> A. GIL, “Informe de España” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009, p.471.

<sup>107</sup> Vid. Ley 52/2007 de 26 de diciembre, Boletín Oficial del Estado.

<sup>108</sup> A. GIL, “Informe de España” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, cit., p.497.

<sup>109</sup> Aunque el tema de las reparaciones se va a discutir más adelante, cabe resaltar que el reconocimiento de la condición de víctima, del daño causado y la responsabilidad del Estado (entre otros), es primordial para referirse al término de reparación. Obviamente en el caso español no se materializa este reconocimiento, ni se evidencia un esfuerzo encaminado hacia su logro.

<sup>110</sup> A. GIL, “Informe de España” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, cit., p.496.

sí de honrar e indemnizar a las víctimas, aunque no se ha llegado a un acuerdo de cómo hacerlo.<sup>111</sup>

### 3.2.2 América Latina

La década de los ochenta fue testigo de numerosas transiciones a la democracia en América Latina. Los países suramericanos sufrieron muchas interrupciones en los gobiernos democráticos durante la segunda mitad del siglo XX, periodos en los cuales prevalecieron las violaciones de derechos humanos. Los gobiernos persiguieron, asesinaron y torturaron a los oponentes políticos; el ejército y las fuerzas de seguridad abusaron de la población pobre y los criminales menores.<sup>112</sup>

Cuando ocurrieron las transiciones políticas, el interrogante que se plantearon las nuevas democracias fue si se podría utilizar el mismo modelo transicional que se siguió durante la primera fase. Pero en las nuevas democracias que emergieron en Suramérica después del colapso de las juntas militares represivas, no hubo seguridad de que pudiera seguirse con éxito el enjuiciamiento de los líderes de ellas al estilo Nuremberg.<sup>113</sup>

Hubo factores importantes que permitieron la transición hacia la democracia en países de América latina, como una comunidad internacional menos tolerante a las violaciones de derechos humanos y la creciente conciencia de sus élites políticas y económicas. No obstante, mientras que no existió voluntad política de impartir justicia retroactiva en países centroamericanos o en Perú y Paraguay, esta iniciativa sí definió los procesos transicionales hacia la democracia de países como Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.<sup>114</sup>

Por lo general, las condiciones de las transiciones fueron negociadas por los regímenes militares salientes, que en muchos casos lograron la inmunidad. En esta fase, la tensión

---

<sup>111</sup> En esta ocasión no se hará referencia al caso de la transición portuguesa, por cuestiones de estructura del texto se han priorizado ciertos países por zona geográfica, ya que detenerse en cada uno haría del documento una revisión histórica detallada que no es el propósito de esta tesina.

<sup>112</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.33.

<sup>113</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., 2003, p.8.

<sup>114</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.33.

entre castigo y amnistía se complicó con la admisión y reconocimiento de dilemas inherentes a periodos de cambio político.<sup>115</sup> Algunas de las nuevas democracias establecieron comisiones de la verdad para identificar a las víctimas y unos cuantos países llevaron a cabo procesos de reparación a las víctimas, basándose en información recopilada por estas comisiones.<sup>116</sup>

En Argentina, las fuerzas armadas tomaron el poder en 1976 a través de un golpe de Estado que derrocó a la presidenta Isabel Perón. El golpe tuvo aceptación social en sus inicios por ponerle fin a un periodo de violencia política y problemas económicos.<sup>117</sup> En la práctica, el nuevo gobierno continuó y profundizó la actuación de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado en la represión de personas caracterizadas como subversivas, ya por su militancia en organizaciones sindicales, estudiantes, profesores, entre otros.<sup>118</sup> La tortura fue ejercida a gran escala, las fuerzas armadas se negaron a reconocer la mayoría de las detenciones realizadas y fueron acusadas de causar la desaparición y la muerte de entre diez mil y treinta mil personas.<sup>119</sup>

La dictadura abandonó el poder a finales de 1983 en medio de un gran desprestigio social, no solo por las violaciones a los derechos humanos, sino por la derrota frente a Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas y por una situación de crisis económica. La transición a la democracia fue pactada con los partidos políticos, y los militares conservaron durante varios años una cuota importante de poder.<sup>120</sup> Tan pronto como Raúl Alfonsín fue elegido, comenzó a establecer claros parámetros sobre lo que debería hacerse. Lo primordial fue la determinación del paradero de aquellos que habían desaparecido. En cuanto al castigo, instituyó tres principios a seguir: que se debía castigar tanto el terrorismo de Estado como

---

<sup>115</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.8.

<sup>116</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.81.

<sup>117</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.323.

<sup>118</sup> P. PARENTI y L. PELLEGRINI, “Informe de Argentina” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009, p.135.

<sup>119</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.323.

<sup>120</sup> P. PARENTI y L. PELLEGRINI, “Informe de Argentina” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, cit., p.135.

el subversivo; que debería haber límites para aquellos que se les encontraran responsables, y que los juicios fueran limitado a un periodo de tiempo.<sup>121</sup>

Paralelamente, en diciembre de 1983 Alfonsín promulgó un decreto con el que se creó la c (CONADEP).<sup>122</sup> El año siguiente la comisión presentó el informe “Nunca más”,<sup>123</sup> en el que se documentó nueve mil personas desaparecidas y que luego se constituyó como la base de un programa de reparaciones para las víctimas.<sup>124</sup> Para lograr el objetivo de hacer responsables a los militares e integrarlos a la nueva democracia, el presidente Raúl Alfonsín llevó a cabo concesiones para los líderes militares. Finalmente algunos oficiales de alto rango fueron a la cárcel, mientras que la mayoría se beneficio de un “punto final” y fundamentalmente de una “ley de obediencia debida”, luego de un levantamiento militar en protesta por las numerosas acusaciones.<sup>125</sup> Como presidente, Carlos Menem concedió en 1989 indultos a treinta y nueve militares acusados o condenados por abusos de derechos humanos, a guerrillas de izquierda, a personal militar condenado en relación con la guerra de las Malvinas y líderes de la Junta que también habían sido condenados.<sup>126</sup>

A partir de 1990 se llevan a cabo procesamientos en Europa por hechos cometidos en Argentina,<sup>127</sup> que sumandos a la continua lucha de familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, a la detención de Pinochet y militares argentinos por orden del juez Baltazar Garzón, entre otros, contribuyeron a la deslegitimación política y jurídica de la impunidad.<sup>128</sup> Desde 1995, la mayoría de las Cámaras Federales de Argentina han recibido los reclamos de las víctimas y sus familiares y han declarado su competencia para realizar investigaciones que permitan dar cuenta de lo ocurrido a las víctimas del terrorismo de

---

<sup>121</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.67.

<sup>122</sup> Ibid., p.72.

<sup>123</sup> CONADEP, *Nunca más*, Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, Eudeba, Buenos Aires, 1984.

<sup>124</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.82.

<sup>125</sup> Ibid.

<sup>126</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.324.

<sup>127</sup> Vid. J. CHINCHÓN, *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia Iberoamericana*, cit., p.389.

<sup>128</sup> P. PARENTI y L. PELLEGRINI, “Informe de Argentina” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, cit., p.137.

Estado y establecer la suerte corrida por cada una de ellas.<sup>129</sup> Conocidos como “los juicios por la verdad”, son procesos que sin tener un fin penal han fortalecido la lucha por la justicia.

En 1998 se derogan las leyes de punto final y de obediencia debida. En el 2001 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratifican que estas normas son inconstitucionales.<sup>130</sup> Después de algunos inconvenientes, finalmente en el mes de agosto de 2003 el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 25779 por la que se declaran "insanablemente nulas" las mencionadas leyes. A partir de ese momento la Cámara Federal de la Capital Federal dispuso mediante decisiones acordadas la reapertura de las causas que habían sido archivadas como consecuencia de la sanción de las Leyes de punto final y obediencia debida. Al poco tiempo, la mayor parte de las cámaras federales del país adoptó igual decisión.<sup>131</sup>

Como se ha podido observar, en relación con las medidas de carácter penal, Argentina ha atravesado por diferentes momentos en los que se ha alternado entre el enjuiciamiento y la impunidad, encontrándose actualmente en una etapa de superación de la impunidad, en pleno desarrollo de procesos penales. En cuanto a otras medidas, se dictaron leyes y resoluciones con el objetivo de reparar a las víctimas, difundir el pasado represivo y fortalecer valores menospreciados por la dictadura. Igualmente, se establecieron archivos y espacios para la memoria, así como para la defensa y promoción de los derechos humanos.<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y LEGALES, Lucha contra la impunidad. Justicia, verdad y memoria, *Informe Anual 2001*, Buenos Aires, 2001, cap.1, p.2. Disponible en: [http://www.cels.org.ar/common/documentos/informe\\_2001\\_cap\\_1.pdf](http://www.cels.org.ar/common/documentos/informe_2001_cap_1.pdf)

<sup>130</sup> J. CHINCHÓN, *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia Iberoamericana*, cit., p.389.

<sup>131</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Cuarto Informe periódico Argentina*, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Comité de Derechos Humanos, Doc. CCPR/C/ARG/4, 13 de marzo de 2008. Disponible en: [www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR-C-ARG-4\\_sp.doc](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR-C-ARG-4_sp.doc)

<sup>132</sup> P. PARENTI y L. PELLEGRINI, “Informe de Argentina” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, cit., p.133.

En Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet lideró un golpe de estado a través del cual una junta militar derrocaba al presidente Allende, clausuraba el congreso de los diputados, prohibía toda actividad política e iniciaba un gobierno militar que se extendería hasta 1990.<sup>133</sup>

Durante la represión de la junta militar, se llevaron a cabo numerosos secuestros de personas consideradas como enemigos del gobierno, seguidos de la tortura y, a menudo, el asesinato del detenido, además de allanamientos de morada, asociaciones ilícitas, amenazas extorsivas, falsedades documentales, reproducción ilegal o supresión de expedientes judiciales, e inclusive homicidios cometidos para encubrir el hecho principal.<sup>134</sup> La tendencia de restauración de la democracia que vivió América Latina en los ochenta aumentó la presión para una apertura política en Chile. En 1988, Pinochet, confiado que contaba con el apoyo de la sociedad, aprobó que se llevara a cabo un plebiscito que permitiría a la población votar a favor o en contra de su régimen.<sup>135</sup> Luego de una campaña política tranquila se realizaron votaciones generales en 1989.

Patricio Aylwin ganó las elecciones y en su primer discurso confrontó el asunto de las violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado y declaró que el gobierno debía ejercer un equilibrio entre la moralidad y la prudencia.<sup>136</sup> En cuanto a intentos de enjuiciamientos, la corte suprema bloqueó sistemáticamente los intentos de investigar los crímenes del pasado que la ley de amnistía no cubría.<sup>137</sup> El 24 de abril de 1990 Aylwin creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (CNVR), la cual funcionó durante nueve meses e investigó las violaciones de derechos con resultado de muerte o desaparición entre 1973 y 1990, más de tres mil y realizó diversas recomendaciones.<sup>138</sup> El informe de la

---

<sup>133</sup> J. CHINCHÓN, *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia Iberoamericana*, cit., p.402.

<sup>134</sup> J. GUZMÁN, "Informe de Chile" en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009, p.202.

<sup>135</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.454.

<sup>136</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.37.

<sup>137</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.84.

<sup>138</sup> A. BARAHONA DE BRITO, "Verdad, justicia, memoria y democratización en el cono sur" en A. BARAHONA DE BRITO et al (ed.), *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, cit., p.210.

comisión se hizo público el 4 de marzo de 1991. Este tuvo como objetivo el reconocimiento oficial de la verdad, contribuyendo a la prevención de futuras violaciones, generando conciencia social y reconociendo, monetaria y simbólicamente, el daño enorme que el régimen militar hizo.<sup>139</sup>

En enero de 1992, cumpliendo las recomendaciones del informe, el gobierno aprobó una ley de reparaciones que beneficiaría a unas siete mil personas aproximadamente. El mes siguiente, se creó la Corporación Nacional para la Reparación y Reconciliación (CNRR), que estableció legalmente los derechos de los familiares a encontrar los desaparecidos y fue responsable de decidir quiénes serían compensados.<sup>140</sup> Si bien los mecanismos de verdad y reparación no resultaron capaces de generar reformas jurídicas de peso en el fortalecimiento del estado de derecho, lograron en contraste, avances significativos en la percepción de la opinión pública, la actitud de los partidos políticos y la disposición de las fuerzas armadas frente a los crímenes y violaciones de derechos humanos.<sup>141</sup>

### 3.2.3 Europa del Este

Por qué una ideología como el marxismo, que a diferencia del nazismo, tiene su origen en ideales humanitarios de igualdad y libertad, condujo a violaciones masivas de derechos humanos y a la imposición de Estados totalitarios comparados a los de la Alemania nazi, es una pregunta que no ha sido respondida satisfactoriamente.<sup>142</sup> En la primavera de 1989, las negociaciones de la mesa redonda y las elecciones que siguieron a éstas en Polonia causaron un efecto dominó de transiciones a regímenes, más o menos, democráticos.<sup>143</sup> Las transiciones se extendieron entonces desde Polonia, siguiendo con Hungría, Alemania oriental (RDA), Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Una vez el régimen comunista colapsó, el legado de las violaciones masivas de derechos humanos tuvo que ser

---

<sup>139</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.38.

<sup>140</sup> A. BARAHONA DE BRITO, “Verdad, justicia, memoria y democratización en el cono sur” en A. BARAHONA DE BRITO et al (ed.), *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, cit., p.211.

<sup>141</sup> J. GUZMÁN, “Informe de Chile” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, cit., p.231.

<sup>142</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.20.

<sup>143</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.86.



confrontado.<sup>144</sup> Con la desintegración del sistema soviético la idea de derechos humanos surgió victoriosa, la noción de superioridad ética de los gobiernos democráticos se impuso en el concierto internacional. El discurso político enfatizó en la conexión entre derechos humanos y democracia: solo bajo un gobierno democrático se conseguiría la realización de los derechos humanos.<sup>145</sup>

Las respuestas transicionales variaron dependiendo de cada país y sus circunstancias políticas. En términos generales, las purgas y las indemnizaciones fueron más exhaustivas en Checoslovaquia, y posteriormente en la República Checa, y menos considerables en Rumania. En todos los países hubo relativamente pocos juicios, si bien algunos líderes del régimen fueron enjuiciados, no siempre se les condenó.<sup>146</sup> Igualmente, se implementaron medidas como las purgas en el sector público que tomaron diversas formas como los despidos masivos en Alemania y la descalificación (vetting) en varios países del Este.

Se desarrollaron exhaustivos procesos de restitución en toda la región. En todos los países, a excepción de Polonia, donde las fincas privadas nunca fueron abolidas, la restitución de tierras agrícolas fue una cuestión de gran envergadura.<sup>147</sup> En Europa del Este, los antiguos Estados socialistas tuvieron que reorganizar la economía estatal. Uno de los asuntos más importantes en la compleja transición legal y económica fue la del derecho a la propiedad. Este asunto abarcó la reformulación del derecho a la propiedad en los códigos civiles, la reforma y la privatización de las tierras, la compensación por su nacionalización, así como por las injusticias que se vivieron bajo el régimen comunista.<sup>148</sup>

El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y fue abierta la puerta de Brandenburgo que simbolizó el colapso de la división este-oeste. En marzo de 1990, las elecciones democráticas dieron paso a la instalación de una coalición de gobierno dominada por

---

<sup>144</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.21.

<sup>145</sup> J. ZALAQUETT, *Inaugural annual lecture on transition to democracy*, cit., p.14.

<sup>146</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.86.

<sup>147</sup> *Ibid.*, p.89.

<sup>148</sup> P. PACZOLAY, "Judicial review of compensation law in Hungary" en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.667.

partidos pro-unificación. Alemania fue reunificada el 3 de octubre de 1990.<sup>149</sup> La reunificación alemana produjo complicaciones legales en cuanto a la justicia retrospectiva. El tratado de reunificación de Alemania mantuvo en vigor la cláusula constitucional de las leyes fundamentales que prohibía los procesos ex post facto,<sup>150</sup> lo que se convirtió en una limitación evidente para la justicia transicional. Muchos líderes de Alemania oriental y miembros de la policía secreta (Stasi) cometieron actos que no eran criminales cuando fueron perpetrados, por lo cual evitaron ser condenados. Y algunos líderes principales como Erich Mielke, ideólogo de la Stasi y Erich Honeker, jefe de Estado de la República Democrática Alemana, fueron procesados por crímenes menores.<sup>151</sup>

El tratado de reunificación dio la oportunidad de despedir del servicio civil a antiguos altos funcionarios del Partido Socialista Unificado de Alemania, así como a líderes de los sindicatos oficiales y todos aquellos que colaboraron con la Stasi.<sup>152</sup> El 2 de enero de 1992 a través de la ley de archivos Stasi, éstos se abrieron al público, y en 1994, la comisión que llevaba los archivos había recibido ya unas dos millones de solicitudes de información. Como resultado, miles de empleados públicos fueron despedidos por la evidencia incriminatoria que contenían estos archivos.<sup>153</sup> Esta práctica de despedir a los “funcionarios manchados” dio como resultado que para 1992, cincuenta por ciento de los antiguos jueces y fiscales habían perdido su trabajo y para 1997, cuarenta y dos mil funcionarios habían sido despedidos por su cooperación con los servicios estatales de seguridad.<sup>154</sup> Igualmente, el tratado de reunificación estableció que las propiedades en Alemania oriental que habían sido confiscadas a los dueños de manera errónea o sin una compensación adecuada debía ser restituida a sus antiguos propietarios.<sup>155</sup> El periodo establecido para la restitución fue

---

<sup>149</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.594.

<sup>150</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.229.

<sup>151</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.23.

<sup>152</sup> W. SADURSKI, *Decommunisation, lustration and constitutional continuity: dilemmas of transitional justice in central Europe*, EUI working paper law No.2003/15, European University Institute, 2003, p.15.

<sup>153</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.594.

<sup>154</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.88.

<sup>155</sup> D. SOUTHERN, “Restitution or compensation: the property question” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.640.

entre 1933 y 1945, llevado a cabo por el régimen nazi, y de 1949 en adelante, por el gobierno de Alemania oriental.<sup>156</sup>

El caso de la transición, o reunificación, democrática de Alemania oriental tuvo características particulares en comparación con los demás países que dejaban el régimen comunista. Hubo claras ventajas institucionales, los políticos alemanes contaron con la circunstancia especial de una unificación nacional que los guiara y con la experiencia de más de cuarenta años con la tradición del “*Rechtsstaat*” (Estado de derecho) de Alemania occidental.<sup>157</sup>

El comunismo tomó el poder en Checoslovaquia en febrero de 1948. Siguiendo el modelo soviético, se impuso un sistema de gobierno en el cual el partido comunista controló el Estado.<sup>158</sup> A finales de los ochenta la apertura democrática en la URSS y otras partes del centro y el este de Europa, más una economía deteriorada estimularon la presión por reformas de nuevos grupos independientes a lo largo del país.<sup>159</sup> Los eventos comenzaron el 17 de noviembre con una manifestación estudiantil y culminaron con una huelga general el 27 de noviembre, donde millones de personas en toda Checoslovaquia salieron a expresar su oposición al Estado.<sup>160</sup> En diciembre de 1989, la “revolución de terciopelo” forzó la renuncia del jefe del partido comunista Gustav Husak y Vaclav Havel, un importante líder de derechos humanos, fue designado como presidente.<sup>161</sup>

Checoslovaquia fue el primer país de la región cuyas nuevas instituciones democráticas proclamaron solemnemente una condena del régimen anterior. El 23 de mayo de 1991, el parlamento federal aprobó una moción que declaraba al régimen comunista ilegal y

---

<sup>156</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.89.

<sup>157</sup> J. MCADAMS, “Communism on trial: The East German past and the German future”, en J. MCADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, cit., p. 239.

<sup>158</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.533.

<sup>159</sup> Ibid., p.534.

<sup>160</sup> M. KRAUS, “Settling accounts: postcommunist Czechoslovakia” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.542.

<sup>161</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.534.

condenable, y detalló los males que causó al país.<sup>162</sup> En cuanto a procesamiento judiciales, en la República Checa, los fiscales acusaron a unos cien camaradas de delitos y crímenes relativos al abuso de autoridad en la ex Checoslovaquia, desde la tortura física y mental, hasta el asesinato de enemigos políticos del régimen comunista, pero como resultado, los tribunales checos solo dictaron cinco sentencias entre 1989 y 1999.<sup>163</sup> El Nuevo gobierno confrontó de manera rápida el legado de injusticia del antiguo régimen. El presidente Havel concedió amnistía a más de veinte mil prisioneros y el 4 de octubre de 1991, la asamblea federal checoslovaca promulgó la ley de lustración.<sup>164</sup> Aunque un régimen legal fue instituido para confrontar los crímenes políticos, el proceso de lustración dominó el discurso político.<sup>165</sup> La noción de descalificación aplica a aquellos instrumentos que tienen como propósito revelar la participación real de personas en el régimen comunista y sus prácticas, y dependiendo de las circunstancias, especificar sus consecuencias tales como perder el derecho de desempeñar ciertos cargos públicos.<sup>166</sup> Aunque la ley de lustración contó con muchas críticas a nivel nacional e internacional, los partidarios de la ley argumentaron que por más de cuarenta años el régimen comunista discriminó a los ciudadanos checoslovacos basados en sus creencias políticas y religiosas. El objetivo de la ley de lustración no fue castigar a los miembros del partido, agentes y colaboradores de la StB (policía secreta), sino prevenir que éstos ocuparan posiciones dentro del gobierno y las instituciones estatales.<sup>167</sup> Actitud bastante debatible, ya que no impulsaban una “descalificación” dirigida a la rendición de cuentas.

Adicionalmente, durante 1990 y 1991 se promulgaron diversas leyes relacionadas con el proceso transicional. Entre ellas, la ley de rehabilitación judicial; se enmendó el código penal para abolir la pena de muerte y algunos crímenes políticos; la ley de restitución y la

---

<sup>162</sup> C. GONZÁLEZ, “Depuración y justicia políticas en Europa del Este” en A. BARAHONA DE BRITO et al (ed.), *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Istmo, Madrid, 2002, p.331.

<sup>163</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.87.

<sup>164</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.534.

<sup>165</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.22.

<sup>166</sup> W. SADURSKI, *Decommunisation, lustration and constitutional continuity: dilemmas of transitional justice in central Europe*, cit., p.4.

<sup>167</sup> M. ALBON, “Project on justice in times of transition” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.1, Estados Unidos, 1995, p.51.

ley de privatización y la ley sobre rehabilitación extrajudicial, en la que se le devolvía las propiedades confiscadas por los comunistas y proveía rehabilitación y compensación a las víctimas de la persecución política.<sup>168</sup>

### 3.2.4 África

Dependiendo de la naturaleza de la transición a la democracia, si fue pacífica o violenta, se determina como las democracias emergentes de África sobrellevaron las violaciones de derechos humanos. En países como Benín, Níger y Togo, la transición fue relativamente tranquila y los nuevos gobiernos otorgaron algún tipo de inmunidad a los líderes del régimen anterior. En cambio en países como Uganda, Chad y Etiopía, la transición hacia la democracia fue el resultado violento de una guerra civil.<sup>169</sup> El caso de Sudáfrica, se destaca por la particularidad de la opresión, por motivos étnicos, de la que fue víctima la mayoría de la población.

En Uganda después de la independencia en 1962, los regímenes represivos de Idi Amin y Milton Obote, asesinaron aproximadamente ochocientas mil personas. Con la llegada al poder en 1986 de Yoweri Museveni, muchos presos políticos fueron liberados y los asesinatos indiscriminados cesaron.<sup>170</sup> Aunque Museveni, prometió respetar los derechos humanos y establecer el estado de derecho, un ejército indisciplinado siguió con las matanzas y torturas en una guerra contra grupos subversivos en el norte y el este del país.<sup>171</sup> En mayo de 1986, el ministerio de justicia estableció la comisión de investigación sobre violaciones de derechos humanos, debido a la necesidad de conocer lo que había sucedido en Uganda después de dos décadas de abusos de derechos humanos, infringir el Estado de derecho y el excesivo abuso de poder.<sup>172</sup> El trabajo de la comisión fue lento, debido principalmente a falta de recursos. El informe fue finalmente presentado en octubre de 1994

---

<sup>168</sup> A. PLATT et al, "Compensating former political prisoners: an overview of developments in central and eastern Europe" en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.571.

<sup>169</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.31.

<sup>170</sup> N. KRITZ, *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.512.

<sup>171</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.31.

<sup>172</sup> A. ODER, "The role of commission of inquiry into violations of human rights promotion in Uganda" en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, cit., p.513.

y recomendó enjuiciamientos así como medidas administrativas para prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos.<sup>173</sup>

En Sudáfrica durante cuarenta y cinco años de apartheid la mayoría de la población (no blanca) sufrió masacres, asesinatos, torturas, encarcelamientos de larga duración de activistas, y severa discriminación social y económica.<sup>174</sup> El apartheid fue un orden legal. La mayor parte de las injusticias perpetradas por los sucesivos gobiernos del apartheid entre 1948 y 1990 fueron cometidas en nombre de la ley.<sup>175</sup> El nuevo gobierno sudafricano surgido de la transición pudo haber decidido enjuiciar a los miembros del antiguo régimen por las atrocidades del apartheid, pero factores políticos lo hicieron imposible, particularmente, porque el Partido Nacional, que gobernó en el país de 1948 a mayo de 1994, participó activamente en la transición del apartheid a la democracia y fue recompensado con posiciones en un gobierno de unidad nacional que gobernó bajo una constitución interina.<sup>176</sup>

La Comisión de la Verdad y Reconciliación que se estableció como parte de la transición negociada hacia la democracia, representó una modalidad única de reconciliación con el pasado.<sup>177</sup> La idea de una comisión de la verdad fue propuesta a principios de 1992, pero solo hasta que Nelson Mandela fue elegido como presidente en abril de 1994, se discutió seriamente sobre su creación.<sup>178</sup> La comisión fue establecida en diciembre de 1995 y emitió un informe en 1998, en el cual hasta esa fecha se identificaron alrededor de quince mil víctimas.<sup>179</sup> Los otros comités de la comisión trabajaron para implementar un programa de reparaciones, aunque con fondos muy reducidos, y para finalizar una lista actualizada de las víctimas habilitadas para recibir reparaciones.<sup>180</sup> El subcomité de reparaciones recomendó que cada víctima recibiera entre dos mil y tres mil dólares por año durante seis años. El 17

---

<sup>173</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.31.

<sup>174</sup> P. HAYNER, *Unspeakable Truths, facing the challenge of truth commissions*, cit., p.41.

<sup>175</sup> J. DUGARD, "Retrospective justice: international law and the South African model" en J. MCADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, cit., p. 270.

<sup>176</sup> Ibid., p. 276.

<sup>177</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.91.

<sup>178</sup> P. HAYNER, *Unspeakable Truths, facing the challenge of truth commissions*, cit., p.41.

<sup>179</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.91.

<sup>180</sup> P. HAYNER, *Unspeakable Truths, facing the challenge of truth commissions*, cit., p.45.

de abril de 2003, el presidente Mbeki anunció que su gobierno pagaría aproximadamente ochenta y cinco mil millones de dólares en reparaciones a más de diecinueve mil víctimas del apartheid que testificaron ante la comisión de la verdad y la reconciliación.<sup>181</sup>

La gran innovación de la comisión, y a su vez su poder más controvertido, fue la capacidad de conceder una amnistía individual por los crímenes motivados por razones políticas entre 1960 y 1994.<sup>182</sup> La amnistía representó la inmunidad frente a procedimientos penales y civiles. A finales del 2000, se habían presentado más de siete mil solicitudes de amnistías, de las cuales se otorgaron ochocientos cuarenta y nueve, y se rechazaron cinco mil trescientas noventa y dos, rechazos que se dieron en su mayoría a delincuentes comunes que pretendieron utilizar el procedimiento para obtener la libertad.<sup>183</sup>

La experiencia de la transición en Sudáfrica puso en evidencia que quizás el objetivo más importante de cualquier comisión de la verdad sea prevenir más violencia y abusos de derechos humanos en el futuro. En ocasiones, esto significa romper el ciclo de la venganza y el odio entre antiguos enemigos, fomentando de alguna forma la reconciliación.<sup>184</sup> El lenguaje de reconciliación nacional ha figurado de manera prominente en el discurso oficial de las transiciones hacia la democracia. Algunas veces significa apuntar hacia el propósito ideal de enfrentarse a crímenes del pasado reciente. En otros casos, el termino reconciliación es el último recurso para enmascarar la actitud de “lo pasado, pasado está”.<sup>185</sup>

---

<sup>181</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.91.

<sup>182</sup> P. HAYNER, *Unspeakable Truths, facing the challenge of truth commissions*, cit., p.43.

<sup>183</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., 2006, p.91.

<sup>184</sup> P. HAYNER, *Unspeakable Truths, facing the challenge of truth commissions*, cit., p.154.

<sup>185</sup> J. ZALAQUETT, *Inaugural annual lecture on transition to democracy*, cit., p.6.

### 3.2.5 Esfuerzos internacionales

La búsqueda internacional de justicia penal para las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra, sean por medio de tribunales locales actuando bajo principios de jurisdicción universal o extraterritorial, o de tribunales internacionales ad-hoc creados por Naciones Unidas, han dado mayor ímpetu a la noción de rendición de cuentas por crímenes cometidos en el pasado.<sup>186</sup> A finales de esta etapa, hubo dos intentos que sobresalieron por apostarle al derecho penal internacional como respuesta a crueles e inhumanos episodios de violencia: el tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia y el tribunal penal internacional para Ruanda.

Durante la guerra en Bosnia-Herzegovina se cometieron abusos graves y sistemáticos contra los derechos humanos. Se calcula que la cifra fue de doscientas mil personas asesinadas, así como violaciones masivas, genocidio y limpieza étnica, en su mayoría cometidas en contra de la población civil bosnia. Los bosnios musulmanes fueron los más afectados, tanto en número de víctimas fatales como de desplazamientos masivos, pero también se cometieron graves crímenes en contra de los serbios bosnios y los bosnios croatas.<sup>187</sup>

El 6 de octubre de 1992, el consejo de seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 780, estableciendo una comisión de expertos para investigar y recolectar evidencia del incumplimiento de las convenciones de Ginebra y otras violaciones del derecho internacional humanitario en el conflicto de la Antigua Yugoslavia.<sup>188</sup> El 22 de febrero de 1993, el consejo de seguridad adoptó la resolución 808 que decretó que “un tribunal penal internacional debe ser establecido para el juzgamiento de personas responsables de cometer serias violaciones del derecho internacional humanitario en el territorio de la antigua

---

<sup>186</sup> Ibid., p.7.

<sup>187</sup> M. MORATTI Y A. SABIC-EL-RAYES, *Transitional Justice and DDR: the case of Bosnia and Herzegovina*, International Center for Transitional Justice, junio, 2009, p.6. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Bosnia-CaseStudy-2009-English.pdf>

<sup>188</sup> C. BASSIOUNI, “From Versailles to Rwanda in seventy five years: the need to establish a permanent International Criminal Court”, cit., p.39.



Yugoslavia desde 1991”<sup>189</sup>. Los precedentes de Núremberg y Tokio, los cuales supuestamente superaron los problemas de la retroactividad del derecho penal, dieron legitimidad a un tribunal internacional ad-hoc.<sup>190</sup>

Después del establecimiento del tribunal para la Antigua Yugoslavia (TPIY), el mundo fue testigo de un crimen flagrante, el genocidio en Ruanda desde abril a julio de 1994, en el cual ochocientas mil personas fueron asesinadas. En este caso, nadie puede imaginar que un proceso de esclarecimiento de la verdad pudiera hacer una contribución importante, o que el resultado de tal proceso podría ser proporcional al nivel de criminalidad que se llevó a cabo en Ruanda. Solo un esfuerzo para impartir justicia llevando a los asesinos a juicio e imponiéndoles castigos judiciales parecía apropiado.<sup>191</sup> En noviembre de 1994 por petición de Ruanda, el consejo de seguridad votó para crear un segundo tribunal ad-hoc para juzgar el genocidio y otras serias violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en Ruanda y sus países vecinos durante aquel año, constituyéndose así el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)<sup>192</sup> Su estatuto se asemejó al del TPIY, aunque las provisiones reflejaron que el hecho del genocidio en Ruanda se llevó a cabo en el contexto de un conflicto armado interno.<sup>193</sup>

La etapa de los primeros tribunales ad-hoc (1993-1994) coincidió con la renovación de esfuerzos para establecer una corte penal internacional permanente,<sup>194</sup> e igualmente, como lo expresó Cassese, los dos tribunales ganaron reconocimiento y credibilidad a nivel mundial y los eventos en Yugoslavia y Ruanda sirvieron para impactar al mundo y sacarlo

---

<sup>189</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 808*, Consejo de Seguridad, U.N. Doc. S/RES/808, 22 de febrero de 1993.

<sup>190</sup> C. NINO, *Radical evil on trial*, cit., p.26.

<sup>191</sup> A. NEIER, “Rethinking truth, justice and guilt after Bosnia and Rwanda” en C. HESSE y R. POST (ed.), *Human rights in political transitions: Gettysburg to Bosnia*, Zone books, New York, 1999, p.43.

<sup>192</sup> Vid. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Resolución 955*, Consejo de Seguridad, U.N. Doc. S/RES/955, 8 de noviembre de 1994. Disponible en:

<http://www.unict.org/Portals/0/English/Legal/Resolutions/English/955e.pdf>

<sup>193</sup> W. SCHABAS, *An introduction to the international criminal court*, cit., p.11.

<sup>194</sup> La idea de juzgar a los perpetradores de crímenes internacionales adquirió mayor apoyo de la opinión pública y de muchos gobiernos, así la comunidad internacional, con sus conocidas excepciones, se convirtió en partidaria de una institución permanente con reconocimiento universal que no experimentara los inconvenientes de los tribunales ad hoc.

de su estado de autocomplacencia.<sup>195</sup> Aunque la segunda etapa no se caracterizó por la implementación de mecanismos de justicia transicional a nivel internacional, los pocos intentos reafirmaron la importancia que estos tienen para el soporte de los procesos transicionales, así como para abordar masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. En la década de los noventa, Naciones Unidas estableció o contribuyó a establecer un grupo de tribunales penales especiales.<sup>196</sup> Esto se llevó a cabo para lograr objetivos tales como llevar a la justicia a los responsables de serias violaciones de derechos humanos y derechos internacional humanitario, poner fin a dichas violaciones y prevenir su repetición, asegurar justicia y dignidad para las víctimas, establecer un record de los acontecimientos pasados, promover la reconciliación nacional, restablecer el Estado de derecho y contribuir a la restauración de la paz.<sup>197</sup>

De esta forma Teitel afirma que el derecho internacional puede desempeñar un rol constructivo, proveyendo una fuerte alternativa de Estado de derecho para guiar los procesos nacionales en las sociedades en transición. En este sentido, las normas legales internacionales son útiles para construir una percepción de continuidad y consistencia del Estado de derecho.<sup>198</sup>

---

<sup>195</sup> A. CASSESE et al, *The Rome statute of the International Criminal Court: a commentary*, cit., p.16.

<sup>196</sup> Se refiere al tribunal especial para Sierra Leona, el tribunal especial Iraquí, las salas especiales para Camboya, las salas especiales de delitos graves en Timor Oriental, el sistema judicial de la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y el tribunal especial para el Líbano. Vid. R. GEISS y N. BULINCK, “Cuadro comparativo de los tribunales penales internacionales e internacionalizados”, *International Review of the Red Cross*, No. 861, marzo de 2006. INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *Handbook on the special tribunal for Lebanon*, ICTJ, Friedrich Ebert Stiftung, abril, 2008. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-STL-Handbook-2008-English.pdf>

<sup>197</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies*, Report of the Secretary-General to Security Council, S/2004/616, agosto 23 de 2004, p.13.

<sup>198</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.8.

### 3.3 Tercera etapa: la normalización de la justicia transicional

La tercera etapa puede ser caracterizada como la del estado estable y asentado de la justicia transicional.<sup>199</sup> Los mecanismos de justicia transicional que funcionaron, en algunos casos parcialmente, durante la segunda etapa, se convirtieron en una fórmula que se busca trasplantar no solamente en casos de transiciones político-democráticas, sino también como alternativa metodológica en el marco de conflictos armados.

El símbolo más reconocido de la normalización de la teoría transicional es el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998,<sup>200</sup> una clara respuesta a las necesidades de la primera etapa, que se han mantenido hasta el momento. La CPI ofrece una nueva esperanza de una reducción permanente del fenómeno de la impunidad, por lo cual la ratificación de su estatuto debe ser fomentado.<sup>201</sup> Sin duda, el regreso hacia el derecho internacional humanitario incorpora la compleja relación entre el individuo y el Estado como un modelo legal que permite a la comunidad internacional hacer valer la responsabilidad de los líderes de un régimen, incluso cuando ocurren fuera del Estado en cuestión.<sup>202</sup>

La relación complementaria entre la justicia internacional y el desarrollo del Estado de derecho, puede jugar un papel fundamental en asegurar que los Estados cumplan sus obligaciones de manera apropiada a la hora de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de serios crímenes.<sup>203</sup> Pero además de reconocer y apoyar el principio de complementariedad de la CPI, se debe hacer énfasis en la necesidad de llevar a cabo medidas prácticas para asegurar que los Estados que tengan la voluntad de investigar y enjuiciar tales crímenes, pero no puedan hacerlo, se les proporcione las herramientas

---

<sup>199</sup> Ibid., p.22.

<sup>200</sup> Ibid., p.23.

<sup>201</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies*, cit., summary.

<sup>202</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.23.

<sup>203</sup> INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *Meeting Summary of the Retreat on Complementarity after Kampala: The Way Forward*, November 19, 2010, p.2. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Complementarity-Greentree-2010-English.pdf>

necesarias para asumir sus responsabilidades.<sup>204</sup> Los sistemas de justicia local deberían ser los primeros en buscar la rendición de cuentas, pero cuando las autoridades locales no lo deseen o no sean capaces, el papel de la comunidad internacional es crucial.<sup>205</sup>

Es claro entonces, que en la tercera etapa se está produciendo una consolidación internacional de la justicia transicional para lograr a un abordaje de los procesos de transición de manera conjunta en estrecha cooperación con los Estados. La organización de Naciones Unidas ha jugado un papel importante a través de fortalecimiento del marco normativo internacional en el que se asienta la justicia de transición, incluido el derecho a la justicia, a la verdad y a las garantías de que esos hechos no se repetirán, con diversos esfuerzos.

Cabe resaltar que, en el 2005, la Asamblea General reafirmó el derecho de las víctimas a obtener reparación al aprobar los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.<sup>206</sup> Este documento, en la actualidad, es la culminación que ha dado lugar a todo el entramado internacional en el marco de la justicia transicional. A pesar que su desarrollo debe continuar, y hay todavía mucho por hacer en esta materia, esta resolución significa la consolidación de un amplio esfuerzo normativo y político en el marco del derecho internacional.

Adicionalmente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó la creación de un relator especial para la promoción y el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición<sup>207</sup> mediante resolución A/HRC/18/L.22 del 26 de

---

<sup>204</sup> Ibid., p.1.

<sup>205</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies*, cit., p.14.

<sup>206</sup> Vid. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, Asamblea General. Resolución 60/147, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006.

<sup>207</sup> Pablo De Greiff (Académico experto en justicia transicional y director de investigaciones del International Center for Transitional Justice) fue elegido el 22 de marzo de 2012, en sesión del Consejo de Derechos

septiembre de 2011. Entre los objetivos principales de ésta relatoría se encuentran proveer asistencia técnica y asesoría a los Estados que lo soliciten, recopilar información relevante sobre las situaciones de graves violaciones de los derechos humanos y serias violaciones del derecho internacional humanitario para estudiar tendencias, desarrollos y retos y así poder hacer recomendaciones.<sup>208</sup> Aunque es demasiado pronto para categorizarlo como un acontecimiento histórico, indudablemente se visualiza como un esfuerzo del sistema de Naciones Unidas, y por ende de la comunidad internacional, en la lucha contra la impunidad, con el propósito de impartir justicia frente a graves abusos de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Igualmente, aunque de manera breve, debe mencionarse el tema de la justicia universal y su vinculación con la justicia transicional.<sup>209</sup> Los derechos humanos, y en concreto la dignidad humana, se convierten en objeto de protección supranacional.<sup>210</sup> Los Estados poseen una doble obligación en cuanto a los derechos humanos; por una parte, tienen el deber de respetarlos y protegerlos; y por otra parte, la obligación de su garantía. Lo anterior conlleva a “la exigencia por parte de los Estados, tanto de los del lugar de comisión de los hechos como de terceros ajenos al *locus delicti commissi*, de juzgar a los responsables de estos crímenes internacionales”.<sup>211</sup>

Por otra parte, en esta tercera etapa dentro del discurso de la justicia transicional empieza a emerger un factor determinante que le da a éste una nueva perspectiva: el tema del desarrollo. Los países que se encuentran en una fase de post-conflicto, e inclusive los que presentan conflictos vigentes, enfrentan un legado de violaciones sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, lo que se traduce en un gran número de

---

Humanos de Naciones Unidas, como el primer relator especial para la promoción y el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

<sup>208</sup> Vid. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non recurrence*, Human Rights Council, A/HRC/18/L.22, septiembre 26 de 2011, p.3.

<sup>209</sup> Aunque no es objeto de estudio, cabe cuestionarse sobre casos importantes como el Eichmann, Scilingo y Pinochet, y lo que podría significar el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional en el marco de la justicia de transición.

<sup>210</sup> M. OLLÉ, *Justicia universal para crímenes internacionales*, Wolters Kluwer España, Madrid, 2008, p.248.

<sup>211</sup> Ibid., p.254.

víctimas, personas en situación de desplazamiento forzado, comunidades vulneradas históricamente a las que se les ha acentuado su condición de vulnerabilidad. En una primera mirada, el enfocar los esfuerzos de reconocimiento de las víctimas, su reparación y la consolidación del Estado de derecho, desde el punto de vista del fortalecimiento de políticas de desarrollo, parecería una salida rápida de Estados democráticamente débiles y una negación de su responsabilidad en cuanto a la rendición de cuentas.

El discurso actual en torno al tema del desarrollo ofrece una mirada distinta. Un buen número de sociedades transicionales enfrentan inmensos retos para el desarrollo, y un buen número de países en vía de desarrollo enfrentan déficits de justicia duraderos relacionados con masivos abusos de derechos humanos de su pasado.<sup>212</sup> En esta medida, el fortalecimiento de una participación política, consciente y elaborada, de los ciudadanos contribuye claramente al desarrollo nacional. Para De Greiff, los mecanismos de justicia transicional pueden ser vistos desde esta perspectiva como medidas de integración social y como esfuerzos para fortalecer los derechos ciudadanos.<sup>213</sup>

Se puede concluir que la justicia transicional se encuentra en una constante evolución. Su alcance se ha extendido para abordar diferente tipo de situaciones transicionales y para involucrar diversos actores en su desarrollo. Queda claro que los procesos de transición tienen una duración continuada; que resurgen después del tiempo en el marco de circunstancias y entornos políticos propicios, y acorde con el progreso de la normativa internacional; y que necesita esfuerzos complementarios de parte de los Estados y de la comunidad internacional para su fortalecimiento.

---

<sup>212</sup> P. DE GREIFF, “Articulating the links between transitional justice and development: justice and social integration”, en P. DE GREIFF y R. DUTHIE (ed.), *Transitional justice and development, making connections*, Social Science Research Council, Estados Unidos, 2009, p.29.

<sup>213</sup> Ibid., p.56.

#### **4. Finalidades de la justicia transicional**

Al detenerse a identificar la finalidad de la justicia transicional surgen varias ideas posibles. Indiscutiblemente, se debe iniciar mencionando que el objetivo principal es garantizar que la dignidad de las víctimas, sobrevivientes y familiares será restituida, seguido de la justicia y la reconciliación. Nelson Mandela plantea los problemas a los que se enfrenta una sociedad al momento de la transición, y es precisamente la consolidación de la gobernabilidad, la legitimidad, la democracia y los derechos humanos, lo que se debería tener en cuenta al momento de ponderar las finalidades de la justicia transicional.<sup>214</sup> La idea principal es que los componentes de una política de justicia transicional comprensiva estén unidos por el hecho de que las diferentes medidas puedan promover ciertos objetivos. El fin último de la justicia transicional, es por supuesto, promover la justicia como ideal.<sup>215</sup> Esto en el sentido de contribuir a “darle a cada uno lo que le corresponde” o fortalecer la relación entre esfuerzo y éxito, o lo que el entendimiento general de justicia sea.<sup>216</sup>

Entonces el primer punto es el reconocimiento. Si una nueva democracia no se esfuerza por ofrecer un reconocimiento público a las víctimas de la represión, especialmente cuando su número es alto, le costará lograr el apoyo y la identificación de esos grupos sociales, que muy probablemente verán en la nueva democracia un sistema político ajeno.<sup>217</sup> La satisfacción moral de las víctimas como resultado de las distintas reparaciones llevadas a cabo, favorecerán la reconstrucción del tejido social. Lo que es fundamental es la búsqueda de reparación, de restitución, de integridad, de una unidad política, el ímpetu de incorporar valores externos a las ideales teorías de justicia.<sup>218</sup> De esta forma, una de las principales finalidades de la justicia es devolver o establecer un nuevo estatus de ciudadano al

---

<sup>214</sup>Vid. N. MANDELA, “Prólogo”, en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice: how emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol. 1, cit., 1995.

<sup>215</sup> P. DE GREIFF, “Transitional justice, security and development”, cit., p. 9.

<sup>216</sup> P. DE GREIFF, “Articulating the links between transitional justice and development: justice and social integration”, en P. DE GREIFF y R. DUTHIE (ed.), *Transitional justice and development, making connections*, cit., p.56.

<sup>217</sup> A. BARAHONA DE BRITO et al, *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, cit., p. 448.

<sup>218</sup>R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p. 225.

individuo. En este punto los programas de reparación tienen como objetivo contribuir a lograr esa justicia, por lo cual el reconocimiento es una condición y una consecuencia de la justicia, este es entonces el vínculo entre las reparaciones y el reconocimiento.<sup>219</sup>

Otro objetivo legítimo de la justicia en casos de transición es restaurar la confianza entre los ciudadanos. Para De Greiff, esa confianza cívica es igualmente una condición y una consecuencia de la justicia.<sup>220</sup> La confianza cívica hace referencia a la confianza que deben tener los diferentes actores sociales en las instituciones, así como en sus propósitos y decisiones, al igual que la que se tienen los ciudadanos entre sí. Esta confianza no se adquiere, simplemente, luego de la ejecución de programas de reparación (sin siquiera pensar en evaluar su eficiencia), o con el establecimiento nominal de un “sistema democrático”; la confianza cívica, inclusive, implica más que políticas públicas dirigidas a atenuar los efectos de graves abusos de derechos humanos.

Al reafirmar el estatus de los derechos de los ciudadanos (para generar reconocimiento) y fortalecer las instituciones (para generar confianza), se logra la consolidación del Estado de derecho. Entonces, el argumento es que las medidas de justicia transicional pueden ser vistas como intervenciones que tienen como fines “mediatos” la promoción del reconocimiento a las víctimas y la confianza cívica, y el fortalecimiento de la norma de derecho democrática como fin “último”.<sup>221</sup>

Por su parte, la justicia transicional en el ámbito penal no está justificada en el lenguaje de responsabilidad y retribución individual, sino que contiene una racionalización política explícita. Paralelamente, las reparaciones reconcilian la finalidad correctiva con la distributiva u otros objetivos relacionados con las exigencias políticas del momento.<sup>222</sup> Al revisar las respuestas legales de los Estados al enfrentar el legado de abusos de derechos humanos, la justicia transicional ejerce un método interpretativo, histórico y comparativo

---

<sup>219</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en P. DE GREIFF (ed.), *Handbook of reparations*, cit., p.460.

<sup>220</sup> Vid. Ibid., pp. 451-477.

<sup>221</sup> P. DE GREIFF, “Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la justicia transicional”, *Anuario de Derechos Humanos*, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, núm.7, 2011, p.28.

<sup>222</sup> R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p. 224.



con el propósito de establecer conclusiones relacionadas con lo que aquellas prácticas transmiten acerca de la concepción de la justicia en aquel momento.<sup>223</sup>

En síntesis, queda claro que los mecanismos de justicia transicional inicialmente se diseñaron para compensar esa carencia de justicia presente en regímenes autoritarios y violentos, y para responsabilizar penalmente a los transgresores. Pero como afirma Teitel, actualmente el discurso de la justicia transicional está dirigido a preservar un Estado de derecho mínimo identificado principalmente con la conservación de la paz.<sup>224</sup>

### ***5. Características de la justicia transicional***

La justicia transicional como proceso se puede distinguir por diversos rasgos que determinan su naturaleza. A lo largo de estas líneas se ha ido evidenciando alguno de ellos, pero a continuación se describirán de manera sistemática.

El rasgo primordial de la justicia transicional es que es un proceso fuertemente politizado.<sup>225</sup> Evidentemente, como se ha mencionado anteriormente, la determinación de diseñar e implementar mecanismos de justicia transicional depende de una decisión política interna. El cambio político es inherente a cualquier proceso de transición, al igual que el objetivo de legitimación del Estado.

Las experiencias de justicia transicional revelan que cada nueva democracia debe procurar su propia solución para las demandas de la verdad y justicia. Lo que preocupa a esas naciones no son las grandes abstracciones filosóficas sino, problemas muy contextualizados de reinterpretación histórica y de auto-comprensión colectiva. Aunque no exista una verdad absoluta o una justicia aceptada por todos, existe un margen para conseguir mayor claridad

---

<sup>223</sup> Ibid., p. 213.

<sup>224</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.1.

<sup>225</sup> K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, cit., p.6.

y más solidaridad.<sup>226</sup> Los procesos de transición son un fenómeno de una gran complejidad, en éstos se debe prestar atención a una muy amplia multiplicidad de actores y factores que de alguna manera los determina, dificultando de forma significativa cualquier elaboración normativa sobre los mismos.<sup>227</sup> Cada acto de transición supone una solución ambivalente.<sup>228</sup>

En los contextos transicionales priman las razones políticas y de oportunidad, y en algunos casos éstas no son necesariamente las más encaminadas a impartir justicia. A pesar de esto, aunque los éxitos rotundos de justicia transicional brillen por su ausencia, se ha instalado progresivamente, tanto en círculos académicos como en círculos políticos, una cierta sensación de inevitabilidad de acudir a estos mecanismos cuando se aborda un proceso de transición democrática o cuando se sale de un conflicto lleno de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.<sup>229</sup>

Otro rasgo característico de la justicia transicional es que es parcial y limitada. La parcialidad y la limitación están relacionadas con su condición excepcional en contraste con un proceso de justicia regular, aunque, como se anotará más adelante, en los últimos años esa situación ha cambiado. El periodo de tiempo en el cual se lleva a cabo la transición puede variar de acuerdo con las circunstancias de cada caso y puede atravesar diferentes etapas. Mientras la estructura de la justicia transicional enfrenta problemas similares a la justicia ordinaria, es distinta a ésta debido a que tiene que tratar con serios abusos a larga escala cometidos o tolerados por el pasado<sup>230</sup>.

---

<sup>226</sup> A. BARAHONA DE BRITO et al, *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, cit., p.27.

<sup>227</sup> J. CHINCHÓN, *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia Iberoamericana*, cit., p.273.

<sup>228</sup> R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p. 229.

<sup>229</sup> F. GÓMEZ ISA, “Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso de Colombia” en M. REED y M. RIVERA (ed.), *Transiciones en contienda: Disyuntivas de la justicia transicional en Colombia desde la experiencia comparada*. Centro Internacional para la Justicia Transicional, Bogotá, 2010, p.189.

<sup>230</sup> K. AMBOS, *The Legal Framework of Transitional Justice*, estudio preparado para la conferencia internacional „Building a Future on Peace and Justice”, Nuremberg, 25 - 27 junio, 2007, p.57. Disponible en: [http://www.peace-justice-conference.info/download/Ambos\\_NurembergStudy\\_070512.pdf](http://www.peace-justice-conference.info/download/Ambos_NurembergStudy_070512.pdf)

En cuanto a los procesos judiciales dentro del escenario transicional, cabe mencionar también ciertas particularidades sobre sus limitaciones. Después de una dictadura o un gobierno represivo, la rama judicial refleja, en la mayoría de los casos, caos o confusión. Se encuentran jueces corruptos, políticamente comprometidos, demasiado cautelosos, con poca experiencia o con falta de recursos. El número de perpetradores puede llegar a ser abrumador, e inclusive en aquellas raras ocasiones que el aparato judicial funcione lo suficientemente bien para esperar juicios justos y no se hayan concedido amnistías, solo un número muy pequeño del total es probable que sea enjuiciado.<sup>231</sup>

Surge entonces el tema de selectividad, el cual es inevitable porque no será posible enjuiciar a la totalidad de los transgresores. La selectividad en sí misma no hace el proceso injusto, a menos que la selección sea deliberadamente discriminatoria, desequilibrada, vengativa o irracional. Al contrario, una decisión basada en un criterio razonable y justo es totalmente legítima. Para sostener la legitimidad de un proceso judicial de este tipo, no basta con que la selección sea justa, sino que también sea comprensible para el público.<sup>232</sup> Los juicios en las cortes internacionales igualmente son limitados, si se compara la evidencia de tribunales penales como el de Ruanda y el de la antigua Yugoslavia, solo pocas personas fueron acusadas.

Otra característica de la justicia transicional, que se trató tangencialmente con el debate de la justicia versus verdad, es el enfoque *backward looking – forward looking*, es decir la perspectiva hacia el pasado o hacia el futuro. Algunos autores consideran que la justicia transicional está enfocada simultáneamente hacia el pasado y hacia el futuro. Lars Waldorf es partidario de éste enfoque, sostiene que se tratan los abusos pasados con el fin de prevenir violaciones futuras; como tal, esto involucra decisiones complejas entre castigar y perdonar, rendición de cuentas y reconciliación, recordar y olvidar.<sup>233</sup> Por su parte, De Greiff considera que contrario a lo que muchos piensan, especialmente los que no son

---

<sup>231</sup> P. HAYNER, *Unspeakable Truths, facing the challenge of truth commissions*, cit., p.12.

<sup>232</sup> J. MÉNDEZ, “In defense of transitional justice”, en J. MCADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, cit., p. 17.

<sup>233</sup> L. WALDORF. “Linking DDR and transitional justice” en A. CUTTER PATEL et al. (ed.), *Disarming the past: transitional justice and ex-combatants*, cit., p.22.

expertos en el tema, la justicia transicional no está orientada al pasado, ni es un asunto de las víctimas solamente; de hecho, cuando logra alguno de sus objetivos, lo hace en virtud de su potencial de ratificar normas básicas, y de ahí su potencial contribución a la seguridad y el desarrollo.<sup>234</sup> Existe una tensión entre el Estado de derecho en los procesos de transición y la orientación de mirar hacia el pasado y hacia el futuro simultáneamente, así como entre un Estado de derecho pasivo y uno dinámico. El Estado de derecho, en última instancia, es contingente; más que basarse en un orden legal fijo y establecido, sirve para mediar el cambio normativo en la justicia que caracteriza estos periodos extraordinarios.<sup>235</sup>

La justicia transicional es un campo con trayectoria ascendente, en un tiempo relativamente corto ha dominado los debates sobre democratización, protección de derechos humanos y reconstrucción del Estado después de un conflicto.<sup>236</sup> La normalización de la justicia transicional se sitúa en el escenario reciente como uno de sus rasgos más importantes, independientemente de las variaciones en la forma de implementación de sus diferentes componentes en diferentes países, ésta se convirtió en parte del paquete de medidas predeciblemente discutidas y frecuentemente adoptadas en situaciones de transición.<sup>237</sup>

La justicia de transición ha surgido históricamente de contextos excepcionales para convertirse en un proceso común, institucionalizado y firmemente establecido. Lo que era visto como un fenómeno legal asociado a condiciones post-conflicto extraordinarias, ahora parece ser cada vez más un proceso en tiempos normales. La guerra en tiempo de paz, la fragmentación política, Estados débiles, guerras pequeñas y el conflicto permanente, todas son condiciones políticas contemporáneas.<sup>238</sup> Los acontecimientos contemporáneos han propiciado el intento de lograr una normalización de la justicia transicional, llevando en última instancia a consecuencias ambivalentes. En su condición de una teoría asociada al cambio político permanente, la justicia transicional se relaciona con una politización más

---

<sup>234</sup> P. DE GREIFF, “Transitional justice, security and development”, cit., p.2.

<sup>235</sup> R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p. 11.

<sup>236</sup> K. MCEVOY, “Letting go of legalism: developing a thicker version of transitional justice” en K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, cit., p.15.

<sup>237</sup> P. DE GREIFF, “Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional”, cit., p.19.

<sup>238</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.22.

alta del derecho y también con un cierto grado de concesiones en los estándares del estado de derecho.<sup>239</sup>

Entonces, ¿la justicia transicional debería generalizarse a todo tipo de circunstancias? Algunos autores afirman que la respuesta de la justicia transicional no debería ser generalizada como el estándar para responder a las violaciones de derechos humanos. La normalización de la justicia transicional hará que se pierda el mensaje transformador, el creer en la posibilidad de evitar la trágica repetición del pasado en un Estado liberal.<sup>240</sup> La convicción generalizada sobre las ventajas de la aplicación de los conceptos y los mecanismos de justicia transicional ha llevado a intentar expandirlos a contextos que, en sentido estricto, no son transicionales. Existe cada vez más presión para ampliar el espectro de aplicación de la justicia transicional, lo que puede acabar afectando tanto a cuestiones básicas conceptuales como a la propia operatividad de las medidas de justicia transicional.<sup>241</sup>

Otra razón que ha contribuido a que la justicia transicional se haya ampliado de forma significativa es que sus mecanismos sean utilizados en contextos, no solamente en contextos post-régimen autoritario, sino en post-conflictos y conflictos vigentes como el caso de Colombia. Con el apoyo de la cooperación internacional, de donantes que quieren hacer algo en situaciones post-conflicto, bajo el reclamo de víctimas que piden que sus inmensas necesidades sean atendidas, y con la participación de activistas que circulan globalmente, la política de justicia transicional es transferida de un contexto a otro.<sup>242</sup>

Por su parte, la expansión del discurso de la justicia transicional también afecta a transiciones democráticas en las que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional.<sup>243</sup> La expansión del discurso de la justicia transicional para incluir el

---

<sup>239</sup> Ibid.

<sup>240</sup> R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p.228.

<sup>241</sup> F. GÓMEZ ISA, “Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso de Colombia” en M. REED y M. RIVERA (ed.), *Transiciones en contienda: Disyuntivas de la justicia transicional en Colombia desde la experiencia comparada*, cit., p.190.

<sup>242</sup> P. DE GREIFF, “Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional”, cit., p.26.

<sup>243</sup> J. ELSTER, *Rendición de cuentas, la justicia transicional en perspectiva histórica*, cit., p.80.

problema del terrorismo se torna problemática por lo inadecuado de las analogías entre terrorismo y conflicto armado o crisis política. La justicia transicional tiende a mirar hacia atrás para responder ante el último conflicto y no se adapta fácilmente para ser usada como una plantilla para garantizar seguridad en el futuro.<sup>244</sup>

En contraste a todo lo anterior, también hay posiciones que consideran que a la normalización de los mecanismos de la justicia transicional se le puede reconocer aspectos positivos. De Greiff sostiene que existen dos, la primera se refiere a la incorporación de los mecanismos de justicia transicional en la agenda de las organizaciones tradicionales de derechos humanos y la segunda, la incorporación de estas medidas en la arquitectura de protección de derechos humanos a nivel internacional.<sup>245</sup> Es evidente que organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, han incluido los mecanismos de justicia transicional como alternativas de protección de derechos humanos y los han adoptado como campo de trabajo. Se ha ampliado la esfera de los derechos para incorporar de manera efectiva algunos derechos de las víctimas tales como los derechos a la verdad y a la reparación. Por su parte, en cuanto a la adopción de mecanismos de justicia transicional en la normativa internacional de derechos humanos, el asunto es más que obvio.

El caso del Estatuto de Roma se debe estudiar con detenimiento, ya que la participación y reparación de las víctimas dentro del proceso tramitado ante la CPI constituye un hito en el desarrollo del derecho penal internacional. La posición procesal de las víctimas en las actuaciones ante la CPI ha sido considerada como uno de los avances más significativos del Estatuto de Roma<sup>246</sup>, instrumento que ha marcado un significativo inicio desde la simple conceptualización de los derechos de las víctimas en términos de reparación.

---

<sup>244</sup> R. TEITEL, “Genealogía de la justicia transicional”, cit., p.25.

<sup>245</sup> P. DE GREIFF, “Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional”, cit., p.20.

<sup>246</sup> Vid. H. OLÁSULO, “Cuestiones procesales y procedimentales sobre la posición de las víctimas en las actuaciones ante la Corte Penal Internacional”, en K. AMBOS y M. DE HOYOS SANCHO (ed.), *Cuestiones esenciales en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional*, Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2010, p.75. S. FERNÁNDEZ DE GURMENDI, “Definition of victims and general principles”, en R. LEE, *The International Criminal Court: elements of crimes and rules of procedure and evidence*, Transnational Publishers, New York, 2001, p.427.

La Corte Penal Internacional debe establecer los principios relacionados con la reparación a las víctimas (o sus causahabientes), los cuales deberán incluir restitución, compensación y rehabilitación. La Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas, todo esto indicando los principios en que se basan.<sup>247</sup> Desafortunadamente tales principios no han sido todavía establecidos, durante los primeros años operativos de la Corte un comité de jueces trabajó en un conjunto de principios, pero el proyecto fue abandonado.<sup>248</sup>

Lo menos que puede decirse, es que la justicia transicional ha participado en lo que retrospectivamente se verá como una época de expansión de los derechos humanos.<sup>249</sup> Y esta expansión de la justicia transicional y de los derechos humanos, demuestra una característica adicional de la justicia transicional que Gómez Isa denomina su “versatilidad”.<sup>250</sup> Es así, que el escenario de la justicia transicional no permanece estático, sino que evoluciona debido a las condiciones tanto internas como externas. Dicha evolución ayuda a explicar qué tanto las herramientas conceptuales básicas como los mecanismos de aplicación de la justicia transicional se han ido desarrollando en la medida que se aplican a nuevos casos y en nuevos contextos. Las normas y los mecanismos de justicia transicional no pueden ser absolutamente uniformes y monolíticos, sino suficientemente versátiles y flexibles para adaptarse a las diferentes, complejas y variadas circunstancias en las que necesariamente tienen que operar.<sup>251</sup>

Un aspecto que no se puede pasar por alto al analizar el tema de la justicia transicional es que a menudo revelar la verdad, buscar la justicia o compensar a las víctimas son medidas en sí mismas insuficientes para garantizar la integración política cuando los grupos

---

<sup>247</sup> Vid. CORTE PENAL INTERNACIONAL. Estatuto de Roma.. A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 75(1), p.44.

<sup>248</sup> Vid. W. SCHABAS, *The International Criminal Court, a commentary on the Rome Statute*, Oxford University Press, New York, 2010, p.881.

<sup>249</sup> P. DE GREIFF, “Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la justicia transicional”, cit., p.21.

<sup>250</sup> Vid. F. GÓMEZ ISA, “Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso de Colombia” en M. REED y M. RIVERA (ed.), *Transiciones en contienda: Disyuntivas de la justicia transicional en Colombia desde la experiencia comparada*.

<sup>251</sup> Ibid., p.189.

afectados se encuentran en posiciones de exclusión económica y social.<sup>252</sup> Se ha planteado que los que trabajan por la paz a nivel nacional e internacional, han fallado en reconocer y responder a las complejidades de restablecer las multifacéticas dimensiones de la justicia en sociedades de bajos ingresos y destrozadas por la guerra. El enfoque primordial en reparar las injusticias directas en contra de individuos, en forma de abusos de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tiende a dejar sin tratar las injusticias que causaron el conflicto.<sup>253</sup> La clave aquí es aclarar en qué forma la justicia transicional puede entrelazarse con otros campos de intervención como la seguridad y el desarrollo, y no en la convicción de que la justicia transicional, por sí sola, responde a estas necesidades.<sup>254</sup>

En definitiva, parece que ninguna democracia es capaz de realizar una clausura total de un pasado represivo; el tema está siempre presente y puede resurgir exigiendo nuevas investigaciones y nuevas reparaciones o castigos muchos años después de haber finalizado el régimen opresor.<sup>255</sup> Asimismo, la experiencia de justicia transicional enseña que quienes han diseñado y pilotado los procesos de transición han sido actores políticos con una agenda y con intereses que, en todo caso, querían preservar y proteger, y con una estructura de poder que apoyaba sus pretensiones.<sup>256</sup> Desafortunadamente, aunque se cuenta con estándares jurídicos cada vez más consolidados para implementar los mecanismos de justicia transicional, tanto a nivel internacional como en los regímenes en transición, el uso político y estratégico del discurso de la justicia transicional con el objetivo de legitimar el logro de sus objetivos particulares se puede percibir, en menor o mayor medida, en los procesos de transición.

---

<sup>252</sup> A. BARAHONA DE BRITO et al, *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, cit., p.449.

<sup>253</sup> P. LUNDY y M. MCGOVERN, “The role of community in participatory transitional justice” en K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below: grassroots activism and the struggle for change*, cit., p.102.

<sup>254</sup> P. DE GREIFF, “Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la justicia transicional”, cit., p.38.

<sup>255</sup> A. BARAHONA DE BRITO et al, *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, cit., p.438.

<sup>256</sup> F. GÓMEZ ISA, “Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso de Colombia” en M. REED y M. RIVERA (ed.), *Transiciones en contienda: Disyuntivas de la justicia transicional en Colombia desde la experiencia comparada*, cit., p.190.



Todos los estudios comparados sociedades en transición se centran en políticas públicas limitadas en el tiempo, como el reconocimiento oficial de las violaciones o del sufrimiento de las víctimas; estos dos procedimientos son discursivos y catárticos, alivian a la sociedad mediante una terapia que airea los traumas sociales del pasado y ofrece, por lo menos, un cierto grado de seguridad de que el futuro puede ser mejor para todos.<sup>257</sup>

## 6. Los mecanismos de la justicia transicional

El fin de los regímenes dictatoriales y la represión política involucra un proceso de transición multidimensional. Este conlleva el desarrollo de un aparato institucional democrático, así como mecanismos para enfrentar los crímenes del pasado y la represión del Estado. La tarea de ajustar cuentas con el pasado converge con la necesidad de construir un futuro distinto.<sup>258</sup> La idea básica es que el poder público, a través de procesos penales, reparaciones y comisiones de investigación, puedan localizar en el mapa de la comprensión humana, disuadir futuras violaciones de la dignidad humana, y asegurar que las ambiciones de los agentes de violencia no tengan éxito.<sup>259</sup>

Como se mencionó al principio de este documento, la justicia transicional consiste en procesos y mecanismos judiciales y extrajudiciales enfocados a enfrentar el legado de abusos cometidos en el pasado y garantizar la verdad, la justicia y a la reparación. A lo largo de los últimos años se llegado a cierto consenso sobre cuáles serían estos mecanismos y para efectos de esta tesina, se tendrán en cuenta como principales la búsqueda de la verdad, la justicia penal, las reparaciones<sup>260</sup> y las reformas institucionales.

---

<sup>257</sup> A. BARAHONA DE BRITO et al, *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, cit., p.26.

<sup>258</sup> E. JELIN, "Public memorialization in perspective: truth, justice and memory past repression in southern cone of South America", *International Journal of Transitional Justice*, vol. 1, issue 1, 2007, p.138.

<sup>259</sup> M. MINOW, "The hope for healing: what can truth commissions do?", en R. ROTBERG y D. THOMPSON (ed.), *Truth v. justice*, Princeton University Press, New Jersey, 2000, p.235.

<sup>260</sup> Por efectos de distribución y enfoque, el tema de las reparaciones se desarrollará de manera independiente.

## 6.1 Verdad

En la fase de búsqueda de la verdad se debe revelar toda información fidedigna acerca de los crímenes cometidos: la naturaleza y el alcance de los crímenes, la identidad de las víctimas y de los perpetradores. Además de revelar esta información, los defensores de derechos humanos buscan también que haya un reconocimiento. No es suficiente que se conozca la verdad, sino que también un ente oficial debe reconocer la responsabilidad del Estado.<sup>261</sup> El pasado debe ser esclarecido, los perpetradores deben ser castigados, las víctimas reconocidas y el legado debe ser transmitido a las futuras generaciones. Para Elizabeth Jelin, en este proceso de búsqueda de la verdad, las políticas de reconocimiento y memoria suponen un esfuerzo conjunto de las dimensiones institucionales, simbólicas y subjetivas.<sup>262</sup>

En cuanto a la verdad como derecho, este ha ido evolucionado desde una progresiva jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,<sup>263</sup> hasta ser establecido como “derecho inalienable a la verdad” en el principio 2 del informe de actualización del conjunto de principios para la lucha contra la impunidad de Diane Orentlicher presentado a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2005. En este documento se determina que “cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.<sup>264</sup> Además de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una

---

<sup>261</sup> A. NEIER, “Rethinking truth, justice and guilt after Bosnia and Rwanda”, en C. HESSE y R. POST (ed.), *Human rights in political transitions: Gettysburg to Bosnia*, cit., p.39.

<sup>262</sup> E. JELIN, “Public memorialization in perspective: truth, justice and memory past repression in southern cone of South America”, cit., p.138.

<sup>263</sup> Vid. el voto razonado del juez Cançado Trindade que hace una buena exposición sobre la evolución del derecho a la verdad, así como de las reparaciones. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138.

<sup>264</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Impunidad, Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, p.7.

dimensión individual, cuyos titulares son las víctimas y sus familias. El conocer las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y dónde se encuentra el cuerpo de la víctima, en caso de desaparición forzada, es de carácter imprescriptible.<sup>265</sup> Las personas, afectadas por un crimen de esta magnitud tienen derecho a saber, aunque haya transcurrido mucho tiempo, toda la información referente al hecho.

El conocer la verdad tiene una tendencia preventiva, que hace posible evitar la repetición de hechos similares. Facilitar la denuncia pública por parte de quienes anteriormente no podían hablar construye una ética de libertad de expresión, una herramienta de resistencia utilizada para confrontar la evasión o negación de la verdad.<sup>266</sup> Escuchar y contrastar el testimonio de las víctimas constituyen el primer paso para la restitución de su condición de su ciudadano, proceso que debe seguir con la sanción de los culpables, la reparación a las víctimas, y con la construcción de una historia inclusiva que permita entender y aceptar lo sucedido. La verdad es un prerequisite para exigir al Estado una respuesta en cuanto a la justicia, la reparación y las reformas. Como lo plantea Gómez Isa, “solo cuando las víctimas conozcan toda la verdad, y cuando se haya hecho justicia y se hayan reparado los daños causados, en la medida en que se pueda, podrá comenzar un verdadero proceso de perdón y de reconciliación nacional”.<sup>267</sup>

#### 6.1.1 Comisiones de la verdad

Después del fin de un régimen militar, de un gobierno represivo o una guerra civil, los países enfrentan las cuestiones de justicia y rendición de cuentas en un ámbito amplio dentro del contexto político. Está claro, que a partir de la transición surgen muchas necesidades que no pueden ser satisfechas solo por la acción de las cortes, en el caso hipotético que el sistema judicial funcionara bien y no existieran dificultades para procesar

---

<sup>265</sup> G. CANO y K. NINAQUISPE, “El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de la justicia”, en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, International Center for Transitional Justice, Perú, 2006, p.75.

<sup>266</sup> L.LAPLANTE, “The Peruvian truth commission’s historical memory Project: empowering truth-tellers to confront truth deniers”, *Journal of Human Rights*, vol.6, issue 4, 2007, p.441.

<sup>267</sup> F. GÓMEZ ISA, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” en F. GÓMEZ ISA (dir.), *El derecho a la memoria*, Departamento para los derechos humanos, el empleo y la inserción social de la diputación foral de Gipuzkoa, Bilbao, 2006, p.38.

a los culpables. Las víctimas y la sociedad en su conjunto necesitan saber lo que sucedió, por esto el esclarecimiento de la verdad, como se ha expuesto anteriormente, es fundamental en el proceso transicional y son las comisiones de la verdad el mecanismo que se ha casi institucionalizado a la hora de responder a esta necesidad.

Las comisiones de la verdad van más allá de simplemente encontrar y exponer la verdad. En muchos contextos, estas se han convertido en la iniciativa gubernamental más importante para responder a los abusos del pasado y, como se había comentado anteriormente, para convertirse en un punto de partida para el desarrollo de otras medidas de rendición de cuentas, reparaciones y reformas.<sup>268</sup> Establecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos y los patrones de violencia son aspectos centrales en el proceso de justicia transicional. Sin embargo, esclarecer la verdad es una tarea compleja y ambiciosa en la cual intervienen diferentes factores como la concepción de lo que constituye una verdad social; el mandato, la metodología y los recursos de la institución que está llevando a cabo el trabajo de investigar los hechos y la receptividad social y política que tenga el proceso.<sup>269</sup>

Para Naciones Unidas, las comisiones de la verdad “son órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años. Se ocupan en particular de las víctimas y concluyen su labor con la presentación de un informe final sobre las conclusiones de su investigación y sus recomendaciones”.<sup>270</sup> En este informe presentado por el Secretario General al Consejo de Seguridad en el 2004, igualmente se establece que las comisiones de la verdad pueden ser muy valiosas para las sociedades post-conflicto ya que al constatar infracciones de los derechos humanos puede fomentar la rendición de cuentas y los diversos mecanismos utilizados para lograrlo.

---

<sup>268</sup> P. HAYNER, *Unspeakable truths: transitional justice and the challenge of truth commissions*, second edition, Routledge, 2010, p.20.

<sup>269</sup> A. CHAPMAN, “Truth finding in the transitional justice process” en H. VAN DER MERWE et al. (ed.), *Assessing the impact of transitional justice: challenges for empirical research*, United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 2009, p.91.

<sup>270</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies* cit., p.20.

Adicionalmente, estos organismos pueden servir de plataforma pública para que las víctimas cuenten sus historias y de esta forma se facilite un debate público acerca de cómo aceptar el pasado.<sup>271</sup>

Para Priscila Hayner, gran experta en el tema de las comisiones de la verdad, el primer y más claro objetivo de éstas es la investigación: establecer un archivo preciso y fiel acerca del pasado, esclarecer los hechos, romper el silencio y superar la negación de un período polémico y doloroso de la historia.<sup>272</sup> Asimismo, las comisiones tienen una gran capacidad para recomendar las reformas legales e institucionales necesarias para evitar la repetición de la violencia y los abusos a los derechos humanos.<sup>273</sup> Algunas comisiones de la verdad se concentran en dar cuenta sobre los hechos pasados, algunas se enfocan en la reconciliación, mientras otras pueden investigar y conducir estas investigaciones hacia la judicialización de los casos de violaciones de derechos humanos. El poder de una comisión de la verdad reside en su capacidad para producir una versión oficial de los hechos, una historia oficial de un período y una sociedad en particular.<sup>274</sup>

Para el profesor Douglass Cassel “Las comisiones de la verdad son herramientas útiles que se pueden utilizar o no según el grado de conciencia de la sociedad y de su voluntad de no repetir la historia. De hecho, contribuyen a armar esa conciencia, porque difícilmente una sociedad llega a la conciencia de la injusticia sin que se conozca cómo es que ella se produjo. Ahora bien: una comisión de la verdad no garantiza por sí sola el cambio.”<sup>275</sup>

Finalmente, las comisiones de la verdad se han convertido en un mecanismo clave en los procesos de justicia transicional con el propósito de garantizar la transición hacia la paz, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, algunos estudios

---

<sup>271</sup> Ibid.

<sup>272</sup> P. HAYNER, *Unspeakable truths: transitional justice and the challenge of truth commissions*, cit., p.20.

<sup>273</sup> A. CHAPMAN, “Truth finding in the transitional justice process” en H. VAN DER MERWE et al. (ed.), *Assessing the impact of transitional justice: challenges for empirical research*, cit., p.93.

<sup>274</sup> J. GARCÍA-GODOS, “Victim reparations in the Peruvian truth commission and the challenge of historical interpretation”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol.2, issue 1, 2008, p.63.

<sup>275</sup> D. CASSEL, “Por qué y para qué una comisión de la verdad?” *Revista Ideele*, No.135, Febrero, 2001.

Disponible en: <http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/135/pag36.htm>

han concluido que lo que determina que el proceso de transición iniciado por una comisión de la verdad sea exitoso o no es lo que sucede luego de la entrega del informe final.<sup>276</sup>

### 6.1.2 Memoria

En cuanto un concepto de memoria, cabe resaltar la definición que hace Jelin al respecto, ella plantea que la memoria se refiere a las formas en la cuales las personas construyen sentido o significado del pasado y como ellos relacionan este pasado con su presente mediante el acto de recordar. Igualmente, el preguntarse por el pasado es un proceso que siempre involucra subjetividades, es siempre activo y construido socialmente a través de la interacción y el dialogo.<sup>277</sup> Entretanto, otro concepto para tener en cuenta es el que desarrolla Mark Osiel sobre la memoria colectiva, el cual consiste en las historias que una sociedad cuenta acerca de hechos trascendentes en su historia, los hechos que afectaron de manera más profunda la vida de sus miembros y que más despertaron sus pasiones por largos períodos.<sup>278</sup>

De acuerdo con lo anterior, la existencia de diferentes interpretaciones del pasado conlleva a que es impensable encontrar una memoria, una visión e interpretación única del pasado compartida por toda una sociedad. Jelin establece que después de períodos de conflicto político y represión, hay una lucha activa acerca del significado; el significado de lo que pasó y el significado mismo de la memoria. En este sentido, la lucha no es de una memoria contra el olvido o el silencio, sino entre las memorias en oposición, cada una de ellas con sus propios silencios y vacíos.<sup>279</sup> Es entonces esta lucha un proceso dialéctico que se vive dentro del proceso del proceso de democratización. Estas luchas se desarrollan en diversos niveles institucionales, simbólicos y subjetivos. Las memorias y el olvido social, el recuerdo o los diferentes tipos de amnesia social (o su manifestación institucional como la

---

<sup>276</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, "Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru", *Human Rights Quarterly*, vol.29, núm.1, 2007, p.228.

<sup>277</sup> E. JELIN, "Public memorialization in perspective: truth, justice and memory past repression in southern cone of South America", cit., p.141.

<sup>278</sup> M. OSIEL, *Mass atrocity, collective memory, and the law*, Transaction Publishers, New Jersey, 1997, p.19.

<sup>279</sup> E. JELIN, "Public memorialization in perspective: truth, justice and memory past repression in southern cone of South America", cit., p.140.

amnistía), son parte integral del proceso de construcción y reconocimiento de identidades colectivas.<sup>280</sup>

Por otra parte, la memoria puede ser utilizada de diferente manera por los distintos actores. Entre las herramientas que los perpetradores de crímenes y violaciones de derechos humanos utilizan para “silenciar” sus delitos ninguno es tan cruelmente eficaz como el tener control sobre la memoria, “la ilegítima potestad de un grupo de poder e influencia que determina lo que una comunidad debe recordar, olvidar o negar como hecho histórico real o relevante para ella.”<sup>281</sup> Mientras las historias oficiales condenan a las víctimas a la invisibilidad y a la insignificancia social y política, la recuperación pública de la memoria intenta devolverles al lugar que les corresponde en la comunidad como personas y ciudadanos.<sup>282</sup> El reconocimiento oficial puede ser tan poderoso porque la negación oficial puede resultar extremadamente dominante.<sup>283</sup>

Para concluir, la memoria del pasado se encuentra en el centro del proyecto de justicia transicional. De hecho, la justicia de transición es en sí un proceso hacedor de memoria, destinado a corregir los errores del pasado así como a definir de qué manera se recuerda el pasado. La justicia transicional busca la movilización de las memorias en varias formas para que éstas se conviertan en herramientas útiles en un presente/futuro caracterizado por la paz, el Estado de derecho y la democracia.<sup>284</sup> En el plano colectivo, el desafío es superar las repeticiones, superar los olvidos y los abusos políticos, tomar distancia y al mismo tiempo promover el debate y la reflexión activa sobre ese pasado y su sentido para el futuro.<sup>285</sup>

---

<sup>280</sup> Ibid.

<sup>281</sup> G. GAMIO, *Tiempo de memoria: reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional*, Instituto de democracia y derechos humanos (IDEHPUCP), Instituto Bartolomé de las Casas, Centro de Estudios y Publicaciones (CEP), Lima, 2009, p.106.

<sup>282</sup> G. GAMIO, “Justicia transicional y ética de la memoria”, en *Derecho y Sociedad*, año XIX, No.30, Lima, 2008, p. 218.

<sup>283</sup> P. HAYNER, *Unspeakable truths: transitional justice and the challenge of truth commissions*, cit., p.21.

<sup>284</sup> J. PAULSON, “Commentary on memory, ritual and apology” en N. PALMER et al. (ed.), *Critical perspectives in transitional justice*, Oxford Transitional Justice Research, Intersentia, Cambridge, 2012, p. 393.

<sup>285</sup> E. JELIN, *Los trabajos de la memoria*, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2002, p.16.

Como lo expresó Diego García-Sayán en el marco de creación de la comisión de la verdad y reconciliación del Perú, “la justicia sin verdad es una burda falsificación jurídica que juzga y condena, o absuelve, sin bases reales y concretas. De manera similar, esclarecer los hechos y no ofrecer justicia a las víctimas es una amputación vergonzosa de los derechos de quienes no produjeron, ni alentaron hechos condenables.”<sup>286</sup>

## 6.2 Administración de justicia como mecanismo de justicia transicional

La noción de justicia es extremadamente poderosa e inspiradora, abarca la noción de poner las cosas en su lugar y restablecer el equilibrio. Con frecuencia, también es ilusoria y evasiva, especialmente para las víctimas de atrocidades masivas.<sup>287</sup> El castigo domina nuestra percepción sobre la justicia transicional. Esta forma de derecho es emblemática cuando se refiere a la rendición de cuentas y el Estado de derecho. El debate sobre la justicia penal en el contexto de transición está marcado por dilemas trascendentales: ¿castigar u otorgar amnistías? Castigar es un ejercicio de mirar hacia atrás en cuanto a la retribución o ¿es una expresión de la renovación del Estado de derecho?<sup>288</sup>

Evidentemente el elemento de la justicia en la justicia transicional debe ser entendido de manera amplia. Como un ideal de justicia de rendición de cuentas e imparcialidad en la protección y reivindicación de derechos, y la prevención y castigo de los crímenes. Mientras su administración supone mecanismos judiciales formales, los mecanismos de resolución de conflictos son igualmente relevantes.<sup>289</sup>

El daño a gran escala característico de un escenario post-conflicto, el debilitamiento de las instituciones legales y sociales, y la destrucción de la solidaridad social y la confianza cívica indican la necesidad de innovaciones en la administración de justicia. Así, las

---

<sup>286</sup>D. GARCÍA-SAYÁN, “Por qué y para qué una comisión de la verdad?” *Revista Ideele*, No.135, Febrero, 2001. Disponible en: <http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/135/pag36.htm>

<sup>287</sup> H. VAN DER MERWE, “Delivering justice during transition: research challenges” en H. VAN DER MERWE et al. (ed.), *Assessing the impact of transitional justice: challenges for empirical research*, United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 2009, p.115.

<sup>288</sup>R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p.27.

<sup>289</sup> K. AMBOS, *The Legal Framework of Transitional Justice*, studio preparado para la conferencia internacional „Building a Future on Peace and Justice”, cit., p.11.



medidas judiciales y legales innovadoras, conocidas como de justicia transicional, buscan reordenar las sociedades con normas consecuentes con el Estado de derecho, el respeto por los derechos humanos y una democracia consolidada.<sup>290</sup>

La justicia transicional es una justicia “excepcional”. Para Elster, los requisitos de la justicia legal (que las leyes deben estar libres de ambigüedad; que el poder judicial debe estar aislado de las otras ramas del gobierno; los jueces y los jurados deben ser imparciales en su interpretación de la ley y que debe acogerse a los principios del debido proceso) se violan sistemáticamente en la justicia transicional.<sup>291</sup> No por estas razones deja de ser válida la justicia dentro del contexto de transición, sino que debe adaptarse, en su medida, a circunstancias particulares de post-conflicto o posterior a regímenes autoritarios. La búsqueda de rendición de cuentas después de un conflicto está centrada en la consolidación democrática. Generalmente se teme que, a menos que el régimen sucesor haga esfuerzos creíbles para llevar a la justicia a aquellos responsables por las atrocidades cometidas, el déficit de legitimidad resultante después del conflicto socava el respeto por el Estado de derecho y la autoridad política de las nuevas, o reformadas, instituciones democráticas, con consecuencias fatales, en algunos casos, para la estabilidad a largo plazo.<sup>292</sup>

En cuanto a la justicia como derecho, éste tiene un amplio reconocimiento en el escenario jurídico internacional. Este derecho supone “que los Estados tienen el deber de crear el entramado judicial necesario para la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos casos de violaciones de los derechos humanos; y que el derecho a la justicia exige que los Estados extremen medidas para evitar la impunidad ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”.<sup>293</sup>

---

<sup>290</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.235.

<sup>291</sup> Vid. J. ELSTER, *Rendición de cuentas, la justicia transicional en perspectiva histórica*, Katz Editores, Buenos Aires, 2006, Cap. 4, págs.99 -160.

<sup>292</sup> A. DU BOIS-PEDAIN, “Post-conflict accountability and the demands of justice: can conditional amnesties take the place of criminal prosecutions?” en N. PALMER et al. (ed.), *Critical perspectives in transitional justice*, Oxford Transitional Justice Research, Intersentia, Cambridge, 2012, p. 459.

<sup>293</sup> F. GÓMEZ ISA, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” en F. GÓMEZ ISA (dir.), *El derecho a la memoria*, cit., p.44.

La impunidad tiene efectos devastadores tanto para las víctimas de las violaciones como para el desarrollo del proceso de justicia transicional. La impunidad tal y como la entiende la Corte Interamericana de derechos humanos es “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”<sup>294</sup>.

Por el motivo anterior, una vez son identificados los responsables de las violaciones, el Estado se encuentra en la obligación de juzgarlos, y si así resulta, de condenarlos a una pena proporcional a la gravedad de los hechos. El conceder una amnistía debilitaría el orden social y jurídico que debe ser protegido por el Estado de derecho y se crearía una cultura de la impunidad.<sup>295</sup> Consecuentemente, el Poder Judicial tiene un papel primordial que desempeñar en la transición democrática. Posterior a un período de abusos, es fundamental su función de control judicial y contrapeso democrático, ya que los regímenes opresores se caracterizan por poderes ejecutivos sin control y con gran indiferencia frente a los derechos de las víctimas. La garantía de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos es decisiva en la reconstrucción de las instituciones democráticas.<sup>296</sup>

### 6.2.1 Justicia penal

La justicia penal tiene un valor muy relevante en las sociedades en transición; no solamente por razones como la retribución, disuasión, fortalecimiento de la legalidad, o revalorización de las víctimas; sino también por tener un valor agregado en términos de consolidación democrática, especialmente, en “el afianzamiento del Poder Judicial como órgano de poder

---

<sup>294</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102, párr.143.

<sup>295</sup> K. AMBOS, “El marco jurídico de la justicia de transición” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, cit., p.39.

<sup>296</sup> L. MAGARRELL y L. FILIPPINI “La Justicia penal y la verdad en la transición democrática” en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit., p.39.

contramayoritario, en la construcción de la verdad histórica, o en el fortalecimiento de ideales colectivos”.<sup>297</sup>

En cuanto a los procesos penales, aunque la obligación de enjuiciar y castigar las violaciones graves de derechos humanos y del DIH no es nueva, ha sido solamente en las últimas dos décadas que se han hecho esfuerzos serios y sistemáticos para cumplir con esta obligación.<sup>298</sup> Hay que resaltar entonces, la tendencia del derecho internacional a reclamar la persecución penal como instrumento para el fortalecimiento de la democracia. Casos como Barrios Altos<sup>299</sup> de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han marcado la pauta en el hemisferio americano, de la misma forma que los tribunales especiales ad hoc e híbridos, y la Corte Penal Internacional guían el sistema universal.<sup>300</sup>

Para Naciones Unidas, la credibilidad y legitimidad de los procesos judiciales requieren estos sean conducidos de una forma objetiva y sin discriminación, sin importar quién es el presunto perpetrador. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de ejercer jurisdicción sobre estos delitos, por lo tanto, en relación con los presuntos crímenes cometidos en el contexto del conflicto o del régimen represivo, los programas de justicia transicional buscarán reforzar o desarrollar las capacidades investigativas y procesales nacionales, un sistema judicial efectivo e independiente, una defensa legal adecuada, apoyo y protección a los testigos y a las víctimas, y unas instalaciones penitenciarias humanas.<sup>301</sup> Es esencial que la legislación nacional esté en conformidad con el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos.

Por su parte, Osiel resalta la capacidad que tienen los procesos judiciales de generar resultados particulares en comparación con los que tendría un enjuiciamiento penal

---

<sup>297</sup> Ibid., p.46.

<sup>298</sup> P. DE GREIFF, “Transitional justice, security and development”, cit., p.4.

<sup>299</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Barrios Altos Vs. Perú*, Fondo, Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.

<sup>300</sup> L. MAGARRELL y L. FILIPPINI “La Justicia penal y la verdad en la transición democrática” en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit., p.47.

<sup>301</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, cit., p.7.

habitual. Para el autor, la necesidad de reconocimiento público acerca de cómo ocurrieron hechos tan crueles, es más importante para la democratización que los objetivos del derecho penal tradicional. Es así, porque los juicios cuando son efectivos como eventos públicos, estimulan la discusión de manera que promueven las virtudes liberales de la tolerancia, moderación y respeto civil. Los juicios penales deben ser llevados a cabo con este propósito pedagógico en mente.<sup>302</sup>

Otro aspecto clave a tener en cuenta cuando se hace referencia a la justicia penal en el marco de un período de transición es la complementariedad. Como se mencionó anteriormente, los sistemas de justicia nacionales deben ser el primer recurso en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando estos no tienen la suficiente capacidad o voluntad para procesar a los autores de crímenes internacionales, la comunidad internacional estará en disposición de responder. En este sentido se debe intentar aplicar la estructura del Estatuto de Roma<sup>303</sup>, incluidas las reglas de procedimiento y pruebas, los elementos de los crímenes, la asistencia a los testigos y los asesores sobre reparaciones y género.<sup>304</sup> Generalmente, los tipos de asistencia que se proveen a sistemas judiciales locales son: entrenamiento a funcionarios tales como fiscales, investigadores, guardias penitenciarios y funcionarios de protección a testigos; la transferencia de conocimientos de instituciones especializadas a organismos nacionales; hacer accesible los archivos a autoridades nacionales; proveer soporte técnico y logístico; y generar conciencia sobre la importancia del derecho penal internacional a través de iniciativas locales de divulgación.<sup>305</sup>

Acerca del rol que tienen los grupos de la sociedad civil en el fortalecimiento de las instituciones y el sistema judicial es importante mencionar que la pertenencia que tengan

---

<sup>302</sup> M. OSIEL, “In defense of liberal show trials – Nuremberg and beyond” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, Oxford University Press, New York, 2008, p.704.

<sup>303</sup> La CPI opera de acuerdo al principio de complementariedad establecido en el artículo 17 del estatuto de Roma. Vid. CORTE PENAL INTERNACIONAL. Estatuto de Roma, cit., art. 75(1), p.44.

<sup>304</sup> NACIONES UNIDAS, El estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, New York, 12 de octubre, 2011, p.11.

<sup>305</sup> INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *Meeting summary of the retreat on complementarity after Kampala: the way forward*, cit., p.2.

los actores locales frente al proceso también asegura la sostenibilidad de las iniciativas de fortalecimiento de los sistemas nacionales. Los grupos de la sociedad civil son fundamentales al momento de proveer asistencia a las víctimas y testigos, así como en ejercer presión para lograr reformas legislativas, entre otros.<sup>306</sup>

Por otra parte, existen desafíos específicos para la justicia penal: la debilidad institucional o la demora en el desarrollo de la transición. Los procesos penales llevados a cabo de manera prematura enfrentarán grandes desafíos. Lo más probable es que el sector que gobernó mantendrá el control del sistema judicial, los servicios de la fiscalía y las unidades de investigación policial;<sup>307</sup> las transformaciones que puedan ser hechas en el sector tomarán tiempo, y esto contando con que los grupos de poder del régimen anterior no tengan influencia sobre el nuevo gobierno.

Hay muchas razones por las cuales se judicializan pocos casos de violaciones de derechos humanos en el contexto de transición: el sistema judicial apenas funciona, cuenta con funcionarios corruptos o comprometidos y la falta de evidencia es un problema común. Los sistemas judiciales que tienen pocos recursos no tienen programas de protección a testigos y muchos de ellos temen aportar evidencia. El equipo de la fiscalía pública no tiene habilidades para investigar y presentar casos estructurados, los jueces y fiscales tienen salarios muy bajos, y las cortes operan con pocos recursos físicos y financieros y sin un soporte administrativo básico.<sup>308</sup> Tanto por sus limitaciones, como por sus posibles contribuciones a procesos que no involucren una consecuencia penal, “la justicia criminal en el contexto de una transición a la democracia debe ser evaluada en su relación con los demás mecanismos que han ido tomando forma en la práctica de esta clase de procesos”.<sup>309</sup>

---

<sup>306</sup> Vid. La discusión de los participantes de la reunión acerca de “la complementariedad después de Kampala” organizada por el International Center for Transitional Justice (ICTJ) en noviembre de 2010. En *ibid.*

<sup>307</sup> L. MAGARRELL y L. FILIPPINI “La Justicia penal y la verdad en la transición democrática” en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit. p.49.

<sup>308</sup> P. HAYNER, *Unspeakable Truths, facing the challenge of truth commissions*, cit., p.89.

<sup>309</sup> L. MAGARRELL y L. FILIPPINI “La Justicia penal y la verdad en la transición democrática” en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit.,49.

A pesar de lo anterior, los procesos penales son fundamentales en la justicia de transición porque: poseen la legitimidad para enfrentar el crimen, tienen la obligación de juzgar a los presuntos autores de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y DIH, y porque fortalecen la democracia y la cultura de los derechos humanos.<sup>310</sup>

### 6.3 Reformas institucionales

Reformar las instituciones públicas es una tarea primordial en la transición del autoritarismo o conflicto a la democracia y la paz. Las instituciones públicas que perpetuaron el conflicto o que apoyaron el régimen autoritario necesitan ser transformadas en instituciones que apoyen la transición, mantengan la paz y preserven el Estado de derecho. Las instituciones que violaron los derechos humanos y que fueron partidarios de defender los intereses de unos pocos, necesitan convertirse en instituciones que protejan los derechos humanos, prevengan abusos y que sirvan a la sociedad de manera imparcial. Las instituciones disfuncionales e injustas que generaron miedo, deben convertirse en instituciones justas y eficientes que disfruten de la confianza cívica.<sup>311</sup>

Las reformas institucionales son un componente integral de una política comprensiva de justicia transicional y es una obligación conforme al derecho internacional el responder por graves abusos. Reformar las instituciones no es solo un aspecto crítico para prevenir la repetición de las violaciones de derechos humanos, sino que también permite a las instituciones en los sectores judicial y de seguridad contribuir a que se dé una rendición de cuentas por los abusos del pasado.<sup>312</sup> Por este motivo, en las sociedades que han sufrido

---

<sup>310</sup>T. FORSBERG y T. TEIVAINEN, “Injusticias del pasado en la política mundial: perspectivas de instituciones globales tipo comisiones de la verdad” en CNDDHH, *Memoria y justicia para la inclusión*, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Project Counselling Services, International Center for Transitional Justice, Oxfam GB, Lima, 2005, p.111.

<sup>311</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Rule of law tools for post-conflict states. Vetting an operational framework*, Ginebra, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006, p.3. Disponible en: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawVettingen.pdf>

<sup>312</sup> PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, *Vetting public employees in post-conflict settings: operational guidelines*, Bureau for crisis prevention and recovery, Nueva York, 2006, p.9. Disponible en: <http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-UNDP-Global-Vetting-Operational-Guidelines-2006-English.pdf>

regímenes autoritarios o conflictos armados es necesario que las políticas sociales y reformas institucionales puestas en prácticas tengan en cuenta “la memoria del pasado para el descubrimiento de la verdad, la reparación de la injusticia y la construcción de identidades colectivas”.<sup>313</sup>

Lograr reformas institucionales efectivas y sostenibles es una labor compleja y desafiante. Generalmente, el proceso de descalificación<sup>314</sup> y las reformas de personal son importantes pero no suficientes, éstas necesitan ir acompañadas de reformas más amplias que garanticen el resultado del proceso de descalificación y aseguren la calidad del personal público en el futuro. Entre las medidas claves se encuentran: poner fin a las interferencias inapropiadas de autoridades informales como caudillos, grupos paramilitares; iniciar una cultura de cambio que incluya modificaciones apropiadas acerca del entrenamiento, metodología y contenido de las fuerzas militares; generar un sentido de pertenencia en los empleados de las instituciones públicas; y asegurar la separación de poderes, fortalecer especialmente la independencia del sistema judicial y reforzar la independencia operacional de otras instituciones públicas.<sup>315</sup> Asimismo, se deben contemplar medidas como la creación, o modificación, de procedimientos disciplinarios o de quejas; la reforma o el establecimiento de un marco legal; el desarrollo o la revisión de directrices éticas o códigos de conducta; y la revisión del funcionamiento de sector público en su conjunto y considerar fusiones, disoluciones o creación de nuevas instituciones.<sup>316</sup> Cabe resaltar, que el contenido preciso y el alcance que deban tener estas medidas, dependerán de cada país y sus circunstancias.

---

<sup>313</sup> G. GAMIO, “Justicia transicional y ética de la memoria”, cit., p. 216.

<sup>314</sup> El concepto en inglés se traduce como “vetting”. Otro concepto que se maneja en la doctrina que se dirige hacia el mismo punto y que surge de los procesos de investigación y posterior descalificación de funcionarios que apoyaron los regímenes comunistas en Europa es “Lustration” (que tienen una connotación de purificación).

<sup>315</sup> PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, *Vetting public employees in post-conflict settings: operational guidelines*, cit., p.23

<sup>316</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Rule of law tools for post-conflict states. Vetting an operational framework*, cit., p.4.

### 6.3.1 Descalificación (Vetting)

Conforme al derecho internacional, el Estado tiene una doble obligación legal: en primero lugar, abstenerse de cometer violaciones de derechos humanos, por acción u omisión; y en segundo lugar, garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta última, incluye el deber de prevenir abusos de derechos humanos, y el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias y razonables para lograr este objetivo. El deber de prevenir plantea la pregunta de la presencia en la administración pública de personas involucradas en violaciones graves de derechos humanos.<sup>317</sup>

El objetivo principal de la descalificación es asegurar que los empleados públicos tengan un comportamiento conforme a la ley a través de medidas estructurales que garanticen funcionarios y agentes del Estado respetuosos de los derechos humanos. La descalificación apunta a que personas que han cometido delitos o violaciones graves de derechos humanos no tengan acceso al servicio público o sean removidos de éste.<sup>318</sup>

Una perspectiva interesante en relación con la descalificación es que puede tener fines retributivos y preventivos. El objetivo es retributivo, en la medida en que se busca sancionar al criminal por sus actos retirándolo del cargo en lugar de iniciar un proceso judicial en su contra. Por su parte, la finalidad preventiva consiste en el peligro que éste representa para la transición y para la implementación de las nuevas políticas del gobierno, si continúa ocupando un cargo desde el cual puede obstaculizar esas políticas.<sup>319</sup>

La reforma institucional, con los procesos de descalificación como punto de partida, genera reconocimiento. Esto debido a que “confirma la vigencia de la norma que afirma que los funcionarios del Estado son servidores públicos y que de esto se desprenden reglas que incluyen normas de permanencia en el empleo, de ascensos y de despidos que crean las

---

<sup>317</sup> F. ANDREU-GUZMÁN, “Due process and vetting” en A. MAYER-RIECKH y P. DE GREIFF (ed.), *Justice as prevention. Vetting public employees in transitional societies*, International Center for Transitional Justice, Social Science Research Council, Nueva York., 2007, p.450.

<sup>318</sup> Ibid., p.452.

<sup>319</sup> M. OSIEL, “Respuestas estatales a las atrocidades masivas”. en A. RETTBERG (ed.), *Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional*, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2005, p.54.



condiciones bajo las cuales los ciudadanos pueden relacionarse los unos con los otros y con las autoridades como iguales.”<sup>320</sup> Las descalificaciones hacen entrever que para establecer el Estado de derecho, puede ser necesario no solamente confiar en principios establecidos sino explorar nuevos escenarios. La construcción de nuevas morales, nuevas instituciones y del propio Estado de derecho, no dista del proceso de construcción de una nueva identidad nacional.<sup>321</sup>

En cuanto al contenido de los procesos de descalificación, estos tratan diferentes tipos de asuntos como: la participación en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio; otras violaciones graves de derechos humanos; corrupción o abuso de autoridad; participación en actividades criminales; incompetencia; relación con grupos políticos; relación con grupos armados; actividades o relación con la policía o servicios de seguridad, entre otros.<sup>322</sup>

Siguiendo la línea de De Greiff, existen algunas variables decisivas en cuanto al diseño de los programas de descalificación. En primer lugar, estos programas difieren en términos de sus objetivos, ninguna sociedad en transición ha reformado o descalificado todas sus instituciones al mismo tiempo, de hecho, rara vez se ha logrado hacer con alguna institución en todos sus niveles jerárquicos, ya que se tienen que tomar decisiones sobre las instituciones y las posiciones que serán investigadas. En segundo lugar, los programas también se diferencian en relación con los criterios de investigación, qué clase de abusos se van a investigar y si el sistema está diseñado para erradicarlos. Por último, no todos los programas son iguales en cuanto a las sanciones que imponen. Los despidos pueden ser de diferentes tipos, inclusive pueden llevarse a cabo sin revelar su razón, las sanciones de descalificación pueden involucrar diferentes grados de publicidad y tener también limitaciones para buscar empleo en sectores específicos en el futuro.<sup>323</sup>

---

<sup>320</sup> P. DE GREIFF, “Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional”, cit. p.36.

<sup>321</sup> A. CZARNOTA, “Transitional justice in post-communist central-eastern Europe: decommunisation and the rule of law” en N. PALMER et al. (ed.), *Critical perspectives in transitional justice*, Oxford Transitional Justice Research, Intersentia, Cambridge, 2012, p. 441.

<sup>322</sup> S. RUMIN, “Gathering and Managing Information in Vetting Processes” en A. MAYER-RIECKH y P. DE GREIFF (ed.), *Justice as prevention. Vetting public employees in transitional societies*, cit., p.404.

<sup>323</sup> P. DE GREIFF, “Transitional justice, security and development”, cit., p.7

Los procesos de descalificación generan preguntas acerca de los derechos de las personas que son sujeto de las investigaciones. Un aspecto de preocupación son las garantías procesales que deben ser respetadas durante los procedimientos de descalificación. No obstante, aunque los organismos del derecho internacional de los derechos humanos y los tribunales estén divididos en el asunto de los requisitos del debido proceso en los programas de descalificación, se puede deducir de la jurisprudencia ciertos criterios y garantías que debe ir incorporados dentro de los procedimientos de descalificación.<sup>324</sup>

Mientras las justificaciones punitivas juegan un papel importante en el establecimiento de un proceso de descalificación, existen buenas razones para entender como medida de reforma institucional la descalificación y la exclusión de la función pública de personas que cometieron serios graves abusos. Es poco probable que los ciudadanos, en particular las víctimas de estos abusos, confíen en las instituciones que mantienen o contratan a este tipo de personas. Esta falta de confianza hará muy difícil que estas instituciones funcionen de manera efectiva.<sup>325</sup>

Generalmente, la descalificación no es suficiente para asegurar que los abusos no se repetirán, pero será necesaria para que se dé una aproximación coherente e integral hacia la justicia de transición. Más allá de la transformación de instituciones, esta aproximación también tendrá el propósito de empoderar a los sujetos que fueron oprimidos por el Estado y víctimas de la violencia, y se reconozcan como sujetos de derecho.<sup>326</sup>

### 6.3.2 Reformas en el sector seguridad

Otro tema a destacar en el marco de las reformas institucionales, son las reformas al sector seguridad. Aunque menos estudiado que el proceso de descalificación, es importante para

---

<sup>324</sup> F. ANDREU-GUZMÁN, “Due process and vetting” en A. MAYER-RIECKH y P. DE GREIFF (ed.), *Justice as prevention. vetting public employees in transitional societies*, cit., p.449.

<sup>325</sup> A. MAYER-RIECKH, “On preventing abuse: vetting and other transitional reforms” en A. MAYER-RIECKH y P. DE GREIFF (ed.), *Justice as prevention. Vetting public employees in transitional societies*, cit., p.485.

<sup>326</sup> Ibid., p.483.

tener una visión más amplia de las reformas estructurales que debe emprender el Estado luego de un conflicto o un régimen autoritario.

La relación entre la justicia transicional y las reformas en el sector seguridad<sup>327</sup> se entiende de mejor manera si se considera el enfoque “*backward – looking*” de la justicia. La justicia de transición se entiende usualmente en términos de su enfoque al pasado,<sup>328</sup> pero la rendición de cuentas, la verdad y la reparación sin garantías de no repetición limitan estos procesos. Las garantías de no repetición miran hacia el futuro, y un cambio estructural pide reconsiderar lo que significa la seguridad y la inseguridad para la sociedad.<sup>329</sup>

Debido a que las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos son llevadas a cabo por fuerzas de seguridad del Estado o grupos armados no estatales, existe un interés particular en la relación entre la rendición de cuentas y las reformas del sector seguridad. Las SSR y la justicia transicional buscan reformar estructuras de seguridad abusivas y construir sectores de seguridad que respeten los derechos humanos.<sup>330</sup>

Para finalizar hay que mencionar, que la agenda de la justicia transicional se superpone a la agenda de las reformas institucionales. Sin embargo, como una de las preocupaciones de la justicia de transición es tratar las violaciones de derechos humanos, y las instituciones que más están involucradas en tales abusos son las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, la justicia transicional se preocupa particularmente de “vetar” esas instituciones.<sup>331</sup>

---

<sup>327</sup> El concepto es ampliamente conocido como SSR por sus siglas en inglés de Security Sector Reform.

<sup>328</sup> Esta concepción ya se discutió anteriormente en el presente documento.

<sup>329</sup> A. CUTTER PATEL, “Transitional Justice, DDR, and Security Sector Reform” en A. CUTTER PATEL et al. (ed.), *Disarming the past: transitional justice and ex-combatants*, Social Science Research Council, Estados Unidos, 2009, p.276.

<sup>330</sup> Ibid., p.277.

<sup>331</sup> P. DE GREIFF, “Transitional justice, security and development”, cit., p.7.

## ***7. Perspectiva internacional de la justicia transicional***

La configuración de la justicia transicional dentro del marco jurídico–político internacional la sitúa dentro de este escenario como un principio emergente del derecho internacional. Los gobiernos nacionales están atados por limitaciones, deberes y derechos internacionalmente plasmados en la forma de tratados en cuanto al diseño de sus políticas de construcción de paz. La resolución de conflictos armados no es de competencia exclusiva de los países afectados. Con o sin la aceptación de los Estados, las normas que protegen a las víctimas de los abusos de los derechos humanos tienen hoy guardianes internacionales que poseen herramientas prácticas (desde la sanciones económicas hasta la prisión para perpetradores individuales) para disuadir o castigar actuaciones consideradas inaceptables por la comunidad internacional.<sup>332</sup>

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que el Estado está obligado no solo a abstenerse de cometer ciertos actos en contra de los ciudadanos, sino que también tiene deberes de naturaleza positiva.<sup>333</sup> El Estado debe garantizarle a cada persona el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones por los hechos que constituyan una violación a sus derechos. Igualmente, aquel al someterse a un proceso de rendición de cuentas, cumple con un propósito legal, político y ético.

El proceso de confrontación de los crímenes de derecho internacional y violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado, que las autoridades del nuevo régimen han de afrontar, debe responder a un conjunto de obligaciones complementarias y al mismo tiempo, individualmente identificables,<sup>334</sup> como son el derecho a la justicia, verdad y reparación. Desde el punto de vista jurídico, la justicia transicional podría decirse que responde a violaciones de los elementos fundamentales de la arquitectura jurídica

---

<sup>332</sup> A. RETTBERG, *Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional*, cit., p.6.

<sup>333</sup> J. MÉNDEZ, “In defense of transitional justice”, en J. MCADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, cit., p.5.

<sup>334</sup> J. CHINCHÓN, *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia Iberoamericana*, cit., p.323.

internacional.<sup>335</sup> Numerosos tratados y convenciones promovidos por Naciones Unidas y algunos de organismos regionales, reflejan que las medidas de justicia transicional constituyen un esfuerzo para nutrir el aparato normativo internacional para asegurar los anteriormente mencionados derechos de justicia, verdad y reparación.

En la práctica, a pesar del considerable entramado institucional con el que cuenta hoy la justicia transicional, no se ha dicho la última palabra sobre su supremacía frente a otras formas de la resolución de conflictos.<sup>336</sup> Si bien algunos autores han advertido del peligro de un excesivo protagonismo de lo internacional en los procesos de transición nacionales,<sup>337</sup> realizar el camino en el sentido contrario, supondrá desconocer por completo la existencia de un ordenamiento jurídico internacional que pese a la perpetua acusación de su estado de crisis, está llamado a resolver justamente muchas situaciones de crisis.<sup>338</sup>

La justicia transicional está atrapada entre las analogías de la guerra y la paz, y paralelamente, entre el derecho internacional y el derecho local.<sup>339</sup> El discurso del derecho internacional humanitario se ha fusionado con el de los derechos humanos, sus ámbitos de aplicación, sus sujetos y los mecanismos para su prevención se encuentran intrincados en el contexto de la justicia transicional. La práctica del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ha cambiado después del declive de la supremacía del Estado moderno. El nuevo derecho internacional humanitario permite la identificación de fallas en la acción del Estado y podría ejercer cierta influencia para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los derechos humanos. Solo el tiempo dirá y hasta qué punto, estos acontecimientos presentarán un serio desafío al Estado de derecho y si bien están asociados con el presente ciclo de política contemporánea.<sup>340</sup>

---

<sup>335</sup> P. DE GREIFF, "Transitional justice, security and development", cit., p.3.

<sup>336</sup> A. RETTBERG, *Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional*, cit., p.7.

<sup>337</sup> Vid. C. NINO, "Response: the duty to punish past abuses of human rights put in context: the case of Argentina", en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol. 1, cit.

<sup>338</sup> J. CHINCHÓN, *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia Iberoamericana*, cit., p.288.

<sup>339</sup> R. TEITEL, *Transitional Justice*, cit., p.36.

<sup>340</sup> R. TEITEL, "Genealogía de la justicia transicional", cit., p.25.

Entre los sistemas regionales, el papel del Sistema Interamericano de derechos humanos ha sido muy importante, en ocasiones completando o reemplazando a los tribunales nacionales.<sup>341</sup> Sin el ánimo de reiterar de sobremanera este hecho, cabe resaltar que la Corte ha fallado contra las amnistías en Argentina, Chile y Uruguay, así como Honduras, Guatemala y Colombia han sido objeto de disposiciones históricas sobre violaciones de los derechos humanos posteriores a regímenes autoritarios, o en el marco de transiciones políticas, como el caso de Colombia.

Por otra parte, el discurso de la justicia transicional en el ámbito internacional ha servido no solo para consolidar el derecho internacional de los derechos humanos, sino también para generar la movilización de los actores locales en la escena internacional, hacia la búsqueda de limitar el poder del Estado o tratar de ampliar el espacio para aquellos que se puedan beneficiar de los mecanismos de justicia transicional como grupos tradicionalmente marginados tales como las mujeres o los niños.<sup>342</sup>

En el ámbito internacional a la hora de implementar medidas de justicia internacional también se presentan dificultades. Existen casos en que un régimen sucesor preocupado por el problema inmediato de tener que enfrentar los crímenes de su predecesor, ha fallado en dar una atención adecuada al derecho internacional y ha decidido castigar o perdonar en el contexto del derecho local solamente.<sup>343</sup> Frecuentemente, los sistemas de justicia nacionales son corruptos, poco efectivos, están saturados o son incapaces de responder apropiadamente a las necesidades de las transiciones. En esas condiciones, es habitual que grupos de víctimas, organizaciones no gubernamentales, comunidades y miembros de la sociedad civil, instituciones de las iglesias y otros grupos, sean motores de cambio.<sup>344</sup> De esta forma, independientemente de la fuerza de las presiones internacionales, el ámbito

---

<sup>341</sup> A. BARAHONA DE BRITO et al, *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, cit., p.54.

<sup>342</sup> K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, cit., p.8.

<sup>343</sup> J. DUGARD, “Retrospective justice: international law and the South African model”, en J. MCADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, cit., p.269.

<sup>344</sup> K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, cit., p.3.

nacional sigue siendo la clave para entender los procesos de justicia en periodos de transición.<sup>345</sup>

Mucha de la teoría de la justicia transicional ha sido construida alrededor de enfrentar graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, así como injusticias históricas; establecer el Estado de derecho; reconocer los derechos de las víctimas y una variedad de mecanismos judiciales y extrajudiciales. La justicia transicional ha reconciliado conflictos entre grupos de naturaleza distinta, muchas veces violentos, que ha traído como resultado nuevas entidades y realidades políticas.<sup>346</sup> Mientras los mecanismos de justicia transicional están diseñados para fortalecer la capacidad local en dichas sociedades, promover el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el derecho internacional también es un principio fundamental.

## **8. Retos de la justicia transicional**

Afrontar el examen de los procesos de transición, supone enfrentar el análisis de una materia ampliamente analizada y, sin embargo, enormemente problemática.<sup>347</sup> La pregunta que se le hace a la justicia transicional es ¿cómo podría una naciente democracia enfrentar severos abusos de derechos humanos que un régimen autoritario anterior, sus oponentes, o combatientes en un conflicto armado interno han cometido? El reto para una nueva democracia es responder adecuadamente a los males del pasado sin socavar la nueva democracia o poner en riesgo las posibilidades para un futuro desarrollo.<sup>348</sup>

---

<sup>345</sup> A. BARAHONA DE BRITO et al, *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, cit., p.56.

<sup>346</sup> P. LUNDY y M. MCGOVERN, “The role of community in participatory transitional justice” en K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, cit., p.103.

<sup>347</sup> J. CHINCHÓN, *Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia Iberoamericana*, cit., p.273.

<sup>348</sup> D. CROCKER, “Truth Commissions, Transitional Justice and Civil Society”, en R. ROTBERG y D. THOMPSON (ed.), *Truth v. Justice, The morality of Truth commissions*, cit., p.100.

La justicia transicional se enfrenta a retos internos en torno a sus mecanismos. Para entender esto, hay que tener en cuenta el considerable “éxito” que éstos han tenido, su mencionada versatilidad y la posibilidad de ser adaptados en otros contextos. Este reto interno se puede definir en términos de diferentes dimensiones de la “coherencia” del campo y se desprende, entre otros factores, de las tendencias centrifugas entre las diferentes medidas.<sup>349</sup> Estas tendencias son las que han llevado a la expansión progresiva de la justicia transicional sin que se pueda reflejar con claridad, aún, hacia dónde se dirigen.

Igualmente, se discute si la justicia transicional además de tratar las más graves violaciones de los derechos civiles y políticos, debe ampliar su ámbito con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, así como su relación con el tema del desarrollo.<sup>350</sup> Las presiones visibles para extender el espacio de aplicación del discurso de la justicia transicional exigen a una reconsideración sistemática de los presupuestos epistemológicos y conceptuales sobre los que ha operado hasta ahora la justicia transicional.<sup>351</sup>

La certeza generalizada acerca del beneficio de la aplicación de los conceptos y los mecanismos de justicia transicional ha llevado a extenderlos a contextos que no son exactamente transicionales. La justicia transicional, está reivindicándose para afrontar las injusticias históricas que han sufrido colectivos como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otros grupos subalternos que reclaman reconocimiento de su papel en la historia y reparación por los sufrimientos del pasado.<sup>352</sup>

Por último, un reto importante que ha surgido desde la corriente crítica de la justicia transicional, se refiere a la accesibilidad de la teoría y a la perspectiva esencialmente juricista. Los académicos de los países no occidentales, que viven y trabajan en

---

<sup>349</sup> P. DE GREIFF, “Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional”, cit., p.26.

<sup>350</sup> Tal como se ha mencionado anteriormente, autores como De Greiff defienden la postura de integrar el tema del desarrollo en el escenario de la justicia transicional. Asimismo, se puede observar en la definición que se formula en la nota de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre un acercamiento a la justicia transicional, donde se incluyen las violaciones de “todos” los derechos como factores para impartir justicia.

<sup>351</sup> F. GÓMEZ ISA, “Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso de Colombia” en M. REED y M. RIVERA (ed.), *Transiciones en contienda: Disyuntivas de la justicia transicional en Colombia desde la experiencia comparada*, cit., p.191.

<sup>352</sup> Ibid., p.190.



sociedades con pocos recursos y destrozadas por la guerra, tienen poca voz en las discusiones académicas y teóricas de países occidentales, lo que se podría considerar como una injusticia que puede tener impacto sobre los estudios y la práctica de la justicia transicional. El enfoque restringido a asuntos de derecho, evidente en la mayoría de la teoría de justicia transicional, crea problemas para entender los asuntos primordiales y las consecuencias de los procesos transicionales.<sup>353</sup>

---

<sup>353</sup> P. LUNDY y M. MCGOVERN, “The role of community in participatory transitional justice” en K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, cit., p.103.

## **CAPÍTULO 2. REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES SISTEMÁTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO**

Como mecanismo de la justicia transicional la reparación es un requisito primordial de la justicia. El Estado tiene la obligación de rendir cuentas por las acciones cometidas en el pasado y es a través de la reparación que puede resarcir de manera directa a las víctimas por las violaciones y abusos cometidos contra ellas. El proceso de justicia transicional no puede ser entendido sin un profundo enfoque reparador, ya que de este depende no solo la reconstitución del Estado de derecho, sino la consolidación de un proceso de reconciliación de un país fragmentado por un conflicto armado o un régimen autoritario.

### ***1. Origen de la normativa internacional sobre reparación a víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.***

En relación con el origen de la normativa sobre reparaciones, cabe destacar tres aspectos. En primer lugar, hay que remitirse a la influencia del derecho romano en el establecimiento de la normativa sobre reparaciones. El derecho internacional toma en un principio el concepto de *restitutio in integrum*, el cual se entiende como un recurso de carácter extraordinario que era concedido por el pretor con el fin de rescindir los efectos de un acto y restablecer una situación existente que se ha visto modificada por ese determinado acto.<sup>354</sup> Es entonces con la base de *restitutio in integrum*, como antecedente conceptual, que la reparación integral se constituye en la reparación ideal, concepto que ha recogido el derecho internacional.

En segundo lugar hay que mencionar la noción de reparación entre Estados. Tradicionalmente el derecho internacional ha considerado a los Estados como sus

---

<sup>354</sup> G. BUIGUES, *La rescisión de los hechos y actos jurídicos en derecho romano, premisas para un estudio de la restitutio in integrum*, Nomos, Valencia, 1992, p.21.

principales sujetos, pero en nuestros días es más que evidente que esta rama del derecho no puede reducir su desarrollo únicamente a las relaciones interestatales. Antes de la proclamación de la protección internacional de los derechos humanos, la perspectiva que predominaba en el derecho internacional era que los actos ilícitos cometidos por un Estado en contra de sus nacionales eran esencialmente un asunto doméstico y que los actos ilícitos cometidos en contra de los nacionales de otros Estados podrían ser reclamados solo por aquel, reclamándolos como su propio derecho.<sup>355</sup>

Y en tercer lugar se identifica la *responsabilidad* internacional, que es aquella en la que incurre un Estado, o un organismo internacional, por acción u omisión, cuando infringe las normas o compromisos del derecho internacional. Es pertinente referirse aquí al famoso caso de la fábrica de Chorzow, donde la Corte Permanente de Justicia Internacional estableció en 1927 uno de los principios más valiosos del derecho internacional en cuanto a la reparación del daño cuando declaró que “la reparación debe, tanto como sea posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que con toda probabilidad hubiere existido si aquel acto no hubiese sido cometido”.<sup>356</sup>

Adicionalmente en esta materia, resulta importante mencionar el Proyecto de Responsabilidad de los Estados por actos ilícitos, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 53º periodo de sesiones en el año 2001.<sup>357</sup> Aunque este documento se refiere exclusivamente a la responsabilidad de un Estado frente a otro, y no tiene en cuenta a particulares como víctimas de los actos estatales, se hace énfasis en que el Estado responsable debe poner fin al acto ilícito y repararlo integralmente, mediante restitución, indemnización o satisfacción. Esto se refleja en su artículo 31 referido al tema de la reparación, según el cual el Estado responsable debe corregir las

---

<sup>355</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, Nueva York, 2008, p.5.

<sup>356</sup> CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, *Case concerning the factory at Chorzów*, twelfth ordinary session, series A - No. 9, collection of judgments, A.W. Sijthoff's Publishing Company, Leyden, 1927.

<sup>357</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts*, Comisión de Derecho Internacional, sesión 53, 2001.

consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que hubiera existido anteriormente, si el acto no se hubiera cometido.<sup>358</sup>

## ***2. Análisis del desarrollo de la normativa internacional de reparación a víctimas***

Después de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de Naciones Unidas y la evolución del derecho internacional, se empezó a construir un marco legal internacional de cooperación. Con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, se reconoció que los asuntos relativos a la violación de los derechos humanos no eran más un asunto de exclusiva jurisdicción nacional, sino que los constantes patrones de violaciones graves de derechos humanos, requerían una intervención internacional.<sup>359</sup>

Por su parte, entre las fuentes del derecho internacional se encuentran los tratados internacionales suscritos por los Estados, en los cuales se adoptan los compromisos de respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, en caso de ser necesario, su respectiva reparación. Estos compromisos se encuentran plasmados en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.8); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.2); la Convención contra la Tortura y otros Tratos crueles, inhumanos o degradantes (art.14); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (art. 6) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art.39). El derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional también han sido relevantes en este ámbito, especialmente la Convención de la Haya de 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre (art.3);<sup>360</sup> el Protocolo Adicional de

---

<sup>358</sup>Ibid., p.91.

<sup>359</sup>OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.5.

<sup>360</sup>COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, *Convención de la Haya de 1907 sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (H.IV)*, 18 de octubre de 1907.

las convenciones de Ginebra sobre protección a víctimas de conflictos armados internacionales –protocolo I- (art.91)<sup>361</sup> y el Estatuto de Roma de la CPI (arts. 68 y 75).<sup>362</sup>

Igualmente, es importante destacar el desarrollo que le han dado los instrumentos regionales de protección de derechos humanos al tema de reparación, cada uno con sus características particulares. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)<sup>363</sup> hace mención al tema en su artículo 5.5 (en el marco del derecho a la libertad y seguridad) cuando señala que “toda persona víctima de detención o de una privación de libertad contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación”; y en el artículo 41 (satisfacción efectiva) cuando estipula que “si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”.

En relación con el artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) éste se presenta de manera ambigua, si bien en su definición en español está claro a qué se refiere, su título en inglés “effective remedy” podría interpretarse también como “reparación efectiva”. Aunque en apariencia en el CEDH se evidencia un peso normativo relevante en cuanto a la reparación, en la realidad es poco lo que se hace al respecto, pues cuando se ejecuta una sentencia en este orden en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la única medida de reparación es la indemnización.

Por su parte, en el sistema interamericano hay que remitirse artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que señala que “cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá

---

<sup>361</sup> COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, *Protocolo Adicional de las Convenciones de Ginebra sobre Protección a Víctimas de Conflictos Armados Internacionales*, 8 de junio de 1977.

<sup>362</sup> CORTE PENAL INTERNACIONAL, *Estatuto de Roma*, cit.

<sup>363</sup> CONSEJO DE EUROPA, *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*, Roma, 4 de noviembre de 1950.

asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.<sup>364</sup> Adicionalmente, en su extensa y progresiva jurisprudencia al respecto, la Corte ha indicado que la violación de una obligación internacional que haya producido algún daño debe repararse de manera adecuada y que el citado artículo 63.1 recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado.<sup>365</sup>

Por último, en cuanto al caso del sistema de protección africano, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) en su artículo 21.2 establece que “en caso de expoliación, el pueblo desposeído tendrá derecho a la recuperación legal de su propiedad así como a una compensación adecuada”.<sup>366</sup> Si bien la reparación está referida a los aspectos territoriales, es una base para la consiguiente interpretación del deber de reparar por parte de los Estados y reclamar el derecho de reparación por parte de las víctimas.

### 3. Establecimiento de la normativa internacional de reparación a víctimas

Antes de entrar en materia sobre el establecimiento del derecho a la reparación en el ámbito internacional conviene definir brevemente dos conceptos fundamentales: el concepto de víctima y el de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

---

<sup>364</sup> ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.

<sup>365</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 62.

<sup>366</sup> ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. *Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos*, Nairobi, Kenia, 27 de julio de 1981. Disponible en: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1297.pdf>

### 3.1 Noción de víctima y de violaciones graves de derechos humanos y del DIH.

Como señala Bassiouni,<sup>367</sup> a partir del siglo XX como resultado de las dos guerras y los conflictos armados, ha surgido un fenómeno de “victimización humana”. Esta nueva realidad ha radicado en la necesidad de conceder a las personas los mismos derechos y obligaciones dentro de la sociedad, en el marco de una relación entre la víctima (individuo) y el que causa su condición de víctima.<sup>368</sup>

En cuanto a una concepción de víctima, ésta varía según la disciplina: victimología, criminología, derecho procesal penal, derecho penal internacional, derechos humanos, entre otras. Cada una de estas disciplinas persigue diferentes objetivos, cuenta con diferentes metodologías y terminología, y le proporciona diferentes roles y derechos a las víctimas, generando así una falta de entendimiento común sobre éstos.<sup>369</sup> Pero a pesar de estos desacuerdos, y como lo expone Rodríguez Uribes, desde la victimología se avanza hacia un enfoque de justicia en el cual se garantizan no solo los derechos de los procesados (como se ha hecho tradicionalmente), sino también los de las víctimas, así como la protección de su dignidad, intimidad o buen nombre.<sup>370</sup>

De manera muy precisa, Ramírez-Barat señala que las víctimas son “las personas que están siendo dañadas o han sido dañadas en el pasado”, por esto al momento de definir el concepto de víctima, el daño sigue siendo la primera variable constitutiva.<sup>371</sup> Siempre, desde los primeros sistemas jurídicos, se ha regulado las acciones que ocasionan daños personales o materiales a las personas.<sup>372</sup>

---

<sup>367</sup> M. BASSIOUNI, “International recognition of victim’s rights”, *Human Rights Law Review*, vol. 6, issue 2, Oxford University Press, 2006, p.209.

<sup>368</sup> En este punto Bassiouni hace referencia a “victimiser”.

<sup>369</sup> M. BASSIOUNI, “International recognition of victim’s rights”, cit., p.204.

<sup>370</sup> J. RODRÍGUEZ, “Sobre el terrorismo y sus víctimas”, *Revista Derechos y Libertades*, núm 27, época II, junio, 2012, p.261.

<sup>371</sup> C.RAMÍREZ-BARAT, *La Justicia en el tiempo: una aproximación al concepto de justicia en los procesos de transición a la democracia*, cit., p.238.

<sup>372</sup> M. BASSIOUNI, “International recognition of victim’s rights”, *Human Rights Law Review*, cit. p.206.

Desde una perspectiva jurídica, el concepto y los derechos de las víctimas han sido establecidos en el contexto internacional. A pesar de que en muchos de los tratados sobre derechos humanos no se define “expresamente” el concepto de víctima, éste ha sido objeto de interpretación en la jurisprudencia internacional.<sup>373</sup> Así el concepto de víctima ha sido desarrollado de manera que incluye no solo a la víctima de la violación, teniendo en cuenta que muchas ocasiones ya no está presente, sino también a sus familiares (considerados víctimas directas) sino a las víctimas indirectas, entendidas como aquellas personas que han sido afectadas y le han sido causados daños físicos, mentales, materiales o morales, aunque las acciones que originaron la violación no hayan estado dirigidas hacia ellos.<sup>374</sup>

Sobre la noción de víctima, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder determinó que se entiende por víctimas a “las personas que, individual o colectivamente,<sup>375</sup> hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.<sup>376</sup>

Y aunque desde una visión puramente jurídica el destino y el castigo de los violadores varían y dependen de la aplicación de la ley, sea bajo el derecho nacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario o el derecho

---

<sup>373</sup> Vid. como ejemplo la progresiva jurisprudencia en materia de reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del famoso caso Velásquez Rodríguez contra Honduras. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Velásquez-Rodríguez Vs. Honduras*, Sentencia Reparaciones y Costas, 21 de julio de 1989.

<sup>374</sup> Vid. S. GARCÍA, “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos en materia de reparaciones”, en CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *La Corte Interamericana de derechos humanos: un cuarto de siglo 1979 – 2004*, San José, 2005. En el mismo documento García Ramírez también menciona el concepto de víctima potencial, pero aquí no se detallará este punto.

<sup>375</sup> Vid. Carta Africana de los Derechos Humanos, art. 21. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, *Convenio No.169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*, 7 de junio de 1989, art. 15. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas*, Res. 61/295, 13 de septiembre de 2007. F. LENZERINI, “Reparations for indigenous peoples in international and comparative law” en F. LENZERINI (ed.), *Reparations for indigenous peoples. International and comparative perspectives*, Oxford University Press, 2008, pp.3-16.

<sup>376</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Declaración sobre los principios fundamentales para las víctimas de delitos y abuso de poder*, Asamblea General, resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985.



penal internacional, estas distinciones tienen poca relevancia para las víctimas en su búsqueda de reparación.<sup>377</sup>

Por otra parte, en relación con lo que se puede denominar como una violación grave de derechos humanos en el marco del derecho internacional, hay distintas acepciones que son utilizadas a modo de calificativo tales como “graves”, “sistemáticas”, “serias”, “flagrantes” o “manifiestas”. Por su parte la jurisprudencia y la doctrina concuerdan en que, aun cuando se emplean indistintamente estas nociones, todas ellas se dirigen a calificar y caracterizar el mismo tipo de violaciones de derechos humanos.<sup>378</sup>

El elemento principal que determina la gravedad de la violación es el carácter inderogable de los derechos humanos afectados y/o la vulneración de normas imperativas del derecho internacional o de “jus cogens”.<sup>379</sup> Adicionalmente, las violaciones graves de derechos humanos están estrechamente relacionadas con los crímenes de derecho internacional establecidos en el Estatuto de Roma en su artículo 5, como el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.<sup>380</sup>

### 3.2 Hacia la construcción de un marco normativo sobre reparación a víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y del DIH.

Como antecedente del establecimiento de la reparación a víctimas en la normativa internacional cabe resaltar la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.<sup>381</sup> Este documento le da un buen desarrollo al concepto de víctima, a las condiciones y al ámbito de aplicación personal. Se determina el acceso a la justicia y a un trato justo, que hace

---

<sup>377</sup> M. BASSIOUNI, “International recognition of victim’s rights”, cit., p.205.

<sup>378</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *Impunidad y graves violaciones de derechos humanos: guía para profesionales número 3*, Ginebra, 2008, p.19. Disponible en: <http://www.icj.org/dwn/database/PGNo-3-ElectrDistribution.pdf>

<sup>379</sup> Ibid., p.20.

<sup>380</sup> Vid. CORTE PENAL INTERNACIONAL. Estatuto de Roma, cit., art. 5.

<sup>381</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Declaración sobre los principios fundamentales para las víctimas de delitos y abuso de poder*, cit., párr.1.

énfasis en el trato digno que se debe dar a las víctimas, en el derecho de acceso a los mecanismos de la justicia en el cual se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles.<sup>382</sup> A su vez, se exige una pronta reparación del daño causado y el fortalecimiento del entramado judicial.

Igualmente aparecen los temas de resarcimiento e indemnización, planteándose tanto el contexto como sus condiciones de aplicabilidad. Sobre el primer punto, se establece que los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.<sup>383</sup> Por su parte, en relación con las víctimas de abusos de poder se señala a grandes rasgos: una conceptualización del término de víctimas; la posibilidad de negociación de tratados internacionales referente a víctimas y la inclusión en las legislaciones nacionales de normas que detengan los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esas reparaciones incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.<sup>384</sup>

3.2.1 Las directrices de Van Boven: el primer paso sólido hacia la construcción de un marco normativo internacional sobre el derecho de reparación a víctimas.

En el marco de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de Naciones Unidas, se adoptó la resolución 1989/13 por la cual se encarga a Theo Van Boven Relator Especial realizar un estudio sobre el derecho de restitución,

---

<sup>382</sup> Ibid., párr.5.

<sup>383</sup> Ibid., párr.8.

<sup>384</sup> Ibid., párr.19.

indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y libertades fundamentales.

En 1993, Van Boven presentó su primer proyecto de Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario a obtener Reparación; al año siguiente se estableció un grupo de trabajo sobre la administración de justicia y la indemnización para avanzar en el tema de los principios y directrices básicos sobre la reparación a víctimas. En 1995, se presenta la versión revisada de los principios y directrices, en la cual se tienen en cuenta los instrumentos internacionales en vigor, las observaciones de los Estados, de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y el informe del grupo de trabajo. En 1996 la Subcomisión presenta el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio, y finalmente, en 1997 se presenta el documento sobre principios y directrices básicos al Secretario General.

Acerca de los deberes de los Estados, en el documento se señalan: prevenir las violaciones, investigarlas, tomar medidas apropiadas contra los violadores y proporcionar recursos jurídicos y reparación a las víctimas.<sup>385</sup> Igualmente, se establece que se deberá proporcionar una atención especial a la prevención de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y a la obligación de juzgar y castigar a los perpetradores de crímenes de derecho internacional. En relación con este punto, la redacción en términos muy genéricos genera ambigüedad en el principio.

Hay que detenerse brevemente en la cuestión de la definición de violaciones graves a los derechos humanos y serias violaciones del derecho internacional humanitario, pues en los documentos normativos no se define este concepto. Bassiouni afirma que estas violaciones

---

<sup>385</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener reparación*, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, versión revisada del 16 de enero de 1997, párr.2.

involucran la protección de la vida, la integridad física y otros “contenidos esenciales a la persona y a su dignidad humana”.<sup>386</sup>

Pero inclusive con este acercamiento, todavía no hay un concepto unívoco y la interpretación seguirá siendo ambigua. Cabe resaltar que la separación de los términos “violaciones graves de los derechos humanos” y “violaciones serias del derecho internacional humanitario” deberá ser entendida para calificar situaciones con la perspectiva de establecer una serie de hechos que puedan convertirse en base para reclamar su adjudicación, más que para separar los regímenes legales de reparación.<sup>387</sup> Es muy significativa la resistencia de los Estados para llegar a una conceptualización de estos términos, y como es habitual en derecho internacional, es muy probable que no se logre un consenso debido al interés particular de cada Estado de proteger sus acciones.

Siguiendo con la revisión de éste documento se encuentra la sección de normas aplicables: éstas deberán ser incorporadas y aplicadas de manera efectiva en los ordenamientos jurídicos nacionales. Aquí el punto importante se remite a que es importante anotar que en caso de que las normas internacionales y nacionales difieran entre sí, se aplicarán siempre aquellas normas que otorguen el nivel más alto de protección.<sup>388</sup> Sin duda se trata de un interesante postulado, aunque deja amplia discrecionalidad para decidir qué normas representan un nivel mayor de protección.

Igualmente, se establece el derecho a disponer de recursos, lo que se desarrolló y se conoce como el derecho a la justicia, o el acceso efectivo a la justicia. En relación con este, el Estado deberá garantizar los recursos jurídicos apropiados para que cualquier individuo que considere violados sus derechos pueda hacer uso de ellos. Asimismo, el sistema jurídico estatal deberá proporcionar procedimientos disciplinarios, administrativos, civiles y penales

---

<sup>386</sup> M. BASSIOUNI, “International recognition of victim’s rights”, cit., p.251.

<sup>387</sup> Ibid., p.251.

<sup>388</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener reparación*, cit., párr.3.

que sean rápidos y efectivos, a fin de asegurar una reparación adecuada y fácilmente accesible, así como protección contra todo acto de intimidación o represalia.<sup>389</sup>

La efectividad de la justicia en estos casos se convierte en eje principal del proceso de reparación. En el marco del derecho a la justicia, los Estados tienen el deber de crear el entramado judicial necesario para la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos casos de violaciones de los derechos humanos.<sup>390</sup>

El siguiente punto en el documento se denomina “Reparación”, un apartado aclarativo donde se plantea cómo debe ser reclamada la reparación, el deber del Estado respecto a ésta, el objetivo de la reparación y su prescripción. A destacar, el carácter rápido y plenamente eficaz de cómo debe ser la reparación, así como el logro de soluciones de justicia que eliminen o reparen las consecuencias del perjuicio padecido. Es en este apartado donde se establece el principio de proporcionalidad de la reparación y las formas que esta comprende: la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Igualmente, que la prescripción no podrá ser aplicada cuando se trate de reclamar la reparación por violaciones graves.

Aquí conviene resaltar que las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario que se buscan reparar, son en la mayoría de los casos “irreparables”. Ningún programa de reparación devolverá a la víctima a su anterior *status quo*, ni mucho menos traerá de vuelta a su esposo(a), hijo(a) o familiar desaparecido, por no discutir los casos de tortura, detención ilegal y demás abusos que se cometen durante regímenes totalitarios o conflictos armados. Pero como lo estipula la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ninguna de estas razones es motivo para la inacción.<sup>391</sup>

---

<sup>389</sup>Ibid., párr.5.

<sup>390</sup>F. GÓMEZ ISA, “Justicia y reparación para las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” en *Revista Crítica*, año 58, núm 954, 2008. Disponible en: <http://www.revista-critica.com/articulos.php?id=2051>

<sup>391</sup>OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.10.

De vuelta al último apartado del documento Van Boven, éste puntualiza las formas de reparación que se determinarán de acuerdo con el derecho de cada Estado. En cuanto a su definición, la reparación es entendida en un sentido amplio, incluyendo, además de la tradicional compensación económica, aspectos simbólicos que pretenden una satisfacción plena y equitativa y aspectos médicos y psicosociales que tienen como objetivo la rehabilitación de las personas que han sufrido las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos.<sup>392</sup>

Como primera forma de reparación se considera la restitución. Esta se dirige a restablecer la situación existente antes de la violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Exige, entre otras cosas, restablecer la libertad, la vida familiar, la ciudadanía, el retorno al país de residencia anterior y la restauración del empleo o de la propiedad.<sup>393</sup>

Como segunda forma de reparación, se contempla la compensación por todo el perjuicio resultante de una violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario que pueda ser evaluada económicamente; tales como el daño físico o mental, incluyendo el dolor, sufrimiento y angustias emocionales, la pérdida de oportunidades, incluidas las relativas a la educación, los daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; el daño a la reputación o a la dignidad y los gastos efectuados para poder tener asistencia jurídica o de expertos y disponer de medicinas y de servicios médicos.<sup>394</sup>

Para las indemnizaciones, se tienen en cuenta tanto el aspecto material como el moral. Se debe aclarar que, como lo menciona Carrillo, el concepto de daños inmateriales va más allá del sufrimiento emocional, pues también incorpora otros efectos perjudiciales a la dignidad

---

<sup>392</sup> F. GOMEZ ISA, “Justicia y reparación para las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” cit.

<sup>393</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener reparación*, cit., párr.12.

<sup>394</sup> Ibid., párr. 13.

de la persona y el bienestar de las víctimas, que a diferencia del sufrimiento personal no puede ser remunerado económicamente, ni siquiera en términos nominales.<sup>395</sup>

Para continuar con las formas de reparación se encuentra la rehabilitación, se estipula que ésta incluirá atención médica y psicológica así como la prestación de servicios jurídicos y sociales.<sup>396</sup> Aunque en el documento la rehabilitación está descrita de manera muy simple, tiene gran importancia para que la reparación se lleve a cabo de una forma integral. Por este motivo, es fundamental que dentro del proceso de rehabilitación, comprendido desde un enfoque psicosocial, se identifique a la persona como un individuo que vive un contexto social y cultural particular, basado en procesos que restringen, facilitan y dan significado a su subjetividad social.<sup>397</sup> Adicionalmente, trabajar dentro de un marco alternativo de rehabilitación, implica no solo buscar mecanismos dirigidos a aliviar el sufrimiento individual, sino también entender que tanto el individuo como la sociedad dependen fundamentalmente de cómo se regeneren, bajo nuevos términos, las relaciones sociales y las delimitaciones morales que fueron destruidas.<sup>398</sup>

Finalizando el documento aparecen las últimas medidas de reparación: satisfacción y garantías de no repetición; las cuales según Van Boven se proveerán cuando sean necesarias. Estas medidas no solo servirían para reparar a las víctimas, sino que se configurarían en un compromiso de actuación y prevención de violaciones de derechos humanos para el Estado y de confianza para las víctimas, sus familiares y la comunidad en general, por lo cual para estas medidas, en su totalidad, debería haberse establecido de forma expresa su carácter ineludible.

---

<sup>395</sup> A. CARRILLO, “Justice in context: the relevance of Inter-American human rights law and practice to repairing the past”, cit., p.525.

<sup>396</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener reparación*, cit., párr.14.

<sup>397</sup> M. BRINTON LYKES y M. MERKSY, “Reparations and mental health: psychosocial interventions towards healing, human agency, and rethreading social realities” en P. DE GREIFF, *The Handbook of Reparations*, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2006, p.600.

<sup>398</sup> Ibid., p.601.

Las garantías de no repetición es una amplia categoría que incluye reformas institucionales encaminadas hacia el control civil de las fuerzas militares y de seguridad, el fortalecimiento de la independencia judicial, la protección de los defensores de derechos humanos, la promoción del derecho internacional de los derechos humanos dentro del aparato gubernamental, la ejecución de la ley, los medios, la industria y los servicios sociales.<sup>399</sup> Las medidas de satisfacción y garantías de no repetición en el documento de Van Boven comprenden: la cesación de las violaciones existentes; la verificación de los hechos y difusión pública y amplia de la verdad de lo sucedido; una declaración oficial o decisión judicial restableciendo la dignidad, reputación y derechos de la víctima y de las personas que tengan vínculos con ella; una disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades; la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; conmemoraciones y homenajes a las víctimas y la inclusión en los manuales de enseñanza sobre derechos humanos, así como en los manuales de historia y manuales escolares, de una versión fiel de las violaciones cometidas contra los derechos humanos y el derecho humanitario internacional.<sup>400</sup>

Igualmente, estas medidas comprenden la prevención de nuevas violaciones asegurando un control efectivo por parte de la autoridad civil sobre las fuerzas armadas y de seguridad; restringiendo la jurisdicción de los tribunales militares únicamente a delitos específicamente militares, cometidos por personal militar; reforzando la independencia del sistema judicial; protegiendo a las personas que ejercen la profesión jurídica y a los defensores de derechos humanos e impartiendo y fortaleciendo la capacitación en derechos humanos en todos los sectores de la sociedad y, especialmente, en las fuerzas armadas y de seguridad y en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Por otra parte, el tema de género es una variable fundamental en los programas de reparación, este debe ser diseñado y ejecutado de manera transversal en los diferentes

---

<sup>399</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.7.

<sup>400</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener reparación*, cit., párr.15.



mecanismos que comprenden un programa de reparación integral. La presencia de las mujeres en todos los momentos del proceso es crucial, de esta forma aumentan las posibilidades de que se tengan en cuenta las necesidades específicas de este colectivo.

3.2.2 Antecedentes del trabajo de actualización de M. Cherif Bassiouni: el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.

Con la perspectiva de entregar el documento de principios y directrices básicos a la Asamblea General de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1998/43 del 17 de abril de 1998 designó como experto independiente a Cherif Bassiouni para preparar una versión revisada de los principios de Van Boven.

Como antecedentes en relación con la reparación a víctimas, sirvieron de referencia para Van Boven, pero en mayor medida para Bassiouni, el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad,<sup>401</sup> presentado en 1997 por el Relator Especial sobre la cuestión de la impunidad Louis Joinet. Concerniente al Conjunto de principios de Joinet, en éste se plantea que los derechos de las víctimas, como sujetos de derecho, se dividen en tres categorías: el derecho a saber de la víctima, el derecho de la víctima a la justicia y el derecho a la reparación de la víctima.

Cabe resaltar que el tema de la impunidad cobra importancia en el análisis de los procesos de reparación. Y es que la impunidad tiene efectos devastadores para las víctimas de las violaciones,<sup>402</sup> pues no solo genera frustración y decepción en ellos y sus familiares, sino que se convierte en una dificultad tangible en la reparación, ya que los perpetradores de las violaciones no serán juzgados ni condenados.

---

<sup>401</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)*, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

<sup>402</sup> F. GOMEZ ISA, “Justicia y reparación para las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” cit.

En cuanto al derecho a saber de las víctimas, se hace énfasis no solo en el derecho individual que cada víctima y familiares tienen de saber que sucedió, sino también un derecho colectivo que tiene como propósito evitar que se reproduzcan en el futuro violaciones a los derechos humanos. En contrapartida al reconocimiento de este derecho, se determina la obligación del Estado del deber de la memoria, en el cual el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado por medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que concierne al Estado. Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas.<sup>403</sup>

Por su parte conforme al derecho de la víctima a la justicia, se establecen obligaciones a los Estados en el ámbito de administración de la justicia. Entre las obligaciones encontramos la de investigar las violaciones de derechos humanos, perseguir a los perpetradores, y si se determina la culpabilidad de éstos, a garantizar una sanción. De igual forma en este punto, se constituyen principios sobre la delimitación de las competencias entre las jurisdicciones nacionales e internacionales, mientras también se establecen una serie de mecanismos restrictivos enfocadas hacia la lucha contra la impunidad, como la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la prohibición de amnistías, el asilo, la extradición, los procesos en ausencia, las leyes de arrepentimiento, los tribunales militares, la inmovilidad de los jueces, entre otros.

En cuanto al derecho de reparación, el informe de Joinet manifiesta que toda violación de los derechos humanos hace nacer un derecho a la reparación en favor de la víctima, de sus parientes o compañeros que implica, por parte del Estado, el deber de reparar y la facultad de dirigirse contra el autor.<sup>404</sup> Este derecho comprende preceptos sobre los procedimientos de reparación y el ámbito de aplicación, determinado en sentido individual y social, y

---

<sup>403</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)*, cit., principio 2.

<sup>404</sup> Ibid., principio 33.

garantías de no repetición de las violaciones. El informe es actualizado, aunque principalmente se mantienen los mismos conceptos que en el original, por la experta independiente Diane Orentlicher y es presentado en la Comisión de Derechos Humanos en su 61 periodo de sesiones el 8 de febrero de 2005.<sup>405</sup>

### 3.2.3 Revisión de los principios y directrices básicos por M. Cherif Bassiouni

Con base en los proyectos anteriores, en otros informes y documentos, en las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en las observaciones de distintos gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, Bassiouni elabora la versión final de los “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”.<sup>406</sup>

El documento presenta una estructura diferente, incluyendo el cambio de nombre el cual hace referencia no solamente al derecho de reparación, sino también al derecho a interponer recursos para obtener reparación. Se establece la obligación de respetar, asegurar que se respeten y que se apliquen las normas internacionales de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estas obligaciones son las establecidas en los tratados, en el derecho internacional consuetudinario y las incorporadas los ordenamientos jurídicos internos. Se hace énfasis en la necesidad que tienen los Estados de asegurar que harán compatible su derecho interno con las obligaciones internacionales que estos han adquirido.

En cuanto al alcance de la obligación, se determina el contenido de la obligación internacional al mencionar que ella comprende la adopción de mecanismos preventivos, de investigación de las violaciones, la toma de medidas contra los perpetradores, brindar acceso a la justicia, proporcionar recursos y facilitar el proceso de reparación. Igualmente,

---

<sup>405</sup> Vid. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Impunidad, Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, cit.

<sup>406</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, 18 de enero de 2000.

se estipula que las violaciones de normas internacionales de derechos humanos y derechos internacional humanitario constituyen crímenes en el derecho internacional. Se establece, a grandes rasgos, la obligación de los Estados de investigar, y en su caso, enjuiciar y castigar a los autores y a cooperar con otros Estados y con los procesos de los órganos judiciales internacionales competentes.

Por su parte, se define ampliamente el concepto y la condición de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se define a la víctima como “la persona que, individual o colectivamente, como resultado de actos u omisiones que violan las normas internacionales de derechos humanos o el derecho internacional humanitario, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales”.<sup>407</sup> Igualmente se pone de manifiesto que se podrán considerar como víctimas a “los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como a las personas que, al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos”.<sup>408</sup>

Sobre el tratamiento de las víctimas, se plantea que deberán ser tratadas tanto por el Estado como por las organizaciones intergubernamentales, las ONGs, las empresas privadas y demás agentes de la sociedad, con compasión y respeto por su dignidad y sus derechos. Asimismo, se expresa que “el Estado deberá velar por que, en la medida de lo posible, el derecho interno prevea para las víctimas de violencias o traumas una consideración y atención especiales, a fin de evitar que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a lograr justicia y reparación den lugar a un nuevo trauma”.<sup>409</sup>

Es así entonces, que se reafirma la importancia de un enfoque psicosocial en cuanto a procesos de reparación a víctimas se refiere, por este motivo es primordial la participación y el reconocimiento de las víctimas dentro de estos procesos, ya que se genera en ellas un

---

<sup>407</sup> Ibid., principio 8.

<sup>408</sup> Ibid.

<sup>409</sup> Ibid., principio 10.

sentimiento de apropiación del proceso de reparación. Esto es algo esencial cuando lo que está en juego es la autoestima de las víctimas, víctimas que han sufrido mucho y cuya recuperación psicológica descansa en buena parte en ese sentimiento de reconocimiento público y de participación.<sup>410</sup>

Bassiouni agrega el derecho de las víctimas a acceder a la justicia (que comprende de los principios 12 al 14). Este incluye todas las acciones judiciales, administrativas o de otra naturaleza, sean estas nacionales o internacionales. Asimismo, establece que el derecho interno debe procurar garantizar el derecho al acceso a la justicia, sea este individual o colectivo.

De los principios 15 al 20 se establece el derecho de las víctimas a una reparación, en este se especifican las características de la reparación, sus condiciones, las obligaciones del Estado frente a este, globalizando las variables determinantes para que se lleve a cabo un proceso de reparación. Las formas de reparación se encuentran comprendidas desde el principio 21 hasta el 25, guardando el contenido básico de los principios de Van Boven.

Los últimos dos principios que incluye Bassiouni se refieren al acceso público a la información y a la no discriminación entre las víctimas. El primero se refiere a que los Estados deberán proporcionar mecanismos para informar al público en general, y en particular a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, de los derechos y recursos presentes en el documento; y el segundo establece que la aplicación e interpretación de estos principios y directrices, se llevará a cabo conforme al derecho internacional de los derechos humanos, sin hacer distinción alguna por “motivos de raza, color, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, creencia política o religiosa, origen nacional, étnico o social, situación económica, nacimiento, situación familiar o de otra índole o impedimento físico”.<sup>411</sup>

---

<sup>410</sup> F. GOMEZ ISA, “Justicia y reparación para las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” cit.

<sup>411</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, cit., principio 27.

### 3.2.4 Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (RES 60/147)

En el año 2000, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas le solicita al Secretario General que hiciera público este documento para que los Estados miembros, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y demás entidades consultivas del Consejo Económico y Social presentaran observaciones sobre este. Finalmente el 21 de marzo de 2006, después de más de 20 años de trabajos y gestiones, a través de la resolución A/RES/60/147, la Asamblea General adopta los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones,<sup>412</sup> habitualmente reconocidos como los Principios Van Boven/Bassiouni.

En general este documento mantiene el contenido básico de los principios de Bassiouni, pero se le adicionan o realizan cambios a algunos principios. En la sección I que se refiere a la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se determina que el Estado debe asegurar que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales.<sup>413</sup>

Adicionalmente se incluye el principio 16, el cual establece que los Estados han de procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones,<sup>414</sup>

---

<sup>412</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, cit.

<sup>413</sup> Ibid., principio 2d.

<sup>414</sup> Ibid., principio 16.

principio que se materializa institucionalmente en la actualidad en países como Perú, Timor Oriental, Liberia, entre otros. Por último, este documento dispone de dos secciones adicionales, la XII que hace referencia al efecto no derogatorio de estos principios y la XIII donde se estipulan los derechos de otras personas.<sup>415</sup>

Y aunque existen mecanismos nacionales, regionales e internacionales que proveen algunas provisiones en relación con la reparación, hay varias razones por las cuales no siempre pueden asegurar el acceso de las víctimas a la reparación. Solo algunos documentos son vinculantes jurídicamente, mientras otros como los principios y directrices básicos son vinculantes en la medida que sean reflejados como principios consuetudinarios del derecho internacional, aunque pueden llegar a convertirse en tratados o convenios. E inclusive los tratados vinculantes que proporcionen reparación a las víctimas pueden estar limitados bajo la voluntad de los Estados.<sup>416</sup>

Por su parte, el tema de la implementación es vital. Si un instrumento internacional designa un organismo para la vigilancia del cumplimiento del mismo, un estado debe explícitamente reconocer su competencia mediante su ratificación.<sup>417</sup> En muchos casos los Estados que perpetran las violaciones no reconocen la jurisdicción de los instrumentos, y adicionalmente muchos de estos Estados no pueden proporcionar reparación a las víctimas debido a la falta de recursos. Por esto, lo la clave es la implementación de los programas nacionales de reparación, así como la voluntad de los Estados para llevarlos a cabo a través del tiempo y de manera sostenida.

Para finalizar hay que concretar que este documento, en la actualidad, es la culminación que ha dado lugar a todo el entramado internacional del derecho a la reparación. A pesar que su desarrollo debe continuar y hay todavía mucho por hacer en esta materia, la resolución 60/147 significa la consolidación de un amplio esfuerzo normativo y político en el marco del derecho internacional.

---

<sup>415</sup> Ibid., principio 26 y 27.

<sup>416</sup> M. BASSIOUNI, "International recognition of victim's rights", cit., p.246.

<sup>417</sup> Ibid.

#### **4. Las reparaciones**

La necesidad de reparar debe ser entendida como un requisito de la justicia para restaurar los daños y perjuicios causados por actos injustos.<sup>418</sup> Mientras la justicia retributiva se centra en identificar a los perpetradores y castigarlos por los abusos cometidos, la justicia restaurativa o reparadora se enfoca en la víctima de tales abusos, reconociendo su sufrimiento y necesidades, e intentando remediar el mal que se le ha causado.<sup>419</sup> La creciente importancia de la justicia restaurativa se ha generado debido al reconocimiento de que como respuesta a crímenes de lesa humanidad la justicia debe llevar a cabo algo más de lo que Hoyle denomina “una aplicación miope de los paradigmas retributivo y disuasorio de la justicia tradicional”;<sup>420</sup> y que en su lugar, deben aplicarse herramientas de justicia dirigidas no solo a castigar a los culpables, sino a reparar a las víctimas, restablecer su dignidad, reconstruir comunidades y entornos sociales que han sido destruidos.

Entonces surge la pregunta de si en situaciones donde se han cometido violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la justicia restaurativa puede ser más efectiva por medio de litigios y sentencias basadas en demandas individuales o a través de la implementación de programas y medidas masivas.

##### **4.1 Formas de reparación en el derecho internacional**

Desde la Segunda Guerra Mundial la necesidad de reparar se ha convertido progresivamente en un tema central en el ámbito de los derechos humanos. Reconociendo el derecho de las víctimas a obtener reparaciones, la comunidad internacional expresa su

---

<sup>418</sup> T. VAN BOVEN, “The need to repair”, *The International Journal of Human Rights*, vol.16, núm.5, June, 2012, p.694.

<sup>419</sup> J. GARCÍA-GODOS, “Victim reparations in the Peruvian truth commission and the challenge of historical interpretation”, cit., p.73.

<sup>420</sup> C. HOYLE, “Can international justice be restorative justice? The role of reparations”, en N. PALMER et al. (ed.), *Critical perspective in transitional justice*, Intersentia, 2012, p.190.



solidaridad con ellas y reafirma los principios de rendición de cuentas, justicia y del Estado de derecho.<sup>421</sup> La implementación de este derecho requiere un esfuerzo común por parte de las autoridades, de los grupos de la sociedad civil y de las instituciones que trabajan y representan a las víctimas.<sup>422</sup>

Se debe partir del hecho de que existen diferencias entre las reparaciones que se adjudican como resultado de casos individuales, especialmente en el marco del derecho internacional, y a las que se proveen en el marco de procesos de justicia transicional.<sup>423</sup> Teniendo esto en cuenta, se hace referencia en primer lugar al contexto jurídico, particularmente el del derecho internacional, en el cual el término es utilizado en un sentido amplio para referirse a todas aquellas medidas que pueden ser empleadas para ofrecer reparación/compensación por el daño o perjuicio sufrido por la víctima como consecuencia de un crimen específico.<sup>424</sup>

Como lo expresa De Greiff, el mismo significado del término reparación es objeto de debate,<sup>425</sup> la reparación en este contexto se relaciona con el propósito específico de alcanzar la justicia para un individuo dentro un marco jurídico. En el derecho internacional el alcance del concepto de reparación abarca cinco categorías: la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

---

<sup>421</sup> M. BASSIOUNI, “International recognition of victim’s rights”, cit., 279.

<sup>422</sup> T. VAN BOVEN, “The need to repair”, cit., p.696.

<sup>423</sup> Este tipo de reparaciones que representan un conjunto de medidas reparadoras que ofrecen beneficios directos a las víctimas se revisará más adelante y es lo que se denomina “programas masivos de reparación administrativa”.

<sup>424</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*, Oxford University Press, Nueva York, 2007, p.154.

<sup>425</sup> P. DE GREIFF, *The role of reparations in transitions to democracy*, Justice and the World Economy Achieving Global Justice Seminar Series, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, New York, 2004, p.1. Disponible en:

[http://www.carnegiecouncil.org/resources/articles\\_papers\\_reports/4980.html/\\_res/id=sa\\_File1/4980\\_Greiff\\_Reparations\\_and\\_Democracy.pdf](http://www.carnegiecouncil.org/resources/articles_papers_reports/4980.html/_res/id=sa_File1/4980_Greiff_Reparations_and_Democracy.pdf)

#### 4.1.1 Restitución

Su objeto es “es revertir o dejar sin efectos el hecho (acción u omisión) que causó la violación”,<sup>426</sup> es restablecer el *status quo ante*, es decir restablecer a la situación que hubiera existido si no se hubiera llevado a cabo la violación.

Por su parte, el TEDH considera que la reparación es una consecuencia de la naturaleza jurídicamente vinculante de las sentencias que promulga y que la *restitutio in integrum* es la forma principal de reparación: “El tribunal establece que en virtud del artículo 53 del Convenio, las partes contratantes se han comprometido a acatar la decisión del tribunal en cualquier caso en el que sean partes; además, artículo 54 estipula que la sentencia del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros que supervisará su ejecución. De esto se deduce que una sentencia en la que el Tribunal determine la comisión de una violación impone al Estado demandado la obligación jurídica de poner fin a la violación y reparar las consecuencias de manera que pueda restablecer lo más rápido posible la situación que existía antes de la violación”.<sup>427</sup>

Dependiendo de las circunstancias, la restitución incluye medidas que buscan restablecer derechos tales como la libertad y ciudadanía, condiciones como la situación familiar y social de la víctima, la restitución de bienes y propiedades, del empleo, entre otros. Entre la restitución de derechos se encuentra el de reabrir procesos penales, situación muy común en el período posterior a regímenes autoritarios. Cuando una violación ha sido causada por una determinación del poder judicial, debe otorgarse la reparación y las consecuencias de la decisión judicial deberán ser anuladas, inclusive cuando se refiera a una sentencia de carácter vinculante. La jurisprudencia internacional ha reconocido que las personas

---

<sup>426</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, Ginebra, 2006, p.120.

<sup>427</sup> TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Papamichalopoulos y otros Vs. Grecia*, Sentencia del 31 de octubre de 1995, Serie A No. 330- B, párr. 34.

condenadas por un error judicial tienen derecho a un nuevo juicio o a la conmutación de la pena.<sup>428</sup>

La Corte Interamericana ha decidido que se procese de nuevo a personas que habían sido condenadas violando los principios del juicio justo.<sup>429</sup> Mientras el TEDH ha establecido, de acuerdo con el artículo 41 del CEDH, que cuando el Tribunal determina que un individuo ha sido condenado por un tribunal que no fue independiente ni imparcial, la forma de reparación más adecuada sería asegurarse de concederle un debido proceso ante un nuevo tribunal independiente e imparcial.<sup>430</sup>

En cuanto a la restitución de la libertad, en los casos de detención que se violan las normas internacionales de derechos humanos o en las penas de prisión resultantes de juicios injustos, la jurisprudencia internacional en general, el TEDH y la Corte IDH específicamente, han decretado que se debe poner en libertad a las personas.<sup>431</sup>

La reintegración del empleo también hace parte de las posibles reparaciones a las víctimas en el marco del derecho internacional. Se puede considerar que en el caso de la pérdida del trabajo como consecuencia de una violación de los derechos humanos, el Estado debe otorgar la *restitutio in integrum* en forma de reintegración en el empleo.<sup>432</sup> Si lo anterior no es posible, debe garantizársele un puesto laboral similar y como último recurso, las autoridades competentes deberán otorgar una indemnización por la pérdida del empleo.<sup>433</sup>

---

<sup>428</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.122.

<sup>429</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Castillo Petrucci y otros Vs. Perú*, Sentencia del 30 de mayo de 1999, Serie C No. 52, párr. 217-221.

<sup>430</sup> TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Üküncü y Günes Vs. Turquía*, Sentencia del 18 de diciembre de 2003, párr. 32. *Caso Gençel Vs. Turquía*, Sentencia del 23 de octubre de 2003, párr. 27. *Caso Somogyi Vs. Italia*, Sentencia del 18 de mayo de 2004, párr. 86.

<sup>431</sup> Vid. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Assanidze Vs. Georgia*, Sentencia del 8 de abril de 2004, párr. 202-203. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso de Loayza Tamayo Vs. Perú*, Sentencia del 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, punto resolutivo 5.

<sup>432</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, Ginebra, 2006, p.129.

<sup>433</sup> Vid. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Loayza Tamayo c. Perú (Reparaciones)*, cit., 42, párr. 113-116.

#### 4.1.2 Compensación/indemnización

La compensación es un componente esencial de las reparaciones, especialmente a nivel internacional. En el campo de los derechos humanos, cada daño -sea económico, mental o moral- que sea resultado de una violación del derecho internacional de los derechos humanos o del DIH y que pueda ser contabilizado debe ser compensado.<sup>434</sup>

Muchos de los tratados de derechos humanos contienen un artículo donde se especifica el derecho individual a una indemnización por violaciones de los derechos humanos; mientras en otros, éste derecho se toma de otras formulaciones como reparación o justa satisfacción.<sup>435</sup> Por su parte, el derecho a una indemnización se encuentra estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos<sup>436</sup> en su artículo 10; mientras en la Convención Europea de Derechos Humanos aparece en el artículo 41 la disposición de una satisfacción equitativa.<sup>437</sup>

En el Derecho internacional humanitario también se establece el derecho a la indemnización, contemplado en el artículo 91 del I Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra, determina que “la Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello”.<sup>438</sup> Igualmente, el artículo 68 del III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra señala el procedimiento que deben seguir los prisioneros de guerra para formular una solicitud de indemnización “a causa de heridas o de cualquier otra

---

<sup>434</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*, cit., p.154.

<sup>435</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.131.

<sup>436</sup> ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, cit.

<sup>437</sup> CONSEJO DE EUROPA, *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales*, cit.

<sup>438</sup> COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, *Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales*, cit.

invalidez resultante del trabajo o acerca de los efectos personales, de las cantidades o de los objetos de valor que le haya confiscado la Potencia detenedora”.<sup>439</sup>

En cuanto a la jurisprudencia, la Corte IDH y el TEDH han dictado numerosas sentencias donde se especifican indemnizaciones de montos específicos por concepto de daños que dividen en pecuniarios y no pecuniarios.<sup>440</sup> Los daños materiales causados por las violaciones de los derechos humanos hacen referencia a la pérdida de ganancias reales o futuras, bienes muebles e inmuebles, gastos de asistencia legal, de asistencia médica y psicológica, investigaciones o seguimientos de litigios, entre otros.

En relación con las indemnizaciones de daños materiales, la jurisprudencia internacional está de acuerdo en otorgar a las víctimas una indemnización por lucro cesante.<sup>441</sup> El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que “debe existir una conexión causal entre la reclamación por daños y perjuicios formulada por el peticionario y la violación de la Convención y que esto puede, si hubiere lugar a ello, comprender la indemnización por lucro cesante”.<sup>442</sup> La Corte IDH estipula las indemnizaciones, con métodos más detallados, a través de “un sistema de equilibrio que incluya la edad de la víctima, la expectativa de vida de la misma, sus ingresos reales y potenciales y el número de sus dependientes y sucesores”.<sup>443</sup> Un punto clave a tener en cuenta es que en la medida en que se pueda demostrar la existencia de un daño material, sin tener la víctima que proporcionar pruebas puntuales de las cifras exactas, se otorga la indemnización con base al principio de la equidad.<sup>444</sup>

---

<sup>439</sup> COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, *III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra*, 12 de agosto de 1949.

<sup>440</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.135.

<sup>441</sup> *Ibid.*, p.136.

<sup>442</sup> Vid. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Selçuk y Asker Vs. Turquía*, Sentencia del 24 de abril de 1998, Informes 1998-II, párrafo 112. *Caso Ipek Vs. Turquía*, Sentencia del 17 de febrero de 2004.

<sup>443</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Neira Alegria y otros Vs. Perú*, Reparaciones y costas, 19 de septiembre de 1996, párr.11.

<sup>444</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.143.

Por su parte las indemnizaciones por daños inmateriales, aunque muy complejas al momento de evaluar, se otorgan por una cantidad específica en presunción de dichos daños morales. La Corte Interamericana desde su primera sentencia sobre reparaciones ha concedido indemnizaciones compensatorias por daños inmateriales.<sup>445</sup> En cuanto al TEDH, este ha ordenado indemnizar a las víctimas por daños inmateriales cuando se establece que han sufrido angustias, penas u otros daños mentales.<sup>446</sup>

Aunque en la mayoría de los casos las compensaciones son otorgadas a individuos, la Corte IDH también ha reconocido circunstancias en las se estipula la indemnización para un colectivo. En el paradigmático caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua,<sup>447</sup> la Corte determinó una violación del derecho de la comunidad indígena al respeto a sus tierras y sus valores tradicionales, y estableció la reparación, incluyendo una compensación por daños morales que debía ser dada a la comunidad en su conjunto.<sup>448</sup>

#### 4.1.3 Rehabilitación

Las víctimas y supervivientes deben enfrentar la realidad interna de lo que han perdido y de la imposibilidad de reemplazarlo externamente.<sup>449</sup> Por este motivo, la rehabilitación debe estar destinada a ayudar física y mentalmente a la víctima para que se sobreponga del daño que le causó la violación.<sup>450</sup> Esta forma de reparación incluye todo el tratamiento médico y clínico futuro que esté dirigido a los cuidados de las heridas a corto y largo plazo,

---

<sup>445</sup> Entre muchos de los casos vid. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*, cit. *Caso El Amparo Vs. Venezuela*, Reparaciones, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28. *Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109, párr. 247. *Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala*, Reparaciones y Costa, Sentencia de 19 de noviembre 2004, Serie C No. 116, párr. 80. *¿Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párr. 282.. *Caso La Cantuta Vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162, párr. 216.

<sup>446</sup> Vid. *Caso Ipek Vs. Turquía*, cit., párr.237.

<sup>447</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua*, Sentencia, Reparaciones y Costes, 31 de agosto de 2001.

<sup>448</sup> A. CARRILLO, “Justice in context: the relevance of Interamerican human rights law and practice to repairing the past” cit., p.524.

<sup>449</sup> B. HAMBER, “Narrowing the micro and macro: a psychological perspective on reparations in societies in transition” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit, p.580.

<sup>450</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.159.

diferenciándose de una compensación por gastos médicos y profesionales pasados.<sup>451</sup> La rehabilitación puede incluir o no tratamientos médicos y psicológicos, así como servicios sociales y legales.

En la normativa internacional, la rehabilitación está garantizada en varios tratados y declaraciones. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su artículo 14 dispone que “Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible”.<sup>452</sup> En este sentido, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha recomendado que “se establezcan mecanismos y programas concretos para proporcionar rehabilitación a todas las víctimas, por parte del ministerio de salud o de organizaciones especializadas en suministrar rehabilitación médica, psicológica y social”.<sup>453</sup>

Las medidas de rehabilitación se consideran con frecuencia en las sentencias de reparación y en ocasiones se trasponen los dictámenes de proporcionar indemnización como medida de rehabilitación con las de que el Estado directamente adopte medidas de rehabilitación.<sup>454</sup> La Corte Interamericana en el caso Aloeboetoe, dispuso la reapertura de un dispensario médico en un poblado afectado por graves violaciones de derechos humanos.<sup>455</sup> Y en el caso de la Masacre Plan de Sánchez, ordenó que el Estado guatemalteco concediera ayuda médica y

---

<sup>451</sup> A. CARRILLO, “Justice in context: the relevance of Interamerican human rights law and practice to repairing the past” cit., p.512.

<sup>452</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*, cit.

<sup>453</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, Misión a Túnez, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/19/61/Add.1, 2 de febrero de 2012.

<sup>454</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.153.

<sup>455</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam*, Reparaciones, Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 96.

medicamentos a las víctimas e instaurara un programa de tratamiento psicológico y psiquiátrico gratuito.<sup>456</sup>

#### 4.1.4 Satisfacción

Cuando el daño no puede ser reparado solamente a través de la restitución o la compensación, el Estado responsable está en la obligación de proporcionar “satisfacción” por el daño ocasionado a la víctima. La satisfacción consiste en una declaración oficial o una decisión judicial que tiene por objetivo devolver a la víctima su dignidad, su reputación y sus derechos, incluye medidas como el cese de las violaciones, la verificación de los hechos, las disculpas públicas, la aceptación de responsabilidad, la identificación de los muertos o los restos de los desaparecidos, la entrega de los restos a sus familiares, las conmemoraciones y homenajes a las víctimas.<sup>457</sup>

Como lo expone Carrillo, lo más importante es que el mismo Estado tome los pasos para proporcionar satisfacción a través de actos o labores de naturaleza o repercusión pública, que tenga efectos como recuperar la memoria de las víctimas, restablecer su reputación, consolar a los familiares de las víctimas o que transmitan un oficial de condena por las violaciones de los derechos humanos en cuestión y que haya un compromiso hacia esfuerzos que aseguren que estos abusos no ocurrirán en el futuro.<sup>458</sup> Si bien la compensación por daños inmateriales es una forma de reparación económica por sufrimiento físico o mental, angustia, perjuicio a la reputación o dignidad u otros daños morales, la satisfacción es una forma de reparación no económica diferente por daños morales o daños a la dignidad o la reputación.<sup>459</sup>

---

<sup>456</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso de la Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala*, cit., párr. 106-108, 117.

<sup>457</sup> Vid. NACIONES UNIDAS, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, cit., p.9. P. DE GREIFF, *The role of reparations in transitions to democracy*, cit.

<sup>458</sup> A. CARRILLO, “Justice in context: the relevance of Interamerican human rights law and practice to repairing the past” cit., p.526.

<sup>459</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.155.



En relación con la satisfacción mediante decisiones judiciales, en muchos casos los tribunales internacionales han establecido que una sentencia por sí misma constituye una forma de satisfacción. A pesar de esto, la Corte IDH ha considerado que graves violaciones de derechos humanos, la sentencia no es suficiente para constituir una reparación adecuada y los abusos cometidos requieren una indemnización.<sup>460</sup> Las disculpas, el reconocimiento público y la aceptación de responsabilidad por parte del Estado son medidas importantes de reparación, el reconocer que esos hechos no son éticamente neutrales es una parte esencial de la satisfacción.<sup>461</sup> La Corte Interamericana estipula que sus sentencias deben ser publicadas en el diario oficial del país correspondiente, así como que su publicación, en los casos requeridos, sea traducida al idioma oficial de la persona más afectada.<sup>462</sup>

Por otra parte, el alcance de la búsqueda y la entrega de los restos, como una medida de satisfacción primordial cuando se trata de personas desaparecidas o asesinadas. La búsqueda de los desaparecidos tiene como objetivo determinar el destino de las víctimas y la ubicación y entrega de los restos.<sup>463</sup> Esta ha sido, y sigue siendo, la lucha de miles y miles de familiares en América Latina y otras partes del mundo donde se han cometido graves violaciones de los derechos humanos y el DIH.

Finalmente, otra de las medidas de satisfacción es la conmemoración pública. Esta es especialmente importante en casos de violaciones de los derechos colectivos o de un número significativo de personas, o en casos de violaciones ocurridas hace mucho tiempo. La conmemoración pública en estas circunstancias tiene un valor simbólico y constituye

---

<sup>460</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso *El Amparo Vs. Venezuela*, cit., párr. 35. Caso *Neira Alegría y otros Vs. Perú*, Reparaciones, cit., párr. 56. Caso *Castillo Páez Vs. Perú*, Reparaciones, Sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C No. 43, párr. 84. Caso *Blake Vs. Guatemala*, Reparaciones, Sentencia del 22 de enero de 1999, párr. 55. Caso *Panel Blanca Vs. Guatemala*, Reparaciones, Sentencia del 25 de mayo de 2001, Serie C No. 76, párr. 105.

<sup>461</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.158.

<sup>462</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso *Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, Reparaciones, Sentencia del 27 de febrero de 2002, Serie C No. 92, párr. 119. Caso *de Barrios Altos Vs. Perú*, cit., párr. 44. Caso *Cantoral Benavides Vs. Perú*, Reparaciones, Sentencia del 3 de diciembre de 2001, Serie C No. 88, párr. 79. Caso *Bámaca Velásquez Vs. Guatemala* Reparaciones, Sentencia del 22 de febrero de 2002, Serie C No. 91, párr. 84.

<sup>463</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ecuador, Quito, 2009, p. 322.

una medida de reparación para las generaciones presentes y futuras.<sup>464</sup> En esta línea, la Corte IDH ha determinado la conmemoración pública en casos individuales tales como dar el nombre de las víctimas a un establecimiento educativo, a una calle o realizar un monumento en su honor.<sup>465</sup>

#### 4.1.5 Garantías de no repetición

Según el derecho internacional, el primer deber de un Estado que ha transgredido la ley es poner fin al acto ilícito, si persiste, y garantizar que los hechos no volverán a suceder. Prevenir los abusos y garantizar su “no repetición” involucran varias medidas. Estas disposiciones involucran cambios estructurales, que usualmente pueden lograrse a través de medidas legislativas. Por esta razón, la jurisprudencia internacional ha insistido en la obligación de adoptar cambios legislativos como una consecuencia de sus decisiones, informes o sentencias.<sup>466</sup>

Debido a que muchas de estas medidas tienen relación con cambios estructurales, el efecto de la voluntad política es muy evidente en ellas. En ausencia de un contexto que favorezca los cambios hacia Estados con un mayor nivel de democracia, muchas de estas medidas “se enfrentan a reacciones negativas, a planes poco realistas o se convierten en excesivamente genéricas”.<sup>467</sup> Otras medida de no repetición pueden ser las reformas institucionales, como el proceso de descalificación que se detalló anteriormente, las reformas en el sector seguridad, la desmovilización de los grupos armados ilegales y la rehabilitación de niños soldados. Adicionalmente se encuentran mecanismos como la protección especial de personas que se encuentran en riesgo de sufrir abusos como los defensores de derechos

---

<sup>464</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.158.

<sup>465</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia*, cit., párr. 122. *Caso Barrios Altos Vs. Perú*, cit., párr. 44.

<sup>466</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.104.

<sup>467</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 374.

humanos,<sup>468</sup> personal médico, periodistas y profesionales de otros campos afines; la educación en derechos humanos para miembros de las fuerzas policiales y militares, personas que trabajan en la profesión legal o en centros penitenciarios como forma de prevenir futuras violaciones.<sup>469</sup>

La Corte IDH ha ordenado la adopción de medidas legislativas para cumplir con la CADH<sup>470</sup> o en su defecto derogar una ley como sucedió con el paradigmático caso de Barrios Altos Vs. Perú que se mencionará más adelante. Por su parte, el Tribunal Europeo en el 2004 ordenó al Estado polaco que adoptara medidas legislativas debido a que su legislación había llevado a una violación del CEDH.<sup>471</sup> Se debe resaltar, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desempeñado un papel fundamental en el posicionamiento de los derechos de las víctimas en el derecho internacional. Su desarrollo como un sistema enfocado hacia las víctimas ha sido reconocido internacionalmente y en el mundo de las reparaciones ha demostrado ser el sistema regional más comprensivo y progresivo. En comparación con otros organismos de derechos humanos, la Corte Interamericana ha consolidado el ámbito de las reparaciones a través de su jurisprudencia, logrando con esta el procesamiento y castigo de perpetradores; la identificación de restos humanos; el mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas; poner en libertad a personas detenidas ilegalmente; la reforma de leyes nacionales y el otorgamiento de becas de estudios para que las víctimas pudieran cumplir su proyecto de vida.<sup>472</sup>

Lo anterior no significa que no existan espacios o esfuerzos por parte de otros organismos internacionales que contribuyan a la consolidación de una normativa internacional en

---

<sup>468</sup> Vid. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*, Asamblea General, resolución 64/163, 28 de Julio de 2011, párr.10.

<sup>469</sup> COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, cit., p.111.

<sup>470</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*, cit., párr. 164. *Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador*, Reparaciones, Sentencia del 20 de enero de 1999, Serie C No. 44, párr. 97-99.

<sup>471</sup> TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, *Caso Broniowski Vs. Polonia*, Sentencia del 22 de junio de 2004, párr.192.

<sup>472</sup> D. CONTRERAS-GARDUÑO, “Are all the victims entitled to reparations? The case of the IASHR”, en A. MIHR (ed.), *Transitional justice: between criminal justice, atonement and democracy*, SIM SPECIAL 37, Utrecht University, Julio, 2012, p.123.

reparaciones cada vez más fuerte y coherente. El Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Africano, la Corte Penal Internacional, son instancias que han realizado aportes, a nivel jurídico y político, para lograr el anterior objetivo.

Sin objeto de profundizar en el papel que pueden jugar las reparaciones dentro de la CPI posterior a su primera sentencia condenatoria, pero con la necesidad de tratarlo, se debe subrayar el desafío que enfrenta este organismo en relación con las reparaciones y las víctimas a partir de este momento. Aunque el artículo 75(1) estipula que “la Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda”, la habilidad de la corte para implementar y hacer cumplir esos principios es limitada.<sup>473</sup>

El llevar a cabo ciertas medidas de reparación no solamente requiere de la aquiescencia del Estado, por ejemplo para algunas medidas de satisfacción (el cese de las violaciones, el reconocimiento de responsabilidad, las disculpas públicas, entre otras), sino que el cuestionamiento también va dirigido a que si la CPI puede instituir mecanismos efectivos que cumplan con los exigencias de la victimología responsable, teniendo en cuenta el problema socioeconómico real de restablecer el orden social en la vida de las víctimas y las comunidades afectadas.<sup>474</sup>

En la propuesta pública sobre reparaciones presentado por la Sección de Reparaciones y Participación de las Víctimas (y otros)<sup>475</sup> a la CPI en acerca de la situación en la República Democrática del Congo en el caso del fiscal contra Thomas Lubanga Dyilo, se planteó que

---

<sup>473</sup> C. MCCARTHY, “Reparations under the Rome Statute of the International Criminal Court and reparative justice theory”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol.3, issue 2, 2009, p.270.

<sup>474</sup> J. LOMBAKU, “La CPI bajo escrutinio luego de su primer veredicto de culpabilidad: ¿Cómo podemos garantizar reparaciones significativas?”, *Boletín del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas*, REDRESS, edición 20, primavera, 2012, p.5.

<sup>475</sup> Ms. Brigid Inder, Women's Initiatives for Gender Justice, Mr. David Tolbert, International Center for Transitional Justice, Ms. Sandra Baffoe-Bonni, UNICEF, Mr. André Marie Kito Masimango, Fondation Congolaise pour la Promotion des Droits Humains et la Paix, Mr. Jean-Phillippe Kot, Avocats sans Frontières.

aun conociendo las limitaciones inherentes al sistema de reparaciones del Estatuto de Roma y su ausencia de recursos, se sugirió que éstas se otorgaran priorizando a las víctimas inmediatas y directas de los crímenes; pero que al mismo tiempo, la Corte debe asegurarse que el universo más amplio de víctimas en esta situación, incluyendo las víctimas directas que todavía no han podido solicitar reparaciones a la corte tengan la oportunidad y los medios para hacerlo.<sup>476</sup>

Finalmente, con respecto al caso anterior, cabe anotar que en la sentencia dictada recientemente por la CPI sobre las reparaciones en el caso contra Thomas Lubanga,<sup>477</sup> el 7 de agosto del presente año, no se ordenaron reparaciones en concreto, sino que se afirmó que las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio tienen el derecho fundamental a recibir reparaciones, y se trazaron los lineamientos para el proceso de las reparaciones en República Democrática del Congo. En la misma línea que Ruben Carranza, Director del Programa de Reparaciones del ICTJ, “la decisión sobre las reparaciones en el Caso Lubanga deberán ser celebradas, solamente cuando las víctimas reciban la compensación...hay que ir más allá de reconocer este paso como algo histórico, porque para las víctimas puede que todavía este hecho no sea significativo, ya que deben recibir reparaciones”.<sup>478</sup>

#### **4.2 Programas (masivos) de reparación (administrativa)**

El otro contexto en el que se utiliza el término de reparaciones es en el diseño de programas de medidas reparadoras coordinadas con cobertura masiva. En este contexto, y a pesar de las relaciones que puedan tener cada uno de estos programas con otros esfuerzos para alcanzar la justicia, el término es utilizado en un sentido más limitado. Aquí las

---

<sup>476</sup> CORTE PENAL INTERNACIONAL, *Situation in the Democratic Republic of Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Public Submission on reparation issues*, ICC-01/04-01/06, 10 de mayo de 2012, párr.15 y 16.

<sup>477</sup> CORTE PENAL INTERNACIONAL, *Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations*, ICC-01/04-01/06, 7 de agosto de 2012.

<sup>478</sup> R. CARRANZA, *Lubanga reparations decision should be celebrated, but only when victims receive compensation*, Podcast, ICTJ, 13 de agosto de 2012. Disponible en: <http://ictj.org/news/drc-lubanga-reparations-decision-should-be-celebrated-only-when-victims-receive-compensation>

reparaciones se refieren a los intentos de proporcionar beneficios directos a las víctimas de ciertos crímenes.<sup>479</sup>

En una situación de violencia y represión a larga escala, las reparaciones están mejor conceptualizadas como proyectos políticos basado en derechos, que tienen como propósito darle a las víctimas el debido reconocimiento y generar confianza cívica entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y las instituciones del Estado.<sup>480</sup> En este sentido, la reparación es una expresión de un mensaje que se manifiesta en términos concretos, en términos materiales y simbólicos de inclusión y pertenencia.<sup>481</sup> A diferencia de la reparación en el marco del derecho internacional, los programas de reparación están más enfocados en los derechos y el bienestar de las víctimas y supervivientes. Estos son programas administrativos, gestionados generalmente por instituciones del Estado, que tienen la intención de reconocer y dignificar a las víctimas como titulares de derechos humanos.<sup>482</sup>

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,<sup>483</sup> hace énfasis en el término “complejidad” al momento de tratar el tema de los programas de reparaciones. Lo que se quiere expresar en este sentido, es la combinación de diferentes tipos de beneficios. Entonces, un programa de reparación es más complejo en la medida que proporciona mayor número de beneficios y de tipos más diversos que otros programas. Las formas de reparación estipuladas en el derecho internacional, que se revisaron anteriormente, la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las

---

<sup>479</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*, cit., p.155.

<sup>480</sup> R. RUBIO-MARÍN y P. DE GREIFF, “Women and reparations”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol.1, Issue 3, 2007, p.321.

<sup>481</sup> C. CORREA, “Experiencias internacionales de reparaciones económicas” en International Center for Transitional Justice, Instituto de Defensa Legal, *Cómo cuantificar el dolor? Aportes para reparaciones económicas individuales para las víctimas del conflicto armado interno*, Lima, 2010, p.26.

<sup>482</sup> CONSEIL CONSULTATIF DES DROIT DE L’HOMME y INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *The Rabat report. The concept and challenges of collective reparations*, CCDH, ICTJ, febrero, 2009, p.9.

<sup>483</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.22.

garantías de no repetición, se pueden organizar en programas de reparaciones teniendo en cuenta su simplicidad o complejidad.

En este contexto, las dos distinciones fundamentales son entre reparaciones materiales y simbólicas, y entre la distribución individual y colectiva de cada una de estas. Las reparaciones materiales pueden suponer formas de compensación, estas pueden ser económicas o un “paquete de servicios” que puede incluir servicios de educación, salud o vivienda. Mientras, las reparaciones simbólicas pueden incluir disculpas oficiales, el cambio de nombre de lugares públicos, el establecimiento de días de conmemoración, la creación de museos y parques dedicados a la memoria de las víctimas, entre otras medidas.<sup>484</sup>

Las reparaciones como proceso simbólico o como actos materiales, tienen un significado simbólico en sí mismo, ya que se presenta como un mensaje “reparador” enviado por parte del Estado. Por este motivo, es importante que, desde un enfoque incluyente con las víctimas/supervivientes,<sup>485</sup> la aspiración de satisfacer las necesidades psicológicas de éstas haga parte de la ecuación en el debate de las reparaciones, a pesar de que no se puede asegurar su cumplimiento o la forma de medirlo.<sup>486</sup>

Es así, que las reparaciones como acuerdo político deben ser congruentes con la existencia de dos actores, víctimas y perpetradores de las violaciones, especialmente si los últimos continúan manteniendo el poder, sea político, económico o militar. El interés de las víctimas en el nuevo régimen está sujeto a una lucha intensa, ya que supone la construcción de una relación, inclusive si uno de los actores es despreciable o si la relación tiene que ser vista como una necesidad y no como un resultado bien recibido. Lograr la construcción de

---

<sup>484</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.453.

<sup>485</sup> La tendencia actual en el ámbito de la práctica de los derechos humanos es reemplazar el término de víctima por superviviente por la connotación negativa que puede precisamente llevar a “victimizar” a estas personas frente a la sociedad y a ellas mismas. En el próximo capítulo, en el contexto del caso peruano, se hace referencia al término afectado o afectada, que tiene el mismo objetivo des-victimizante. Para efectos de coherencia narrativa se seguirá utilizando en este capítulo el término de víctima.

<sup>486</sup> B. HAMBER, “Narrowing the micro and macro: a psychological perspective on reparations in societies in transition” cit., p.580.

esta relación significa un esfuerzo por parte de las víctimas,<sup>487</sup> un esfuerzo que debe ser reconocido de manera multidimensional por parte de todos los miembros de la sociedad.

#### 4.2.1 Objetivos de los programas de reparación

Los programas de reparación tienen como propósito reparar (parcialmente) graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, antes que violaciones esporádicas o excepcionales. Esto tiene consecuencias de largo alcance, ya que supone un gran universo de potenciales beneficiarios que posiblemente sufrieron múltiples abusos.<sup>488</sup> Las reparaciones no están dirigidas sólo a hacer justicia para las víctimas, sino también a restablecer los sistemas normativos que se debilitan durante los conflictos armados o regímenes autoritarios. Por este motivo, como lo expone Minow, el objetivo de una justicia receptiva debe ser reparar la injusticia, compensar ese hecho, y hacer los cambios correctivos para construir relaciones y orientar las acciones futuras.<sup>489</sup>

Siguiendo la propuesta de Pablo De Greiff, a la que se hizo referencia previamente en el marco de las finalidades de la justicia transicional, la justicia en las reparaciones no debe pensarse términos de compensación en proporción al daño, sino en términos de crear un “paquete” de beneficios que promueva tres valores: que los beneficios proporcionen cierto grado de reconocimiento a las víctimas y no solo en virtud del hecho de que son víctimas, sino ciudadanos y ciudadanas; que los beneficios promuevan el desarrollo de la confianza cívica entre las víctimas y las instituciones bajo las que estas viven; y que los beneficios promuevan la solidaridad social.<sup>490</sup>

Como se mencionó anteriormente, para las víctimas las reparaciones constituyen una manifestación de la seriedad del Estado y de sus ciudadanos en un esfuerzo para restablecer

---

<sup>487</sup> E. BARKAN, “Reparation: a moral and political dilemma” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*, cit., p.17.

<sup>488</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.10.

<sup>489</sup> M. MINOW, *Between vengeance and forgiveness: facing history after genocide and mass violence*, Beacon Press, Boston, 1998, p. 91.

<sup>490</sup> P. DE GREIFF, *The role of reparations in transitions to democracy*, cit., p.6.



relaciones de igualdad y de respeto. En ausencia de reparaciones, las víctimas siempre tendrán razones para sospechar que, aunque otros mecanismos de justicia transicional se estén implementando, el proceso de reconstrucción democrática se está llevando a cabo ignorando una reivindicación de su condición de ciudadanos. Si al contrario, aunque sea en condiciones de escasez, situación que se presenta de manera común luego de un conflicto armado o un régimen autoritario, se asignan fondos para programas de reparación destinados a las víctimas, el Estado estará enviando claramente un mensaje de inclusión. En conclusión, las reparaciones pueden ser vistas como un método para lograr uno de los objetivos de un Estado justo: la inclusión, en la medida en que todos los ciudadanos son participantes de un proyecto político común.<sup>491</sup>

En general, los objetivos de los programas de reparación son compatibles con la perspectiva de reflejar las necesidades de las víctimas, unas necesidades basadas en una estrategia de reparación extrajudicial.<sup>492</sup> La justicia debe suponer el reconocimiento de ciertas necesidades socioeconómicas básicas de las víctimas, más allá de las demandas tradicionales de los derechos civiles y políticos que se realizan, especialmente en tiempos de transición. Sin contemplar los asuntos de vivienda, salud, educación y apoyo al bienestar de estas personas después de abusos sistemáticos, cuando las víctimas de estos abusos hacen parte de grupos vulnerables en situación de pobreza, estas no estarán en condición de ejercer esos derechos civiles y políticos que la justicia penal supuestamente debe proteger.<sup>493</sup> Por lo tanto, para hacer posible el ejercicio de los derechos civiles y políticos, se deben considerar seriamente las necesidades y las preocupaciones de las víctimas.

#### 4.2.2 Reparaciones materiales y simbólicas

En primer lugar, las víctimas de injusticias a gran escala buscan la compensación como parte de un conjunto de objetivos, estos incluyen dejar atrás el pasado, que les sea

---

<sup>491</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.464.

<sup>492</sup> A. AJETUNMOBI, “Victims’s responses after mass atrocities: a note on empirical finding”, *Contemporary Justice Review*, vol.15, núm 1, marzo, 2012, p.45.

<sup>493</sup> Ibid., p.47.

reconocido el daño que les fue ocasionado, intentar recuperar la forma de vida que perdieron y que los culpables sean castigados. La compensación en este contexto es la manifestación más tangible del esfuerzo del Estado por remediar el daño que han sufrido las víctimas y establecer la confianza y la solidaridad.<sup>494</sup>

La reparación económica es uno de los mecanismos a través del cual se materializa la responsabilidad del Estado y tiene un fuerte componente simbólico y práctico para las víctimas y sus familiares. La reparación económica o monetaria puede ser evaluada de una manera distinta; para las víctimas puede significar una valoración económica del sufrimiento vivido o de la vida de una persona, así como una compensación que reemplaza la justicia penal. Según Beristain, la reparación económica para algunas víctimas es importante, pero al mismo tiempo supone un contraste y la conciencia de la irreversibilidad de la pérdida.<sup>495</sup>

Los dilemas éticos surgen en las víctimas debido a que la reparación económica puede considerarse una manera de tasar la vida de sus familiares o el sufrimiento vivido. Por esto, a pesar que la reparación económica sea entendida por la mayoría como una indemnización por los daños causados, estos dilemas se dan en un ámbito más personal y tienen una dimensión afectiva. Cuando las personas no tienen la necesidad urgente de la reparación para mejorar su vida, estos dilemas llevan a aplazar la decisión sobre su uso hasta que tenga mayor sentido,<sup>496</sup> esto es precisamente lo que ha sucedido en Argentina y por eso la lucha en ese país se ha centrado en temas relacionados con la dignificación de la memoria de las víctimas y en los procesos judiciales.

Hay que entender entonces las reparaciones económicas como la posibilidad de asegurar unas condiciones de vida digna para las víctimas. Por ello, y de acuerdo con el especialista en programas de reparaciones Cristián Correa, “la reparación, más que hurgar en el pasado

---

<sup>494</sup> D. SATZ, “Countering the wrongs of the past: the role of compensation” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*, cit., p.178.

<sup>495</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 249.

<sup>496</sup> Ibid., p. 251.

para establecer qué se debe hacer o cuánto exactamente debe ser el monto a pagar a cada víctima, debe profundizar sobre las condiciones que debe ofrecer la sociedad a aquellos que sufrieron más durante el conflicto. Esto implicaría incluir servicios de salud y educación en la reparación. La educación es fundamental para asegurar el futuro a los hijos y nietos de las víctimas”.<sup>497</sup>

Por este motivo, en el contexto de un programa de reparaciones complementario e integral, el estándar de lo justo debería ser el estándar que asegure cierto mínimo de subsistencia y que exprese claramente el reconocimiento que el Estado y la sociedad hace del dolor ya que es su responsabilidad el haberlo causado,<sup>498</sup> es decir un monto que sea suficiente para cumplir con los objetivos anteriores, donde lo “suficiente” es clave para enviar un mensaje de reconocimiento y dignificante real.

En cuanto a la salud, tanto a nivel general como en salud mental, los programas de reparación están orientados a apoyar a las víctimas durante el proceso de recuperación del deterioro de sus condiciones de vida, de situaciones de angustia, estrés, depresión que son el resultado de los abusos a los cuales fueron sometidas. Las consecuencias en la salud son muy frecuentes y la atención médica y psicológica ayuda a las personas a mejorar su vida y a reintegrarse, familiar y socialmente.<sup>499</sup>

El acompañamiento psicosocial en un proceso reparador amplio y colectivo presenta retos. El trabajo psicosocial debe estar integrado y representado dentro de un contexto histórico, cultural y sociopolítico específico, para individuos y comunidades particulares. Esta perspectiva da mayores posibilidades de responder y trabajar efectivamente con los diversos retos que enfrentan las sociedades que buscan reconstruirse después de la guerra y de múltiples formas de violencia política.<sup>500</sup>

---

<sup>497</sup> C. CORREA, “Experiencias internacionales de reparaciones económicas” cit., p.26.

<sup>498</sup> Ibid., p.27.

<sup>499</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 283.

<sup>500</sup> M. BRINTON LYKES y M. MERSKY, “Reparations and mental health: psychosocial interventions towards healing, human agency, and rethreading social realities” en P. DE GREIFF, *The Handbook of Reparations*, cit., p.600.

La prestación de los servicios de salud en general cuenta con dificultades muy propias de entornos transicionales, de infraestructura de servicios públicos deficientes o en muchos casos destruida. La calidad de los servicios de atención dependerá de la calidad de las instituciones de atención en salud existentes, ya que ningún país puede permitirse en corto plazo crear instituciones totalmente nuevas para los pacientes.<sup>501</sup>

En cuanto a las medidas de apoyo a la educación, los beneficiarios son en algunas ocasiones las víctimas directas, pero en su mayoría, debido al paso del tiempo, son sus hijos, niños y niñas que no tuvieron la oportunidad de estudiar por las condiciones de la guerra, por la pobreza o por la falta de oportunidades. Estas medidas se proporcionan en su mayoría a través de becas, y aunque sean una de las medidas que parecieran ser de fácil diseño en implementación, ya que se ajusta a una oferta que deben cubrir los servicios del Estado, en ocasiones las infraestructuras básicas para cubrir la demanda no cuentan con los estándares mínimos para prestar estos servicios o las comunidades no tienen acceso a estas.

En general, desde que hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, esa complejidad trae consigo la posibilidad de brindar beneficios a un mayor número de víctimas, teniendo un ámbito de actuación en cuanto a beneficios más flexible y responder a distintas necesidades de las víctimas.<sup>502</sup> Es allí donde las reparaciones simbólicas juegan un papel determinante como parte dentro de un proceso integral, coherente con las demás medidas reparatorias y con el trato que la sociedad y las instituciones dan a las víctimas. Las disculpas oficiales, el cambio de nombre de lugares públicos, el establecimiento de días de conmemoración, la creación de museos y parques dedicados a la memoria de las víctimas, entre otros, pueden tener un efecto dignificante para las víctimas con un amplio alcance.

Las medidas simbólicas están enfocadas hacia el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, a promover el recuerdo de hechos históricos importantes, expresar una crítica o

---

<sup>501</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.25.

<sup>502</sup> R. RUBIO-MARÍN y P. DE GREIFF, “Women and reparations”, cit., p.331.

sanción moral hacia los perpetradores, así como a señalar la importancia de la prevención. Igualmente están relacionadas con los procesos de duelo colectivo. Es decir, “tratan sobre el sentido y están mediatizadas por diferentes significados, según la familia, los casos o las instituciones involucradas”.<sup>503</sup>

Entonces, las reparaciones simbólicas y materiales deben ir unidas para que puedan tener un verdaderamente un efecto reparador. Gestos simbólicos como dar a conocer que sucedió con los familiares o dar asistencia para encontrar los restos de los seres queridos, puede ser necesario para que las personas no se sientan que están traicionando a sus familiares si aceptan algún tipo de compensación. Según Rubio-Marín y De Greiff, las medidas simbólicas pueden hacer una diferencia crucial en cómo es percibida la compensación, ya estas tienen un gran potencial para ser portadoras de una significación que ayude a las víctimas en particular, y a la sociedad en general, a entender los dolorosos hechos del pasado.<sup>504</sup>

#### 4.2.3 Reparaciones individuales y colectivas

Las medidas individuales requieren una identificación precisa de quienes son las personas titulares, así como la forma en que se van a proporcionar los beneficios a los receptores. La importancia de las medidas de reparación individuales radica en que los estándares de los derechos humanos a nivel internacional están expresados generalmente en términos individuales, por lo tanto, la reparación a un individuo señala el valor de cada ser humano y su condición como titular de derechos. Igualmente, las medidas individuales impiden que se generalicen las reparaciones al reunir a todas las víctimas en un solo grupo, haciendo que se minimice el daño particular que cada una de ellas ha sufrido o que se pierda el significado de la reparación por cada uno de los diferentes abusos cometidos. Por otra parte, las medidas individuales, dependiendo de su modalidad específica y de que tan bien puedan complementarse con otras medidas de reparación, deben ser necesariamente selectivas, ya

---

<sup>503</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 227.

<sup>504</sup> R. RUBIO-MARÍN y P. DE GREIFF, “Women and reparations”, cit., p.334.

que siempre en cualquier grupo o comunidad algunas víctimas serán titulares de reparación individual y otras personas, sean víctimas de otros abusos o ciudadanos en general, no lo serán.<sup>505</sup> Es muy común presenciar resentimientos, e inclusive algún tipo de pugna, entre grupos de población vulnerables que comparten un mismo espacio geográfico, pero que difieren en la condición de ser receptores o no de la prestación de servicios proporcionados por el Estado.

Por su parte, el concepto de reparaciones colectivas es ambiguo. La palabra “colectiva” se puede utilizar para referirse a las reparaciones, es decir al tipo de bienes entregados o la forma de hacerlo, o puede hacer referencia al sujeto que recibe los beneficios, aunque la experiencia internacional dice que en muchos de los casos lo “colectivo” coincide tanto en el objeto como en el sujeto de las reparaciones. Es así que podríamos definir las reparaciones colectivas como los beneficios que son otorgados a colectividades con el propósito de enmendar el daño colectivo que ha sido causado como consecuencia de una violación del derecho internacional.<sup>506</sup>

Las medidas de reparación colectiva pretenden hacer una contribución para reestructurar el sentido social, permitiendo a los miembros actuales y futuros de los grupos preservar su identidad, estatus, cultura y sentido de autoestima que permita reducir las posibilidades de ser expuestos contextos de violencia y discriminación generalizados.<sup>507</sup> Para las comunidades afectadas por hechos traumáticos, las medidas de reparación se convierten en la base de un proceso de reconstrucción comunitaria, de acuerdo con Beristain, estas son un conjunto de medidas interdependientes en el contexto de una comunidad en proceso de recuperación.<sup>508</sup>

---

<sup>505</sup> L. MAGARRELL, *Reparations in theory and practice*, International Center for Transitional Justice, New York, 2007, p.5.

<sup>506</sup> F. ROSENFELD, “Collective reparations for victims of armed conflict”, *International Review of the Red Cross*, vol. 92, núm. 879, septiembre, 2010, p.732.

<sup>507</sup> R. RUBIO-MARÍN y P. DE GREIFF, “Women and reparations”, cit., p.337.

<sup>508</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 392.

Las reparaciones colectivas abarcan un rango amplio de beneficios, construcción de escuelas públicas, hospitales, lugares de la memoria, entre otros. Según Rosenfeld, existen dos aspectos que merecen especial atención en cuanto a reparaciones colectivas. En primer lugar, que éstas son indivisibles, ya que las víctimas que reciben la reparación colectiva no pueden disfrutar del beneficio de manera individual. Y en segundo lugar, que los beneficios son diversos, mientras las formas más comunes de reparación individual, como la compensación y la restitución, tienen un contenido definido, las reparaciones colectivas pueden tomar diferentes formas.<sup>509</sup>

La individualización de las reivindicaciones podría dificultar la reconstrucción de una nueva sociedad. Algunos efectos perjudiciales que tienen las reparaciones individuales se pueden evitar otorgando reparaciones colectivas.<sup>510</sup> Un aspecto a destacar de las últimas, es que tiene un mayor impacto y oportunidades de incidir en un mayor número de víctimas, especialmente en los casos en que hay grupos de víctimas que no reciben algún tipo de reparación.

Además del gran número de víctimas que resultan de un conflicto armado o un período autoritario y sus profundos efectos colectivos, hay diferencias entre la valoración jurídica del tipo de derechos violados en estas circunstancias, ya sea porque se estimen como suma de violaciones individuales, o bien como violaciones colectivas.<sup>511</sup> Asimismo, este tipo de reparación también posee desafíos al momento de definir a los beneficiarios o en la manifestación de diversos intereses, individuales o grupales, por parte de las víctimas.

Otro de los retos visibles es la disyuntiva entre los beneficios otorgados por los programas de reparación colectiva y aquellos otros programas sociales del Estado enfocados hacia el desarrollo. Existe el riesgo de implementar programas aislados que respondan a una necesidad básica de las comunidades vulnerables, social y económicamente, sin tener en cuenta el sentido reparador que estos deben tener. El carácter reparador de estas medidas en

---

<sup>509</sup> F. ROSENFELD, “Collective reparations for victims of armed conflict”, cit. , p.733.

<sup>510</sup> Ibid., p.745.

<sup>511</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 393.

el ámbito local consiste no solo en el tipo de proyectos, sino en la posibilidad de generar una negociación en la que la reparación actúe como un catalizador del desarrollo en estas comunidades y no un sustituto de medidas públicas.<sup>512</sup>

Los gobiernos de los países en desarrollo que se enfrentan a demandas de reparación tienen una marcada tendencia a argumentar que el desarrollo es una reparación.<sup>513</sup> Diferentes especialistas de programas de reparación colectiva llegaron al acuerdo de que existe un riesgo tangible de usar las reparaciones colectivas como una estrategia para no otorgar reparaciones individuales, el consenso fue general: las reparaciones colectivas no pueden reemplazar las reparaciones individuales, ambas son necesarias.<sup>514</sup>

#### 4.2.4 Aspectos estructurales de los programas de reparación

Lo primero que hay que tener claro a la hora de pensar en el diseño de un programa de reparaciones es que no existe un patrón de diseño único a seguir, las circunstancias socio-políticas jugarán un papel primordial en el momento de determinar las variables que estarán presentes en el proceso de diseño del programa. Lo que si tiene que estar claro es que una política de reparación, en la cual se enmarque un programa, debe suministrar un apoyo sustentable que garantice la vida en dignidad de las víctimas y se haga cargo de las secuelas más graves; que comprenda los aspectos material y simbólico; que reconozca a todas las víctimas; que revierta la marginalidad histórica; que promueva la agencia de las víctimas y que responda a particularidades.<sup>515</sup>

En la realidad no existe un programa de reparaciones que sea totalmente comprensivo en el sentido de darles beneficios a las víctimas de todas las categorías de crímenes que implican

---

<sup>512</sup> Ibid., p. 401.

<sup>513</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.27.

<sup>514</sup> CONSEIL CONSULTATIF DES DROIT DE L'HOMME y INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *The Rabat report. The concept and challenges of collective reparations*, cit., p.40.

<sup>515</sup> C. CORREA, "Cómo hacer efectivos los derechos de víctimas de violaciones sistemáticas", *Seminario sobre Terrorismo, Justicia Transicional y Grupos Vulnerables*, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, mayo 5 de 2011.



las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y del DIH. Entonces, se tiene que tomar la decisión de que crímenes reparar, en parte por la escasez de recursos y las dificultades políticas de movilizar esos escasos recursos. Tradicionalmente, los programas de reparaciones siguen una jerarquía de violaciones las cuales están sujetas a reparación, estas se refieren a los que usualmente se consideran como los peores crímenes.<sup>516</sup>

Quien esté encargado del diseño de los programas masivos de reparaciones deben responder a un amplio y complejo universo de víctimas, y tiene que emplear los métodos y formas de reparación apropiadas para cada circunstancia.<sup>517</sup> La responsabilidad del Estado consiste en diseñar un programa de reparaciones con el cual se satisfagan las condiciones de la justicia, aunque los beneficios que vaya a proporcionar no sean los mismos que pudieran ser establecidos en las decisiones judiciales.<sup>518</sup> Cada Estado puede decidirse por el mejor diseño de programa que se adapte a su contexto.

Existe la tendencia de establecer comisiones de la verdad en las sociedades que terminan un conflicto armado o se encuentran en un período de transición, estos organismos, entre otras funciones, reciben la tarea presentar recomendaciones sobre un futuro programa de reparaciones. Aunque no todos los programas que se han implementado hasta el momento han sido diseñados por una comisión de la verdad, la ventaja que los que sí han sido planteados por comisiones tienen es que, en el curso de su labor, las comisiones de la verdad recopilan información sobre las víctimas que puede ser importante en el diseño y aplicación de programas de reparación, información que de otro modo sería muy difícil recopilar.<sup>519</sup>

Por otra parte, no solo el Estado puede participar en el diseño e implementación de un programa de reparaciones, la participación de la sociedad civil en este proceso es muy importante. Su participación en el diseño de reparaciones simbólicas, específicamente, es

---

<sup>516</sup> P. DE GREIFF, *The role of reparations in transitions to democracy*, cit., p.18.

<sup>517</sup> P. DE GREIFF, "Justice and reparations" en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.454.

<sup>518</sup> Ibid., p.459.

<sup>519</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.11.

quizás más significativa que su participación en alguna otra medida, debió a su función semántica y de representatividad.<sup>520</sup>

En un primero momento, el procedimiento a seguir es determinar quiénes son las víctimas. Considerando el universo total de las víctimas, se identifican las diversas categorías que van a recibir medidas específicas de reparación. En su mayoría, los encargados del diseño de un programa de reparación definen las categorías en función de las violaciones sufridas o daños causados en un período determinado de tiempo.<sup>521</sup> Hacer específica cada medida según los daños causados hace posible mitigar sus consecuencias, así se atenderán de manera distinta a los familiares de los desaparecidos (para quienes conocer la verdad de los hechos y encontrar los restos de sus seres queridos es primordial), a las víctimas de violación sexual, tortura o detención ilegal, a quienes se le podría otorgar una pensión, o a las víctimas que han sufrido desplazamiento forzado, un subsidio de vivienda.

Otro aspecto que se tiene en cuenta al definir el grupo de víctimas, es el priorizar ciertos grupos en riesgo que necesitan atención urgente, en este proceso se ponderan factores como la edad, la salud de las personas o las desventajas que estas pueden tener frente al sistema social, como por ser madre cabeza de familia o la pertenencia a alguna minoría étnica. El reto de identificar prioridades se da en distintos niveles, incluyendo fases de atención o elegibilidad para obtener recursos escasos en algún programa específico.<sup>522</sup>

Por otra parte, a medida que aumenta la complejidad de las categorías dentro de un programa, se hace más costoso desde el punto de vista administrativo, por lo cual se recomienda que los programas mantengan cierto grado de sencillez para que su implementación pueda ser realista. Asimismo, hay que tener en cuenta que no se está compensando a cada persona, caso por caso, en proporción al daño causado, una visión de

---

<sup>520</sup> R. RUBIO-MARÍN y P. DE GREIFF, “Women and reparations”, cit., p.335.

<sup>521</sup> L. MAGARELL, *Reparations in theory and practice*, cit., p. 7.

<sup>522</sup> Ibid., p. 9.

este tipo limita la posibilidad de coordinar los esfuerzos de la reparación con otras medidas reparadoras de manera integral.<sup>523</sup>

Ni los encargados del diseño ni sus beneficiarios pueden interpretar el programa de reparaciones como un esfuerzo por asignarle un precio a la vida de las víctimas o a las experiencias de abuso que vivieron. Los programas deben ser interpretados como una contribución a la calidad de vida de los sobrevivientes. De esta forma, pensando las reparaciones en términos de reconocimiento, promoción de la confianza cívica y solidaridad social, invitan entenderlas con una perspectiva de futuro.<sup>524</sup>

Los programas de reparaciones deben cumplir con cuatro características principales: deben enviar un mensaje de inclusión; deben ser capaces de llegar a todas las víctimas (alcance); deben ser coherentes e integrales y deben tener en cuenta las necesidades y preocupación de las víctimas. Los programas de reparación deben hacer énfasis en la equidad y en la inclusión de las víctimas en una sociedad que por algún motivo – político, social, económico – ha vulnerado sus derechos más fundamentales. Cada medida debe ser implementada de manera que evite el favoritismo político y la exclusión, el ideal es lograr otorgar reparaciones lo más igualitarias posibles, es decir que haya una proporcionalidad entre las diferentes medidas que se otorgan y sus beneficiario, independientemente de las especificidades de cada medida que lógicamente dependen del tipo de violación en concreto para efectos de una implementación más efectiva. El admitir que a cada persona le ha sido causado un daño, debe subrayar el carácter simbólico del derecho de cada individuo, así como el reconocimiento del valor de esa persona para la sociedad.<sup>525</sup>

En cuanto al alcance de los programas de reparación, estos deben tener la capacidad de llegar a todas las víctimas. Sin importar cuales sean los beneficios que un programa otorga y cuales hayan sido las violaciones que se estén “reparando”, lo fundamental es conseguir que todas las víctimas reciban sus beneficios, es decir que los programas sean completos.

---

<sup>523</sup> P. DE GREIFF, *The role of reparations in transitions to democracy*, cit., p.6.

<sup>524</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.466.

<sup>525</sup> L. MAGARELL, *Reparations in theory and practice*, cit., p. 9.

Lo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha denominado “compleción”, se refiere precisamente a esa capacidad que deberá tener el programa para convertir a toda víctima en beneficiario. Esto se logrará solamente si desde el principio éste articula sus beneficios y garantiza su implementación.<sup>526</sup>

Los programas de reparaciones deben ser integrales y coherentes. En primer lugar, los programas debe ser coherentes internamente, la mayoría de estos programas distribuyen más de un tipo de beneficio, y cada una de estas categorías pueden incluir diferentes medidas que son distribuidas a su vez, de manera individual o colectiva. Para que se logre este objetivo, cada uno de los elementos debe ser diseñado de manera consecuente con el otro.<sup>527</sup> Todas las medidas tienen una dimensión de integralidad, una integralidad interna que significa que los criterios y la forma de llevarse a cabo deben tener coherencia con su sentido. A nivel externo también debe estar presente esta integralidad entre las diferentes medidas, ya que el significado que adquieren es interdependiente de su relación.<sup>528</sup>

La ausencia de integralidad en el diseño y su posterior cumplimiento, puede cuestionar el significado de las medidas, por ejemplo, si el reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado se demora excesivamente, podría perder el sentido reparador. La reparación económica es una forma de asumir la responsabilidad, pero otorgar una compensación sin llevar a cabo esfuerzos significativos que demuestren la voluntad del Estado en la investigación de los hechos, o la sanción a los responsables, perpetuando la así la impunidad, conlleva a cuestionar la medida y su real significado o intención. Adicionalmente, la integralidad puede tener un sentido de prevención más general para evitar nuevas violaciones en el futuro, de esta forma, las garantías de no repetición forman parte de esta dimensión integral de la reparación.<sup>529</sup>

---

<sup>526</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.15.

<sup>527</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.467.

<sup>528</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 175.

<sup>529</sup> Ibid., p. 176.

Un programa de reparaciones, aunque quisiera, no podría responder caso por caso a los derechos y necesidades de cada una de las víctimas. Cuando hay decenas de miles de víctimas, de diferentes tipos de violaciones y con diferentes características personales, no es posible ofrecerles aquello que cada una de ellas merece a través de un programa de reparaciones. No es posible hacer una evaluación individual del daño ni establecer el tipo de reparación a que cada una de ellas tiene derecho de forma personalizada. “Un programa masivo implica ofrecer un conjunto de medidas, que se complementan unas a otras, de forma que las víctimas encuentren reparación en aquellas que mejor responden a su particular necesidad y forma de afectación”.<sup>530</sup>

Una característica primordial que un programa de reparaciones debe tener en cuenta son las preocupaciones y necesidades de las víctimas, así como su participación dentro del proceso. Vale la pena enfatizar que, desde el punto de vista de las víctimas, los programas de reparaciones ocupan un lugar especial en la transición democrática. Las reparaciones son para ellos, la manifestación más tangible de los esfuerzos del Estado de remediar los daños que ellos han sufrido.<sup>531</sup>

Como punto de partida, es importante que los gobiernos en transición, en consulta con las víctimas, decidan los enfoques adecuados que van a ser utilizados para enfrentar el legado de los conflictos armados o regímenes autoritarios. Es esencial honrar a las víctimas, para ratificar los valores fundamentales y enviar un mensaje de disuasión a potenciales perpetradores.<sup>532</sup> La participación de los grupos de víctimas en el diseño, cumplimiento y supervisión de los programas es decisiva para garantizar que las reparaciones sean significativas, oportunas y tengan impacto. Durante la implementación, los Estados deben generar espacios participativos a través de los cuales las víctimas puedan recibir información sobre el proceso, afrontar las dificultades, así como también expresar sus percepciones, demandas e ideas, que permitan enriquecer y dar más sentido a esta

---

<sup>530</sup> C. CORREA, “Experiencias internacionales de reparaciones económicas” cit., p.54.

<sup>531</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*, cit., p.153.

<sup>532</sup> D. ROBINSON, “Serving the interests of justice: amnesties, truth commissions and the International Criminal Court”, *European Journal of International Law*, vol. 14, núm 3, 2003, p. 495.

reparación. Asimismo, esta participación supone la oportunidad de una construcción colectiva entre las organizaciones de derechos humanos o abogados representantes y las propias víctimas.<sup>533</sup>

Pero garantizar la participación de las víctimas no es necesariamente una tarea fácil de lograr si se considera la habitual heterogeneidad de los grupos de víctimas, su frecuente falta de recursos y de organización y, en muchos casos, los riesgos de seguridad y de represión que pueden enfrentar cuando buscan resarcimiento.<sup>534</sup> Proteger y ayudar a desarrollar organizaciones de víctimas puede contribuir a hacer las consultas más efectivas y a garantizar que las víctimas estén bien informadas, empoderándolas de esta manera, a ser participes de su propio desarrollo político y social.

Los estudios empíricos han demostrado que muchas de las víctimas de conflictos armados a quienes se les han violado sus derechos de manera sistemática, se preocupan más por ver satisfechas sus necesidades inmediatas a través de alguna forma de compensación económica, el reconocimiento de la responsabilidad por medio de procesos de esclarecimiento de la verdad, el acceso a atención médica gratuita y a medidas en educación, que por los procesos judiciales en contra de los agresores.<sup>535</sup> En otras palabras, las necesidades humanas tienen una estricta prioridad sobre otros objetivos políticos, por lo cual una estrategia de reparación puede ser juzgada como “justa” si atiende las necesidades

---

<sup>533</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 181.

<sup>534</sup> L. MAGARELL, *Reparations in theory and practice*, cit., p. 9.

<sup>535</sup> Vid. El tercer capítulo de esta tesina. M.BIRO et al., “Attitudes toward justice and social reconstruction in Bosnia and Herzegovina and Croatia” en E. STOVER y H. WEINSTEIN (ed.), *My neighbor, my Enemy: justice and community in the aftermath of mass atrocity*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. P. PHAM et al., *Forgotten voices: a population-based survey on attitudes about peace and justice in Northern Uganda*, International Center for Transitional Justice, Human Rights Center – University of California Berkeley, Nueva York, p.37. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-HRC-Uganda-Voices-2005-English.pdf>. INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *From relief to reparations: listening the voices of victims in Nepal*, Nueva York, 2011, p.11. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-NPL-Relief-to-Reparations-Report-2011-English.pdf>. INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *¿Cuánto se ha reparado en nuestras comunidades? Avances, percepciones y recomendaciones sobre reparaciones colectivas en Perú (2007-2011)*, ICTJ, APRODEH, Lima, 2011, p.47.

básicas de las víctimas, y al contrario, puede considerarse “injusta” si no se le da prioridad a sus necesidades.<sup>536</sup>

Cambiando de dirección, se encuentra el tema de la financiación de los programas de reparación. Los programas de reparaciones son difíciles de diseñar e implementar porque además de necesitar cantidades considerables de recursos públicos, necesitan la existencia de recursos técnicos calificados, recursos institucionales públicos y privados, información estadística confiable, los cuales no siempre están disponibles en las sociedades transicionales. Sin embargo, la realidad social es mucho más compleja que esto.<sup>537</sup>

Los gobiernos no siempre tiene los incentivos políticos, por lo tanto la voluntad política, para cumplir con la financiación de los programas de reparación, ya que esto implica la asignación de recursos y arriesgar su capital político para movilizar esos recursos. En el caso que tuvieran los incentivos políticos para hacerlo, el gobierno no es el único actor que interviene en la movilización de recursos públicos, sin contar con que los gobiernos en sociedades en transición tienen otras prioridades económicas y sociales, las cuales pueden chocar con los programas de reparaciones debido a fondos públicos limitados y a las considerables sumas de dinero que requieren los programas de reparación para su implementación (especialmente en casos donde las violaciones han sido masivas).<sup>538</sup>

En general, los dos modelos más comunes para financiar las reparaciones son la creación de fondos fiduciarios especiales o introducir una partida específica en el presupuesto anual del Estado. La expectativa de la posibilidad de encontrar fuentes de financiación para los fondos fiduciarios puede evidenciar el poco compromiso de los gobiernos de asignar una partida especial en el presupuesto, lo que demuestra que aunque el desarrollo socio-económico de un país es importante en el momento de decidir implementar un programa de reparaciones, los factores políticos también lo son. Hay otras opciones que pueden ser exploradas como la creación de impuestos especiales, la recuperación de activos ilícitos o

---

<sup>536</sup> A. AJETUNMOBI, “Victim’s responses after mass atrocities: a note on empirical finding”, cit., p.40.

<sup>537</sup> A. SEGOVIA, “Financing reparations programs: reflections from international experience” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.652.

<sup>538</sup> Ibid., p.651.

canjes de deudas con gobiernos extranjeros, pero en conclusión, el mejor mecanismo para garantizar la estabilidad de la financiación es la asignación de una partida presupuestal específica para el programa de reparaciones.<sup>539</sup>

#### 4.2.5 Reparación de la violencia sexual

Varias formas de violencia sexual y reproductiva que se llevan a cabo durante los conflictos armados, particularmente la violación, son reconocidas como armas estratégicas de violencia política que sirven a fines políticos y militares. El dolor y la humillación infligida por los perpetradores no solo dominan y degradan a la víctima, sino que destruye valores culturales, familias y relaciones comunitarias.<sup>540</sup>

Al iniciar un período de transición y enfrentar las consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos del pasado, las sociedades están teniendo en cuenta cada vez más a las víctimas. No obstante, dentro del conjunto de víctimas, las mujeres han sido postergadas. Aunque las comisiones de la verdad incluyen con mayor frecuencia el impacto diferenciado de la violencia y de la violencia sexual en sus investigaciones e informes, los programas de reparaciones son raramente diseñados teniendo en cuenta la dimensión de género.<sup>541</sup> Hasta el momento, la única manifestación de la toma de conciencia sobre la necesidad de incluir a la mujer en el debate acerca de la reparación ha sido ampliar la lista de violaciones merecedoras de reparación, de forma que la violación sexual, o, más ampliamente, la violencia sexual no queden sistemáticamente preteridas.<sup>542</sup>

Poco se ha dicho sobre las víctimas, qué se puede hacer por ellas y cómo las consideraciones de género pueden ser integradas en las medidas de reparación. La atención

---

<sup>539</sup> OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, cit., p.34.

<sup>540</sup> C. DUGGAN et al, "Reparations for sexual and reproductive violence: prospects for achieving gender justice in Guatemala and Peru", *The International Journal of Transitional Justice*, vol.2, issue 2, 2008, p.194.

<sup>541</sup> J. GUILLEROT, *Los desafíos de la perspectiva de género en un programa de reparaciones*, Seminario Internacional Derechos Humanos y Justicia Transicional: gestionando el pasado, Ecola de Cultura de Pau, Barcelona, 1 de julio de 2008, p.1.

<sup>542</sup> R. RUBIO-MARÍN, "Mujer y reparación: apuntes para la reflexión" en J. GUILLEROT, *Para no olvidarlas más. Mujeres y reparaciones en el Perú*, APRODEH-DEMUS-PCS, Lima, 2007, p.17.



debe centrarse en cómo las políticas de justicia restaurativa y programas pueden asistir a las víctimas y sus comunidades, y establecer las bases necesarias para transformar estructuras y prácticas autoritarias en regímenes democráticos basados en los principios de equidad, igualdad y no discriminación, que permitan transformar las normas sociales y actitudes que permitieron que la violencia sexual y reproductiva fuera socialmente aceptada o que negaran su existencia.<sup>543</sup>

Las demandas de salud y de atención psicosocial son muy comunes en estos casos, y deberían formar parte de los programas de reparación. Además de las consecuencias físicas de las violaciones en la vida sexual o reproductiva, se le suman otras consecuencias para la salud, así como un fuerte impacto psicológico. Es necesario contar con un apoyo sostenido en el tiempo, con recursos suficientes para el acompañamiento terapéutico apropiado y que merezca la confianza de las víctimas.<sup>544</sup>

¿Pero qué otras medidas de reparación pueden tener un impacto en las mujeres? Guillerot precisa que deben implementarse medidas sociales tengan un impacto transformador en la vida de las mujeres tanto a nivel práctico como dirigidas a elevar su autoestima, medidas que le permitan avanzar en su posicionamiento frente a sí mismas, su familia y su comunidad. Las mujeres afectadas deben lograr incorporarse y participar en otros espacios, en entornos donde la mujer todavía no ha podido alcanzar una autonomía económica, las medidas de reparación podrían potenciar esa capacidad transformadora de las estructuras patriarcales de la sociedad.<sup>545</sup> Se debe romper el silencio que lleva a perpetuar los abusos contra las mujeres y “repensar” la historia. Las reparaciones deberían remediar las tendencias históricas de trivializar y excusar la violencia sexual y reproductiva contra la mujer.<sup>546</sup>

---

<sup>543</sup> C. DUGGAN et al, “Reparations for sexual and reproductive violence: prospects for achieving gender justice in Guatemala and Peru”, cit., p.193.

<sup>544</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 483.

<sup>545</sup> J. GUILLEROT, *Los desafíos de la perspectiva de género en un programa de reparaciones*, cit., p.13.

<sup>546</sup> C. DUGGAN et al, “Reparations for sexual and reproductive violence: prospects for achieving gender justice in Guatemala and Peru”, cit., p.212.

#### 4.2.6 Reflexiones sobre los programas de reparación

En cuanto a los programas de reparación hay que reconocer que, en la mayoría de los casos, el contexto en que estos se llevan a cabo está caracterizado por una capacidad institucional debilitada, por una grave ruptura de la estructura social y por escasos recursos financieros para su ejecución. Pero estos asuntos en la práctica no pueden convertirse en una excusa para su incumplimiento.<sup>547</sup> En esencia la reparación hace referencia a un problema sin solución, pero existe la necesidad de un compromiso para restituir los derechos de las víctimas y familiares, ayudarlas a enfrentar las consecuencias de las violaciones y promover su reintegración social. Es decir, que a pesar que “el ideal de la *restitutio in integrum* no sea posible, sí debe serlo el esfuerzo del Estado por acercarse a ella”.<sup>548</sup> Y aunque las reparaciones cumplan la función de asegurar la rendición de cuentas por parte del Estado, en realidad la ejecución de las reparaciones puede depender de si el Estado acepta o no que las éstas son un derecho de las víctimas.<sup>549</sup>

Los programas de reparaciones siempre son impopulares. Para De Greiff existen dos tendencias dentro de las posibles respuestas de los gobiernos: el decir “no hay dinero” o “nosotros vamos a hacer inversión social”, no importa que tanta inversión social un país haga, si se quiere reparar violaciones de derechos humanos, se tienen que implementar programas de reparación porque estos no son programas de distribución de bienes.<sup>550</sup> Aunque los programas de reparación puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de las víctimas y sus familiares, el principal objetivo de las reparaciones es el reconocimiento de las víctimas como seres humanos a quienes sus derechos fundamentales y dignidad les fueron violados.

---

<sup>547</sup> P. DE GREIFF, “Transitional justice, security and development”, cit., p.3.

<sup>548</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 173.

<sup>549</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.245.

<sup>550</sup> P. DE GREIFF, *The role of reparations in transitions to democracy*, cit., p.8.

Por otra parte, la reparación tiene que responder al sentir, necesidades y proceso de las víctimas, además de a las características de las violaciones o los aspectos jurídicos.<sup>551</sup> Los programas de reparaciones deben ser diseñados de tal manera que guarden una estrecha relación con los demás mecanismos de la justicia transicional: la justicia penal, el esclarecimiento de la verdad y las reformas institucionales. Este requisito es pragmático y conceptual; la relación aumenta la probabilidad de que cada uno de estos mecanismos sea percibido como exitoso, y más importante, que los esfuerzos transicionales satisfagan las expectativas de los ciudadanos.<sup>552</sup>

Cabe resaltar, que las reparaciones son más que un complemento que proporciona satisfacción temporal mientras se espera por el procesamiento penal. Cada vez más se reproducen programas de reparación, en muchos casos como producto de las recomendaciones de una comisión de la verdad, lo que prueba que estos son una medida esencial de la justicia de transición, necesarios para cumplir con los requerimientos de justicia de la formula transicional y del concepto de justicia que articulan las víctimas.<sup>553</sup>

Los programas de reparación no deben ser considerados solamente como la segunda mejor alternativa después de los procesos judiciales. Estos programas son procesos administrativos, que entre otras cosas, evitan algunas de las dificultades y costos relacionados con la litigación, tales como largas demoras, altos costos, la necesidad de recopilar evidencia difícil acceso (en los casos que exista), el dolor asociado con las interrogaciones y con el revivir hechos dolorosos, y finalmente, el riesgo de una decisión contraria que puede ser devastadora.<sup>554</sup> Cuando las reparaciones se deben otorgar a un amplio universo de víctimas podría decirse que los programas de reparación son los más adecuados para la tarea. Una razón importante es que al compensar a todos de la misma manera dentro de una misma categoría de violación, se evita un enviar mensaje no

---

<sup>551</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 444.

<sup>552</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.467.

<sup>553</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.245.

<sup>554</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.459.

igualitario a las víctimas y causar divisiones entre ellas. Además, al proporcionar reparación por una violación de un derecho, en lugar de compensar la pérdida de algo, los programas de reparación evidencian su naturaleza como mecanismo promotor y potencializador de derechos.<sup>555</sup>

En definitiva, ha habido avances muy importantes, pero también se han generado otros retos. Las dificultades de implementar nuevas medidas radican desde la falta de experiencia o la versatilidad de la voluntad política hasta la continuación de los problemas que llevaron a la impunidad. Así, la falta de experiencia de los Estados en cuanto a la ejecución de otras medidas, como programas de salud, las dificultades de cambios estructurales o legislativos y los problemas de relación entre las instituciones implicadas en la reparación, suponen nuevos desafíos para los Estados y para el propio sistema.<sup>556</sup>

## ***5. Consideraciones generales sobre la reparación***

Desafortunadamente, gran número de víctimas siguen pasando desapercibidas, no son reconocidas o atendidas. Los sistemas sociales y jurídicos siguen llevando a cabo actos en detrimento de las víctimas tales como: leyes inadecuadas, restricciones en la definición del alcance y la naturaleza de las violaciones, la vigencia de leyes de amnistía e inmunidad, el impedimento en el acceso a la justicia, entre otros. No faltan los obstáculos políticos que ignoran los derechos e intereses de las víctimas, existe falta de voluntad por parte de las autoridades y la sociedad para reconocer que serios abusos fueron cometidos.<sup>557</sup>

Las víctimas y supervivientes necesitan una respuesta compasiva por parte del Estado y sus propias comunidades para que puedan sanar. Después de haber experimentado el uso excesivo del poder, necesitan reintegrarse a la comunidad donde puedan sentirse protegidos por la ley. La ley necesita reafirmar su legitimidad, una tarea que requiere medidas de

---

<sup>555</sup> R. RUBIO-MARÍN y P. DE GREIFF, “Women and reparations”, cit., p.322.

<sup>556</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 179.

<sup>557</sup> T. VAN BOVEN, “The need to repair”, cit., p.696.

justicia retributiva, pero esto no será suficiente, necesita estar acompañada o seguida de prácticas restaurativas para alcanzar una paz sostenible.<sup>558</sup>

En un caso de violación de derechos humanos, el ideal de una reparación completa (*restitutio in integrum*), entendida en términos de restaurar el estatus anterior o la compensación en proporción con el daño sufrido es lo justo. Obviamente, desde la perspectiva de las víctimas y supervivientes, esto intenta neutralizar las consecuencias de la violación que ellos han sufrido. Desde otra perspectiva, el ideal es prevenir que los perpetradores disfruten de algún beneficio que se pueda derivar de sus actos criminales, u obligar al Estado a tomar responsabilidad por haber permitido, por acción u omisión, que ocurrieran ciertas violaciones.<sup>559</sup>

Las obligaciones plasmadas en los instrumentos jurídicos son imprecisas y abstractas, son difíciles y engorrosas para implementar, pero han contribuido a la creación de lo que se podría llamar un “ethos” de las reparaciones. El derecho internacional ha contribuido a crear esta atmosfera generalizada de apoyo para compensar a las víctimas como parte de su compromiso hacia la justicia global y el cumplimiento de sus derechos.<sup>560</sup>

Hay que reconocer que existen diferencias sustanciales entre las reparaciones en la adjudicación de casos individuales y aquellas en un contexto transicional. Estas diferencias inciden negativamente ya que suponen la transferencia directa de las normas del derecho internacional al contexto de la justicia de transición.<sup>561</sup> Es evidente que los organismos del derecho internacional de los derechos humanos como el Sistema Interamericano están previstos para atender fundamentalmente casos individuales, ya que no están configurados para tratar con violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. La magnitud del daño causado, especialmente cuando ha sido dirigido diferentes tipos de víctimas, hace

---

<sup>558</sup> C. HOYLE, “Can international justice be restorative justice? The role of reparations”, cit., p.209.

<sup>559</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.456.

<sup>560</sup> R. FALK, “Reparations, international law and global justice: a new frontier” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.497.

<sup>561</sup> A. CARRILLO, “Justice in context: the relevance of Interamerican human rights law and practice to repairing the past” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.527.

poco práctico, en su mayoría, evaluar demandas individuales caso por caso. Por lo tanto, no es consecuente con el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos basado en el individuo.<sup>562</sup> Sin embargo, la guía normativa de la sentencia Velásquez-Rodríguez en el diseño de medidas de reparación en Chile y Argentina a finales del siglo anterior confirma que el derecho internacional de los derechos humanos tiene un rol constructivo en los contextos transicionales.<sup>563</sup>

Los gobiernos nacionales poseen, en buena medida, la discreción y flexibilidad en cumplir la obligación de otorgar una reparación efectiva. La pregunta es si para cumplir su obligación de proporcionar reparación, el Estado debería favorecer los mecanismos judiciales que permitan evaluar caso por caso y decidir una compensación en estricta proporción con el daño causado, o debería privilegiar los programas legislativos y administrativos masivos que tienen como propósito otorgar reparaciones a un universo amplio de víctimas de diferentes tipos de violaciones. Esta pregunta solo puede contestarse dependiendo del contexto.<sup>564</sup>

Por su parte, en el caso de que los procesos de justicia penal fueran exitosos, tanto en términos del número de perpetradores acusados como en el resultado, ésta es al final es más una lucha en contra de los perpetradores, que un esfuerzo hecho en nombre de las víctimas.<sup>565</sup> Como se ha mencionado anteriormente, las reparaciones son la manifestación más tangible de los esfuerzos y la voluntad del Estado por remediar el daño causado, y aunque la justicia penal tiene un efecto importante en las víctimas, pasado el momento inicial de satisfacción, la condena de pocos responsables sin un intento efectivo por resarcir

---

<sup>562</sup> R. FALK, “Reparations, international law and global justice: a new frontier” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.495.

<sup>563</sup> A. CARRILLO, “Justice in context: the relevance of Interamerican human rights law and practice to repairing the past” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, cit., p.528.

<sup>564</sup> R. RUBIO-MARÍN y P. DE GREIFF, “Women and reparations”, cit., p.321.

<sup>565</sup> P. DE GREIFF, “Justice and reparations” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*, cit., p.153.

de alguna forma a las víctimas podría ser interpretado como un ejemplo de “revanchismo” inconsecuente.<sup>566</sup>

Según Elster, los regímenes liberales y democráticos desean proceder en acuerdo con el Estado de derecho. Aunque el deseo por la retribución puede anular, hasta cierto punto, el deseo por la legalidad, el último ejercerá una muy fuerte influencia.<sup>567</sup> Pero para pensar en la paz a mediano plazo, que conlleve a una estabilidad a largo plazo, las sociedades necesitan utilizar mecanismos retributivos y restaurativos por razones teóricas y prácticas. El castigo y la reparación no son diametralmente opuestos, y ambos tienen un rol en la justicia transicional.<sup>568</sup>

Hay una distancia sustancial entre la teoría y la práctica cuando se hace referencia al derecho de las víctimas a la reparación de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y del DIH. La integralidad es un asunto fundamental, así como que las víctimas tengan acceso a ese “entramado” de medidas que, aunque en algunos casos se superponen, deben ser implementadas de la mejor manera posible para resarcir los graves daños causados.

---

<sup>566</sup> L. MAGARRELL y L. FILIPPINI, “La justicia penal y la verdad en la transición democrática”, en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit., p.56.

<sup>567</sup> J. ELSTER, *Retribution and reparations in transition to democracy*, cit., p.326.

<sup>568</sup> C. HOYLE, “Can international justice be restorative justice? The role of reparations”, cit., p.209.

### **CAPÍTULO 3. REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES Y SISTEMÁTICAS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: EL CASO DEL PERÚ Y SU PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES**

#### ***1. Antecedentes del conflicto armado***

La historia del Perú, desde su proclamación de independencia en 1821 hasta el inicio del conflicto armado interno en 1980, estuvo marcada por gobiernos de dictaduras caudillistas de carácter militar, alternados con cortos momentos de regímenes democráticos, lo cual explica un frágil desarrollo de sus instituciones democráticas.<sup>569</sup>

Antes de 1980, en el Perú no se había llevado a cabo un conflicto armado de tal magnitud como el que se conocería a partir de ese momento. Las etapas de mayor agitación política y social con estallidos de violencia armada que se habían llevado a cabo en el país (1930-1934, 1948-50, 1965, 1977-80) fueron de corta duración, tuvieron carácter local y no registraron un gran número de muertes o desapariciones forzadas. En el país no había existido una tradición de organizaciones subversivas armadas, las guerrillas de 1965 lucharon por insertarse en el campo, pero sufrieron una rápida derrota militar en su momento.<sup>570</sup>

A partir de la segunda mitad del siglo XX, las transformaciones del aparato productivo convirtieron al Perú en un país más poblado y más urbano, respecto a un país predominado por comunidades más rurales. Las políticas económicas aplicadas hicieron crecer la brecha

---

<sup>569</sup> Y. MONTOYA, “Límites y avances de la justicia penal frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período del conflicto armado interno en el Perú” en V. QUINTEROS (ed.), *Temas de derecho penal y violación de derechos humanos*, Instituto de Democracia y Derechos Humanos Pontificia Universidad Católica del Perú, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Lima, 2012, p.22.

<sup>570</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *El Informe Final CVR – Huancavelica. Una compilación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, Ediciones EIRL, Lima, 2005, p.17.



entre ricos y pobres, generando el crecimiento de estos últimos, especialmente en las áreas rurales andinas cuyos habitantes actualmente son los más pobres del país.<sup>571</sup>

El reclamo por un orden social más justo y un Estado realmente democráticos no se cumplió, lo cual derivó en un mayor incremento de la violencia. A pesar de hechos como la aprobación de la Constitución de 1979 y el compromiso democrático, las demandas y las propuestas sociales fueron de tal dimensión, que sobrepasaron la capacidad de un Estado con limitaciones estructurales, centralista y asediado por las presiones de intereses minoritarios.<sup>572</sup>

## ***2. El conflicto armado interno***

El conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, mayor impacto sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda la historia republicana. El conflicto fue iniciado por el autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso (PCP-SL)<sup>573</sup>, el cual desarrolló una estrategia que incorporaba conscientemente el terror como un instrumento para el logro de sus fines y rechazaba explícitamente las reglas del Derecho Internacional. Sendero Luminoso representó una insurrección maoísta ultra ortodoxa que consideraba que el avance al socialismo, y luego al comunismo, tenía que estar dado a través de muchas revoluciones culturales que produjeran un cambio no solamente en las relaciones sociales, sobre todo en relación con los medios de producción y la forma de distribución, sino también en el espíritu humano, en la propia concepción de la persona respecto a si mismo, a su lugar en la sociedad y a su lugar en la historia.<sup>574</sup>

---

<sup>571</sup> Ibid.

<sup>572</sup> COMISIÓN ESPECIAL DEL SENADO SOBRE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA Y ALTERNATIVAS DE PACIFICACIÓN EN EL PERÚ, *Violencia y pacificación*, DESCO, Comisión Andina de Juristas, Perú, 1989, p.61.

<sup>573</sup> En adelante SL

<sup>574</sup> G. GORRITI. Entrevista realizada el 12 de abril de 2012 en la ciudad de Lima.

El objetivo estratégico de la acción senderista fue la destrucción total de las estructuras políticas existentes y su reemplazo por instituciones sujetas al control directo de SL como “gérmenes de un régimen político alternativo en la que esta organización ejercería un control total de los poderes del Estado”.<sup>575</sup> En cuanto a su posición sobre los derechos humanos, el discurso de SL señalaba que estos eran construcciones ideológicas al servicio del orden social existente y que no tenían ningún valor al momento de orientar sus acciones. Sendero negaba que los individuos tuvieran realmente derechos por el hecho de ser seres humanos y afirmaba que toda consideración humanitaria debía acceder ante la exigencia de tomar el poder para los sectores oprimidos, a quienes decía representar.<sup>576</sup>

Otro grupo armado tuvo presencia durante el conflicto: el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La estrategia militar del MRTA combinaba una intervención armada urbana y una organización de columnas militares en el campo. Al enfrentar permanentemente dificultades económicas, este grupo las resolvía aplicando tácticas como los secuestros, a pesar que se trataba de un recurso específicamente proscrito por el Derecho Internacional Humanitario al que proclamaba respetar.<sup>577</sup>

Aunque la participación del MRTA como responsable de víctimas fatales del conflicto fue relativamente escasa, es indiscutible que su actividad armada contribuyó a aumentar los sufrimientos de la población, configurándose en violaciones de los derechos humanos, debilitando el orden democrático y la posición del movimiento social que decía defender.<sup>578</sup>

La lucha armada del MRTA fue muy diferente a la que llevo a cabo Sendero, cuantitativa y cualitativamente, pero a medida que se fue desarrollando la espiral de violencia, las

---

<sup>575</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Segunda edición, Lima, 2008, p.39.

<sup>576</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Informe Final*, CVR, tomo I, Lima, 2003, p.216.

<sup>577</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.40.

<sup>578</sup> Ibid., p.44.

acciones emerretistas se hicieron cada vez más crueles, sobre todo en lo que respecta al secuestro y ajusticiamiento de personas.<sup>579</sup>

Por su parte, el surgimiento de otro de los actores, los Comités de Autodefensa Civil (llamados popularmente Ronderos) están íntimamente ligados al ingreso de las fuerzas armadas al conflicto armado en el Perú a partir de 1983 y a la aplicación de la doctrina antisubversiva por parte del gobierno.<sup>580</sup> A lo largo de más de diez años, los Comités de Autodefensa impulsados, organizados, asesorados y manipulados por las fuerzas armadas, tuvieron poderes especiales concedidos por éstas para regular la circulación, detener personas, realizar registros domiciliarios e inclusive decidir sobre la vida o la muerte de sus paisanos.<sup>581</sup> Durante muchos años, la población civil estuvo atrapada en medio del fuego cruzado entre los senderistas, emerretistas, la contrainsurgencia militar y los ronderos.<sup>582</sup>

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hubo cinco períodos en los que se manifestó el conflicto armado. El período inicial de la violencia tuvo lugar entre mayo de 1980 y diciembre de 1982: el primer acto de violencia cometido por parte de SL fue la quema pública de las ánforas electorales en Chuschi, Cangallo, el 17 de mayo de 1980 con motivo de las elecciones generales y el último episodio fue la disposición presidencial del 29 de diciembre de 1982 en la que se estableció el ingreso de las fuerzas armadas en la lucha contrasubversiva en Ayacucho.<sup>583</sup>

La nueva y débil democracia del Perú no estaba preparada para enfrentar este fenómeno y cometió innumerables errores. Desde el principio las capacidades institucionales del gobierno se vieron desbordadas, se pusieron en evidencia falencias políticas y estratégicas de las fuerzas públicas del orden; sin una doctrina ni recursos profesionales de inteligencia, la respuesta oficial se limitó reprimir las zonas declaradas “en emergencia”, debido a la

---

<sup>579</sup> M. PALIZA, *Y ahora le toca a la paz, análisis de la violencia política en el Perú: 1980-2000 propuestas políticas*, FDCL Editores, Berlín, 2007, p.294.

<sup>580</sup> Ibid., p.299.

<sup>581</sup> Ibid., p.303.

<sup>582</sup> F. CALA, “Truth in the time of fear: Adiós, Ayacucho’s poetics of memory and the Peruvian transitional justice process”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol.6, issue 1, March 2012, p.3.

<sup>583</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.57.

imposibilidad de comprender la especificidad del conflicto planteado.<sup>584</sup> La actuación inicial de las fuerzas policiales no tuvo resultados positivos y se tomó la decisión de delegar las responsabilidades de la lucha contrasubversiva en las fuerzas armadas.

La segunda etapa fue la correspondiente a la militarización del conflicto, esta empieza desde la instalación del comando político-militar de Ayacucho el 1 de enero de 1983, hasta la matanza de los penales del 18 y 19 de junio de 1986 (tuvo lugar en Lima en donde hasta el momento este tipo de actos se observaban desde la distancia). A partir del ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha directa contra SL se inició un nuevo curso en el conflicto que habría de mantener la presencia militar en varias regiones del país por más de quince años.

La estrategia inicial del Estado para enfrentar la contrainsurgencia fue más confrontacional respecto a los años anteriores, estuvo marcada por la suspicacia hacia los pobres rurales y urbanos, la incapacidad de distinguir entre la protesta social legítima y la insurgencia, y el enfoque militarizado que dio lugar al uso indiscriminado de la violencia, masacres de civiles y desapariciones forzadas.<sup>585</sup> Fue precisamente durante este periodo cuando se presentaron el mayor número de violaciones de derechos humanos durante el conflicto. Por su parte, las fuerzas del orden produjeron prácticas racistas frente a la población civil. Los oficiales provenían de sectores medio urbanos, sus distancias culturales y sociales con la población eran muy grandes y determinaron un extendido desprecio por la misma gente a la que supuestamente tenían que defender y ganar.

Posteriormente continúa el despliegue nacional de la violencia, este período se desarrolló desde la mencionada matanza de los penales de junio de 1986 hasta el 27 de marzo de 1989, fecha del ataque senderista al puesto policial de Uchiza en el departamento de San Martín. Durante esta fase, los grupos subversivos se retiraron del área inicial y extendieron sus acciones a nuevas zonas: la selva (tanto en el nororiente como la selva central), la

---

<sup>584</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *El umbral de la memoria. Pasado, presente y futuro en las memorias de la violencia en Huancavelica*, Área de Gobernabilidad y Derechos Humanos, Lima, 2007, p.17.

<sup>585</sup> J. M. BURT, *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de sendero y la dictadura de Fujimori*, Instituto de Estudios Peruanos, Asociación de Servicios Educativos Rurales, Instituto Peruano de Antropología Forense, Segunda edición, Perú, 2011, p.28.

región central (en sus zonas ganaderas y los espacios de lucha gremial minera), el sur andino y Lima metropolitana.

Posteriormente, se lleva a cabo el período de la crisis extrema, la ofensiva subversiva y la contraofensiva estatal. Se inicia después del asalto senderista a Uchiza y concluye el 12 de septiembre de 1992 con la captura de Abimael Guzmán Reinoso, líder de Sendero Luminoso, y de los principales dirigentes de SL en Lima por parte del Grupo Especial de Inteligencia. En esta etapa el conflicto se desarrolló con alto grado de violencia en las dos zonas de la selva y en las ciudades (Lima, Huancayo y Huamanga) principalmente. La violencia urbana, por su gran visibilidad y el desarrollo de las acciones que involucraron a todos los pobladores (paros armados, atentados), particularmente en Lima, produjo la impresión de conflicto nacional y guerra total.<sup>586</sup> Por su parte, SL consideró como eje central de su acción incrementar la ofensiva en zonas urbanas con ataques más violentos y frecuentes, y al mismo tiempo, aumentó sus niveles de violencia con la población de la sierra rural y la selva. Mientras tanto, las fuerzas armadas cometieron crímenes en menor cantidad pero con mayor premeditación.

Luego de su elección democrática en 1990, Alberto Fujimori Fujimori, se inclinó por un estilo autoritario y de confrontación con los otros poderes del Estado. El cinco de abril de 1992 Fujimori dio un golpe de Estado, cerrando el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, y otras entidades públicas, justificando estas medidas como una acción necesaria para combatir el terrorismo y la corrupción. La presión internacional hizo que Fujimori se comprometiera con un programa formal de retorno a la democracia en 1993 con la convocatoria para un Congreso Constituyente Democrático, pero esto no lo detuvo al momento de consolidar su régimen autoritario.<sup>587</sup>

Finalmente, se produce el declive de la acción subversiva, el autoritarismo y la corrupción, fase que inicia con la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992 y se extiende

---

<sup>586</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *El Informe Final CVR – Huancavelica. Una compilación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.107.

<sup>587</sup> D. LOVATÓN, “Condena judicial contra el ex Presidente Alberto Fujimori: mensaje contra la impunidad y Nuevo capítulo en la historia del Perú contemporáneo”, *Anuario de Derechos Humanos*, núm.6, 2010, p.72.

hasta el abandono del país de Alberto Fujimori en el 2000.<sup>588</sup> Si bien se registraron atentados en diversos lugares del país, éstos fueron puntuales y dispersos, sólo la selva apareció como región de concentración de acciones de violencia. Por su parte, actuó un escuadrón de la muerte denominado “Colina”, vinculado al asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el cual fue responsable de asesinatos, desapariciones forzadas, y masacres con crueldad e inclemencia.

Mientras las estrategias para enfrentar el conflicto variaron de acuerdo con cada presidente que fue elegido democráticamente, fue Fujimori quien obtuvo el crédito por pacificar al país.<sup>589</sup> El Estado peruano derrotó a Sendero al arrestar en 1992 al principal líder e ideólogo del grupo Abimael Guzmán. No obstante, en lugar de aprovechar esta victoria para restablecer la gobernabilidad democrática, el régimen de Fujimori buscó mantener atemorizada y desorganizada a la sociedad civil, con la intención de que ésta no pudiera desafiar la reconfiguración autoritaria del poder y los privilegios del régimen.<sup>590</sup>

El gobierno de Fujimori instrumentalizó el miedo para mantener a la sociedad débil e incapaz de articularse en el ámbito público, al mismo tiempo que buscaba consolidar su proyecto político autoritario y su agenda económica neoliberal.<sup>591</sup> A muchos peruanos les pareció más fácil renunciar a su ciudadanía que oponerse al proyecto autoritario de Fujimori, fue más conveniente o seguro no reconocer la realidad de la violencia política a pesar de su existencia tangible.<sup>592</sup>

Su gobierno continuó reprimiendo cualquier forma de oposición hasta su caída en el 2000, originada por una campaña y elección presidencial turbia y discutible que concluyó con un escándalo de corrupción de dimensiones nunca antes vistas en el Perú. Fujimori se escapó

---

<sup>588</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.62.

<sup>589</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.232.

<sup>590</sup> J. M. BURT, *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de sendero y la dictadura de Fujimori*, cit., p.29.

<sup>591</sup> Ibid., p.34.

<sup>592</sup> F. CALA, “Truth in the time of fear: Adiós, Ayacucho’s poetics of memory and the Peruvian transitional justice process”, cit., p.4.

del país después que se hicieran públicos videos donde aparecían él y Vladimiro Montesinos sobornando a diversos personajes desde congresistas hasta presentadores de televisión. Solo hasta entonces se visualizó la posibilidad de establecer un nuevo marco político y jurídico respetuoso de los derechos humanos y una nueva conciencia sobre las violaciones perpetradas.<sup>593</sup>

### ***3. La transición democrática***

En el año 2000, el Perú inició una transición hacia la democracia. Amplios sectores de la población expresaron en ese momento la esperanza de que esa ocasión el país encontrara verdaderamente el camino hacia la construcción de un Estado que representara los intereses de las peruanas y peruanos sin excepción y, al mismo tiempo, hacia la edificación de una sociedad unida, pacífica y próspera.<sup>594</sup>

Uno de los primeros actos de Valentín Paniagua en diciembre del 2000, pocas semanas después de haber tomado el cargo de presidente dentro del gobierno interino, fue la creación de un grupo interinstitucional<sup>595</sup> encargado de preparar “los proyectos legislativos y de otro carácter que se consideraran necesarios para el establecimiento de una Comisión de la Verdad”.<sup>596</sup>

El grupo de trabajo decidió puntos esenciales como el ámbito de las investigaciones que la comisión llevaría a cabo, no solamente realizarían la revisión de los crímenes cometidos por todas las partes durante el conflicto armado, sino también las violaciones perpetradas

---

<sup>593</sup> J. GUILLEROT y L. MAGARRELL, *Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado*, Asociación Pro – Derechos Humanos, International Center for Transitional Justice, Perú, 2006, p.20.

<sup>594</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, *Informe Final*, CVR, cit., p.19.

<sup>595</sup> El grupo interinstitucional estuvo conformado por los Ministro de Justicia, del Interior, de Defensa, de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, la Oficina de la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora de Derechos Humanos, La Conferencia Episcopal Peruana y El Concilio Nacional Evangélico del Perú. Asimismo participaron consultores y expertos nacionales e internacionales.

<sup>596</sup> PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Resolución Suprema 304-2000-JUS, Lima, 9 de diciembre de 2000, Art. 1.

bajo el gobierno de Fujimori como la intimidación de grupos opositores y la derogación de los derechos civiles y políticos.<sup>597</sup>

El fin del régimen de Fujimori abrió la posibilidad de una rendición de cuentas después de dos décadas de abusos.<sup>598</sup> En la época del gobierno de transición se vivió un momento breve, pero intenso, de búsqueda de fortalecimiento de la democracia, de afirmación de valores de derechos humanos y búsqueda de convivencia pacífica entre los peruanos.<sup>599</sup> Fue debido a lo ocurrido durante el fujimorismo y el conflicto armado interno, que al inicio de la transición democrática se reclamo desde diferentes frentes un radical proceso de reforma y modernización de las fuerzas armadas.<sup>600</sup>

Después de la caída de Fujimori, en cuestión de meses se presentaron cargos contra los altos mandos de las fuerzas armadas y se redujeron sus poderes institucionales. Además de su implicación en actos de corrupción, el decaimiento institucional, la politización y los graves abusos de derechos humanos cometidos, la institución se debilitó por un corto tiempo.<sup>601</sup> El movimiento de derechos humanos, basado en ONGs, marginado durante el régimen de Fujimori, pudo liderar la agenda transicional mientras las fuerzas armadas perdían su capacidad de protegerse.

El público y las elites políticas estaban de acuerdo en purgar al Estado por la corrupción heredada del régimen de Fujimori, pero este consenso escondía profundos desacuerdos sobre la conveniencia de procesar a presuntos violadores de derechos humanos dentro de las fuerzas armadas y revisar la situación de aquellos condenados por la legislación antiterrorista de Fujimori.<sup>602</sup>

---

<sup>597</sup> R. ROOT, "Through the window of opportunity: the transitional justice network in Peru", *Human Rights Quarterly*, vol.31, núm.2, 2009, p.466.

<sup>598</sup> P. HAYNER, *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, cit., p.56.

<sup>599</sup> C. BASOMBRÍO y F. ROSPIGLIOSI, *La seguridad y sus instituciones en el Perú a inicios del siglo XXI. Reformas democráticas o neomilitarismo*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2006, p.86.

<sup>600</sup> Ibid., p.17.

<sup>601</sup> R. ROOT, "Through the window of opportunity: the transitional justice network in Peru", cit., p.467.

<sup>602</sup> Ibid., p.471.



Por su parte, la decisión de nombrar una Comisión de la Verdad fue producto del acuerdo entre un sector muy articulado pero no numeroso de la sociedad civil, donde coincidieron defensores de los derechos humanos y demócratas radicales, con el sector político de ese gobierno que era afín a esas mismas causas.<sup>603</sup> La iniciativa no generó un gran debate nacional sobre la cuestión de la transición y de cómo esta debía abordarse en todas sus dimensiones; es decir, no solamente en relación con el problema de la corrupción o el electoral, sino también respecto al retorno hacia la democracia después de un conflicto armado y de una dictadura, así como la resolución de las violaciones cometidas durante ese período.<sup>604</sup>

De acuerdo con la propuesta del grupo de trabajo interinstitucional, el gobierno de transición estableció la Comisión de la Verdad, el 4 de junio de 2001 a través del Decreto Supremo 065-2001-PCM, la cual se encargaría de “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos”.<sup>605</sup>

El trabajo de este organismo duró más de dos años y fue acompañado por las organizaciones de derechos humanos, de afectados y por sectores de la sociedad civil. Todo ello a pesar de los ataques verbales sistemáticos de algunos grupos políticos, sectores empresariales y miembros de las Fuerzas Armadas, quienes durante todo este período trataron de desacreditar la labor de la CVR.<sup>606</sup>

---

<sup>603</sup> R. AMES, “Violencia, verdad... ¿Reconciliación en el Perú?” en G. Pacheco et al. (ed), *Verdad, Justicia y Reparación. Desafíos para la democracia social*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005, p.205.

<sup>604</sup> J. GUILLEROT y L. MAGARRELL, *Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado*, cit., p.21.

<sup>605</sup> PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Decreto Supremo 065-2001-PCM, Lima, 4 de junio de 2001, art.1.

<sup>606</sup> G. CANO y K. NINAQUISPE, “El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de la justicia”, en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit., p.68.

Mientras la Comisión realizaba sus investigaciones, el gobierno transicional de Paniagua llevó a cabo importantes acciones para la recuperación de las instituciones democráticas, la reconstrucción del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Cabe mencionar la normalización de la situación del Perú respecto de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ratificación de diversos tratados internacionales (como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas o el Estatuto de Roma de la CPI) y la organización de nuevas elecciones libres y limpias.<sup>607</sup>

Como parte del proceso de recuperación de la institucionalidad democrática en el Perú, el gobierno de Valentín Paniagua representado por su Ministro de Justicia Diego García-Sayán, presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una propuesta amplia con el propósito de solucionar 165 casos que se encontraban bajo la competencia de la CIDH.<sup>608</sup> A su vez, el comportamiento del Estado en la solución amistosa de otros de los casos ante la CIDH y la designación de fondos para tal efecto, en respuesta a las recomendaciones de la CIDH y a sentencias de la Corte IDH, dieron una señal importante de voluntad política y respeto por las obligaciones internacionales del Estado, incluyendo las reparaciones.<sup>609</sup>

La esperanza de conocer la verdad y obtener justicia fue una constante durante el proceso de transición. Los organismos de derechos humanos y las víctimas del conflicto armado visualizaron en la creación de la CVR una puerta que los llevaría a iniciar el camino de verdad y justicia que por más de veinte años se les había cerrado.<sup>610</sup> Esto se debió no solo a

---

<sup>607</sup> J. GUILLEROT y L. MAGARRELL, *Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado*, cit., p.20.

<sup>608</sup> Vid. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Comunicado de prensa conjunto, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Ministro de Justicia del Perú Diego García-Sayán, Washington, 22 de febrero de 2001.

<sup>609</sup> J. GUILLEROT y L. MAGARRELL, *Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado*, cit., p.20.

<sup>610</sup> G. CANO y K. NINAQUISPE, “El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de la justicia”, cit., p.68.

que la Comisión esclarecería lo sucedido durante la época de la violencia, sino que como lo estableció su mandato,<sup>611</sup> contribuiría al proceso de administración de justicia.

Lo que se produjo en el Perú no fue una transición pactada, sino un colapso del régimen autoritario.<sup>612</sup> A nivel formal se estableció un proceso de elecciones, tanto el poder judicial como el poder legislativo recuperaron sus autonomías, pero las reformas institucionales han sido incipientes.<sup>613</sup> Lo que sucedió en el Perú fue un alejamiento y una toma de distancia frente a un régimen autocrático y corrupto, pero no necesariamente para llegar a una democracia entendida en su sentido más pleno. No ha habido purgas ni en la institución militar, ni en el poder judicial; no ha habido un cambio en la educación, ni un cambio en la formación de los militares, ninguna de las reformas que se señalaron en el informe se han hecho, la transición es un eufemismo.<sup>614</sup>

Fue la vergüenza colectiva, una indignación generalizada debida a un escándalo de corrupción nunca antes sufrido, lo que provocó en la sociedad la necesidad del desvelamiento de una verdad y la búsqueda de la justicia. La muerte y desaparición de miles de peruanos marginados y discriminados históricamente no fue suficiente para lograrlo.

### **3.1 El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación**

El 28 de agosto de 2003 se entregó al país el Informe Final de la CVR. Los nueve tomos del análisis de las causas y consecuencias del conflicto armado interno vivido en el Perú pusieron en evidencia la gravedad y magnitud de las violaciones de los derechos humanos. La mayoría de los resultados de la CVR rompieron con los esquemas habituales sobre este

---

<sup>611</sup> Vid. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Decreto Supremo 065-2001-PCM, Lima, 4 de junio de 2001, art.2. disponible en <http://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/decsup01.php>

<sup>612</sup> C. DEGREORI, “Heridas abiertas, derechos esquivos: reflexiones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación” en R. BELAY et al.(ed.), *Memorias en conflicto: aspectos de la violencia política contemporánea*, Embajada de Francia - Instituto de Estudios Peruanos – Instituto Francés de Estudios Andinos – Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Lima, 2004, p.79.

<sup>613</sup> J. GUILLEROT. Entrevista realizada el 4 de abril de 2012 en la ciudad de Lima.

<sup>614</sup> S. LERNER. Entrevista realizada el 30 de marzo de 2012 en la ciudad de Lima.

tipo de conflictos en América Latina y con las creencias que existían en la sociedad peruana acerca de sus características.<sup>615</sup> Por primera vez en América Latina, un conflicto armado tenía como mayor responsable de las violaciones a un grupo subversivo y las cifras del informe triplicaron las que habían sido estimadas en un principio de 25.000 – 30.000 a las casi 70.000 víctimas que estableció el informe.

Ante lo complejo del escenario en el que se llevó a cabo la violencia, la Comisión estudió los veinte años y seis meses del conflicto armado interno (mayo de 1980-noviembre de 2000) a partir de la lógica interna de los acontecimientos y siguiendo las estrategias de los actores directos implicados en el proceso, así como las distintas posiciones asumidas por otros actores políticos y sociales.

La CVR enfocó su trabajo sobre los siguientes hechos, siempre y cuando hubieran sido imputables a las organizaciones terroristas, a los agentes del Estado o a grupos paramilitares: asesinatos y secuestros; desapariciones forzadas; torturas y otras lesiones graves; violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país u otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas.<sup>616</sup>

Las estimaciones de la Comisión afirman que la cifra más probable de víctimas fatales fue de 69.280 personas. Esta cifra supera el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú “en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus años de vida independiente”.<sup>617</sup>

La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso de iniciar una “guerra popular” contra el Estado peruano. Asimismo, fue el principal responsable de los abusos cometidos con la responsabilidad del 54% de las víctimas fatales. En relación con la

---

<sup>615</sup> J. GUILLEROT y L. MAGARRELL, *Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado*, cit., p.23.

<sup>616</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Informe Final*, Tomo I, Introducción, cit., p.23.

<sup>617</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Informe Final*, Tomo VIII, Conclusiones generales, p.315.

responsabilidad de los otros actores, el MRTA fue el responsable del 1.5% de los muertos y desaparecidos reportados a la Comisión; entretanto, según los casos reportados a la CVR, los agentes del Estado, Comités de Autodefensa y paramilitares fueron los responsables del 37.26% de muertos y desaparecidos, mientras el 7.24 % restante no fue determinado.<sup>618</sup>

En cuanto al perfil de las víctimas, se puede afirmar que la violencia no afectó a hombres y mujeres por igual. Fueron los hombres entre 20 y 49 años quienes conformaron la mayoría de las víctimas fatales reportadas a la CVR (más del 55%); mientras las mujeres de todas las edades sumaron poco menos del 20% de las víctimas.

La violencia impactó de manera desigual en distintos ámbitos geográficos y en diferentes estratos sociales del país, y se evidenció además el papel fundamental que ejerció el racismo y la discriminación durante el conflicto. Estos prejuicios permitieron que la ciudadanía no respondiera según la medida de las violaciones cometidas y que haya sido posible ocultar parcialmente esta violencia.<sup>619</sup> Por su parte, el 75% de las víctimas fatales tenía como idioma materno el quechua u otras lenguas nativas y contaban con un nivel de educación más bajo que el promedio nacional. La CVR confirmó que la principal víctima de la violencia fue la población campesina, de la totalidad de víctimas el 79% vivía en zonas rurales y el 56 % desarrollaba actividades agropecuarias.<sup>620</sup>

Igualmente, existió una visible relación entre la situación de pobreza y exclusión social, y la posibilidad de ser víctima de la violencia. En el departamento andino de Ayacucho se concentró más del 40% de muertos y desaparecidos reportados. Al sumar a ello las víctimas en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85% de las víctimas registradas por la Comisión. En el mapa del Perú, la intensidad de la

---

<sup>618</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Informe Final*, tomo VIII, p.317.

<sup>619</sup> J. GUILLEROT y L. MAGARRELL, *Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado*, cit., p.24.

<sup>620</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.434.

violencia se visualizó “como una mancha oscura a lo largo de la sierra y la selva de la mitad central del país”.<sup>621</sup>

Al hacer el análisis detallado de los hechos sucedidos durante el conflicto armado, la CVR aplicó las normas del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho interno peruano. De acuerdo con esto, la Comisión entregó al Poder Judicial elementos de prueba para el juzgamiento de los responsables, una posible calificación de los crímenes y la determinación de presuntas responsabilidades de los miembros de las organizaciones.<sup>622</sup>

Algo muy importante que logró la CVR, fue la validación de las experiencias de aquellos que dieron su testimonio, y que al mismo tiempo, el grueso de esos testimonios le dio peso a las voces de aquellos que se manifestaron.<sup>623</sup> Lamentablemente, las demandas de las víctimas no fueron claras durante el proceso de transición. Muchos de los afectados por la violencia no comprendieron la naturaleza de la Comisión y la confundió con un tribunal jurisdiccional en el que iban a encontrar justicia, entendida como sanción penal,<sup>624</sup> No se entendió que el informe final y la labor de este organismo comprendían solo el inicio de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta el tema de la violencia sexual contra la mujer a la hora de revisar el informe final de la CVR. La violencia sexual es un trauma pues supera la capacidad de respuesta de quien la sufre. Durante el conflicto armado interno ésta fue utilizada como medio para someter o dominar a las personas. Las mujeres fueron las principales víctimas de este tipo de abusos, aunque no las únicas.<sup>625</sup>

---

<sup>621</sup> Ibid., p.21.

<sup>622</sup> L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit., p.27.

<sup>623</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.239.

<sup>624</sup> G. CANO y K. NINAQUISPE, “El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de la justicia”, cit., p.69.

<sup>625</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.465.

Entre los perpetradores se encontraron tanto agentes del Estado, como integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA, aunque en diferentes proporciones. De acuerdo con el informe final, alrededor del 83% de los actos de violación sexual son imputables al Estado y aproximadamente un 11% corresponden a los grupos subversivos (Sendero Luminoso y el MRTA).<sup>626</sup>

El capítulo de la violencia sexual contra la mujer ilustra que las modalidades y los actos de violencia sexual contra la mujer difieren dependiendo de los perpetradores de estos crímenes (fuerzas armadas o grupos subversivos). Los actores estatales estuvieron en la mayoría de los casos implicados en violaciones sexuales, muchas veces en grupo, y en violaciones de mujeres embarazadas; entretanto, los grupos subversivos fueron responsables en la mayoría de los casos por actos como trabajo doméstico forzado, mutilaciones (algunas sexuales), esclavitud sexual, embarazo forzado, abortos forzados o uniones forzadas. Estas violaciones fueron perpetradas en contra de las mujeres que fueron reclutadas a la fuerza o que estaban presentes en las “zonas de control” de estos grupos.<sup>627</sup>

El tema de la violencia sexual (especialmente en el caso de la violación sexual) en el informe de la CVR marcó una gran diferencia, pero sobre todo posibilitó la capacidad de comprender la envergadura de este crimen, al punto de establecer que no se trató de eventos criminales aislados sino de crímenes generalizados y en algunos casos sistemáticos, lo cual determinó que las violaciones sexuales perpetradas tienen la condición de crímenes contra la humanidad.<sup>628</sup>

Los casos de violación sexual durante la época de la violencia política reafirmaron la existencia de un contexto generalizado de violencia sexual, la cual se enmarcó dentro de un contexto más amplio de discriminación contra la mujer, a la que se considera vulnerable y

---

<sup>626</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, *Informe Final*, cit., tomo VI, p.277.

<sup>627</sup> C. DUGGAN et al, “Reparations for sexual and reproductive violence: prospects for achieving gender justice in Guatemala and Peru”, cit., p.202.

<sup>628</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *Protocolo para la investigación de casos de violación sexual en el conflicto armado interno*, cit., p.18.

cuyo cuerpo es utilizado por el perpetrador sin tener un motivo aparente o vinculado estrictamente al conflicto armado interno.<sup>629</sup>

La CVR recogió testimonios de innumerables víctimas de violencia sexual, en el informe se identificaron 538 casos de violación sexual durante el conflicto, pero claramente esta no es la cifra total de violaciones. “Por la humillación y la vergüenza que acompañan estas heridas, por la enorme necesidad defensiva de negar y desconocer tales hechos, las víctimas callan el abuso o prefieren decir que se trata de violencia sexual, sin precisar que sufrieron violación sexual”.<sup>630</sup>

En el Perú las cifras científicas de la Comisión llegaron a 69.280 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, pero en el país no existe un número exacto de la cantidad de agresiones sexuales, en sus distintas modalidades, que las mujeres peruanas sufrieron por motivo del conflicto armado.<sup>631</sup> La cifra de víctimas de violación sexual<sup>632</sup> está en construcción a través del Registro Único de Víctimas;<sup>633</sup> la información que recogió la CVR fue muy limitada, debido a que se tuvo distintas fallas conceptuales al momento de elaborar la base de datos y la ficha de recojo de testimonios. En realidad el trabajo de género de la Comisión se hizo a posteriori, entonces ya las herramientas estaban diseñadas y se perdió un poco de información para efectos del informe final.<sup>634</sup>

Otro tema a resaltar dentro del informe fue el referido a la necesidad de reparar. La CVR consideró que su misma existencia y el mandato que recibió para proponer reparaciones constituyeron el inicio de un proceso de resarcimiento y de dignificación de las víctimas. La reparación es un gesto y una acción que reconoce y reafirma la dignidad y el estatus de

---

<sup>629</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, *Informe Final*, cit., tomo VI, p.337.

<sup>630</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.365.

<sup>631</sup> L. IBAÑEZ. Entrevista realizada el 29 de marzo de 2012 en la ciudad de Lima.

<sup>632</sup> La violación sexual es el único tipo de violencia sexual que se encuentra contemplado para la entrega de reparaciones económicas individuales.

<sup>633</sup> Organismo encargado de llevar a cabo el registro de las víctimas del conflicto armado interno para efectos del Plan Integral de Reparaciones.

<sup>634</sup> J. GUILLEROT. Entrevista, cit.



las personas, viniendo del Estado es una “expresión de debido respeto a su condición de ciudadanos”.<sup>635</sup>

Para la CVR la reparación tiene profundas implicaciones éticas y políticas, y es parte importante del proceso de reconciliación nacional. Al ser víctimas del conflicto en su gran mayoría campesinos, indígenas, pobres, tradicionalmente discriminados y excluidos son ellos los que deben recibir la atención preferente por parte del Estado.<sup>636</sup>

La Comisión diseñó la propuesta de un Programa Integral de Reparaciones (PIR) que no se dirigiera solamente a lo económico, a la reconstrucción de la infraestructura física o algunos aspectos relacionados con la salud. El objetivo también era generar un proceso de construcción de relaciones de ciudadanía, lo que implicaba asumir la difícil situación previa a la violencia y el tema de la multiculturalidad entre otros.<sup>637</sup>

El PIR es uno de los programas de reparación más comprensivos originado a partir de una comisión de la verdad.<sup>638</sup> Trata así de un plan integral donde se combinan formas de resarcimiento individual y colectivo, simbólico y material. El PIR forma parte de una serie de recomendaciones que incluyen, además, la judicialización de una serie de casos de violaciones de los derechos humanos y extensas reformas institucionales.<sup>639</sup>

En el informe final consideró que una parte esencial del proceso de reparación es la justicia. No será posible un camino hacia la reconciliación si no va acompañado de un ejercicio efectivo de justicia, tanto en relación con la reparación de los daños sufridos por las

---

<sup>635</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, *Informe Final*, Tomo IX, Capítulo 2, p.141.

<sup>636</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.463.

<sup>637</sup> R. AMES, “Violencia, verdad... ¿Reconciliación en el Perú?”, cit., p.219.

<sup>638</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.234.

<sup>639</sup> J. GUILLEROT y L. MAGARRELL, *Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado*, cit., p.24.

víctimas, como en lo relativo al justo castigo a los perpetradores y el consiguiente fin de la impunidad.<sup>640</sup>

Sobre el proceso de reconciliación se puede afirmar que después de muchos años de marginación y discriminación étnica, las víctimas finalmente encontraron un espacio dentro del Estado el cual sus historias y sus demandas fueran escuchadas y reconocidas.<sup>641</sup>

La CVR propuso que el gran horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas, a partir de su mandato de propiciar la reconciliación nacional y de sus investigaciones realizadas, la Comisión interpretó “la reconciliación como un nuevo pacto funcional entre el Estado y la sociedad, y entre los miembros de la sociedad”.<sup>642</sup>

En el centro de esta propuesta de reconciliación, se encuentra la restitución de derechos para todos y todas y la construcción de ciudadanía. Significa la refundación del pacto social, la expresión de una nueva voluntad social y política y el inicio de algo nuevo, una propuesta a futuro para el país alejada de cualquier tipo de discriminación o exclusión.<sup>643</sup> El proceso de la reconciliación es un hecho posible, y es hecho un necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años, así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia.<sup>644</sup>

Como conclusión general, la Comisión llevó a la esfera pública una realidad que quería ser dejada en el pasado: la de los miles de familiares desaparecidos, atrapados en un presente de sufrimientos, impedidos de cerrar el duelo y voltear la página mientras no ubiquen a sus seres queridos. Al hacerlo contribuyó a alterar los balances de poder, aunque fuera solo para incomodar a quienes lo detentan, lo cual pudo advertirse en sus reacciones frente al

---

<sup>640</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.465.

<sup>641</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.238.

<sup>642</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.465.

<sup>643</sup> S. MACHER, “Un camino arduo”, *Revista Ideele*, No.173, octubre, 2005, p. 26.

<sup>644</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, *Informe Final*, cit., tomo IX, p.13.

informe final.<sup>645</sup> Miembros de las fuerzas militares, de los partidos políticos, empresarios y muchas otras personas cuestionaron la veracidad del informe, de los testimonios presentados y del papel de un documento de este tipo en el camino hacia la transición democrática.

El deber del Estado peruano no terminó con la CVR, por muy destacable que haya sido su labor. No se limita a la persecución penal de algunos de los más responsables de los abusos del pasado, aunque alimente la satisfacción de las víctimas que el Estado persiga una política penal correcta en esta dirección.<sup>646</sup> En los años transcurridos desde que la Comisión entregó al país su informe final, hay que reconocer que el elemento más descuidado entre las grandes tareas que dejó el informe fue el de las necesarias reformas del Estado. “No es aventurado afirmar que no se ha hecho casi nada al respecto, y esta inacción constituye uno de los motivos de alarma más fuertes para aquellos que entendemos la construcción de paz como una regeneración ética e institucional de nuestra sociedad.”<sup>647</sup> La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue solo el primer paso de la etapa de un proceso de transición en el Perú, todavía queda mucho trabajo pendiente por hacer.

### 3.2 Verdad

La Comisión entendió por verdad “el relato fidedigno, éticamente articulado, científicamente respaldado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, afectivamente concernido y perfectible, sobre lo ocurrido en el país en los veinte años considerados por su mandato”.<sup>648</sup>

---

<sup>645</sup> C. DEGREGORI, “Heridas abiertas, derechos esquivos: reflexiones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, cit., p.82.

<sup>646</sup> J. GUILLEROT y L. MAGARRELL, *Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado*, cit., p.10.

<sup>647</sup> S. LERNER, “Justicia y reparación para las víctimas de la violencia política”, *Revista Páginas*, Centro de Estudios y Publicaciones, Vol. 32, No.207, octubre, 2007, p.56.

<sup>648</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Informe Final*, cit., tomo I, p.32.

Antes de la Comisión, los peruanos con piel más oscura y rasgos indígenas, valorados como menos en la sociedad, como ciudadanos de segunda clase, que no tenían derecho a vivir, ni en términos de desarrollo social, ni en términos de no ser asesinados, no tenían siquiera el derecho a denunciar esas condiciones y hacer públicas esas injusticias.<sup>649</sup>

La creación de un espacio como la CVR por parte del Estado, dio inicio a un proceso de transformación que contribuyó a enfrentar prejuicios muy arraigados de miedo y desconfianza que perpetuaban el silencio. El que existiera un espacio donde se originaran denuncias, ha ayudado a las víctimas a empoderarse y a asumir un papel de vigilancia y de “*truth-tellers*”.<sup>650</sup>

El hecho de que las voces de las víctimas fueran escuchadas, se constituyó en un primer paso hacia la restitución de su estatus político y hacia la promoción de su ejercicio de ciudadanía después de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos a las que fueron sometidas. En este sentido, a pesar de los altos niveles de decepción y desilusión de los grupos de víctimas, nuevos movimientos de base están surgiendo gracias a que las víctimas están tomando un rol activo en la difusión de sus historias y memorias, lo cual se puede considerar como un desarrollo importante.<sup>651</sup>

Otro aspecto relevante en períodos de transición en relación con el reconocimiento de la verdad de lo sucedido son los pedidos oficiales de perdón. En el caso del Perú, el Presidente de la República Alejandro Toledo en la entrega del Informe Final de la CVR pidió perdón público en nombre del Estado a todas las víctimas del conflicto armado interno. Igualmente, pidió disculpas a las víctimas de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), el 22 de junio de 2006.<sup>652</sup> Y aunque es verdad que Toledo pidió perdón, fue un

---

<sup>649</sup> L.LAPLANTE, “The Peruvian truth commission’s historical memory Project: empowering truth-tellers to confront truth deniers”, cit., p.438.

<sup>650</sup> Ibid., p.449.

<sup>651</sup> F. CALA, “Truth in the time of fear: Adiós, Ayacucho’s poetics of memory and the Peruvian transitional justice process”, cit., p.11.

<sup>652</sup> CENTRO DE DERECHOS HUMANOS, *Políticas públicas de verdad y memoria en siete países de América Latina: Perú*, Programa Derechos Humanos y Democracia, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2011, p.6.

gesto más bien vacío; las reparaciones morales o simbólicas no cuestan nada y no se han realizado.<sup>653</sup>

Lo que ha sucedido en Perú confirma que la inerte memoria histórica, los nueve volúmenes del informe de la CVR, necesita mantenerse viva para que tenga un impacto real en la sociedad.<sup>654</sup> Desafortunadamente, existe una negativa muy fuerte por parte de las élites políticas y económicas que detentan el poder en hacer memoria, debido a una justificación absurda que “si se hace la memoria del conflicto y se mantiene el recuerdo de un país convulsionado, esto podría frenar las inversiones y detener el crecimiento económico”.<sup>655</sup>

Todavía en el Perú la verdad no se ha traducido en la esperanza de resultados en términos de justicia, reparación y reformas. La experiencia demuestra que la ausencia de voluntad política hará que el gobierno no responda a una verdad generada a través de un proyecto de memoria histórica.<sup>656</sup> Cambios tan necesarios como la inclusión en los textos de historia lo que ocurrió en el lapso estudiado por la CVR, no se han logrado.<sup>657</sup>

En el país no existe una conciencia pública sobre la verdad y compromiso de cambio. A pesar que las audiencias públicas<sup>658</sup> realizadas durante la investigación de la CVR fueron transmitidas por la televisión nacional, no contaron con la audiencia esperada. De la misma forma, el informe final ha sido leído en su mayoría por miembros del movimiento de

---

<sup>653</sup> S. LERNER. Entrevista, cit.

<sup>654</sup> L.LAPLANTE, “The Peruvian truth commission’s historical memory Project: empowering truth-tellers to confront truth deniers”, cit., p.445.

<sup>655</sup> S. LERNER. Entrevista, cit.

<sup>656</sup> L.LAPLANTE, “The Peruvian truth commission’s historical memory Project: empowering truth-tellers to confront truth deniers”, cit., p.444.

<sup>657</sup> R. ESCOBAR, “Lo crudo y lo cocido”, *Revista Ideele*, No. 173, octubre 2005, p.30.

<sup>658</sup> En estas audiencias públicas las víctimas contaron sus historias y su afectación durante el conflicto armado. Éstas fueron realizadas en cada departamento y contaron con la presencia de los comisionados quienes al principio de cada declaración pedían perdón por el inmenso daño causado. Toda la información de las audiencias públicas, así como la versión audiovisual se puede encontrar en el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Disponible en <http://www.memoriaparalosderechoshumanos.pe/pedido/index.jsp>

derechos humanos y el equipo de la CVR, es poco probable encontrar personas de la sociedad en general que hayan leído el informe.<sup>659</sup>

### 3.3 Justicia

Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú la justicia es un principio ético regulador de la vida social y política, que expresa un ideal de convivencia humana en el que se respeten y se garanticen constitucionalmente derechos fundamentales como la dignidad y la inviolabilidad de la persona humana, la libertad individual, la igualdad de derechos y oportunidades, la equidad y la solidaridad.<sup>660</sup> Esta concepción de justicia abarca dimensiones morales, judiciales, reparatoras y socio-políticas.

En su vertiente judicial, la administración de justicia conlleva a que se hagan todos los esfuerzos posibles para perseguir y castigar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos y de los actos de violencia perpetrados durante el conflicto armado. Con este objetivo, la CVR en relación con los temas de administración de justicia y judicialización de violaciones de derechos humanos, propuso en su informe final una serie de recomendaciones para la reforma de la administración de justicia a fin que se cumpla efectivamente su papel de defensor de los derechos ciudadanos y el orden constitucional.<sup>661</sup>

El Perú es el Estado que ha recibido mayor número de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<sup>662</sup> Las condiciones para reiniciar investigaciones judiciales y hacer efectivas las demandas de verdad y justicia estuvieron dadas a partir del año 2001. Tras el reconocimiento del Estado peruano sobre su responsabilidad, la Corte

---

<sup>659</sup> L.LAPLANTE, “The Peruvian truth commission’s historical memory Project: empowering truth-tellers to confront truth deniers”, cit., p.444.

<sup>660</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Informe Final*, cit., p.35.

<sup>661</sup> F. SOBERÓN, “Balance de las acciones del Estado en la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” en COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS et al. (ed.), *Informe Memoria y Justicia para la Inclusión*, Seminario Internacional, Lima, abril, 2005, p.53.

<sup>662</sup> E. SALMÓN, “La utilización del derecho internacional en la condena de Fujimori” en F. QUISPE y R. BUSTAMANTE (coords.), *Derechos humanos y lucha contra la impunidad: el caso Fujimori*, Dykinson S.L., Palestra Editores SAC, Madrid, 2011, p.55.

IDH ha dictado sentencia en casos como los de Barrios Altos (marzo y septiembre de 2001), los hermanos Emilio y Rafael Gómez Paquiyauri (8 de julio de 2004) y Pedro Huilca Tecse (3 de marzo de 2005).<sup>663</sup>

El acatamiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, y en especial del caso Barrios Altos, ha servido de factor disuasivo respecto a otros intentos de legislar a favor de la impunidad.<sup>664</sup> Como lo estableció la Corte “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”.<sup>665</sup>

Perú ha avanzado en el cumplimiento de tales sentencias, por medio del pago de las indemnizaciones o mediante la publicación en el diario oficial El Peruano de los hechos narrados en las sentencias.<sup>666</sup> Y aunque todo esto es un indicio de avance en cuestiones de justicia, dista de una verdadera intención de castigar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.

En cuanto a la justicia penal, un hecho para resaltar fue la condena a Fujimori. El 7 de abril del 2009 la Sala especial dictó sentencia condenando a Alberto Fujimori a 25 años de pena privativa de libertad por encontrarlo responsable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.<sup>667</sup>

El juzgamiento penal de Fujimori, como condenado responsable de las violaciones de derechos humanos que se le imputaban cumplió, por una parte, con una obligación

---

<sup>663</sup> R. GAMARRA, “Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional” cit., p.214.

<sup>664</sup> L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit., p.29.

<sup>665</sup> CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Sentencia caso Barrios Altos*, cit., párr. 41.

<sup>666</sup> R. GAMARRA, “Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional”, cit., p.214.

<sup>667</sup> D. LOVATÓN, “Condena judicial contra el ex Presidente Alberto Fujimori: mensaje contra la impunidad y Nuevo capítulo en la historia del Perú contemporáneo”, cit., p.73.

internacional del Estado peruano y, por otra, constituyó una reparación a las víctimas.<sup>668</sup> Asimismo, la sentencia fue una forma de reivindicación del propio Poder Judicial y el Ministerio Público peruanos los cuales, lamentablemente hasta el momento, inspiran desconfianza en la ciudadanía por su lentitud y una corrupción muy arraigada.<sup>669</sup>

La sentencia también es un reconocimiento al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, que ha sido y es aun fuertemente atacado por diversos sectores políticos, militares y religiosos. En varios pasajes, la sentencia se basó en el informe final, sosteniendo que es un documento público y válido.<sup>670</sup> Finalmente, la sentencia fue un hecho sin precedentes, no solamente por su contenido, sino por lo que había significado el proceso de Fujimori, un ex presidente de la República extraditado y condenado, un caso sin igual en América Latina.<sup>671</sup>

En cuanto a la judicialización de casos, en el informe presentado por la CVR, la comisión encontró 492 presuntos responsables en los casos investigados. Se trata de 356 miembros de las fuerzas armadas, 70 de la policía nacional, 20 de rondas campesinas, 13 de sendero luminoso y 11 civiles. Asimismo, hay otros 22 de los que no se tiene mayor información.<sup>672</sup>

Aunque algunos pocos casos de “alto perfil”, cometidos en su mayoría por el régimen de Fujimori, han avanzado y han resultado en condenas, miles de víctimas de desaparición forzada, masacres, violaciones sexuales, torturas y otro tipo de violaciones siguen esperando por la justicia.<sup>673</sup> La judicialización de las violaciones de los derechos humanos de las miles de víctimas que causó el conflicto es lo óptimo, pero no lo real.<sup>674</sup>

---

<sup>668</sup> E. SALMÓN, “La utilización del derecho internacional en la condena de Fujimori” en F. QUISPE y R. BUSTAMANTE (coords.), *Derechos humanos y lucha contra la impunidad: el caso Fujimori*, cit., p.58.

<sup>669</sup> D. LOVATÓN, “Condena judicial contra el ex Presidente Alberto Fujimori: mensaje contra la impunidad y Nuevo capítulo en la historia del Perú contemporáneo”, cit., p.74.

<sup>670</sup> Ibid., p.75.

<sup>671</sup> C. RIVERA. Entrevista realizada el 19 de abril de 2012 en la ciudad de Lima. Entrevistadora: Sinthya Rubio Escolar.

<sup>672</sup> C. BASOMBRÍO y F. ROSPIGLIOSI, *La seguridad y sus instituciones en el Perú a inicios del siglo XXI. Reformas democráticas o neomilitarismo*, cit., p.95.

<sup>673</sup> R. ROOT, “Through the window of opportunity: the transitional justice network in Peru”, cit., p.470.

<sup>674</sup> G. CANO y K. NINAQUISPE, “El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de la justicia”, cit., p.75.



Muchos peruanos perciben a las fuerzas armadas como héroes de la lucha anti-subversiva y son persuadidos bajo el argumento de que éstos merecen protección de los procesos judiciales instaurados por un supuesto sistema legal ilegítimo y por el movimiento de derechos humanos compuesto por ONGs de izquierda.<sup>675</sup>

Entretanto, la condena moral de Sendero Luminoso por parte de la sociedad se ha mantenido muy fuerte y el informe final de la CVR lo ratificó. De esta manera, mientras ha costado grandes esfuerzos poner en marcha las investigaciones por las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas y Policiales; la persecución penal de los miembros de SL estuvo caracterizada por la utilización ilegal y abusiva del Poder Penal del Estado.<sup>676</sup>

En la actualidad existen aproximadamente 20 juicios orales en trámite de casos de graves violaciones de los derechos humanos, la mayoría de ellos ante la Sala Penal Nacional (SPN).<sup>677</sup> Existen muy pocos casos en curso y la mayoría se encuentran estancados. De las pocas sentencias, la mayoría vienen siendo absolutorias, pese a las pruebas existentes.<sup>678</sup>

La actual jurisprudencia de la Sala Penal Nacional constituye un evidente y grave retroceso en el proceso de justicia, al igual que destruye la expectativa de las víctimas, las cuales en muchos casos han tenido que enfrentar las más diversas dificultades para buscar justicia por más de 20 años continuos.<sup>679</sup>

Adicionalmente, un elemento sobre el que hay que poner mucha atención es la calificación de los crímenes. Muchos de los casos están ahora siendo juzgados, pero más allá de algunos pronunciamientos preliminares, en las sentencias no existen pronunciamientos categóricos

---

<sup>675</sup> R. ROOT, “Through the window of opportunity: the transitional justice network in Peru”, cit., p.468.

<sup>676</sup> L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit., p.30.

<sup>677</sup> C. RIVERA, “Crímenes contra la humanidad”, *Revista Ideele*, No.217, marzo 2012. Disponible en: <http://www.revistaideele.com/ideele/content/cr%C3%ADmenes-contra-la-humanidad>

<sup>678</sup> COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, *Informe anual 2009 – 2010*, p.116. Disponible en: <http://derechoshumanos.pe/documentos/informe-anual/>

<sup>679</sup> Ibid.p.118.

que señalen con claridad que tales eventos son crímenes de lesa humanidad.<sup>680</sup> El procesamiento de violaciones de los derechos humanos requiere no solo de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; sino que los operadores del sistema de administración de justicia tengan en consideración que los crímenes se perpetraron en el marco de un conflicto armado interno y que en muchos casos obedecieron a políticas sistemáticas y generalizadas.<sup>681</sup>

Por otra parte, se encuentran grandes dificultades en el proceso de judicialización tales como la falta de implementación de un sistema de protección para las víctimas; la insistencia de la justicia militar para juzgar los casos de violaciones a los derechos humanos; la falta de entrega de información del ministerio de defensa y un alto número de víctimas sin defensa legal.<sup>682</sup> Asimismo, el decaimiento de la voluntad política, por un lado, y el cansancio de los órganos judiciales para continuar con la judicialización de los casos, por el otro, podrían ser factores que impidieran finalizar el proceso de superación del pasado a través del sistema penal.<sup>683</sup>

Igualmente, no hay cambios en las instituciones; en el sistema de justicia, los jueces dictan órdenes de detención sin información completa o con faltas de ortografía que hacen imposible su ejecución; las responsabilidades siguen asignándose principalmente al personal subalterno y se repiten las amenazas a testigos.<sup>684</sup>

La impunidad sigue reinando, en la actualidad, inclusive en ausencia de amnistía, la influencia política retrasa y obstruye las investigaciones penales y los juicios. Los militares han sabido recomponerse desde la caída de Fujimori y esa recomposición ha generado una mayor capacidad de incidir sobre el sistema de justicia, de incidir sobre los políticos e

---

<sup>680</sup> C. RIVERA, “Crímenes contra la humanidad”, cit.

<sup>681</sup> G. CANO y K. NINAQUISPE, “El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de la justicia”, cit., p.75.

<sup>682</sup> E. LUNA, “La responsabilidad penal de los agentes del Estado”, en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, cit., p.117.

<sup>683</sup> Y. MONTOYA, “Límites y avances de la justicia penal frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período del conflicto armado interno en el Perú” cit., p.61.

<sup>684</sup> S. MACHER, “Un camino arduo”, cit., p. 27.

incidir sobre las decisiones que ambos están tomando, han logrado reponerse y ahora tienen una posición en realidad bastante importante para sus intereses en materia de justicia.<sup>685</sup>

En el país existe un “permiso social e institucional” evidente. Está claro que los fiscales y jueces que actúan de modo contrario al Derecho no son cuestionados por la prensa, investigados por sus instituciones o sancionados.<sup>686</sup> El sistema de administración de justicia ha mostrado escaso compromiso para atender las recomendaciones del informe de la CVR.<sup>687</sup> Finalmente, dado el escaso record de procesamiento penales por violaciones de derechos humanos (ochenta casos judicializados), las reparaciones podrían ser la única forma de justicia que les quedaría a las víctimas peruanas.<sup>688</sup>

#### ***4. El Plan Integral de Reparaciones<sup>689</sup>***

Después de haber hecho mucha presión y debate desde la entrega del Informe Final de la CVR, el Congreso peruano promulgó la ley que implementa el Plan Integral de Reparaciones (PIR) el 29 de julio del 2005.<sup>690</sup> El Plan Integral de Reparaciones - PIR (Ley 28592) es el instrumento técnico normativo que determina los principios, enfoques, objetivos, políticas y acciones que guían la acción del Estado, en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1980 y 2000 (en conformidad con las conclusiones y recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación). El PIR tiene

---

<sup>685</sup> C. RIVERA. Entrevista, cit.

<sup>686</sup> COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, *Informe anual 2009 – 2010*, cit., p.124.

<sup>687</sup> F. SOBERÓN, “Balance de las acciones del Estado en la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” cit., p.53.

<sup>688</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.244.

<sup>689</sup> Antes de entrar en material sobre la implementación del Plan Integral de Reparaciones como programa administrativo de reparación masiva, cabe insistir en que el énfasis de este trabajo es la reparación a las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y del DIH (especialmente a través de programas administrativos de reparación, aunque acompañado de esfuerzos en la administración de justicia a nivel nacional e internacional), razón por la cual en el presente capítulo se desarrollo particularmente este tema.

<sup>690</sup> Vid. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, *Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, Ley N° 28592*, Lima, 29 de julio de 2005.

como propósito “reparar a dichas víctimas, con el objeto de contribuir a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos y propender a la reconciliación nacional”.<sup>691</sup>

Posteriormente, se aprueba el Reglamento del PIR (Decreto Supremo N° 015-2006-JUS)<sup>692</sup>, con el que se completó el marco normativo necesario para el desarrollo de políticas específicas para cada programa de reparación. Las dos normas anteriores definen los siete componentes del Plan Integral de Reparaciones: el programa de restitución de derechos ciudadanos, el programa de reparaciones en educación, el programa de reparaciones en salud, el programa de reparaciones colectivas, el programa de reparaciones simbólicas, el programa de promoción y facilitación al acceso habitacional y el programa de reparaciones económicas.

Para la ejecución del Plan Integral de reparaciones se crearon dos organismos gubernamentales: la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y el Consejo de Reparaciones (CR). La CMAN está encargada de implementar las reparaciones, desde el diseño de las políticas y programas, hasta la organización y coordinación interinstitucional para la definición de los presupuestos de cada uno de los programas. De las competencias de esta instancia se excluye la ejecución del gasto, pues ésta debe llevarse a cabo a través del órgano de gobierno encargado por competencia temática o territorial. Sobre estos siete programas, la CMAN ha construido y aprobado solamente lineamientos de implementación para los programas de reparaciones en salud y en reparaciones colectivas.<sup>693</sup>

Tanto la CMAN como el CR son órganos colegiados y cuentan con Secretarías Ejecutiva y Técnica (respectivamente) que tienen la función de ejecutar las decisiones que son tomadas por estos. La CMAN está compuesta por trece miembros, de los cuales nueve son representantes de diferentes ministerios, como los de Justicia, Salud, Educación, Defensa, Interior, Agricultura, Energía y Minas, Trabajo y la Presidencia del Consejo de Ministros;

---

<sup>691</sup> COMISION MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL, *Definición Plan Integral de Reparaciones - PIR*, CMAN, Lima, 2005.

<sup>692</sup> MINISTERIO DE JUSTICIA DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 015-2006-JUS*, Lima, julio de 2006.

<sup>693</sup> INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *¿Cuánto se ha reparado en nuestras comunidades? Avances, percepciones y recomendaciones sobre reparaciones colectivas en Perú (2007-2011)*, cit., p.7.

mientras los cuatro restantes provienen de organizaciones de sociedad civil como la Asociación de Decanos de Colegios Profesionales, la Asamblea Nacional de Rectores, la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.<sup>694</sup>

Por su parte, el Consejo de Reparaciones es la entidad encargada de la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV), y es el que identifica tanto a los beneficiarios individuales como a los beneficiarios colectivos; con base en sus listados se debe desarrollar el diseño y la planeación para la ejecución de las reparaciones. El CR cuenta con 6 miembros designados por la Presidencia del Consejo de Ministros, los cuales no participan como representantes de organizaciones sino a nivel personal, en este organismo no hay representación de los diversos sectores del gobierno.<sup>695</sup>

La gestión del gobierno de Alejandro Toledo, primer Presidente en ejercer funciones luego del período transicional, en relación con el PIR pudo ser mejor. En el 2005 el congreso asignó diez millones de soles para el Plan Integral de Reparaciones, sin embargo, en el presupuesto no se planteó una estrategia que permitiera definir los tiempos y metas como parte del Plan PIR, teniendo como consecuencia, que cada año habría que negociar su presupuesto. La CMAN elaboró un programa multianual 2005-2006 cuyo costo estimado fue de 349 millones de soles, pero ni en el 2005, ni en el 2006 se logró la asignación prevista.<sup>696</sup>

Ese mismo año, Toledo incrementó el presupuesto militar a pesar del reclamo de su Ministro de Economía y Finanzas que le informó que los fondos para pagar las reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos no eran suficientes; este hecho significó

---

<sup>694</sup> PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 011-2004-PCM, Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional*, Lima, febrero de 2004.

<sup>695</sup> PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, *Resolución Ministerial 373-2006-PCM*, Lima, 19 de octubre de 2006.

<sup>696</sup> N. HENRÍQUEZ, *Cuestiones de género y poder en el conflicto armado en el Perú*, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Lima, 2006, p.149.

un golpe en contra de la agenda transicional.<sup>697</sup> Según Salomón Lerner, Presidente de la CVR, “el Estado no hizo bien la tarea. Toledo tuvo la oportunidad de hacerlo, en primer lugar porque fue un actor externo al conflicto armado y en segundo lugar, porque hubo ofrecimientos concretos por parte de gobiernos extranjeros, específicamente de Alemania (en dos ocasiones), para que a través de la moratoria de un año de la deuda, se destinará ese dinero a la implementación del PIR”.<sup>698</sup>

## **4.1 Los componentes del Plan Integral de Reparaciones**

### **4.1.1 Programa de restitución de derechos ciudadanos**

El objetivo del programa de restitución de derechos ciudadanos consiste en establecer el ejercicio pleno y efectivo de los derechos civiles y políticos de las víctimas del conflicto armado. Para lograr su rehabilitación jurídica, se deberán “crear accesos preferenciales o tratamientos prioritarios para que a este sector de la sociedad se le pueda garantizar una situación de igualdad en el ejercicio de sus derechos ante sus otros conciudadanos”.<sup>699</sup>

Hasta el momento, la CMAN no ha impulsado de manera efectiva este programa. Por el contrario, el Reniec<sup>700</sup> y la Defensoría del Pueblo, así como organizaciones de la sociedad civil, han sido quienes han trabajado para posibilitar su implementación. Sin embargo, el Reniec es la institución que reporta mayores avances, ya que ha beneficiado, aunque de forma general, a las víctimas del conflicto armado. Los cambios normativos que se han llevado a cabo a través del Reniec han permitido que personas que quedaron indocumentadas (sin DNI y/o partida de nacimiento) o cuyas actas de nacimiento (así como de defunción y/o matrimonio) fueron destruidas y/o dañadas, recuperen y/u obtengan sus documentos de identificación que les permiten ejercer todos sus derechos ciudadanos.<sup>701</sup>

---

<sup>697</sup>R. ROOT, “Through the window of opportunity: the transitional justice network in Peru”, cit., p.470.

<sup>698</sup>S. LERNER. Entrevista, cit.

<sup>699</sup>MINISTERIO DE JUSTICIA DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 015-2006-JUS*, cit., art.13.

<sup>700</sup>Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú.

<sup>701</sup>INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *Avances y desafíos en las reparaciones a las víctimas de la violencia política*, Área de Gobernabilidad y Derechos Humanos, Lima, agosto de 2011, p.13.

Este es uno de los programas más difíciles de ser percibido como un programa de reparación, ya que es un derecho que toda la ciudadanía tiene y su atención se hace a nivel general. Pero a su vez, es uno de los programas fundamentales ya que tener un DNI es una condición sine qua non para poder ser beneficiarios del PIR. Muchas de las víctimas se encontraban indocumentadas (y todavía se presentan casos de este tipo) por causa del conflicto armado o por la inaccesibilidad de los ciudadanos habitantes de lejanas zonas de la sierra y selva peruana a los servicios de registro por parte del Estado.

#### **4.1.2 Programa de reparaciones en educación**

La finalidad de este programa es dar facilidades y brindar nuevas o mejores oportunidades de acceso a las víctimas y sus familiares que como producto del proceso de violencia perdieron la posibilidad de recibir una educación adecuada o de completar sus estudios primarios, secundarios, superior técnicos y/o universitarios. El programa se implementará a través de las instituciones de educación pública, y se podrá aplicar en instituciones privadas cuando éstas, voluntariamente, lo determinen.<sup>702</sup>

El programa de reparaciones en educación está compuesto por cinco modalidades: la exoneración de pagos de matrícula, pensiones, derecho de examen de ingreso y certificados de estudios y servicios de comedor y vivienda en los casos correspondientes; la implementación de programa de becas integrales; la educación para adultos; el acceso y restitución del derecho a la educación básica regular y el acceso a oportunidades de calificación laboral adecuada.

Este programa ha tenido avances en el diseño pero no se han logrado concluir los lineamientos, los casos en que se han hecho efectivas las reparaciones de este tipo son muy escasos y han sido iniciativas particulares. El programa tuvo varias modificaciones en la definición de sus beneficiarios; sin embargo, poco se ha desarrollado en sus componentes

---

<sup>702</sup> MINISTERIO DE JUSTICIA DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 015-2006-JUS*, cit., art.17.

específicos (becas, educación básica etc.) y varias de las acciones se asemejan a una política social en educación.<sup>703</sup>

#### 4.1.3 Programa de reparaciones en salud

Los objetivos de este programa son la recuperación de la salud mental y física, la reconstitución de las redes de soporte social y fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo personal y social de las víctimas del conflicto armado. El programa está integrado por seis modalidades: la atención integral en servicios públicos de salud, priorizando a niños, mujeres y ancianos; la recuperación integral desde la intervención comunitaria (reconstrucción de las redes de soporte comunitario, recuperación de la memoria histórica, creación de espacios comunitarios para la recuperación emocional); la recuperación desde la intervención clínica, lo que implica el diseño de un modelo de atención clínica que se ajuste a las necesidades y recursos humanos de las diversas zonas del país; la promoción y prevención a través de la educación y sensibilización; la inclusión en las políticas públicas de salud y la mejora de la infraestructura de atención en los servicios de salud.<sup>704</sup>

El Gobierno de Alan García expidió el Decreto Supremo N° 006-2006-SA<sup>705</sup> y su modificatoria Decreto Supremo N° 015-2006-SA, ampliando las prestaciones de salud del Seguro Integral de Salud (SIS) a víctimas de la violencia política 1980 – 2000, entre otros, estableciendo como componentes prestaciones de salud mental, oncológicas y otras.<sup>706</sup> Para muchas personas la participación en el SIS no es un beneficio por el hecho de ser víctima sino por su situación de pobreza, razón por lo cual muchos han considerado que no es reparación efectiva. Su atención se presta en las mismas condiciones que al resto de los ciudadanos de escasos recursos, no hay alguna especificidad en la atención y que envíe un

---

<sup>703</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *Avances y desafíos en las reparaciones a las víctimas de la violencia política*, cit., p.31.

<sup>704</sup> MINISTERIO DE JUSTICIA DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 015-2006-JUS*, cit., art.22.

<sup>705</sup> MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 006-2006-SA*, Lima, 23 de junio de 2006.

<sup>706</sup> COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL, *Memoria 2006 - 2010, acciones de reparación realizadas en el marco de la ley No.28592*, Lima, abril de 2011, p.11.



mensaje reparador (siendo el SIS este un sistema de salud universal para población con escasos recursos), sino que sucede lo contrario, en muchos casos las víctimas prefieren no mencionar su situación por temor a ser discriminadas o estigmatizadas.

En cuanto a las intervenciones en salud mental estas han sido dispersas y poco coherentes. Existe un programa nacional de salud mental, y a su vez las direcciones regionales deben implementar sus propias directivas, pero en ambos casos la asignación de presupuesto es insuficiente e inclusive, existe la tendencia a que esta disminuya con respecto a años anteriores.<sup>707</sup> El tema de la salud mental es fundamental, no basta con enviar un psicólogo o un psiquiatra o capacitar algunos técnicos, debe ser una política nacional.<sup>708</sup>

#### **4.1.4 Programa de reparaciones simbólicas**

Según el reglamento del PIR, el objetivo del programa de reparaciones simbólicas es “contribuir a restaurar el lazo social quebrado, por el proceso de violencia, entre el Estado y las personas y entre las personas mismas, a través del reconocimiento público del daño que les infligió la acción de los grupos subversivos y la acción u omisión del Estado, en la búsqueda de favorecer la reconciliación nacional del conjunto de la sociedad peruana hacia las víctimas”.<sup>709</sup>

Entre sus modalidades se encuentran: los gestos públicos, que comprende las disculpas al país por parte de los representantes de los poderes del Estado, cartas a las víctimas o a sus familiares, ceremonias públicas para la información masiva del Informe de la CVR; los actos de reconocimiento que comprende el reconocimiento de todas las víctimas del proceso de violencia, a los inocentes que sufrieron prisión, a los líderes sociales y autoridades civiles, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y a los gobiernos locales, miembros de los Comités de Autodefensa, a las organizaciones de

---

<sup>707</sup> G. HUERTA. Entrevista realizada el 23 de abril de 2012 en la ciudad de Lima.

<sup>708</sup> J. TORRES. Entrevista realizada el 25 de abril de 2012 en la ciudad de Lima.

<sup>709</sup> MINISTERIO DE JUSTICIA DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 015-2006-JUS*, cit., art.30.

afectados por el proceso de violencia y a las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y las comunidades.

Igualmente, comprenden los actos que conduzcan hacia la reconciliación, sean éstos, cambios en símbolos asociados con la violencia en los territorios afectados y la resignificación de símbolos de violación de los derechos humanos, sean éstos cierre y/o reacondicionamiento de los penales que simbolicen estas violaciones, a propuesta y en coordinación con los afectados; los recordatorios a los héroes de la pacificación, asignando nombres a las calles, plazas públicas de la comunidad, puentes, carreteras, distrito o región, a propuesta y en coordinación con los afectados; la inclusión, como héroes por la paz, a las víctimas señaladas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la declaratoria del día 28 de agosto de cada año como el “Día del Homenaje a todas las víctimas de la violencia”.

El gobierno central no ha avanzado mucho en el desarrollo del programa de reparaciones simbólicas, los gestos y reconocimientos hacia las víctimas no han sido divulgados. Se ha tratado de construir algunos monumentos de manera simbólica, pero en muchos casos no se les brinda el mantenimiento adecuado. Solo desde la sociedad civil se puede percibir que los procesos de reconstrucción histórica de la memoria comunal han sido trabajados.<sup>710</sup>

#### **4.1.5 Programa de promoción y facilitación al acceso habitacional**

La finalidad de este programa es otorgar facilidades para el acceso a la vivienda a las víctimas y/o a sus familiares que como producto del proceso de violencia perdieron sus viviendas o fueron desplazadas del lugar donde habitaban. Los beneficiarios, individuales y colectivos, de este programa pueden ser los que perdieron sus viviendas por destrucción a

---

<sup>710</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *Avances y desafíos en las reparaciones a las víctimas de la violencia política*, cit., p.6.

causa del proceso de violencia y los que enfrentan problemas de habitacionalidad como secuela directa del conflicto armado.<sup>711</sup>

En la teoría, las modalidades de este programa son: un programa especial de construcción y adjudicación de viviendas que se llevará a cabo en forma progresiva y descentralizada; proyectos de apoyo a la reconstrucción y rehabilitación de viviendas rurales; el apoyo para el saneamiento legal de la propiedad de la vivienda, convocando la participación de las entidades competentes del Estado; el fomento y apoyo para la ubicación de las familias desplazadas internas en situación de alojados en los asentamientos elegidos en coordinación con los gobiernos locales, los que deberán ser considerados como beneficiarios preferentes en las campañas de asignación de lotes, y el fomento, apoyo financiero y asesoría técnica para la autoconstrucción de las viviendas de las familias desplazadas internas que cuentan con viviendas precarias y provisionales.<sup>712</sup> Pero en la realidad, este es uno de los programas menos desarrollados, se podría decir que casi inexistente.<sup>713</sup>

#### **4.1.6 Programa de reparaciones colectivas**

El objetivo del programa es contribuir a la reconstrucción del capital social e institucional, material y económico-productivo de las familias y comunidades rurales y urbanas afectadas por el conflicto armado. Pueden ser beneficiarios del programa las comunidades campesinas, comunidades nativas, centros poblados y otras formas de organización comunal afectados por el proceso de violencia; las familias de desplazados provenientes de las comunidades afectadas en sus lugares de inserción.<sup>714</sup>

Según el artículo 27 del reglamento de la ley el programa de reparaciones colectivas debe tener cuatro modalidades: en primer lugar, la consolidación institucional, que comprende la

---

<sup>711</sup> MINISTERIO DE JUSTICIA DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 015-2006-JUS*, cit., art.33.

<sup>712</sup> Ibid., art.35.

<sup>713</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *Avances y desafíos en las reparaciones a las víctimas de la violencia política*, cit., p.46.

<sup>714</sup> MINISTERIO DE JUSTICIA DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 015-2006-JUS*, cit., art.25.

incorporación de acciones de apoyo al saneamiento legal de las comunidades, la instauración de las autoridades y poderes locales, la capacitación en derechos humanos, prevención y resolución de conflictos internos e intercomunales, a partir de un diagnóstico comunal participativo que ayude a identificar las acciones necesarias, dentro de un enfoque de derechos que priorice la educación para la paz y la construcción de una cultura de paz.

En segundo lugar, la recuperación y reconstrucción de la infraestructura económica, productiva y de comercio, y el desarrollo de capacidades humanas y acceso a oportunidades económicas; en tercer lugar, el apoyo al retorno, reasentamiento y repoblamiento, así como a las poblaciones desplazadas como consecuencia del proceso de violencia; y por último, la recuperación y ampliación de infraestructura de servicios básicos de educación, salud, saneamiento, electrificación rural, recuperación del patrimonio comunal y otros que el colectivo pueda identificar.

Desde junio del 2007 se ha implementado el programa de reparaciones colectivas<sup>715</sup> con presupuesto y actividades propias, la coordinación del gobierno central la ejecutan los gobiernos locales (distritales y provinciales) del centro poblado o la comunidad priorizada que es priorizada.<sup>716</sup> La Secretaría Ejecutiva de la CMAN prioriza anualmente un número específico de comunidades y/o centros poblados, basándose principalmente en los listados del Registro Único de Víctimas. La priorización permite a la comunidad presentar un proyecto de infraestructura o de carácter productivo hasta por el monto de 100.000 nuevos soles<sup>717</sup>. Los proyectos deben ser elegidos por la población del centro poblado y/o comunidad beneficiaria, por medio de sus asambleas comunales. Estos son ejecutados por un organismo público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos<sup>718</sup> hace la

---

<sup>715</sup> Este ha sido el programa que más se ha desarrollado de los siete que incluyen el Plan Integral de Reparación. Se le dio inicio en el gobierno de Alan García y muchas personas consideran que fue utilizado por éste y los miembros de su equipo con fines políticos.

<sup>716</sup> INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *¿Cuánto se ha reparado en nuestras comunidades? Avances, percepciones y recomendaciones sobre reparaciones colectivas en Perú (2007-2011)*, cit., p.8.

<sup>717</sup> 31.000 euros aproximadamente.

<sup>718</sup> El 22 de febrero del presente año la CMAN y el Consejo de Reparaciones son adscritos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Decreto Supremo DS No.102-2011-PCM. Anteriormente, estas dos instancias estaban vinculadas a la Presidencia del Consejo de Ministros.

transferencia financiera a cada municipio, en donde la autoridad local (la alcaldía distrital) ejecuta el proyecto.<sup>719</sup>

Según Gino Huerta, representante de los organismos de derechos humanos en la CMAN, el grado de eficiencia en la ejecución del gasto de las reparaciones colectivas, salvo de algunos problemas de manejos y de priorización de algunas comunidades, frente a otros programas del Estado está en el promedio o incluso podría hasta ser un poco mejor.<sup>720</sup> El avance del programa ha sido importante en cifras generales. La inversión del Estado ha sido significativa, 146.000.000 de nuevos soles,<sup>721</sup> y ha permitido que los gobiernos locales canalicen sus fondos públicos en la mejora de las obras que se escogían como reparaciones. La mayoría de los proyectos aprobados son de infraestructura de riego, actividades pecuarias e infraestructura educativa. Estos tres tipos de proyectos responden a las necesidades de la población y corresponden a las áreas definidas en el Reglamento de la ley del PIR.<sup>722</sup>

Otras opiniones surgen también en relación con la ejecución de los proyectos. Sonia Paredes, consultora del ICTJ, manifiesta que “se empezaron a hacer una serie de obras pero muchas de ellas empezaron a fallar y en el transcurrir de los años se creó una burocracia que solamente se dedicaba a hacer obras, tanto es así que muchos proyectos son idénticos. ¿En qué momento la eficiencia de los proyectos se pierde?, digamos que después de todos estos años lo que nos dice esta experiencia es que hay que tener mucho cuidado.”<sup>723</sup>

---

<sup>719</sup> INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *¿Cuánto se ha reparado en nuestras comunidades? Avances, percepciones y recomendaciones sobre reparaciones colectivas en Perú (2007-2011)*, cit., p.9.

<sup>720</sup> G. HUERTA. Entrevista, cit.

<sup>721</sup> Esta cifra equivale a 45 millones de euros aproximadamente.

<sup>722</sup> INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *¿Cuánto se ha reparado en nuestras comunidades? Avances, percepciones y recomendaciones sobre reparaciones colectivas en Perú (2007-2011)*, cit., p.56.

<sup>723</sup> S. PAREDES. Entrevista realizada el 30 de marzo de 2012 en la ciudad de Lima.

#### 4.1.7 Programa de reparaciones económicas

Para la CMAN, las reparaciones económicas son parte del reconocimiento del Estado por los daños infligidos, las pérdidas sufridas y el daño moral padecido por las víctimas del conflicto armado interno. Estas reparaciones simbolizan el esfuerzo y reconocimiento público de una voluntad de restablecer condiciones de justicia y de reparar los daños que sufrieron los ciudadanos. Igualmente, proporcionar reparaciones económicas, contribuye a dar inicio a un nuevo pacto social basado en la reducción de la exclusión y en el respeto y garantía de los derechos humanos y del Estado de derecho.<sup>724</sup>

En el artículo 38 de la ley que reglamenta el PIR se establece que el Consejo de Reparaciones determinará e identificará los beneficiarios del programa de reparaciones económicas en los siguientes casos: los familiares de las víctimas fallecidas o desaparecidas; las personas que como resultado de atentados, agresiones o torturas, tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total (reconocida por la Comisión Nacional de Discapacidad) y las víctimas de violación sexual.<sup>725</sup>

En el caso peruano, la necesidad de una compensación económica es más apremiante debido al hecho de que la mayoría de las víctimas pertenecen a uno de los sectores más empobrecidos y excluidos de la sociedad, y a que los efectos de la violencia limitaron severamente la capacidad de soporte propio y de las familias.<sup>726</sup>

A finales del gobierno de Alan García, posterior a un proceso de discusión que demoró más de dos años y supuso constantes movilizaciones de las organizaciones de afectados, el inicio del programa de reparaciones económicas se da a partir del diseño final que

---

<sup>724</sup> COMISION MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL, *Definición programa de reparaciones económicas*, CMAN, Lima.

<sup>725</sup> CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, *Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR*, Ley N° 28592, cit., art.38.

<sup>726</sup> J. GARCÍA-GODOS, “Victim reparations in the Peruvian truth commission and the challenge of historical interpretation”, cit., p.76.

implementa la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, sin la discusión del Pleno de este organismo, con el Decreto Supremo DS 051-2011-PCM<sup>727</sup> del 15 de junio de 2011.

El Decreto Supremo 051 ha sido duramente cuestionado por sus tres determinaciones. En primer lugar, cierra el RUV a 31 de diciembre de 2011 para reconocer las solicitudes de reparaciones económicas, situación que contradice a la ley y al propio reglamento del PIR, ya que el RUV debe ser abierto y permanente. En segundo lugar, establece que el monto de la indemnización es de 10.000 nuevos soles<sup>728</sup> por víctima, cifra insignificante que les parece irrisoria a las víctimas. Y en tercer lugar, se refiere a la priorización, el Decreto Supremo señala que son motivo de reparación económica los casos anteriormente mencionados, pero además establece que como condición para ser beneficiarios en el caso de los padres deben tener 80 años o más en el momento que entró en vigencia este Decreto Supremo, el esposo/a o conviviente 65 años, y para las personas con discapacidad permanente y víctimas de violación sexual igualmente 65 años. Adicionalmente, está el tema del reparto, el DS 051 determina que las víctimas de violación sexual y discapacidad permanente reciben el 100% del monto cada uno; y que los familiares de fallecidos y desaparecidos recibirán el 50% para el/la cónyuge y el otro 50% para padres e hijos.

Para Adolfo Chavarry, actual Secretario Ejecutivo de la CMAN,<sup>729</sup> además de ser un decreto cuestionado por las víctimas es muy injusto. “En cuanto al cierre del RUV, se ha solicitado la información al Consejo de Reparaciones para determinar cuál sería el nuevo universo adicional al que ya existe al 31 de diciembre de 2011 en el registro, para establecer su reapertura y definir un período de funcionamiento. En segundo lugar, el monto son 10.000 nuevos soles y las víctimas están exigiendo 36.000 nuevos soles, estamos haciendo gestiones y las víctimas también por su lado ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano encargado de ver la disponibilidad de dinero. Y el tercer elemento es la priorización, que es lo que hace más injusto este decreto supremo, este

---

<sup>727</sup> PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEL PERÚ, *Decreto Supremo DS 051-2011-PCM*, Lima, 15 de junio de 2011.

<sup>728</sup> 3.100 euros aproximadamente.

<sup>729</sup> Adolfo Chavarry ha sido designado en el cargo de Secretario Ejecutivo de la CMAN a finales del mes de febrero del 2012.

debe desaparecer, inclusive es una decisión política del propio Presidente de la República, hemos presentado una propuesta de decreto supremo y es probable que la solución se dé por una ley aprobada en el Congreso, hecho esto inmediatamente comenzaremos a implementar de acuerdo con los nuevos lineamientos que la ley nos permita, ya sea para que nosotros construyamos los lineamientos o porque la ley establezca los nuevos lineamientos para las reparaciones económicas, estamos a la espera que este Decreto Supremo 051 cuanto antes sufra modificaciones o desaparezca”.<sup>730</sup>

En el mes de abril del presente año el gobierno de Ollanta Humala anunció un incremento de 100.000.000 de nuevos soles adicionales para el fondo contemplado en el presupuesto nacional para las reparaciones, con lo cual éste llegó a un poco más de 140.000.000<sup>731</sup> de nuevos soles. El anuncio fue recibido con poco entusiasmo por las organizaciones de víctimas, debido a que el anuncio no estuvo acompañado de un incremento en el monto de las reparaciones económicas individuales<sup>732</sup> y de la modificación del controversial Decreto Supremo 051.

## **4.2 Reparaciones y género**

La ley del PIR en su artículo 7g. señala que “la equidad de género e igualdad de oportunidades implica reconocer las situaciones de desventaja y diferencia que existen entre hombres y mujeres al acceder a recursos y tomar decisiones, por lo que estimula la creación de condiciones especiales para facilitar la participación y presencia de las mujeres en la toma de las mismas. Además, busca generar conciencia entre los distintos miembros de la colectividad sobre las diferencias e inequidades estructurales de género existentes en el interior de ésta.”<sup>733</sup>

---

<sup>730</sup> A. CHAVARRY. Entrevista realizada el 18 de abril de 2012 en la ciudad de Lima.

<sup>731</sup> 31 millones de euros aproximadamente.

<sup>732</sup> A. VALENCIA, “Reparaciones: las razones del descontento”, *Revista Ideele*, núm. 219, mayo 2012.

Disponible en: <http://www.revistaideele.com/ideele/content/reparaciones-las-razones-del-descontento-0>

<sup>733</sup> MINISTERIO DE JUSTICIA DE PERÚ, *Decreto Supremo N° 015-2006-JUS*, cit., art.7g.



Un programa de reparaciones sensible a género constituye un juicio moral y político sobre la gravedad de la violencia sexual y sobre la necesidad de modificar un comportamiento.<sup>734</sup> Los responsables de implementar los programas de reparaciones deben entender la violencia sexual y reproductiva como una forma de violencia estructural que tiene efectos políticos, sociales y económicos, que influyen en las oportunidades de recuperación y desarrollo a largo plazo.<sup>735</sup>

La ejecución del PIR ha carecido del enfoque de género. Durante la implementación del Plan, no se han establecido las condiciones mínimas para garantizar la presencia de las mujeres y determinar sus necesidades. A pesar que las mujeres indígenas de las zonas rurales fueron las protagonistas sociales de la reivindicación de los derechos humanos en el proceso de post-conflicto, las reparaciones se han ejecutado sin considerar este hecho. El PIR está siendo implementado sin tener en cuenta mecanismos apropiados para la participación de las mujeres y hombres afectados que pertenecen a diferentes comunidades campesinas andinas y amazónicas.<sup>736</sup>

Debido a que el PIR contempla solamente la reparación para las víctimas de violación, esto deja fuera a muchas mujeres que sufrieron otras formas de violencia sexual y reproductiva, en su mayoría a manos de las guerrillas senderistas.<sup>737</sup> En la actualidad, el RUV está inscribiendo a mujeres que han sufrido diversos tipos de violencia sexual aparte de la violación, para Ana María Caro, abogada del área de evaluación y calificación del Consejo de Reparaciones –RUV, “aunque por el momento para las otras formas de violencia sexual no hay una reparación económica, esto no significa que puede haber una norma posterior que les de reparaciones económicas”.<sup>738</sup> Lo anterior puede ser discutible principalmente por un motivo, al tomarle testimonio y registrar casos de otros tipos de violencia sexual que no están contempladas entre los casos beneficiarios de reparaciones económicas, se están

---

<sup>734</sup> J. GUILLEROT, *Los desafíos de la perspectiva de género en un programa de reparaciones*, cit., p.15.

<sup>735</sup> C. DUGGAN et al, “Reparations for sexual and reproductive violence: prospects for achieving gender justice in Guatemala and Peru”, cit., p.193.

<sup>736</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *Avances y desafíos en las reparaciones a las víctimas de la violencia política*, cit., p.24.

<sup>737</sup> C. DUGGAN et al, “Reparations for sexual and reproductive violence: prospects for achieving gender justice in Guatemala and Peru”, cit., p.203.

<sup>738</sup> A. CARO. Entrevista realizada el 17 de abril de 2012 en la ciudad de Lima.

generando falsas expectativas en las mujeres víctimas de estas atrocidades que si no se realiza una modificación normativa, pasarán sus vidas esperando la posibilidad de una reparación.

En cuanto a las reparaciones colectivas, Guillerot manifiesta que el enfoque de género no se hace evidente en el programa y que no ve la voluntad política de incluirlo. “Lo que planteó la CVR, y se reprodujo posteriormente en el PIR, fue que la elaboración de las propuestas de reparaciones colectivas se basara en la estructura comunal preexistente, básicamente la asamblea comunal, y en estas asambleas comunales las mujeres no tienen ni voz ni voto. Al plantear, esto la Comisión no se dio cuenta que iba a discriminar a las mujeres en el proceso participativo de elección de los proyectos y esto se ha ido reproduciendo en la ley, en la reglamentación y en la manera que la CMAN ha ido trabajando el tema de las reparaciones colectivas. Por su parte, la sociedad civil se dio cuenta y trató de incidir sobre la CMAN para que esto se corrigiera, hubo un proyecto de vigilancia del programa de reparaciones colectivas (Aprodeh<sup>739</sup> e ICTJ) que da cuenta de este asunto en forma repetida, y el ICTJ propuso en algún momento a la CVR ofrecerle un consultor que se sentara a trabajar para mejorar la propuesta y las estrategias del programa de reparaciones colectivas en términos de perspectiva de género, pero no hubo ninguna respuesta. Y lo que tenemos es eso, que las mujeres están excluidas del proceso participativo de elección de los proyectos”.<sup>740</sup>

#### **4.3 La población en situación de desplazamiento forzado**

Según la CVR, hay más de quinientas mil personas que por motivo del conflicto armado han tenido que desplazarse de sus lugares de origen. Algunos retornaron a sus comunidades y otros se instalaron en lugares de refugio, la mayoría manteniendo un vínculo con sus comunidades. La situación de los desplazados en la mayoría de lugares es de extrema pobreza, con problemas de vivienda, trabajo informal, bajos ingresos económicos,

---

<sup>739</sup> Asociación Pro Derechos Humanos.

<sup>740</sup> J. GUILLEROT. Entrevista, cit.

problemas de salud física y mental, con organizaciones debilitadas y poca capacidad de demanda frente al Estado.<sup>741</sup>

En el 2004, bajo la administración de Alejandro Toledo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social inició el Registro de Afectados Desplazados Internos por mandato de la ley N° 28223.<sup>742</sup> Posteriormente, con la ley del PIR pasaron a ser parte del RUV y desde el 2010, por convenio establecido con este Ministerio, el CR puede calificar casos de desplazados.<sup>743</sup>

De acuerdo con Gino Huerta, “no se han precisado las reparaciones de la población desplazada debido a un vacío con la ley, ya que los desplazados están bajo el régimen de una ley distinta. Se hizo un diseño de programa de reparaciones colectivas para los desplazados cuyos lineamientos fueron aprobados a finales del 2010, pero no ha tenido mucho éxito. Es un asunto pendiente, ahora hay un equipo de trabajo en la CMAN que está definiendo qué se hace con las reparaciones para desplazados, es un tema difícil porque son muchas personas y es discutible su nivel de afectación propiamente, en todo caso es un tema a discutir”.<sup>744</sup>

#### **4.4 Las medidas regionales**

Las reparaciones son un deber compartido por todos los poderes y órganos del Estado. El diseño de una política nacional de reparaciones se debe entender y desarrollar en sintonía con los procesos sociales y políticos que vive el país: los de consolidación democrática y descentralización. Ello significa que ésta obligación también es una tarea de los gobiernos

---

<sup>741</sup> COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Informe anual 2009 – 2010, cit., p.128.

<sup>742</sup> CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, *Ley sobre los desplazamientos internos, ley N° 28223*, Lima, 19 de mayo de 2004.

<sup>743</sup> COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Informe anual 2009 – 2010, cit.

<sup>744</sup> G. HUERTA. Entrevista, cit.

regionales y locales, quienes además son los referentes de poder más cercanos para los ciudadanos afectados por el conflicto armado interno.<sup>745</sup>

Desafortunadamente, la ejecución del Plan Integral de Reparación se ha concentrado en el gobierno central, los gobiernos regionales han tenido poca participación, menor aún en el caso de las municipalidades. Esta situación puede ser explicada por la ausencia de lineamientos para la intervención de gobiernos sub-nacionales en reparaciones. Lo cual hace que sus intervenciones sean experiencias singulares y con poca posibilidad de continuidad y articulación.<sup>746</sup>

A pesar de esto, cabe mencionar una experiencia interesante que llevó a cabo el Instituto de Defensa Legal en el departamento de Huancavelica (2004-2007), que podría calificarse como un ejemplo acertado de la implementación del PIR a nivel regional. En este laboratorio se implementaron medidas de todos los programas de reparaciones, a excepción del programa de reparaciones económicas, que es competencia exclusiva del Estado. Una de las lecciones que se pudo extraer fue que es posible dar pasos significativos en la implementación regional de las recomendaciones de la CVR, desde propuestas que combinen el trabajo de organización y concertación de actores de sociedad civil y una estrategia de incidencia con autoridades regionales. Logrando de esta forma, que los actores de la sociedad civil puedan mejorar su actuación en relación con los temas de reforma institucional, reparaciones y memoria enfocando sus demandas, propuestas y prioridades para generar hechos políticos. Adicionalmente, para que las autoridades se involucren con las recomendaciones, se requiere la participación democrática de la comunidad en la discusión y diseño de los instrumentos (planes, proyectos, ordenanzas) que implementan

---

<sup>745</sup> F. SOBERÓN, “Balance de las acciones del Estado en la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” en COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS et al. (ed.), *Informe Memoria y Justicia para la Inclusión*, cit., p.59.

<sup>746</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *Avances y desafíos en las reparaciones a las víctimas de la violencia política*, cit., p.46.

estas políticas. Esto le da legitimidad a las instituciones regionales que toman las decisiones y a su vez crea confianza entre los miembros de las comunidades.<sup>747</sup>

### ***5. La voz de las víctimas del conflicto armado en el Perú: sobre la implementación del PIR***

Conocer la perspectiva que tienen las víctimas en el marco de un proceso de reparación es fundamental a la hora de analizar el fenómeno de la justicia transicional y el impacto real que este ha tenido en un país. Son los afectados y afectadas los principales actores que pueden dar cuenta del resultado de las acciones encaminadas a enfrentar los crímenes cometidos en el pasado y de la efectiva reivindicación de sus derechos. Conociendo la situación del Perú, su proceso transicional y las herramientas que el Estado ha utilizado con el objetivo de rendir cuentas por los hechos ocasionados, son las voces de las víctimas las que permitirán que se pueda construir una imagen más completa de lo que sucede en ese país en materia de reparaciones.

Con el propósito de adquirir conocimiento de base sobre el tema de reparación a víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y poder contrastarlo con los enfoques teóricos que predominan en la doctrina internacional sobre justicia transicional, se decidió llevar a cabo un estudio empírico en terreno sobre la percepción que un grupo de víctimas/afectados<sup>748</sup> del conflicto armado interno del Perú tienen sobre la implementación del Plan Integral de Reparaciones que se está implementando en ese país a partir del año 2007.

---

<sup>747</sup> G. HUERTA, “Reparaciones en la región de Huancavelica, Perú” en INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *Atención y reparación a las víctimas en lo local: las experiencias de Greensboro, Huancavelica, Tucumán y Medellín*, Bogotá, septiembre de 2010, p.64.

<sup>748</sup> En el Perú, partiendo desde iniciativas de organizaciones de derechos humanos y de las propias organizaciones de víctimas, se ha generalizado el término afectado o afectada para referirse a víctima. A partir de este punto se utilizarán los dos conceptos, afectada y víctima, como sinónimo. Asimismo, cabe hacer la aclaración con respecto al término “violencia política” que es utilizado en el Perú ampliamente para referirse, a modo de eufemismo, al conflicto armado interno que tuvo lugar en ese país de 1980 al 2000. Este también es utilizado por la mayoría de las víctimas que hacen mención a “la violencia política” o a “la “época de la violencia”.

## 5.1 Caracterización de la población

Julcamarca está ubicada en la sierra central del Perú, en la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancavelica. El conflicto armado se desarrolló de manera muy diferente en las distintas regiones del país, por este motivo para efectos de su estudio, la CVR dividió los escenarios regionales de la violencia en cinco zonas: la región sur-central, la región nororiental, la región central, Lima metropolitana y el sur andino. Julcamarca se encuentra incluida en la región sur-central que está compuesta por el departamento de Ayacucho, las provincias de Acobamba y Angaraes del departamento de Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac. Es en esta es región donde se inició el conflicto armado y donde cobró el mayor número de víctimas.<sup>749</sup>

La proximidad geográfica de la zona sur de Huancavelica con Ayacucho, específicamente en las provincias de Angaraes y Acobamba, y sus fluidas relaciones comerciales permiten entender por qué la violencia que se llevó a cabo entre 1980 y 1996 en esas dos provincias huancavelicanas presentó características similares a la vividas en Ayacucho durante el mismo periodo.<sup>750</sup> Esta región sur-central se caracteriza por ser la zona más pobre del país, compuesta por comunidades campesinas quechuahablantes, con débil presencia estatal y con una integración marginal a los mercados.<sup>751</sup>

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Huancavelica se encuentra entre el grupo de departamentos con mayor incidencia de pobreza en el país<sup>752</sup> y es el departamento con mayor porcentaje de población en situación de pobreza.<sup>753</sup> En cuanto al número de habitantes, Julcamarca capital cuenta con 329, Arcuilla con 35, Cahua 75 y

---

<sup>749</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, *Informe Final*, cit., tomo I, p.80.

<sup>750</sup> Cabe anotar que en el distrito de Julcamarca se estableció una base militar por diez años, desde el año 1984 hasta 1994, con el objetivo de hacer frente a grupos de Sendero Luminoso que tenían fuerte presencia en la zona. Esto da cuenta del alto índice de violencia ejercido por las fuerzas militares en la región.

<sup>751</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *El umbral de la memoria. Pasado, presente y futuro en las memorias de la violencia en Huancavelica*, cit., p.31.

<sup>752</sup> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, *Evolución de la pobreza en el Perú al 2011*, Lima, mayo 2012, p.15. Disponible en: [http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza\\_ExposicionJefe.pdf](http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_ExposicionJefe.pdf)

<sup>753</sup> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, *Población en situación de pobreza por departamentos*, Lima, 2010. Disponible en: <http://www.inei.gob.pe/Sisd/index.asp>

Yuracchocha 70.<sup>754</sup> Aunque los datos oficiales establecen un número de personas, el número real de habitantes varía con tendencia a disminuir. Muchos de ellos han dejado sus poblados por razones económicas y durante las entrevistas los comentarios en torno a la reducción significativa de la población fueron repetitivos.

A partir de la información obtenida en las entrevistas, se desarrolló la caracterización de la población. Aunque este estudio tiene un enfoque cualitativo, hay cifras y datos que valen la pena resaltar. En la siguiente tabla puede apreciarse la distribución de la población entrevistada, tal como se mencionó anteriormente en los aspectos metodológicos, se entrevistaron a un total de cincuenta 50 personas. En Julcamarca se entrevistaron a 25 personas, en Arcuilla a 8, en Cahua a 12, en Yuracchocha a 5 personas. Esta distribución se realizó teniendo en cuenta que el 50% de las personas correspondieran a beneficiarios de reparaciones colectivas y el otro 50% a potenciales beneficiarios de reparaciones individuales.

**Tabla 1. Número de personas entrevistadas por centro poblado/distrito.**

<b>Centro poblado<sup>755</sup>/distrito</b>	<b>No. de personas entrevistadas</b>
<b>Julcamarca</b>	25
<b>Arcuilla</b>	8
<b>Cahua</b>	12
<b>Yuracchocha</b>	5
<b>Total general</b>	50
<b>Fuente: entrevistas realizadas por la investigadora</b>	

Asimismo, se señala el número de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas<sup>756</sup> en cada centro poblado.

<sup>754</sup> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, 2000. Este el censo más reciente que desagregue la población en pequeños centros poblados.

<sup>755</sup> Entidad genérica que utiliza el INEI para clasificar poblaciones de categoría inferior a los distritos.

<sup>756</sup> Esta información fue proporcionada por el área de sistemas del Consejo de Reparaciones-RUV con fecha de corte de 31 de mayo 2012.

**Tabla 2. Número de inscritos Registro Único de Víctimas por centro poblado/distrito**

<b>Centro poblado/distrito</b>	<b>No. de personas inscritas RUV</b>
<b>Julcamarca</b>	40
<b>Arcuilla</b>	23
<b>Cahua</b>	41
<b>Yuracocha</b>	9
<b>Total general</b>	113
<b>Fuente: Consejo de Reparaciones – RUV</b>	

Luego de observar las tablas anteriores, cabe mencionar que el porcentaje de población entrevistada es significativa en relación con el número de personas inscritas en el RUV.

Los centros poblados de Arcuilla, Cahua y Yuracocha fueron priorizados por la CMAN para recibir reparaciones colectivas, mientras las personas entrevistadas en Julcamarca hacen parte del grupo de víctimas organizadas en la Asociación de Afectados por la Violencia Política del Distrito de Julcamarca (ASAVIPDIJUL).

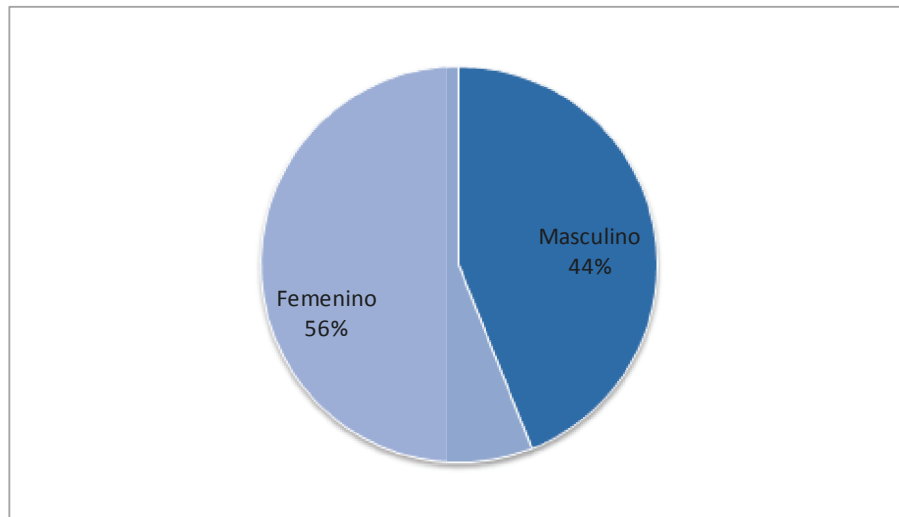
**Tabla 3. Proyectos de reparaciones colectivas aprobados por la CMAN**

<b>Centro poblado/distrito</b>	<b>Proyecto</b>
<b>Arcuilla</b>	Construcción de sistema de riego
<b>Cahua</b>	Ampliación, mejoramiento sistema de agua potable
<b>Yuracocha</b>	Construcción pequeño sistema de riego
<b>Fuente: CMAN</b>	

En cuanto al sexo de los entrevistados, 28 fueron mujeres y 22 hombres, todos mayores de edad.



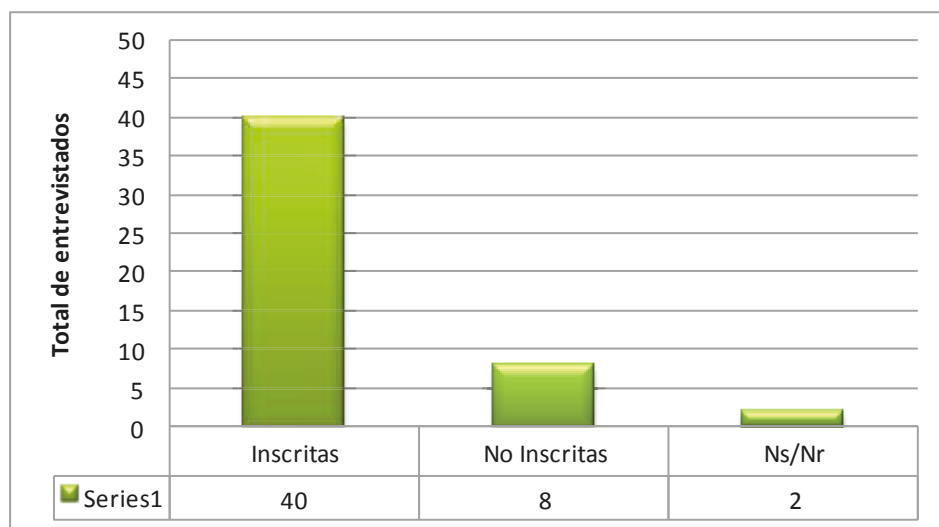
**Gráfico 1. Sexo de los entrevistados**



**Fuente: entrevistas realizadas por la investigadora**

De todas las personas entrevistadas, 40 personas afirmaron estar inscritas en el RUV, mientras 8 manifestaron no estarlo, por su parte las dos personas restantes, no respondieron a la pregunta o no supieron que responder.

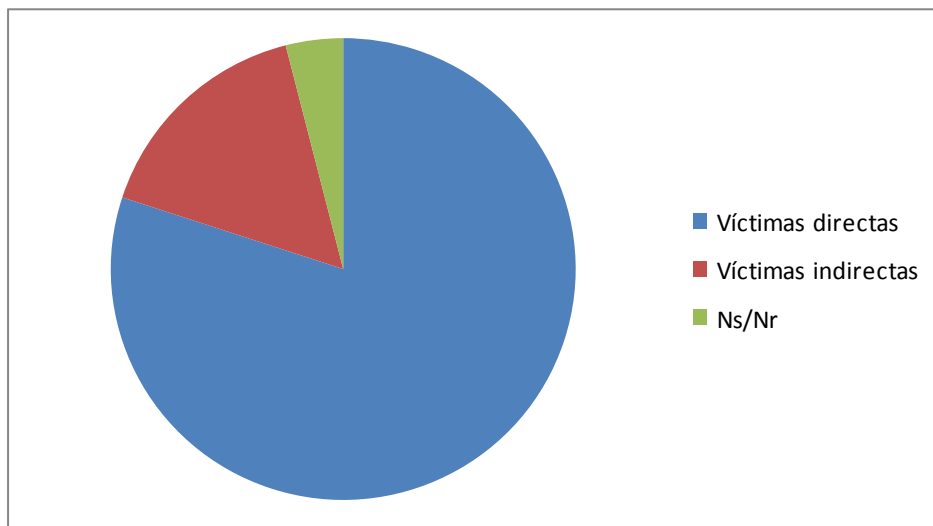
**Gráfico 2. Personas inscritas en el RUV**



**Fuente: entrevistas realizadas por la investigadora**

En cuanto a la condición de víctima, 22 declararon ser víctimas directas,<sup>757</sup> 26 expresaron ser víctimas indirectas,<sup>758</sup> y las otras dos personas no contestaron a la pregunta o no supieron que decir en ese momento.

**Gráfico 3. Tipo de víctima**



**Fuente: entrevistas realizadas por la investigadora**

Entre los tipos de violencia que sufrieron las personas entrevistadas se encuentran la violencia colectiva;<sup>759</sup> la violencia sexual y reproductiva contra la mujer (entre las que se resalta la violación sexual); la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la desaparición forzada; los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales; las persecuciones; las detenciones ilegales y el secuestro.

Siguiendo con la caracterización hay que determinar el tipo de perpetradores de las violaciones de derechos humanos sufridas por los entrevistados. En el gráfico siguiente se puede observar que de los 50 entrevistados, en 27 casos los responsables de los abusos

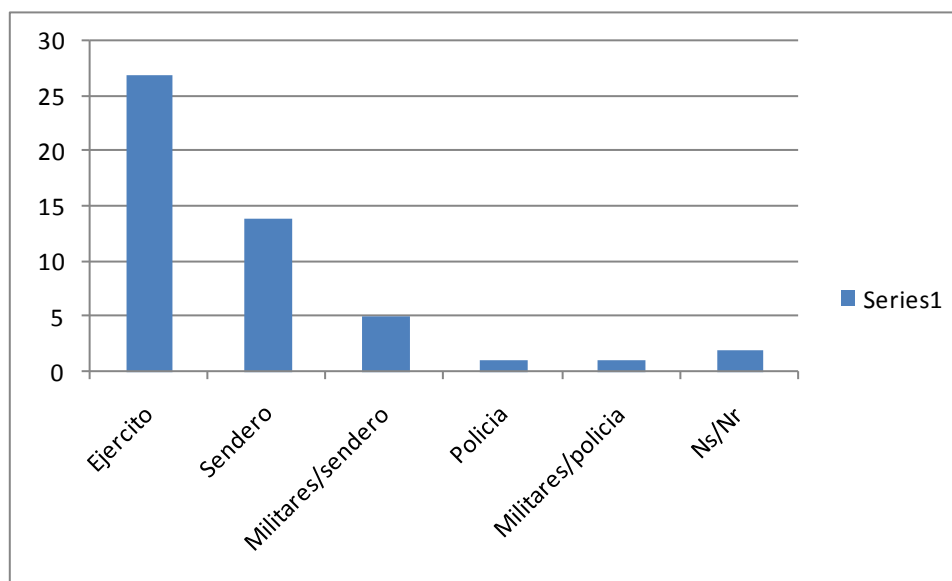
<sup>757</sup> Para este estudio se considera víctima directa a la persona que sufrió la violación.

<sup>758</sup> Para este estudio se considera víctima indirecta al cónyuge, padre o madre, hijo o hija de la víctima directa.

<sup>759</sup> Para este estudio se entiende la violencia colectiva como los actos que causaron daños a la comunidad como producto del accionar de alguno de los actores armados del conflicto o por el enfrentamiento entre estos.

fueron miembros del ejército; en 14 los miembros de Sendero Luminoso; en 5 casos las personas fueron víctimas de violaciones tanto por militares como por senderistas; 1 persona fue víctima de abusos cometidos por la policía; otra persona sufrió lesiones por acción de la policía y los militares, mientras las dos personas restantes no contestaron o no supieron que decir en ese momento.

**Gráfico 4. Perpetrador de la violación**



**Fuente: entrevistas realizadas por la investigadora**

Por último, el instrumento de investigación que se utilizó para realizar la entrevista fue una guía de preguntas, algunas cerradas otras abiertas, que sirvieron como hilo conductor. En ocasiones excepcionales hubo que cambiar el orden de las preguntas u omitir alguna por petición expresa de algún entrevistado o para efectos de fluidez de la conversación. A continuación se puede observar la guía.

**Tabla 4. Guía de preguntas para la entrevista**

<b>1</b>	<b>Nombre</b>
<b>2</b>	<b>Edad</b>
<b>3</b>	<b>Sexo</b>
<b>4</b>	<b>Centro poblado</b>
<b>5</b>	¿Está usted inscrito en el RUV?
<b>6</b>	¿Cómo fue usted afectado(a) por la violencia política?
<b>7</b>	Sabe usted ¿qué son las reparaciones? <sup>760</sup>
<b>8</b>	¿Conoce usted la reparación que se le dio a su comunidad? <sup>761</sup>
<b>9</b>	¿Me podría contar un poco más sobre esa reparación?
<b>10</b>	¿Ha participado en la elección de la obra? <sup>762</sup>
<b>11</b>	¿En qué condiciones se encuentra la obra de reparación actualmente? <sup>763</sup>
<b>12</b>	¿Para qué ha servido la reparación?
<b>13</b>	¿Cree usted que se ha hecho justicia?
<b>14</b>	¿Cómo se sentiría usted mejor? <sup>764</sup>
<b>15</b>	¿Qué debería hacer el Estado para que usted se sienta mejor?
<b>16</b>	¿Qué debe hacerse para que se haga justicia?
<b>17</b>	¿Cree usted que los hechos de violencia (o la violencia) pueden volver a ocurrir?
<b>18</b>	¿Qué debería hacerse para que la violencia no vuelva a ocurrir?
<b>19</b>	¿Quién es el encargado/responsable de que la violencia no vuelva a ocurrir?
<b>20</b>	¿Se han realizado acciones de memoria en su comunidad?
<b>21</b>	¿Cree usted que deberían recordarse los hechos violentos que sucedieron en su comunidad?
<b>22</b>	¿Cree usted que es importante recordar? ¿Por qué?

**Fuente: realización propia**

<sup>760</sup> Esta pregunta se le hizo únicamente a las personas que son o deben ser beneficiarias de reparaciones individuales

<sup>761</sup> Esta pregunta se le hizo únicamente a las personas beneficiarias de reparaciones colectivas.

<sup>762</sup> Esta pregunta se le hizo únicamente a las personas beneficiarias de reparaciones colectivas.

<sup>763</sup> Esta pregunta se le hizo únicamente a las personas beneficiarias de reparaciones colectivas.

<sup>764</sup> Más adelante se explicará la relación que esta pregunta tiene con la variable de la justicia.

## **5.2 La percepción de las víctimas sobre la implementación del PIR**

### **5.2.1 La afectación por el conflicto armado**

Para poder tratar el tema de la percepción que tienen víctimas sobre la manera cómo se está llevando a cabo la implementación del PIR hay que remitirse en un primer lugar a su historia personal y al tipo de afectación durante el conflicto armado. A la pregunta de cómo habían sido afectados por la violencia política, las respuestas evidenciaron un dolor profundo por los abusos cometidos y en algunos casos la dificultad de las personas para hablar sobre el tema, lo que refleja lo difícil que ha sido para ellos procesar los eventos traumáticos.

Las narraciones dan cuenta de una situación permanente violación de sus derechos fundamentales como la vida, la integridad física y moral. En estas comunidades con grado de afectación alto, la presencia de hechos violentos hacía parte de la cotidianidad. Los principales tipos de violencia encontrados fueron los asesinatos/ ejecuciones extrajudiciales, las torturas y maltratos, las desapariciones forzadas, las violaciones y otro tipo de violencia sexual, y las persecuciones y amenazas.

La historia de la violencia y los abusos que sufrieron los habitantes de Julcamarca, Arcuilla, Cahua y Yuracocha:

El miedo y la zozobra eran los acompañantes inseparables.

*“pues ese tiempo era...pues casi nadie dormíamos en nuestras casas, dormíamos así en montes, así así no mas parabamos, habían asesinatos en esos tiempos, si he visto también, he visto varios asesinatos en el camino, cuando iba a la escuela, de acá íbamos nosotros para Julcamarca, en esos caminos... así muertos, cortados del cuello, ese es el pasado”.*  
Hombre habitante de Arcuilla.

*“Estabas con los militares el otro venia y te maltrataba, te pegaba, te desaparecía o te mataba, el otro venia e igual, entonces con quien ibas a estar”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Los militares venían más que nada, los sendero también en la noche, por eso es que escondían, en la noche tenían que dormir en los huaicos<sup>765</sup>, en el monte más que nada, ya no en las casas, a partir de las 4 de la tarde ya tenían que irse, buscar lugar donde ubicarse ya, para la noche, para pasar”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Muchas veces hemos perdido nuestra viviendas, yo también he ido a Julcamarca he vivido en Julcamarca, yo tenía una casita nuevecita de calamina, veníamos un rato a ver a las chacras<sup>766</sup> un rato, quedábamos nuestras cosas dejando, e inclusive los animales lo llevaban los militares, venían de noche y se lo llevaban, se los cogían a los mejorcitos, se los comían como rateros”.* Hombre habitante de Yuracocha.

*“En el pueblo también asesinaban, mataban, quemaban casas los senderistas, venían senderos, venían militares, uno y otro venían, Cahua se había despoblado, yo me fui a otra comunidad por miedo, solo de día bajábamos al pueblo con permiso de los militares, nos daban un credencial, no teníamos ni para comer”.* Mujer habitante de Cahua.

Los efectos de la violencia se manifestaron en la estructura comunitaria:

*“Yuracocha fue afectado primero por el ejército, el ejército que estaba acantonado aquí en Julcamarca semanalmente les exigía que traigan víveres, leña, entregarle carne semanal por familias, obligaba a realizar trabajos, un conjunto de actividades. Después también estábamos obligados a realizar el “servicio” de seguridad, las rondas nocturnas, las rondas diurnas y así. A parte de ello, la población también ha sido afectada porque los subversivos han entrado allí, en abril del 91 ingresaron y cometieron un asesinato, después*

---

<sup>765</sup> Un tipo de cueva ubicada en las montañas

<sup>766</sup> Terrenos propios donde los campesinos desarrollan sus cultivos y mantienen a sus animales.

*fuimos secuestrados 18 personas de los cuales éramos como 12 profesionales que prestábamos nuestros servicios en el sector educación, en el recorrido fuimos liberados por la intervención de las rondas como también del ejército, mientras ellos están enfrentándose se descuidaron y nosotros teníamos que huir”.* Hombre habitante de Yuracocha.

*“Por eso, se ha despoblado la comunidad, la gente se ha ido, casi cuatro quedaron dentro de la comunidad, por miedo. De ahí se agruparon con Miraflores, Uraya, y así aumentaron la población. Solo así quedaron en la comunidad los pocos que quedaban si no se hubieran ido a otras ciudades. Otros se han venido aquí a Julcamarca de miedo”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“En la comunidad por ese lado donde estaba el terrorismo, la gente se ha movido, algunos se fueron para la ciudad, algunos los han matado así, algunos han hecho desaparecer, entonces muchas personas se han ido para la ciudad, algunos han retornado algunos ya no han retornado se han establecido en la ciudad así, aja... en las montañas, se han desparramado así”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Hubo muchas muertes en Cahua, entonces había poca gente, se han venido como refugiándose en Anchacuay y ya no les dejaban retornar así fácilmente a Cahua”.* Mujer habitante de Cahua.

*“En aspecto general, la comunidad ha sido desorganizada, han quedado prácticamente viudos, otras viudas, huérfanos, así han quedado”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Cahua quedó totalmente destrozado, desamparado porque ya no estaba la gente acá, algunos en otro pueblo, en Lima, estaba abandonado”.* Hombre habitante de Cahua.

*“Acá ha habido muchas cosas, todo han quemado el municipio, comisaría, han saqueado, a cuanta gente la han sacado de noche, dormíamos así en los campos, en los huaicos, no dormíamos en nuestra casa, en ese tiempo daba miedo, ya nadie dormía en su casa, todos*

*pensábamos cuándo vamos a morir, ese era nuestro pensamiento, no pensábamos en que íbamos a vivir”.* Mujer habitante de Julcamarca.

Sendero Luminoso como actor en la lucha armada que se llevo a cabo en la región

*“Han venido como rateros los de sendero, ellos decían que querían ayudar a los pobres pero era mentira, venían a robar y a matar. Los militares decían que venían a cuidar y era mentira, venían a llevarse nuestro ganado, ellos no cuidaban”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Los senderistas empezaron a desaparecer a la gente, a matar, a uno de ellos lo mataron a mi vecino, alguno de ellos quedaron heridos, uno perdió la mano...”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Cuando amaneció subimos a la escuela y entonces la gente estaba ahí reunida, amontonados, llorando y decían: así siempre van a venir y a todos nosotros igual nos matarán”.* Hombre habitante de Arcuilla.

Los militares como garantes de la seguridad pública y como perpetrador de violaciones sistemáticas de los derechos humanos

*“A veces cuando no seguíamos las órdenes de los militares nos masacraban en el campo”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Venían los militares, nos juntaban, acusaban de terrorista por gusto, golpeaba a la gente, llevaba a la base como detenidos, así era pues. Llevaban a ovejas, todos, gallinas, chivos, eso es lo que hacían pues”.* Hombre habitante de Arcuilla.



*“Los militares se juntaban de día de noche en todas las partes veníamos aquí a Julcamarca para que nos pasen lista para que no nos acuse de Sendero, porque nos acusaban de terruco”<sup>767</sup>. Mujer habitante de Arcuilla.*

*“A la gente la maltrataban los militares, que raro por qué tanto maltratar de esa forma a la gente, la pobre gente hacia su ronda campesina, junto a los militares en algunas ocasiones salían de patrulla de todo, pero a la gente hacían cargar agua, hay que llevarle leña, había que llevarle chivo, que se yo montón de cosas, y aparte palo le daban, entonces qué raro yo dije ¿cómo es posible que esto se permita no? En una base militar había zona de emergencia no había una ley que te amparaba, de repente por ello aprovechaban en hacer lo que querían”. Hombre habitante de Julcamarca.*

*“Había una tortura feroz, han sido los que... y le digo sinceramente yo no sé, yo no los podría haber catalogado de terrorista, he visto ancianos, señoras, que no sabían hablar castellano muy bien o poco entendían eso, pero han sido maltratados ferozmente, solo en películas había visto esas situaciones”. Hombre habitante de Julcamarca.*

*“El capitán Saldaña ha salido de aquí de su tienda de la vecina, ha llamado a Ricardina, había gritos al principio, ella salió con sus criaturas, una a la espalda y la otra en la mano, entonces a la bebe dice este es hijo de indio le mando un manazo el militar, y a la criatura le dio una patada, al varoncito fue al que le dio la patada. Los militares maltrataban, sendero maltrataban, los dos maltrataban”. Mujer habitante de Julcamarca.*

*“Nos reunían para entretenerse, para divertirse, simplemente para entretenerse ellos, nos ordenaban a hacer ranas, planchas, canguros, rampar, una forma de adiestramiento militar posiblemente, pero yo entiendo que su objetivo principal era divertirse, con el sufrimiento de las mujeres principalmente y ancianos, ganarse el respeto a través del miedo”. Hombre habitante de Yuracocha.*

---

<sup>767</sup> Palabra que utilizaban los miembros de las fuerzas militares para referirse a terrorista o miembro de Sendero Luminoso

Como poblaciones que se encontraban en el fuego cruzado entre dos grupos armados, el ejército y sendero luminoso, tenían que recurrir a cualquier estrategia posible para salvar sus vidas y la de sus seres queridos. Al caer la noche, las comunidades se refugiaban en los campos, en las montañas, a la intemperie, ya que era la mejor manera de ocultarse de los agresores que comúnmente llegaban por las noches. Ser testigos de asesinatos, torturas y malos tratos, humillaciones y actos inhumanos y degradantes se constituyó en la realidad diaria. La justificación por parte de cada uno de los grupos para cometer los abusos era la acusación de ser colaborador del grupo contrario.

Las comunidades quedaron despobladas, el tejido social destruido (muchas familias destruidas, niños huérfanos y mujeres viudas), la estructura socioeconómica en condiciones precarias y los supervivientes con múltiples efectos psicosociales como la tristeza, la imposibilidad de llevar a cabo el duelo por la pérdida, depresiones, angustias, problemas físicos y emocionales graves.

El momento de la captura y los ataques a la propiedad privada:

*“Una noche a las 8 de la noche llegaron los militares, cuando yo estaba justo por descansar, estaba acostándome en mi cama, llegó una patrulla habrán sido aproximadamente unos 24 o 25 soldados y dijeron: aquí está la terruca, aquí está la terruca, (pah) me sacan de mi cama y empezaron a rebuscar todo, todas las cosas pues, todo lo que había en la casa, me agarraron a mí y dijeron: nos tienes que acompañar a la base militar y me llevaron”. Mujer habitante de Julcamarca.*

*“Fui teniente gobernador y luego secretario de la organización de ronda campesina, fue un día 21 de junio, a mi me han buscado los senderistas, dónde está el teniente gobernador? pero en ese momento estaba en ronda, a mi mamá le tocaba pero no había venido, hemos cambiado de turno, los senderistas me estaban buscando, llegaron a la casa y como no me han encontrado preguntaron por radio qué hacían con mi esposa y le dijeron que la mataran y la mataron, y quedó mi bebita con 21 días de nacida, a los 6 meses se murió”. Hombre habitante de Arcuilla.*

*“Cuando mataron a mi esposa saquearon mi casa, se llevaron todo, todito, dejaron la casa vacía, se llevaron todo lo del bebé, dejaron solo una frazada”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Llegaban los militares a mi casa, se llevaban mi cabra, igualmente venía sendero también se llevaba todas mis cosas, toda mi comida, todo se lo llevaban, maíz, trigo, cebada, por el cerro se lo llevaban”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Eso fue cuando los militares entraron a mi casa a la una de la mañana, en la comunidad de Arcuilla y nos han golpeado a mis hijitos y a mi compañero le han llevado a la base, le han desaparecido y hasta hoy día no sé si vive o ha muerto, no sé pero ahí le han desaparecido”.* Mujer habitante de Julcamarca.

El modus operandi más común de las organizaciones armadas consistía en hacer visitas a los domicilios y allí acusar, amenazar, instigar y cometer innumerables abusos. Mientras las fuerzas armadas del Estado llegaban con supuestas órdenes de superiores para llevar a presuntos terroristas a la base militar para realizarles interrogatorios (en muchas ocasiones se presentaban por denuncias infundadas o hechas por vecinos por resentimientos o problemas personales); sendero luminoso tenía como principal objetivo ir por las autoridades comunales de representación política, uno de los grupos víctimas de persecución y desaparición claramente identificado.

La familia, en su mayoría mujeres, eran testigos de los abusos y no podían responder debido al miedo o a la protección de su vida y la de sus hijos. Asimismo, la visita a los domicilios se convertía en una oportunidad para los grupos armados de saquear y tomar a su antojo bienes, animales y cualquier elemento que consideraran necesario para su mantenimiento o por simple gusto. Las pérdidas económicas fueron muchas y se calcula que una de las consecuencias del conflicto fue el empobrecimiento de las poblaciones afectadas.

La violación sexual contra la mujer fue un abuso sistemático cometido por las fuerzas militares.

*“Me hicieron llegar a la base militar y me empujaron a un cuarto oscuro, ahí yo estaba, ahí yo permanecía entonces vino el jefe de la base militar, vino y después empezó a manosearme “me vas a contar quienes son, tu eres la terruca, me vasa avisar quiénes son esos terrucos, que tu le das de comer, con los carneros con las gallinas, tu les das alimentos a esos terrucos y después aquí nos vienen a atacar” pero era falso porque nosotros no conocíamos a ningún terruco, nosotros nunca le hemos dado de alimento a los terrucos, pero así me acusaron y me dijo “da los nombre, a qué terruco le das de comer y tu le das de posada en tu casa” y yo le dije que no porque como voy a mencionar si yo no conozco y así fue y ahí empezó a manosearme, sacó su pene, empezó a ponerlo por la cabeza, por la boca, ahí todo lo que te imaginas, todo lo que me empezó a manosear”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Y hay mucha gente que no ha denunciado este caso de violación sexual, porque hasta ahorita la gente todavía no toma conciencia, a veces dicen, no...es una violada...yo tengo una hija mayor producto de un militar, los militares soltaban a sus soldados y ellos agarraban así a las chicas y así han dejado varias hijas, y ahorita yo soy padre y madre para mi hija mayor”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Así hay varias chicas de los militares que han dejado, de esa parte hay una discriminación, esas chicas son las de los militares, las han dejado con hijos, son las violadas nos dicen (llanto) a veces tratamos de disimularlo”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Varias han quedado así violadas, había una señora, ahorita está en Ayacucho, ella también por vergüenza no habrá contado, hasta ella le han embarazado, de mi casa mas allasito la han violado, y mediante esa violación ella ha salido gestando, y esa bebe gracias a dios naciendo no más había muerto. Ahorita hay una, la señora América, ella también pero no cuenta nada, ella vivía debajo de la base, y habían bajado y la habían*

*violado también a ella. Hay varios que han quedado sin registrarse, no se han registrados por temor y por vergüenza, yo he tenido vergüenza y por eso no le he contado a nadie*". Mujer habitante de Julcamarca.

*"Que pasa, que a esas fechas a veces los jefes de base soltaban así como a perros y a la chica que querían la agarraban"*. Mujer habitante de Julcamarca.

*"Después de que ha desaparecido mi esposo no me dejaban los militares, yo tenía miedo de vivir atrás en mi pueblo, yo me venía a vivir aquí, entonces aquí también no me dejaban, venían me violaban, siempre venían me violaban, así me maltrataban me pegaban me violaban, así en ese plan estuve cuando desapareció mi esposo, no me dejaban"*. Mujer habitante de Arcuilla.

*"Cuando yo fui a pastear a Anchacuay era chibolita<sup>768</sup> habré tenido 8 o 9 años. Yo fui, entonces el carro en el puente de Anchacuay se ha malogrado, y dos soldados vienen hacia mi cuando estaba pasteando, el otro soldado lo lleva al chibolito, el otro me dice que hay en ese caserón, rápido hazme ver qué cosa hay, pero que cosa va a ver si no hay nada, ya pues, inocentemente yo me fui, y me fui entonces entré, entonces abrí la puerta y ahí es lo que me ha violado"*. Mujer habitante de Julcamarca.

*"He sido violada dos veces por los militares, pero no avisé a los fiscales ni a otras personas porque tengo miedo que mi esposo se entere"*. Mujer habitante de Cahua.

*"Esa noche violaron a varias personas los militares empezando por mi hija de 14 años, después violaron a unas ancianas"*. Mujer habitante de Cahua.

Tal como lo estableció la CVR, el 83% de las violaciones sexuales a mujeres fueron perpetradas por las fuerzas del orden, teniendo en cuenta que en el distrito de Julcamarca estuvo instalada una base militar durante diez años, el índice de violaciones sexuales a

---

<sup>768</sup> Niña pequeña

mujeres es muy alto. De las mujeres entrevistadas, la mayoría de las que tienen entre 35 y 50 años manifestaron haber sido violadas, otras no fueron claras al especificar el tipo de agresión, solo expresaron haber sido objeto de torturas y maltratos físicos. Se presume que el número de mujeres violadas es mucho más alto del que indican las cifras, ya que por vergüenza o temor de que sus parejas actuales conozcan esta situación y como prevención de una estigmatización colectiva las muchas mujeres no declaran este tipo de abuso.

Además de ir a la casa de la víctima a buscarla y en muchas ocasiones violarlas allí mismo frente a sus familiares, la excusa de un interrogatorio en la base militar se convirtió en la estrategia utilizada para llevar a cabo este delito y tener el control total de las víctimas. Las violaciones eran recurrentes, algunas mujeres manifestaron que era una práctica muy común llevada a cabo por los miembros de las fuerzas armadas.

La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes fueron hechos muy frecuentes que se podrían categorizar como violaciones sistemáticas de los derechos humanos:

*“Los que más nos han maltratado son los soldados, los soldados eran los más abusivos”.* Mujer habitante de Yuracocha.

*“Los militares le pegaron a mi esposo junto a mis hijos, yo recién había dado a luz a mi última hijita, de ahí me levante y salí en defensa de mi esposo, así toda descalza me levante, y cuando se lo llevaron los militares a mi esposo le seguí hasta la escuela, y los militares me dijeron que le diera el carnero a cambio de mi esposo, y de miedo le entregue mi carnero”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Para que no me torture, para que no me peguen cuando me amenazaban con su arma yo le daba mi chivo. Tenía miedo, mucho miedo en esa época, salía de mi casa a dormir a otro sitio, a los cerros, ahí debajo de los arboles”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Cállate concha tu madre” diciendo me han pegado a mi también, y de ahí han sacado a mi esposo al suelo, y ahí en el suelo han terminado a patadas, todo han pisoteado hasta que vote sangre. De ahí yo ataje todavía cómo van a hacer así diciendo, mis hijitos mayores ahí estaban llorando, gritando, los niños también, entonces yo agarre a mi bebito, tenía 5 meses mi hijito, y a mi ya comenzó a pegarme ahí junto a mi esposo, a mi esposo en otro lado, a mi en otro lado han estado pegándome. De ahí cuando nos ha terminado pegar, a mi me han sacado todavía dos soldados para que me violen, “carajo como vamos a hacer a tu mujer, delante de ti cuando estés mirando, para que aprendas a ser hombre” diciendo todavía delante de mi esposo hasta me han violado, lo que quieren me han hecho de ahí me han soltado, y a mi esposo amarrando con soga lo han sacado así lo han traído, pegando a mi esposo”. Mujer habitante de Arcuilla.*

*“A mí me han afectado en 1991, han entrado vestidos de militares los senderistas, aproximadamente 30 personas...como yo estaba en ronda me han capturado...me han dado golpe, en la mano me han tirado bala, en el pecho también me han tirado bala, prácticamente yo me he quedado todo como muerto ya...”. Hombre habitante de Arcuilla.*

*“En el año 90 yo estaba en mi pueblo entonces sendero luminoso llegaron al pueblo agarraron y me han pegado en la cabeza 18 puntos y mi espalda 8 puntos, con machete me han tirado en la cabeza y en mi espalda también, entonces con eso yo siento mal de salud casi no estoy como bien no”. Hombre habitante de Julcamarca.*

*“Era un día miércoles, que paso todo eso. Y el pequeño chiquito me lo ha hecho dejar en el calabozo, para la declaración a mi me sacaban del bote<sup>769</sup> y me llevaban a otro lugar, y a la criatura la dejaban en el bote. Cuando me pasaban la electricidad hasta yo miccionaba, hacia mis necesidades, había perdido el conocimiento, ya no resistía. Otros decían está muy flaca, suéltala”. Mujer habitante de Cahua.*

---

<sup>769</sup> Espacio que se adaptó en la base militar como sala de interrogatorio y lugar de torturas

*“Me tenían como 5 días, estaba sin comer como 5 días, yo iba a morir, cada vez que entraba el otro hombre me metía golpe, el otro me pateaba, yo también era de origen militar, no tenía el carnet para presentar, yo le dije soy antiguo con ustedes, que pasa le dije yo, oye concha tu madre ¿estás de servicio activo? Con culata me tiraban, con su arma me golpeaban, a veces a patadas, a veces entre 4 me agarraban, entre 4 soldados nos sometían a una sola persona”. Hombre habitante de Yuracocha.*

*“A las 9 de la noche me llevan al cuarto de la esquina hacia adentro, llegué y había bastante gente, ahí estaban mis paisanos de Yuracocha, dos de Cuticsa, por lo menos 9 personas, de ahí venían así a investigarnos, ahí nos maltrataban, nos pisoteaban, todo, también a una señorita viejita entra y le hacen sus cosas también, ahí estuvimos varios días y cuando preguntaban por nosotros los militares se negaban y como me habían visto han ido a Ayacucho a denunciar y el día sábado me han sacado del cuarto al bote que estaba a la entrada, durante la semana no hemos comido nada, no podíamos caminar bien por los maltratos así y así por la entrega de documentos recién el día domingo nos han soltado, si no nos iban a matar”. Hombre habitante de Julcamarca.*

*“He recibido maltratos, por ejemplo había cuatro bidones de agua con hielo ahí me pusieron desnuda y me maltrataron ahí con...tenían ahí unos palos así grandes, con eso empezaron a maltratarme, sin embargo también estaba embarazada de 6 meses, a pesar de eso no han tenido compasión conmigo, han tratado de maltratarme diciéndome que yo tenía que contar dónde estaba ellos, cómo fueron, que cuántos mataron, pero realmente desconocía de todos sus actos de ellos, y bueno al final de todo ese castigo me llevaron a no sé qué lugar, a oscuridad para asesinar me, con el armamento todo, me pusieron al oído, a la boca, todo, de ahí prácticamente he ido con los matones pues no había más gente de ese tipo y no sé qué compasión habrían tenido, me devolvieron, no me hicieron nada, me metieron al hueco, me querían enterrarme, y yo simplemente dije acá bueno será la muerte pues, que ya más allá no podía defenderme yo sola y me devolvieron a la investigación (interrogatorio) nuevamente”. Mujer habitante de Julcamarca.*



*“Dos veces me han llevado a la base militar, ahí me han tenido, me han violado, me han maltratado psicológicamente, maltrato en nuestra propia carne hemos visto, todo eso amoratado, he sufrido...”*. Mujer habitante de Julcamarca.

*“Por la tortura, por la tortura, cuando nos han traído de atrás de Ataypura, de ahí nos trajeron a acá y estábamos acá en Julcamarca y los militares también nos han castigado pues y de ahí una tarde me puso a mi cuello con cuchillo y después se ha cobrado un carnero y después de eso pasando como 3 o 4 años me metieron al calabozo...me han castigado de todas formas, primero me pusieron a la silla mi mano atrás me colgaron ahí, después con eso también me preguntaban ¿quién es tus camaradas?, pero yo no soy de la camarada y también me decía: ¿quién es tu presidente? En ese tiempo era Alan García y le dije quién mas otro, después me pusieron en una mesa amarrado todo mi cuerpo con una sogas y me pusieron a lado una olla de agua boca pa abajo, y con todo castigado después me metieron al calabozo, estuve en el calabozo como 48 horas y después me botaron...m metieron golpe en la cabeza, en los hombros, me castigaban más como estoy limpio y no decía nada ellos pensaban que me estaba negando y me castigaban mas....siempre cada vez me estaban llevando al calabozo a su gusto”*. Hombre habitante de Julcamarca.

*“Fui afectado porque estaba en el servicio militar en la selva, San Martin, Pangoa, como hemos salido en patrulla nos agarró los senderos, en ese tiempo me han accidentado, me han cortado mis brazos”*. Hombre habitante de Cahua

La tortura, el maltrato físico y otros tratos inhumanos y degradantes fueron frecuentes en el distrito de Julcamarca y los centros poblados de Arcuilla, Cahua y Yuracocha. Tanto las fuerzas militares como los miembros de SL atacaron y abusaron de la población indiscriminadamente por muchos años. Los llamados “compañeros” que eran los militantes de Sendero entraban a las comunidades impartiendo charlas de adoctrinamiento y solicitando recursos para la subsistencia. En estas incursiones a las comunidades forzaban a jóvenes a unirse a la lucha armada, ajusticiaban a los miembros de las organizaciones comunales a quienes habían declarado la guerra abiertamente o a los colaboradores del ejército.

Por su parte los militares, utilizaron los interrogatorios como oportunidad para torturar a los ciudadanos, para hacer de jueces en disputas vecinales o para simplemente abusar del “ser inferior” que eran los indígenas campesinos quechuahablantes. Los interrogatorios no cumplían ningún tipo de protocolo de actuación militar y como en muchos de los casos los interrogados no hablaban el castellano, los militares al no entender el quechua (hay que recordar que en su mayoría provenían de la clase media de zonas de la costa del país) se burlaban y tomaban cualquier pregunta no contestada como prueba de su presunta vinculación con Sendero Luminoso y así poder incriminarlos. Los maltratos y torturas se llevaron con suma crueldad y ensañamiento. En el caso de los lugares de estudio, la tortura estuvo estrechamente relacionada con el accionar del ejército.

La desaparición forzada:

*“Mi mamá estaba acá, trabajaba en Ayacucho, después vino acá para ayudar con la cosecha, después para que vaya un vecino llamó para que vaya, mi mamá se fue a la base para sacar su permiso para que regrese a Ayacucho, entonces fue detenida, entonces ahí ya no regreso más”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“De mi esposo han hecho desaparecer, los militares trajeron aquí han hecho desaparecer y hasta ahorita no sé donde está, dónde han enterrado nada no sé hasta ahorita, Yo quiero saber donde han enterrado y hasta ahorita nada no nos dan razón, en todas partes he buscado, pero en ningún sitio lo he encontrado”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Por una calumnia, por una envidia a mi mamá la han agarrado, la trajeron de Arcuilla a Julcamarca con 5 varones y a los 6 los desaparecieron indefinidamente, no sabes nada hasta ahora”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“A mi esposo le han desaparecido, en Cuticsa la tropa lo hizo desaparecer, vinieron un día los militares al pueblo en la plaza a las 3 de la tarde y dijeron tu eres terruco, se lo llevaron golpeándolo a Santo Tomás de Pata donde estaban unos militares y desde ahí no*

*sé nada. Al día siguiente fui a buscar a mi esposo a Santo Tomás de Pata y me dijeron que tal vez el helicóptero se lo había llevado preso, lo busqué por 3 años y nunca supe nada más, no encontré nada, desapareció”*. Mujer habitante de Julcamarca.

La desaparición forzada fue uno de los tipos de violación más común durante el conflicto armado interno que vivió el Perú. Fue común escuchar durante las entrevistas y la estancia en Julcamarca “a mi esposo/padre lo desaparecieron”. La práctica de la desaparición forzada fue utilizada en su mayoría por las fuerzas armadas, hay que tener en cuenta que ésta fue una zona con una fuerte influencia del actuar militar debido a la base allí ubicada. Muchas personas entraban a las bases y no se volvía a saber de ellas, otras salían de sus casas y nunca regresaban. Las víctimas tienen la necesidad imperante de encontrar los restos de sus familiares o por lo menos saber qué sucedió con ellos.

Acerca de los asesinatos/las ejecuciones extrajudiciales:

*“Mi padre siendo juez de paz fue secuestrado de esta casa, torturado y asesinado por los subversivos”*. Hombre habitante de Julcamarca.

*“Le había cortado la oreja, le habían cortado la lengua a mi esposo, así encontré ahí en la pista. Primero había encontrado el poncho, yo dije se habrá escapado. Regresé todavía a mi casa, no estaba conforme. Un tío me dijo sobrina tu esposo ya está muerto, y cuando fui a ver le habían golpeado la cabeza, le había golpeado con piedras, le habían amontonado el cadáver le habían amontonado con piedras y espinas, le habían amontonado después de cortar la oreja, la lengua”*. Mujer habitante de Cahua.

*“Sendero sacó mi esposo y lo mataron allá arriba en el rincón y saquearon toda mi casa, tanto yo como mis hijos, de miedo, de temor ya no dormíamos en la casa, dormíamos en los cerros, debajo de los árboles, llorando nos escapábamos, por encima de las piedras, por encima de las espinas para ocultarnos para que no nos mataran”*. Mujer habitante de Cahua.

*“En la mañanita han entrado los senderistas a mi casa, querían matarme y he escapado, he salvado mi vida, a un cerrito me he ido, mi casa y todo lo incendiaron; todo lo han quemado, mis animalitos todo se han llevado los senderistas, hemos quedado sin nada prácticamente, a mi papá se lo han llevado y al volver ya no estaba, lo han matado por culpa de mi por estar de comando lo han hecho desaparecer”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“A mi papá lo han matado los terrorismos, por eso soy afectada, huérfana he quedado, mi mamá también falleció por a través de ese alcohol, cuando mi papá falleció se vició al alcohol y a través de eso ha fallecido también”.* Mujer habitante de Julcamarca.

La mayoría de los casos de asesinato declarados en las entrevistas fueron perpetrados por SL, mientras, como se mencionó anteriormente, las fuerzas militares ejercieron en su mayoría la desaparición forzada. Un patrón habitual en los asesinatos era llegar a la casa de la persona que buscaban, saquear el lugar, quemarlo en muchas ocasiones, para luego asesinar a la persona. La intención no era solamente cometer el acto de ejecutar a la persona, sino también que éste se convirtiera en una lección y en un acto ejemplarizante para el resto de la comunidad.

En cuanto a la persecución y a las detenciones ilegales:

*“Me perseguían para matarme, yo iba de un sitio a otro sitio para escaparme, he salvado mi vida, caminando en otros pueblos trabajando y trabajando”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“En Yuracocha yo estaba como autoridad, como presidente de la comunidad de administración y también como presidente de rondas campesinas, siendo así es que el terrorismo, el sendero se ha infiltrado a ese lugar y en eso empezó a quemarme la casa a mí, a buscarme, porque a mi tres veces que me han buscado en las noches, pero yo ya sabía que estaba perseguido, entonces yo a veces dormía en los huecos, así retirado del*

*pueblo, entonces la tercera vez que me han buscado y no me han encontrado se vengó con la casa, toda mi casa la han quemado”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Fui afectado por un homónimo, estuve en la cárcel casi 2 años, esa persona era de Huanta en Ayacucho y yo soy de Huancavelica, pero de todas maneras no me soltaban, en el puesto de la policía me torturaron, ahí siempre torturan, golpean. Ese señor era Edilberto Mora Chávez y yo soy Morales Chávez, pensaban que yo me había cambiado el nombre, esa persona era terrorista”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Cuando han puesto a mi esposo preso, totalcito hemos sufrido, llorando mis hijos, así escondiendo, escondiendo, estábamos aquí con miedo y esa fecha ha pasado eso también, total casi loca me he vuelto, totalcito, llorando caminábamos y también lo han torturado y su cabeza está fallando cuando amargo por cualquier forma reacciona de otra forma, por cualquier cosa discutimos, el reacciona de otra forma ya, y no tiene pensamiento nada”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“En aquella época cuando iniciaba la subversión, iniciaba a estudiar en la universidad San Cristóbal de Huamanga, donde también surge ese movimiento y a raíz de ellos yo fui más perseguido por la población, por el ejército inclusive, por la misma población. Toda detención no era para una interrogación con tratamiento humano sino pues para tortura, todo ha sido tortura, muchas veces colgándonos de las extremidades, de los pies, algunas veces así nos ingresaba al cilindro lleno de agua así boca abajo, con la única intención posiblemente de querer obtener la información, pero si uno no tiene conocimiento no puede dar la información”.* Hombre habitante de Yuracocha

Las persecuciones y las detenciones ilegales hacen parte de los tipos de violación cometidos durante el conflicto armado. Las fuerzas del orden, policías en los primeros años y el ejército a partir de 1984, y los grupos subversivos instauraron un régimen de terror en el cual cualquier ciudadano podía ser acusado, perseguido y amenazado con o sin motivo. Las persecuciones por parte de Sendero (no solo por afiliación política, sino también por la condición de comerciante) y las detenciones ilegales por parte de las fuerzas armadas se

constituyeron en otro de los escenarios en donde se ejerció la violencia de manera indiscriminada hacia la población civil, en el lugar de estudio, todos campesinos, indígenas y quechuahablantes.

### 5.2.2 Sobre la reparación

Al momento de iniciar la entrevista se les expresó a los participantes que el motivo de ésta era conocer su opinión sobre el plan integral de reparaciones y saber cómo se estaba implementando. En el caso de Julcamarca se les hizo la pregunta: ¿sabe qué son las reparaciones? De las 25 personas entrevistadas en este distrito, 12 contestaron afirmativamente y 13 de manera negativa, lo cual indica que el nivel de conocimiento sobre el tema es medio.<sup>770</sup> A continuación se presentan las respuestas más significativas que agrupan las opiniones de las víctimas entrevistadas.

*“Principalmente nosotros los que hemos sido afectados, víctimas de la violencia nos merecemos... en cuanto a la reparación individual mi mamá todavía vive y dijeron que el año pasado había 5000 soles, pero nos parece muy bajo pues y por eso no hemos recogido... por lo menos mínimamente deberían ser 50 mil soles, mínimo”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Vino un señor diciendo esto va a ser para que le den plata, he recibido 5 mil, a mi parecer no compensa con la vida de mi esposo, tampoco he gastado, lo he puesto en el banco, si tal vez algo se presenta lo voy a devolver, lo tengo así no más”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Si conozco de la reparación individual, mi mamá la ha recibido ya, está considerada en la primera etapa pero yo quisiera que también me den a mí, yo he puesto mis gastos para*

---

<sup>770</sup> Hay que tener en cuenta que al hacer las preguntas sobre terminología muy precisa, y sobre todo en un idioma distinto a la lengua materna, como es el caso de las “reparaciones” y la “justicia”, va a existir la limitación de que algunas personas puedan tener conocimiento sobre el tema pero no lo relacionen con el concepto.

*participar en las reuniones, he asumido la responsabilidad de hermanos menores, de la familia, yo también quiero ser beneficiaria de esa reparación*". Mujer habitante de Julcamarca.

Las víctimas expresan su inconformidad con respecto al monto de la reparación económica individual, aunque son personas con dificultades económicas, razón por la cual podrían aceptarlas, reiteran que deberían recibir una cantidad mínima digna que reconozca su derecho a la reparación. Debido a la priorización que el Estado ha establecido, existen muchas personas que han quedado fuera de la entrega de las reparaciones hasta que los criterios sean modificados.

*"Si, la gente espera con ansias la reparación individual, en capital de distrito como no hay reparaciones colectivas, hasta ahora no se sabe nada de las reparaciones individuales, ahora uno que otro creo que han recibido los 5000 soles"*. Mujer habitante de Julcamarca.

*"Justo mi mamá se ha inscrito y dice que el año pasado cree que ha venido plata como cinco mil soles, mi mamá como vive en Miraflores, no le han dado, no sabía nada y ahora he ido a Ayacucho a averiguar entonces me dicen no hay atención hasta otros aviso me dijo, no sé, no he averiguado más, no sé cómo puedo saber eso"*. Hombre habitante de Julcamarca.

*"Somos varias huérfanas, viudas, nosotras queremos que el Estado reconozca, a otros han estado dando su reparación y queremos que a gente de acá campesinos nos reconozcan. El Estado que nos repare, reparación individual. Yo le pediría económicamente para que pueda terminar sus estudios mi hija, por falta de dinero no ha podido terminar, soy sola y no puedo afrontar los gastos que tiene mi hija"*. Mujer habitante de Julcamarca

Hay muchas personas que esperan la reparación con mucha expectativa, al ser ciudadanos con sus necesidades básicas insatisfechas, ven en la reparación la posibilidad de cubrir sus prioridades personales.

*“Nos engañan, nos dicen te vamos dar, te vamos dar, pero nunca nada”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“No, casi no, no he comprendido todavía eso de la reparación individual y como varios vienen así con papeles pero hasta ahorita no merecemos nada todavía, no hemos visto nada todavía”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“He escuchado, decían que podría recibir a través de animales, plantaciones, no sé la verdad más allá, yo no soy beneficiada, claro también estoy dentro de este registro pero no tengo todavía ningún beneficio”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Prácticamente a nosotros nos están diciendo va a haber individual (reparaciones económicas), pero ahorita tenemos credencial y con eso están ya para cobrar, ahorita prácticamente vamos a esperar hasta sesenta años todavía y cuando llegamos sesenta años, recién dicen vamos a cobrar, pero eso no es seguridad, ahora que han salido esas credenciales debemos cobrar algo, ahora que estamos vivos”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Bueno en colectivas las comunidades han recibido reservorios y algunas cosas, bueno hoy en día por lo menos le sirve a unas cuantas personas, pero no a todos. Ahora parece últimamente que el gobierno nos va a reparar con 10 mil soles, pero sin embargo a los ancianos a algunos cuantos los han reparado y a los demás nada”.* Hombre habitante de Julcamarca.

Existen víctimas que no tienen claro el significado de las reparaciones, pero todas son conscientes de que “merecen” o tienen derecho a algo. Asimismo, expresan su inconformidad con las promesas incumplidas, lo cual responde a años de desatención por parte del Estado.

*“En cuanto a las reparaciones colectivas, se ha estado dando, se ha estado dando. Lamentablemente tenemos que considerar que hay gobiernos locales, alcaldes distritales,*



*provinciales, a parte que han considerado como una gestión suya, porque es gestión de los dirigentes, se ha considerado que todas las comunidades afectadas tengan los 100 mil soles para hacer alguna obra, apuntando a proyectos productivos, sin embargo no han hecho en el caso de Julcamarca la liquidación de 3 obras, si es que no han rendido cuentas de esas 3 obras a la CMAN ya no programan para el siguiente año hasta que rindan cuenta”. Hombre habitante de Julcamarca.*

*“Todos a nivel nacional queremos reparación, pero la verdaderamente, algunos también se aprovechan a eso, porque algunos no han sufrido ni golpes ni nada, pero dicen que a mí me han golpeado, yo he caído en tal fecha, eso es mentira, eso para nos preocupa bastante, hay que decir la verdad y prácticamente esa plata es difícil de encontrar para cantidad de gente y eso debe estar modificado y pasar revisión médica como Estado, qué razón, en qué parte han golpeado, todo eso a veces me preocupa bastante, me preocupa la salud, por los golpes hemos estado enfermas”. Mujer habitante de Julcamarca.*

Entre los participantes, se encontraron personas con mayor criterio crítico, especialmente por pertenecer a grupos comunitarios y a colectivos que tienen mayor acceso a la información sobre el plan integral de reparaciones. Estas personas hacen críticas sobre la ejecución de las obras de reparación colectiva y la utilización de éstas por parte de autoridades políticas, lo que desvirtúa el carácter reparador del programa, ya que pueden ser fácilmente confundidos con otra obra social del Estado. Igualmente, y como se expuso en el capítulo anterior, al implementar programas de reparación en zonas donde convivan poblaciones vulnerables, que no necesariamente sean víctimas, se podrán dar casos de enfrentamientos por los recursos que son proporcionados por el Estado.

Por su parte, las entrevistas realizadas en los centros poblados de Arcuilla, Cahua y Yuracocha evidencian la realidad de cada una de estas poblaciones y la dinámica del proceso que se llevo a cabo desde la elección del proyecto u obra de reparación colectiva, pasando por la ejecución, hasta el estado de las obras un tiempo después de su puesta en

funcionamiento, en el caso que funcionara. La pregunta que se les realizó fue: ¿conoce la reparación que se le dio a su comunidad?<sup>771</sup>

*“Bueno es cuando vino la Comisión de la Verdad, recogió las informaciones, después, este como se llama, ya llego este... IDL también han hecho algunos seguimientos, después de eso nos han programado la reparación colectiva”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Las comunidades que estaban la violencia que han pasado, que fueron más afectados a esos se les ha dado 100 mil soles, ¿no es cierto?, nosotros éramos uno de ellos, la comunidad más afectados por la violencia”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Hicieron un reservorio pero ese reservorio solo sirve para la parte de abajo y nosotros somos parte arriba, entonces a nosotros no nos sirve, yo no merezco nada, ni un apoyo”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“La reparación que ha llegado a mi comunidad ha sido producto de CMAN, lo transfirieron un presupuesto de 100 mil soles y con eso la comunidad decidimos en una asamblea construir un reservorio para tener un pequeño riego, eso es lo que se ha hecho, reparación colectiva”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Ha llegado acá a la comunidad para todos, hemos hecho para el bien de la comunidad, hemos hecho reservorio y si eso nos va a servir a todos, eso hemos hecho”.* Hombre habitante de Arcuilla

*“Sobre de esa reparación colectiva claro hemos recibido, y ahora hemos hecho un reservorio, siquiera para eso, para regar nuestras chacras para tener cualquier cosa”.* Mujer habitante de Arcuilla.

---

<sup>771</sup> Esta es la misma pregunta que se le realizó a los participantes en los tres centros poblados donde se ejecutaron proyectos u obras de reparación colectiva.

De las ocho personas entrevistadas en Arcuilla, siete conocen el proyecto u obra a través de la cual se hizo efectiva la reparación colectiva y la otra persona que contestó de manera negativa, al preguntarle por el reservorio que se había construido en su comunidad, lo relacionó de manera inmediata con la reparación. Esto indica que hay un conocimiento alto sobre la obra de reparación y su significado para la comunidad.

En cuanto al centro poblado de Cahua, los resultados fueron totalmente distintos. De las doce personas participantes una respondió de manera positiva, diez de manera negativa y una persona después de finalizar la entrevista recordó el proyecto y lo asoció con la reparación colectiva. Esto refleja el poco conocimiento sobre el tema de la reparación, así como la falta de promoción y divulgación por parte de las autoridades sobre el programa de reparación su significado y su objetivo de remediar el daño sufrido.

*“No conozco sobre la reparación, no, no, todavía no”.* Hombre habitante de Cahua.

*“No sé de la reparación, solo sé que ahora estamos más tranquilos”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Yo sentiría bien reparación cuando venga siquiera 10 soles, 20 soles, ahí sería más o menos, ahorita desde que me he accidentado nada, ningunas reparaciones. Antes que vienen no podría sentir nada todavía. Sentiría yo prácticamente como me apoyaría el Estado como yo era de Estado también, yo como militar, desde ahí hasta el momento no hay ningún apoyo desde que me he accidentado pues, entonces no siento nada de reparación todavía. Como es de Estado, ellos pueden hacerme siquiera sanar mis brazos pues, ahora sufro, no puedo trabajar, sufro en cualquier trabajo, no puedo como sano, no puedo trabajar”.* Hombre habitante de Cahua.

*“El alcalde anterior se prestó dinero entre 30 y 35 mil soles para hacer el proyecto en Yuracocha. El señor Carlos Saldaña (antiguo alcalde) hizo el proyecto como pudo, se prestó la plata y no la devolvió nunca más”.* Mujer habitante de Cahua.

Como consta por las respuestas, no tienen conocimiento alguno sobre la reparación colectiva de la que han sido beneficiarios. La persona que pudo dar alguna información sobre el tema, hizo referencia a una supuesta malversación de los fondos destinados a la obra de reparación en Cahua. Esta evidencia de corrupción, da cuenta de una de las debilidades de los programas de reparación y es el papel, en este caso negativo, que puede ejercer la voluntad política.

En cuanto a las cinco personas entrevistadas en Yuracocha, dos manifestaron conocer la obra de reparación colectiva y tres no la identificaron. Las siguientes respuestas fueron proporcionadas por las dos personas que expresaron su conocimiento.<sup>772</sup>

*“Si lo que dio CMAN si, le ha dado 100 mil soles”.* Hombre habitante de Yuracocha.

*“En si la CMAN ha programado un monto específico de 100.000 soles en la comunidad, la forma de destinar al proyecto yo no he participado, ha surgido otra forma de ejecutar el proyecto, creo que por insinuación de las autoridades locales de acá de Julcamarca, han decidido ejecutar un reservorio, posiblemente hubo pero con la presencia de ellos, entonces se hizo ese gran monumento para agua y al momento es solamente para ver, no hay conexión de tubería, ¿de dónde va a servir el agua?, no hay de donde alimentar para almacenar agua. Para mi prácticamente la forma como se ha ejecutado el proyecto no sirve para nada, no le beneficia en nada a la población”.* Hombre habitante de Yuracocha.

*“Yo creo que la mejor forma de reparar sería invirtiendo en actividades productivas, que mejore la condición de vida del poblador, que mejore los ingresos económicos para que ellos tengan mayores posibilidades por lo menos de educar a sus hijos”.* Hombre habitante de Yuracocha.

---

<sup>772</sup> Aunque las tres últimas respuestas que se pueden leer a continuación hacen parte de una misma entrevista, para efectos de mejor lectura fueron divididas.

*“A nivel nacional parece que no había voluntad para atender el tema de reparaciones, cada vez se ha postergado, se ha postergado y se han desentendido, desde el 2007 estamos en este problema, en el 2007 ya se ha recogido el registro de víctimas y a la fecha ya se hubiera hecho las reparaciones a muchas comunidades, reparaciones colectivas, como también se hubieran priorizado las reparaciones individuales”.* Hombre habitante de Yuracocha.

Las respuestas manifiestan una visible inconformidad con el proyecto de reparación colectiva, así como con el Plan Integral de Reparaciones y su implementación a nivel nacional. Se repite la percepción acerca de los malos manejos por parte de las autoridades públicas encargadas de la ejecución de la obra y la necesidad y expectativa acerca de las reparaciones económicas individuales.

En relación con la elección del proyecto u obra de reparación colectiva, en los tres centros poblados se hizo la pregunta ¿ha participado de la elección del proyecto de reparación colectiva? En Arcuilla, de los ocho participantes, seis contestaron de manera positiva y dos de manera negativa, lo que da un buen balance de participación. Por su parte en Cahua, al no conocer el proyecto diez de los doce participantes, la respuesta se anula en once casos y la otra persona entrevistada no tuvo claridad para responder la pregunta. Finalmente en Yuracocha, de las cinco personas participantes ninguna participó en la elección del proyecto.

*“En una reunión primero aprobamos nuestra necesidad no cierto, que queríamos, entonces nuestra necesidad era pues el agua, ahí nosotros hemos caminado, para construir el reservorio”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Si toda la comunidad nos hemos puesto de acuerdo”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Todos han venido a la comunidad, he participado en la asamblea de la elección de ese proyecto”.* Mujer habitante de Arcuilla

*“Un dirigente ha venido, han salido del CMAN una plata, 100 mil soles qué vamos a hacer y nosotros hemos decidido para todos hacer nuestro reservorio, eso nos va a servir pa todos, así hemos quedado y ahí ellos contrataron su maestro, sus albañiles, nosotros hemos ayudado no más”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“En el proyecto no, en el proyecto no me han invitado porque el señor alcalde ha decidido con sus regidores, para mi mal han hecho, 100 mil soles para nosotros era un platita, algo bueno, otra obra, pero ahorita ese reservorio es un elefante blanco, porque no tenemos agua, no vale ese reservorio, después todo al final en ejecución nadie invita, ese reservorio lo ha hecho el ex alcalde, el alcalde no está ahorita, y está en proceso de investigación por los 100 mil soles”.* Hombre habitante de Yuracocha.

*“En la ejecución de la obra ni siquiera entraron los afectados, solo trabajó el hijo del señor Hipólito desde el inicio hasta el final, después claro que nos ha dado un trabajo, pero al final nos han dado esa platita de mil tantos, mil quinientos algo así, al final le dan a un maestro esa platita, ese maestro solo con sus esposas con sus hijos se ha hecho a su manera”.* Hombre habitante de Yuracocha.

*“Esa platita que sobró del proyecto se le dio a una sola persona, claro porque tienen que sustentar recibo con honorarios, pero el acuerdo interno fue que trabaje Benacio, que trabaje Cirilo, pero la persona que ha recibido la plata ya no quiso soltar, y cómo que se ha beneficiado a nivel personal, porque los trabajitos pendientes los ha hecho solo con su esposa”.* Hombre habitante de Yuracocha.

*“El alcalde don Carlos Saldaña, dijo: vamos a trabajar y va a llegar agua, pero falta todavía tubos por instalar, vinieron el alcalde, un ingeniero, los regidores y dijeron va a llegar agua”.* Hombre habitante de Yuracocha.

En el caso de Arcuilla se evidencia claramente la participación de la comunidad tanto en el proceso de elección del proyecto (requisito indispensable para la implementación de las reparaciones colectivas), como en la propia construcción del reservorio. Por su parte en

Yuracocha, el malestar sobre las irregularidades en la ejecución y en la distribución del trabajo indican un fracaso en el programa de reparación colectiva en ese centro poblado.

Conocer el estado de la obra o proyecto de reparación colectiva significa poder medir, de cierta forma, su efectividad. Un programa de reparación implica varias etapas, y en la reparación colectiva el funcionamiento del proyecto, es decir, que las víctimas puedan obtener el beneficio de ese servicio o infraestructura que el Estado les está proporcionando como una forma de resarcir el dolor por los abusos sufridos es primordial, ya que se constituye en la materialización de la reparación. La pregunta realizada fue: ¿en qué condiciones se encuentra la obra de reparación colectiva en estos momentos?

*“Está bien. Esta pintadito, está en buenas condiciones”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“El reservorio está bien ahorita, mas ahora nos han puesto el agua de riego tecnificado, este año recién vamos a probar”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Si, anterior teníamos reservorio de pura piedra, ahora tenemos reservorio con base de concreto, nos ayuda bastante”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Hasta el momento el reservorio ha venido funcionando bien, pero falta de alguna manera, no llega o no nos beneficia como debería ser, le falta más líneas de conducción para poder regar más extensiones de terreno”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“El reservorio no me da agua, no me permiten agua. Me dicen que si quiero regar mi chacra que me compre los tubos aparte. No sé si el reservorio es para el pueblo o para los afectados. Muchos que no son afectados se benefician del reservorio”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“El reservorio está bien, su función está bien, solo que hubo un poco de mal manejo en esa cuestión de economía no cierto, en eso nada mas ha salido un poquito problema para nosotros, porque el reservorio si está en condiciones bien, funcionando... en la ejecución,*

*en los gastos que se han hecho, a nosotros nos han dicho que se ha gastado todo legal, los 100 mil todo en ese reservorio, pero realmente, cuando vieron otros ingenieros que han venido no era realmente cuando han visto, no era esa cantidad para lo que hicieron, en eso y nosotros hemos dejado eso en manos de la autoridad y el alcalde ahorita actual él se está encargando seguimiento de ese proyecto..., nos ha dicho que iba a hacer una auditoria y ya responderá él, el alcalde anterior es el responsable de esa ejecución".* Hombre habitante de Arcuilla.

*"La obra está bien"* Mujer habitante de Cahua.

*"No han completado todavía, faltan unos tubos para completar, no alcanza el agua, no llega al reservorio".* Hombre habitante de Yuracocha.

*"El proyecto no funciona y no va a funcionar tampoco porque no tiene fuente de captación de agua".* Hombre habitante de Yuracocha.

En la misma línea de los resultados anteriores, en Arcuilla hay evidencias del funcionamiento de la obra y las condiciones en que está, en este punto se hace un cuestionamiento a los manejos que las autoridades locales tuvieron durante su ejecución, lo que demuestra el interés de las víctimas en cuanto a los asuntos relacionados con la obra de reparación colectiva. Estas personas saben que actos como estos ponen en peligro el disfrute de sus derechos. Asimismo, hay testimonios de víctimas que no se benefician de la reparación colectiva por la ubicación del proyecto, lo que genera insatisfacción por parte de ellos y hace que fracase la reparación en su objetivo. En Cahua la respuesta es mínima, mientras en Yuracocha se reafirman los inconvenientes que tuvieron lugar durante la ejecución y el resultado material, el no funcionamiento de la obra.

En cuanto al tema de la efectividad de la reparación, éste es clave a la hora de tratar de medir el impacto que pueden llegar a tener los programas de reparaciones. Para lograr conocer la efectividad de la reparación, tanto individual como colectiva, se les preguntó a los participantes ¿para qué ha servido la reparación? Hay que tener cuenta que la pregunta



se les formuló a aquellos que la hubieran recibido. (Vale esta aclaración especialmente para las reparaciones económicas individuales, ya que muchos de los entrevistados no la han recibido hasta el momento, este es el motivo de que haya pocas opiniones al respecto).

*“La reparación colectiva ha servido pa nosotros, pa nuestra vida prácticamente, pa producir bien, las plantas, pa todo eso, nosotros hemos pedido ese reservorio, como tenemos un poquito de recursos de agua por esa causa”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Con la reparación colectiva estábamos nosotros, conforme, casi conforme, claro algunos que han perdido, querían reparación individual cierto, eso es mucho que están esperando, para que ya se sientan ya, prácticamente como usted dice mejor, más tranquilo, claro eso, pa otros, muchos que no hemos perdido nuestra familia, ya sentimos con ese, nos estamos sintiendo más o menos”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Para todos es, no es para afectados no mas, para toda la comunidad es”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Reparación individual pues, ya colectiva es para comunidad ya, hay ya siquiera, siquiera poco, pero los que han quedado huérfanos y viudos no hay... Con eso es para todos pues, pero después nos dijo que va haber individual y nada, cuantos años ya pasó”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Algunos sí, alguno no, porque otros que tienen cerca al reservorio su chacra, y hay otros que no, entonces como que hay una parte que no siente la reparación”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“El reservorio no me da agua, no me permiten agua. Me dicen que si quiero regar mi chacra que me compre los tubos aparte. No sé si el reservorio es para el pueblo o para los afectados. Muchos que no son afectados se benefician del reservorio”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“La comunidad no se siente bien con el reservorio, claro una parte a los que les alcanza el agua, a una parte no alcanza entonces nosotros quedamos prácticamente sin nada, no nos beneficiamos, nosotros queremos que nos hagan algo pa nosotros, algún reservorio, algún agua. Los que no tienen nos sentimos un poco triste y los que tienen se sienten alegres”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Sobre las reparaciones creo que deberían llegar directamente los apoyos económicamente o socialmente a esas personas que han sido verdaderamente afectadas, que han sufrido, porque hay algunas personas que no han sido y están dentro de eso, eso deberían verlo bien, quién es quién y quién necesita verdaderamente un apoyo”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“En las reparaciones colectivas como dice su nombre colectivas, no todos están conformes, porque algunos dicen: el no mas aprovecha, ¿por qué yo no? Y siempre hay una desconformidad, pero yo creo que con la individual creo que podría estar bien”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Ya nos sirve, ya tenemos para pequeños huertos, ya tenemos para lavar los alimentos, lavar la ropa, con ese entubado ya tenemos agua, por lo menos lo necesario”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Debe darles aquí a las persona reparación individual, a parte a las personas se requiere la reparación individual, debe dar para su medicina, para sus alimentos, a medida que van avanzando tienen más necesidades y no cuentan con el recurso económico”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Que es un trabajo en vano, que es una obra inútil, si hubiera sido de repente... adentro tenemos una parcela que necesita riego, sacando con tubo aunque sea una partecita eso era algo que mejoraba la vida de la población”.* Hombre habitante de Yuracocha.

*“Mi percepción es que no se está aquí, por lo menos en Julcamarca, no se está dando como debe ser, en reparaciones que le digo, en vivienda no se ha dado en Julcamarca absolutamente, se inicio en Chíncho, yo dirigente provincial, luego también fui regional de Huancavelica, como piloto se inicio en Chíncho pero fue un fracaso total, un engaño total. Reparaciones en salud se volvió al plan y código 99 que es de extrema pobreza, mientras que nosotros como afectados estábamos en el plan y en el código 09 que era para afectados tenemos ciertos beneficios mejores a los de extrema pobreza, hoy lamentablemente se ha generalizado, entonces todos estamos mezclados en el mismo saco”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Ahí había una beca para las universidades y los institutos, bueno eso como sea habíamos logrado pero como que esas becas le sirven para el examen no mas después del examen adentro ya no les sirve de nada y uno que no tiene recursos con qué va a seguir estudiando, muchas veces ingresar a la universidad es un poco más fácil que mantenerse adentro”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“El Estado debería evaluar y además hay gente que ya se está yendo sin haber merecido la reparación, se están yéndose al más allá, ya se fue, ya se nos fueron muchos, ya de esperar, esperar y esperar y esperando ya alcanzó la muerte y ya se fueron, pero si hay todavía, si hay mucha gente, muchos huérfanos, muchos familiares de los desaparecidos, de los fallecidos, los torturados, están esperando la reparación individual y debe haber la reparación individual, debe acelerar el gobierno”.* Mujer habitante de Julcamarca.

Al revisar las respuestas en relación con las reparaciones colectivas, se aprecia que las víctimas reclaman que los beneficios de éstas lleguen a toda la población y que no de manera exclusiva a las víctimas, lo cual indica que a través de estos proyectos ellos no se sienten reconocidos o que no se les hace un reconocimiento explícito de su situación. Para las víctimas no es suficiente un proyecto u obra colectiva, es primordial la reafirmación de que han sido víctimas de abusos y que el Estado reconoce su responsabilidad y por ese motivo son beneficiarios de una reparación. Esto podría variar en la medida que las reparaciones colectivas se complementen con las reparaciones económicas individuales (y otro tipo de

medidas), razón por la cual el asunto de la integralidad en los diferentes mecanismos es tan importante para enviar un mensaje verdaderamente reparador. Nuevamente, se aprecia la importancia que tiene para las víctimas la reparación económica individual, debido a la urgencia de cubrir sus necesidades más básicas.

En estos testimonios también se hace referencia a otro tipo de medidas por implementar (programa de reparaciones en educación y en salud), que en un principio se definieron de alguna forma, sin concretar los procedimientos necesarios o la regularización de estos para su posible ejecución a nivel nacional. La larga espera de las víctimas por los diferentes tipos de reparaciones se hace evidente en todos sus pronunciamientos.

### **5.2.3 Sobre la justicia**

Después de obtener respuestas sobre el tema de la reparación, se plantearon preguntas en relación con la percepción que los participantes tienen sobre la justicia y sobre ésta después de la reparación. En este punto se presentó la mayor dificultad conceptual para responder una pregunta por parte de los participantes. Además de las barreras lingüísticas habituales que se pueden dar cuando se hacen traducciones simultáneas, el concepto de “justicia” no pudo ser entendido en algunas ocasiones (la palabra justicia no existe en quechua, la lengua materna de todos los entrevistados, y la mitad de las entrevistas aproximadamente fueron hechas en este idioma).

Adicional a la pregunta: ¿cree usted que se ha hecho justicia?, se formuló una cuestión alternativa: ¿cómo se sentiría usted mejor? O ¿qué debería hacer el Estado<sup>773</sup> para que usted se sintiera mejor? Después de revisar otras experiencias de entrevistas llevadas a cabo en la zona y consultarlo con personas que han trabajado temas relacionados en el distrito, se concluyó que la mejor expresión equiparable al concepto de justicia era “la acción del Estado” que generará el efecto de bienestar después de las violaciones sufridas.

---

<sup>773</sup>La concepción de Estado como garante del respeto y disfrute de derechos resultó ser entendida de la misma manera al utilizar palabras como autoridades, gobierno e, inclusive, políticos.

Así como existe más de una concepción de la justicia, así las respuestas de los participantes respecto a ésta. En lo que sí hubo un consenso general, independientemente de lo que se entendiera por ella, fue el afirmar que no se ha hecho justicia.

*“No hay justicia, cuando es reparación individual sí, mientras con la colectiva no”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Sí reparación individual, porque a veces por falta de plata mi hijo a veces no estudia, si estaría vivo su papá como sea educaría ¿no? Ahora que no tiene papá mi hijo está un poco mal, no sé a veces con tanta preocupación toda sangre mal habrá chupado mi hijo, ahora parece un poco loco, así cuando toma se pone, no está normal, no sé cómo puedo hacer eso también”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Para sentirnos mejor deberían darnos individual (reparación). Con reparación individual ahí ya cada uno podemos hacer algo, en otros sitios dan animales o dinero, entonces cada uno a su gusto hacen eso”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Lo que ha dado la comunidad no mas está pues, lo demás no pues, nosotros queremos justicia, que hagan una buena justicia, nosotros cada persona queremos que nos paguen en plata en cualquier cosa que nos pagues de nuestros difuntos ¿no? Nosotros no estamos conforme con lo que han dado a la comunidad, ese apoyo que ha dado no estamos conformes”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Necesitamos la reparación individual, así estaría bien. Ocho hijos, y tengo muchas necesidades, y no alcanza el dinero que recibo del programa Juntos<sup>774</sup> pero no alcanza para varios hijos que tengo. Tanto tiempo ha pasado y va haber reparación y no hay nada, hasta eso ya nos alcanzará la vejez, ya nos moriremos”.* Mujer habitante de Arcuilla.

---

<sup>774</sup> El programa Juntos hace parte de los programas que integran la política social del Estado.

*“No, para nada, no hay justicia. Creo que hay reparaciones que han hecho a otras personas con montos de 150.000,<sup>775</sup> pero 5 mil no es nada, lo gastarás en una semana, en un mes ya no hay nada”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Por lo menos el compromiso que nos cumpliría a todos, hoy en día a algunos cuantos le dan, lo que nos han comprometido por lo menos darnos esos 10 mil, nos tienen que cumplir por lo menos. Las autoridades de arriba nos toman de juguete, yo no estoy de acuerdo con esas cosas que están pasando”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“No hay justicia, no sé a dónde ir a quejarme, cuando mataron a mi esposo y fui a Julcamarca me dijeron entiérrelo no más. Para que haya justicia deben darnos en dinero, en animales, para poder sobrevivir que estamos en edad avanzada”.* Mujer habitante de Cahua.

La asociación de la justicia con su concepción restaurativa fue común entre las respuestas. Al afirmar que con la reparación económica individual sentirían que se ha hecho justicia, confirma la estrecha relación entre las expectativas de “reparación” y cubrir las “necesidades” básicas, en muchos casos inclusive llegando a estipular que el monto sería un “pago” por la pérdida sufrida. Obviamente no se cuestiona este tipo de reacciones frente a argumentos que señalen el carácter exclusivamente simbólico que pueda tener una compensación, la necesidad de vivir, de alimentarse, casi que de supervivencia, explica estas declaraciones.

*“Le están dando prioridad a los que han sido asesinados por Sendero, y lo de los militares no toman importancia también, o sea es como querer opacar a los militares todo lo que*

---

<sup>775</sup> Aquí se hace referencia a las reparaciones otorgadas por el Estado como respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana en los Casos de Barrios Altos y la Cantuta. La entrega de la indemnización o compensación que hizo el Estado fue pública y muchas personas lo recuerdan. El común de las personas no entiende la diferencia entre las reparaciones económicas individuales como parte del Plan Integral de Reparaciones y las dispuestas por el Estado como parte de su obligación internacional. Estos hechos han sido criticados fuertemente, debido a la confusión que puede crear en las víctimas y al mensaje discriminatorio que estas llevan.

*han hecho, cuando los militares también han cometido abuso*". Mujer habitante de Arcuilla.

*"Por tantos daños que nos ha hecho por tantos años que hemos sufrido, teníamos que ocultarnos de sendero, teníamos que cuidarnos de los militares, no es justicia, yo creo que no vamos a llegar a la justicia, ahorita no, no hay siquiera trabajos para una reconciliación nada, la gente siguen con los resentimientos y esto ha dejado una secuela fea, se ha roto todo el tejido social y ahora ha quedado con una secuela, hay mucha gente violenta, agresiva, gente que no tomaba alcohol ahora ha aprendido a tomar alcohol, son borrachos y hasta tienen doble personalidad, al rato están bien y al poco rato están agresivos, entonces a veces esas personas tienen a su familia, pegan a sus esposas, pegan a sus hijos y no sabemos muchas veces por qué no, pero otros si lo entendemos y es como producto de esa consecuencia de esa guerra sucia que hemos vivido*". Mujer habitante de Julcamarca.

*"Recién hay un reconocimiento pero es lento, no se esclarecen las cosas bien, no sabemos bien. De repente alguno de los fallecidos, pero el resto de los torturados del resto no hay nada*". Mujer habitante de Cahua.

*"Una autoridad que nos ponga... que a todos los afectados que diga esto es así así, que de orientación. Porque ahora no hay ninguna justicia para nosotros, para los pobres no hay justicia, los que tienen plata hay justicia. Porque con plata trabajan pa todos, nosotros no tenemos. Ahora yo para mantener a mis hijos yo trabajo acá, salgo a trabajar cuatro de la mañana, hasta las 9 de la noche, solo 10 soles gano, y ¿acaso alcanza suficiente para los chicos? No. Entonces yo quisiera un apoyo de que somos afectados y que somos bien maltratados debe darnos un apoyo las autoridades, un abogado siquiera que venga, que nos pregunte, pero acá las autoridades nos ponen a un lado a nosotros, que nos haga una justicia buena, que haga una justicia para los pobres*". Mujer habitante de Julcamarca.

*“No es lo suficiente, por qué cuantas personas, pobladores se han perdido de esa comunidad y cuánto crees que cuesta una vida, un ser viviente más todo lo sucedido, todo el atropello que ha sucedido la comunidad, la población”.* Hombre habitante de Arcuilla.

Los testimonios también reflejan la exigencia de reconocimiento y atención que las víctimas le hacen al Estado. La justicia para algunos entrevistados requiere un reconocimiento de su situación que se traduzca en la atención de aquellas necesidades insatisfechas, son declaraciones que piden inclusión en la sociedad y el goce efectivo de sus derechos.

*“No no, no nos consideramos reparados, no se hizo justicia, no lo creo, no lo creo así. Teniendo en cuenta que los gobiernos de turno han influido para que los agresores, especialmente de los agentes del Estado, que fueron tan agresores o más agresivos que los subversivos, ellos no están...no han pagado sus culpas”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“La única justicia es que Fujimori está en el penal y que muera allí, pero el resto todos los atroces que hay distribuidos a nivel nacional están libres, las atrocidades que han cometido en Arcuilla por ejemplo una noche nada más uno de los tenientes ha desaparecido a 18 familias, había una matanza así masiva, sistemática”.* Hombre habitante de Yuracocha.

Hay quienes entienden la justicia desde una perspectiva retributiva, el que los perpetradores “paguen sus culpas” es una condición necesaria para sentirse reparado.

*“Bueno reparación, hasta ahora no hay nada, gobiernos que pasan mentira ahí, promesa, promesa y nada”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Las autoridades no toman importancia a estos proyectos de reparación, no nos toman en cuenta a las víctimas, claro como ellos no han perdido nada, no sienten nada”.* Mujer habitante de Julcamarca.



*“Más que nada de los desaparecidos tienen que reparar, de los perdidos, que han perdido a sus familias, así uno ya estaría conforme ¿no? No está justo pues”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Años, años están ya reparación, reparación, mi señora camina y camina, ha ido a todo Lima, Huancavelica, todo a manifestarse entonces gasto dinero así caminando entonces, siquiera eso ya debe reparar de años, tantos años ya debe reparar siquiera eso y hasta ahorita nada, no hay nada”.* Hombre habitante de Cahua.

*“Ahorita nosotros queremos reparación de los desaparecidos, ahora no llega nada, dicen va a venir, va a venir, ¿cuándo va a venir ya? Ahorita mi papá ya falleció ya y estaba esperando...pronto debería haber esas reparaciones”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Hasta el momento nosotros nada de justicia, ningún apoyo no recibimos, nada hasta el momento, a mi ningún apoyo todavía me llega del presidente”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Hasta ahora no hemos encontrado justicia, por eso yo digo peor que nada nos está traumando tomando así testimonios, diciendo que tal día va a haber reparación, si vamos a lograr ha dicho pero hasta ahorita no, queremos que sea justicia, la verdaderamente, que no nos engañen en este momento”.* Mujer habitante de Julcamarca.

Los clamores de justicia se materializan a través de expresar el descontento y la decepción que sienten por la acción y, en muchos casos, omisión de la responsabilidad del Estado.

*“No veo que hay justicia y tampoco reparación y las heridas en los afectados continúan, ¿pero qué se puede hacer? Estamos en un nuevo tiempo y nuestro pueblo tiene que pensar en valerse por sí mismo, no esperar ya”.* Hombre habitante de Yuracocha.

Para las víctimas, en algunos casos no queda más que la resignación y aceptación de la realidad. La desatención, la discriminación y otras formas por medio de las cuales el Estado

pone de manifiesto el incumplimiento de sus responsabilidades se han convertido en una constante con la que las comunidades vulnerables aprenden a vivir, generación tras generación.

Posteriormente, a los entrevistados se les planteó la pregunta: ¿qué debe hacerse para que se haga justicia? Las respuestas a esta pregunta fueron variadas, desde reivindicaciones personales, la toma de medidas judiciales hasta propuestas dirigidas al fortalecimiento de lo colectivo. La mayoría de las respuestas estuvieron orientadas a la satisfacción de las necesidades, pero un buen número de personas le apostaron a los procesos penales y hubo una que otra medida particular.

*“Yo pienso que aquí los responsables deben responder, hay muchos, por decir los militares, el ministerio de defensa que hasta ahora protege a los militares, lo ha llevado al extranjero, están en el extranjero bien protegidos, y mientras una persona un civil están presos, o seguimos con esa herida con esa grieta en el alma que nos ha dejado, y hay culpables y el gobierno sabe, deberían estar presos toda esa gente que nos ha hecho daño, yo sé que está fácil de identificar, quiénes estaban en la base militar esos años en tales bases militares, claro nosotros no sabemos el nombre... esas personas son protegidas, de haber ahí ultrajado, de haber violado a tantas mujeres, a tantos menores de edad, esa gente debe estar presa, porque en vez de protegernos prácticamente no nos han protegido, se aprovecharon de la ocasión”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Faltaría, como nosotros ya los hemos identificado a los culpables de parte del gobierno deben darle una sanción, y después cumplir una reparación, entonces estaríamos más o menos conformes. Pero hasta el momento los que manejan todo lo que es justicia ya saben ya, entonces incluso ya lo han tenido identificado ya saben donde están los responsables, incluso siguen trabajando como esto, entonces... dicen que todavía le han aumentando el sueldo, y nosotros nada pues, eso duele, justicia debe trabajar para todos, para todos por igual, a los campesinos nos margina pues, hasta el Estado, el gobierno de los militares dicen nada nada que ver, cuando el militar hace lo que le da la gana el gobierno no se*

*mete, cuando mataron a los senderistas eso sí, así está diciendo pues, militares estaba defendiendo al campesino, pero no era así, mentira es eso*". Mujer habitante de Arcuilla.

*"Deben encarcelarse a las personas que están sueltas"*. Mujer habitante de Cahua.

*"Deben dar apoyo o los responsables deben estar presos. Yo he reconocido a la persona que entro con su cuchillo a matar, y lo siguió viendo, eso quiere decir que el culpable está suelto, entonces no hay una reconciliación."* Mujer habitante de Cahua

*"No se ha hecho justicia, debería castigarse a los responsables, porque si mi hijo estuviera vivo me ayudaría"*. Mujer habitante de Julcamarca.

*"Si los responsables de aquel entonces viven, deberían de venir, deberían de pagar ellos, si porque la pobreza desde esa época sigue, hasta nosotros no se puede tener una educación mejor, de aquel entonces hemos sufrido el trauma"*. Hombre habitante de Arcuilla.

*"Deben dar la justicia a quien le corresponda. A ese tipo de personas la justicia o el Estado debería traer acá y nos debe hacer conocer: él es el responsable, de esa manera se hará la justicia"*. Hombre habitante de Arcuilla.

*"Que busquen a esa persona y le hagan pagar, siquiera en cárcel, todo lo que hemos sufrido no se puede reparar"*. Mujer habitante de Julcamarca.<sup>776</sup>

*"Tendría que haber una investigación, un análisis, una encuesta en el pueblo, preguntar a cada uno de ellos cuál es el motivo, quiénes fueron quizás así se puede rescatar a todos los culpables. Sin embargo no se va a poder porque la gente por miedo no opinan nada, saben, personas que muy bien saben la situación y saben quiénes son los culpables"*. Mujer habitante de Julcamarca.

---

<sup>776</sup> Vale la pena resaltar este testimonio, ya que refleja el sentir y la realidad de las víctimas de manera universal.

Una de las propuestas de los participantes es que se tomen medidas judiciales para “castigar” y “hacer pagar” a los culpables. Se le exige al Estado hacer lo que sea necesario para localizar a los perpetradores, que se administre justicia desde un punto de vista judicial. Hay un rechazo manifiesto en contra de la impunidad por parte de las víctimas, son conscientes que la justicia ha sido distinta para los miembros de SL que para los miembros de las fuerzas armadas.

*“El gobierno debe visitar a las comunidades, y allá mismo recoger toda la información, ver las necesidades que tienen, según la necesidad deben priorizar, en Uralla a los retornantes les han regalado mantas, frazadas, y a los que se han quedado no les han dado ni una frazada, hay una desigualdad, mejor hubiera vuelto justamente con los retornantes para tener así mis cosas, catre, ollas, los que nos hemos quedado en la comunidad no recibimos nada. A los que estamos en la comunidad deberían de priorizarnos, no a los que se han ido a lima”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Deben ir mejorando con otros proyectos. Mejorar nuestro pueblo. El gobierno debe apoyar más a los pueblos. Los desagües, las carreteras, no hay salida ni entrada, el riego tecnificado debe ser para todos, algunos no tienen nada”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Debe seguir considerando a las comunidades y de repente con dotación de más psicólogos porque hay mucha gente que necesitamos, hacer trabajo en lo que es salud mental”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Yo quisiera que vengan ... esa ves que han venido doctoras a tomar manifestaciones, para que un poco nos den orientaciones, y no estar pensando en eso no?, uno recuerda, te pones nerviosa, cualquier rumor escuchas estás nerviosa ya, tienes miedo... nosotros queríamos una doctora que nos diga cómo son esas cosas, que no debemos estar pensando, pensar en nuestros hijos pero ya no estar pensando en eso, ya nunca más va volver eso, yo solo quisiera que vengan esas doctoras que deben venir a orientarnos, a hablarnos, a hacernos una charla para todas esas personas que somos afectadas de esa vez que ha habido, nosotros estamos bien golpeadas”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Me faltaría para estar tranquila capacitaciones, que nos oriente como se puede vivir ahora, nosotros queremos una tranquilidad para vivir en paz, no quisiera que nos vuelva así de vuelta la violencia”.* Mujer habitante de Yuracocha.

*“Si nos ayudaría en alguna forma a mis dos hijos que yo no he podido educar, hay dos chicas que apenas han terminado su media y están así no mas, no trabajan y todo eso yo no estoy conforme. Si hubiera vivido mi esposo algo hubieran salido mis hijas, lo que podía nomas he educado a los demás hijos, tres hijos no mas he hecho terminar, a esas dos chicas ya no he podido ya, no me alcanzaba la plata”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Ella quiere casa, yo quiero casa para mis hijos, porque mi otra hija se quedo sin estudio, yo no tengo nada que darle, no he podido educar... yo no tengo nada que darles, quiero apoyo para mis hijos”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Siquiera como está diciendo el gobierno que nos de reparaciones en dinero alguna cosa, siquiera eso nos darían pues, de repente con eso estaríamos conforme algo pues, pero ahorita nada, mis hermanos tienen su familia, de repente con eso pueden estudiar sus hijos menores, así de repente nos podríamos sentir mejor, pero ahora así no mas estamos, pensando cuando llegará eso así estamos, llegará o no llegará, en otro lugar a 2 o 3 personas se lo han dado ya, de ahí ha habido cambio de gobierno y se paralizó ahí y ahorita con el otro gobierno no se sabe dará o no dará, eso estamos esperando a ver que un día nos llegue”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Varias veces ya me han tomado encuesta hasta Huancavelica también me han llamado un fiscal para tomar encuesta, una vez he ido a Lircay y una vez he ido a Huancavelica a entrevistar, pero nada. Igual nos han tomado encuesta de ahí nos dijo cualquier apoyo van a recibir nos dijo, que venían así señoritas jóvenes y yo me siento un poco alegre así. Yo me sentiría alegre siquiera cuando reciba algo un apoyo, yo me he quedado con dolor de cerebro y con dolor de estomago, gastritis sufro yo también, como pasaba sin comer por los cerros escondiéndome, llorando”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Cuando me ayudaran con algo, siquiera pa mi hijo, él tiene 24 años apenas ha terminado secundaria porque por falta de dinero no se prepara, ahora dice mi hijo: cuando estaría vivo mi papá ya hace rato yo terminaría mi estudio, por culpa de esos militares estoy sin estudio, así piensa mi hijo también”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Que haya apoyo, que me den un terreno o en plata. Para mis hijos que son los más afectados, yo si me pasa cualquier cosa, para estar tranquilos para tener algo para dejarle a mis hijos (llanto) no quiero que les pase como yo estar andando de casa en casa”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Yo no sé qué idea tengan los gobiernos, ahora dicen que vamos a dar unos apoyos colectivos ya pa algunos individuales, individuales no sé cuanto pueden darle...sería un apoyo en animales menores, en algo, por lo menos vacuno algo así, en eso si si puede ser”.* Hombre habitante de Julcamarca.

La mayor parte las respuestas estuvieron orientadas de nuevo a la satisfacción de las necesidades básicas. En mayor proporción las mujeres solicitaron apoyo psicológico, mientras tanto hombres como mujeres reclamaron recursos para mantener y educar a sus hijos. Muchas de las víctimas posponen sus necesidades para satisfacer la de sus hijos y en ocasiones han solicitado que los beneficios de los programas de reparación sean transferidos a ellos. Es normal que cuando se hagan visitas a poblaciones tan desatendidas, la reacción sea pedir todo lo que necesitan, el interlocutor o interlocutora se convierte en el depositario de todas sus esperanzas. Asimismo, se presenta una “minimización” de sus derechos, ya que cualquier servicio o beneficio que reciban es percibido como “lo justo”.

*“Para que se haga justicia tiene que haber una buena reparación, es lo que quisiéramos... De alguna forma se habrá hecho justicia, el 100% no porque nuestra familia nunca va a revivir, pero eso si de alguna forma nos aliviaría”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Para que haya justicia que nos reparara como debe ser, en algunas partes si quiera veo que en algunos sitios están pidiendo más, y a nosotros nos van a dar esa suma que parece propina, con eso no es posible educar a mis hijos”. Mujer habitante de Julcamarca.*

*“El gobierno de la República debería poner mano al pecho un pensamiento entonces sabe muy bien que yo fui afectado, sin nada me he quedado y que tanta necesidad he tenido por lo menos y hasta ahora mismo no puedo recuperar, mis hijos han quedado también sin estudiar, sin completar sus estudios por esa causa, entonces pues yo necesitaría un apoyo por lo menos”. Hombre habitante de Julcamarca.*

*“Por momento me gustaría que me trataran a través de profesionales, psicólogos, porque ese año estaba totalmente traumada, maltratada, quizá también mi esposo ha pensado mal que algo me han hecho, pero gracias a eso si no ha llegado, como dicen violaciones, no me he llegado a eso, solo me maltrataron físicamente y más allá no tuve más daño, pero si merecía yo en aquel tiempo un psicólogo, mis hijos más que nada quienes han sido afectados ese tiempo, ahora quisiera, si hay esa oportunidad de darnos de parte de nuestro Estado, sería posible y bienvenida, se agradece, se recibe. Yo me sentiría reparada si me dan una ayuda psicológica”. Mujer habitante de Julcamarca*

Algunas personas comprenden la reparación como parte de la justicia, no una reparación “restitutio in integrum”, ya que la devolución al “statu quo ante” es imposible, pero si como una contribución a su calidad de vida y a su bienestar.

*“Las autoridades deberían reclamar por los derechos de los afectados al gobierno, y el gobierno debería darnos un apoyo”. Mujer habitante de Julcamarca.*

*“Para que se hiciera justicia todo Huancavelica debería levantarse con una marcha de protesta para ir al gobierno, yo sé que cuando vayamos a la marcha de protesta nos puede atender el gobierno, Ollanta Humala”. Hombre habitante de Arcuilla.*

*“Más que nada el Estado debe darnos apoyo a la gente campesina, darnos como en Lima otra gente que tiene plata, ellos si están apoyándonos, en cambio a nosotros nada, aislados estamos, debe ser igual”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Prácticamente las autoridades para hacer seguimiento y el trámite, por lo menos el mover los derechos humanos por lo menos, debería haber por el pueblo por ser humanos. El Estado tiene el derecho de dar, de ver por el pueblo porque conformamos el Estado el pueblo general”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Que las autoridades tomen conciencia pues y nos cumplan, es lo que quiero, nosotros elegimos a nuestras autoridades y ni siquiera nos recuerdan, con nuestros votos las autoridades están arriba sentados, pero sin embargo ¿a nosotros nos reconocen algo?”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Unir todos los que han pasado esta violencia y hacer una protesta siquiera de repente así el gobierno también pueda preocuparse o puede buscar de otro país o de ONGs de donde repente puede haber apoyos, para una madre que ha pasado por eso (violación sexual) se debe preocupar pasar revisión médica, más que nada yo me preocupo como una dama (mujer)”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Fortalecer las organizaciones de afectados, si la organización de afectados a nivel nacional estaría bien fortalecida, unida, seguro exigiría al Estado, los gobiernos regionales, locales a fin de que se cumpla con ese plan de reparaciones”.* Hombre habitante de Yuracocha.

La restitución y el reconocimiento de los derechos también hacen parte de la exigencia de justicia de las víctimas. Algunos testimonios indican la importancia que los participantes le dan a las organizaciones comunitarias y los logros que podrían conseguirse a través de un trabajo colectivo.



*“Para que se hiciera justicia en primer lugar que viendo nosotros en público lo fusilen a esa persona de delincuencia que han agarrado, públicamente, que lo maten públicamente televisado, para que tengan miedo esa gente para que no regrese o no sé cómo hacer, que lo crucifiquen no sé, de esa manera yo pido que el gobierno haga eso”.* Hombre habitante de Cahua.

*“Dios debería encargarse de castigar a esas personas”.* Mujer habitante de Julcamarca.

Por su parte, dos de las cincuenta personas tiene opiniones bastante particulares acerca de los mecanismos que habría que implementar para alcanzar la justicia.

#### **5.2.4 Repetición de los hechos de violencia**

Este fue uno de los puntos más difíciles de tratar con los entrevistados, y plantear la pregunta: ¿cree usted que los hechos de violencia pueden volver a ocurrir? provocó, en la mayoría de los casos, temor e incertidumbre. Fue emocionalmente perturbador para las víctimas imaginarse en medio de un escenario de violencia y abuso nuevamente, en muchas ocasiones se bloquearon al momento de responder la pregunta y no podían asumirla como un caso hipotético, la respuesta más recurrente fue: “ya no queremos que pase”. La no repetición de los hechos es decisiva para ellos, supone la superación de las situaciones a las que fueron expuestos durante el conflicto armado y una tranquilidad emocional necesaria para su supervivencia.

En cifras, de las cincuenta personas entrevistadas, once dijeron que la violencia si podría repetirse; cinco respondieron negativamente; veintiuna personas dijeron que tal vez podría ocurrir de nuevo y trece no sabían o no respondieron. Esta última cifra indica lo que se manifestó previamente acerca de la imposibilidad de responder a la pregunta (que trece de cincuenta personas no puedan responder por el temor que les causa es algo muy grave que da cuenta de la afectación psicosocial de estas personas después de casi quince años de haber finalizado el conflicto en la región). Después de hacer la pregunta varias veces (en

algunos casos se tuvo que pasar a la siguiente debido a la imposibilidad de contestarla) los resultados son los siguientes.

*“Ay no ya no, que no vuelva, ay yo no quiero ya (no puede responder a la pregunta) desde esa fecha estoy bien traumada”*. Mujer habitante de Julcamarca.

*“Eso es lo que nosotros ya no queremos que vuelva eso lo que pasó”*. Hombre habitante de Arcuilla.

*“No, ya no queremos, ya hemos pasado esa dolencia pues, hasta hoy día ya estamos tranquilos”*. Hombre habitante de Arcuilla.

*“Me parece cuando escucho las noticias pienso también. Ahí si digo yo dejo a un lado todas mis cosas me voy con mis hijas, yo he visto con mis ojos como lo hacían, como lo mataban. Ya no quisiera que vuelva, ya no por favor, al escucharlo me da nervios y pienso que volverá, cualquier ruido estoy pensando en eso ya, total nosotros hemos quedado traumadas, pensamos solo en eso que va a volver”*. Mujer habitante de Julcamarca.

*“Como será, yo a dios ruego que no vuelva ya, que toda la gente estemos tranquila, a los hijos los han dejado traumatados, a veces hasta el estudio no pueden por estar pensando en eso los chicos, y por eso yo no quisiera, ahora hay niños que están buscando el futuro acá en Julcamarca, los niños son el futuro del pueblo, yo ya no quisiera que vuelva, ni dios que quiera”*. Mujer habitante de Julcamarca.

*“Ya no quisiera que eso pase señorita, porque yo tengo 3 niñas así mujeres, y yo no quisiera que le pase como a mí (víctima de violación sexual)”*. Mujer habitante de Julcamarca.

Mientras algunas personas piensan que la violencia si puede volver a ocurrir.

*“Yo creo que si puede regresar la violencia, porque esas personas aun siguen sueltas, esas personas siguen en Cahua, ahora me amenazan, tengo mucho miedo de que en cualquier momento puedan entrar a mi casa, que me pueda pasar algo, que me puedan hacer daño”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Creo que si puede aparecer, si están cerca los culpables puede volver a aparecer, en caso aparezca con las mismas me iría porque no soportaría mas vivir aquí”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Si, yo pienso eso, a veces con ese pensamiento no mas estoy, cualquier momento puede aparecer”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Si puede volver, ¿cómo no puede volver?”.* Hombre habitante de Cahua.

Son pocas las que piensan que no puede suceder de nuevo.

*“Bueno yo no creo, no podría ni adivinar ni decir que puede haber, puede haber pero ya de otra índole, no con esa política de los senderista que a nada bueno a conducido para nadie, no, no creo”.* Hombre habitante de Julcamarca.

La situación actual en el Perú dista mucho de la que se vivía veinte años atrás, pero desafortunadamente SL todavía tiene presencia, aunque poca en comparación con los años del conflicto armado, en algunos lugares de la zona de selva del país (específicamente en la región conocida como el VRAEM - valle del río Apurímac, Ene y Mantaro). Muchos entrevistados asocian la presencia y control que tiene SL en algunas zonas como una posible amenaza para su seguridad.

*“Podría suceder de nuevo, porque en las noticias estamos escuchando que están volviendo a aparecer de nuevo los senderistas, pero están apareciendo, la semana pasada hemos escuchado que por Lircay han entrado a un pueblecito”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Quizá pueda que vuelva, no sabemos. En otros sitios se está escuchando que está apareciendo más. Cuando regrese la violencia yo me iré de mi comunidad, donde sea, antes nos hemos sacrificado por gusto por nuestros hijos, mejor me hubiera ido lejos, a Lima por ahí, ahí hubiera estado tranquila”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Puede volver sendero, en la radio están comunicando, hay noticias de que hay pintas<sup>777</sup> por la selva, siguen existiendo”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Se escucha que todavía sigue andando sendero. Tenemos miedo cuando escuchamos las noticias de sendero. No queremos que vuelva la violencia”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“A veces cuando escucho que está apareciendo de nuevo Sendero me pongo triste, se le vienen los recuerdos de los malos momentos que ella he vivido, cuando me refugiaba de noche, me servía como habitación debajo de los árboles, debajo de las piedras, para que no me encuentre sendero. Mis hijos han quedado con miedo, con trauma han quedado, no tienen el comportamiento como una persona normal”.* Mujer habitante de Cahua.

*“No sé si volverá, o si volverá, porque hay comentario de que en otros lugares nuevamente hay rebrote”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Puede que el año que viene o de acá a 10 años, mucho están comentando que en la selva hay matanza”.* Mujer habitante de Yuracocha.

*“De repente podría ser porque se sigue escuchando en la radio, en las noticias, que siguen viviendo, que siguen saliendo, más que nada por la zona de selva”.* Hombre habitante de Arcuilla.

---

<sup>777</sup> Las pintas senderistas se refieren a escritos tipo graffitis con consignas o mensajes alusivos a sendero luminoso.

*“Ahí por las noticias, por la radio hemos escuchado que sendero aparece y con los narcotraficantes se han juntado, si puede aparecer, sigue todavía, los cabecillas siguen todavía”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Claro, de repente puede haber, nosotros no sabemos, escuchamos en las noticias, siguen y siguen en otros sitios, cuando entraban ellos también nos dijo sendero “nosotros nunca terminaremos”, y hasta ahorita en otros sitios siguen”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Tal vez podría suceder, porque con Ollanta están diciendo que puede volver a suceder”.* Mujer habitante de Julcamarca.

Algunos piensan que si el Estado no toma las medidas necesarias para prevenir la reaparición de la violencia, ésta puede ocurrir de nuevo.

*“Si no se trabajan temas de inclusión social cuando el gobierno no va a llegar así a los rincones del país, a sanar como se dice esas heridas siguen abiertas o cuando no priorizan las necesidades puede haber, por qué crees que siempre en casi todos los países siempre hay protestas”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Si están pasando por las montañas y...si no cumplen con su función, con todo lo que han prometido pueden volver...esa huella, esa herida sigue pues, sigue...la política deben de cumplir tal como prometen en la campañas electorales, deben dar solución”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Puede volver si no ponemos duramente la justicia”.* Hombre habitante de Cahua.

La esperanza que se tiene es que ese tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, en algunos casos la mejor alternativa es no pensar en ello.

*“Esperamos que no sea porque quien va a desear eso ya nuestros hijos ahora, prácticamente no merecen ese tipo de maltrato, hoy en día la educación es distinta, ya debe*

*ya los jóvenes que han hecho anteriormente por mala preparación hayan actuado, pero ahora los jóvenes deben darse cuenta y ya pensar ya otro camino*". Mujer habitante de Julcamarca.

*"Ya no pensamos en eso"*. Hombre habitante de Yuracocha.

Posteriormente se les preguntó: ¿qué debería hacerse para que la violencia no vuelva a ocurrir? formular la pregunta de una manera amplia sin determinar de quién sería la responsabilidad, se hizo con la intención de dejar que cada una de las personas expresara su opinión acerca de qué debería hacerse y quién debería hacerlo. Al ser una entrevista con preguntas guías (abiertas) las respuestas daban a su vez la posibilidad de hacer más preguntas. De esta forma, la pregunta inicial (mencionada anteriormente) fue dando cabida a otras dos preguntas que se formularon dentro del mismo contexto: ¿quién es el encargado de que la violencia no vuelva a ocurrir? y ¿cree usted que el Estado ha tomado las medidas necesarias para que los hechos no se repitan? Las preguntas en este punto se desarrollaron con el propósito de identificar si el Estado peruano está garantizando la no repetición de las violaciones de derechos humanos.

Para revisar los resultados de la pregunta ¿quién es el encargado de que los hechos violentos no sucedan de nuevo? Hay que mencionar que cuando los entrevistados hacían referencia a Estado, autoridades, presidente, gobierno, se alude a un mismo actor, al Estado. Así se obtuvo que treinta y nueve personas consideran que la responsabilidad es del Estado; cinco no saben o no responden; dos entrevistados asumen que es responsabilidad de todos; mientras una persona afirma que es responsabilidad de las autodefensas y la persona restante manifiesta que es del poder judicial. Por su parte, los resultados de la pregunta ¿cree usted que el Estado ha tomado las medidas necesarias? fueron los siguientes: veintiocho personas no sabían o no respondieron; dieciocho dijeron que no; tres personas dijeron que el Estado había tomado pocas medidas y la persona restante manifestó que si se habían tomado. A continuación se pueden apreciar los testimonios al respecto.

Sobre las acciones del Estado:

*“El gobierno no ha hecho nada todavía. Habla, habla, no va a ver, no se va a repetir, pero no ha hecho nada”*. Mujer habitante de Arcuilla.

*“Eso debe ser más que nada del presidente y después de los militares, pero los militares también hay dos caras eso es lo que más malogra, algunos de los militares con el narco también están, y con eso más que nada aparecen, puede aparecer”*. Mujer habitante de Arcuilla.

*“Nuestro presidente, el presidente, el padre de todo el país, él debe poner como padre como conviene a los hijos que son el futuro del país, ya no debe haber esas cosas, ya no debe haber esa matanza que tanto ha habido, yo quisiera señorita hacer una queja, que el presidente haga algo por los pobres”*. Mujer habitante de Julcamarca.

*“El presidente pues, nos podría proteger a todos”*. Mujer habitante de Julcamarca.

*“Simplemente yo creo que el Estado, que el gobierno, debe continuar, creo que ahora estamos en buen camino, mejorar la situación de los pobres, todo ello porque hay muchos pobres que de repente por cuestión de resentimiento se levantan, pero no quisiéramos que ocurra eso, nunca más”*. Hombre habitante de Julcamarca.

*“Chino sí estaba, con el chino hemos estado tranquilo todavía, porque si no ya nos hubiese matado”*. Mujer habitante de Julcamarca.

*“Están buscando a todos los culpables, a los senderistas, y los están metiendo a la cárcel”*  
Mujer habitante de Julcamarca.

*“Si ha tomado pero se está demorando mucho”*. Hombre habitante de Cahua.

Las opiniones sobre las acciones del Estado para garantizar la no repetición de los hechos se centra en la responsabilidad del éste y del presidente. Hubo quienes rememoraron el papel que tuvo Alberto Fujimori en la finalización del conflicto y se escucharon comentarios de agradecimiento con frecuencia. Para algunas personas hacen énfasis en la necesidad de “mejorar la situación de los pobres” para evitar el surgimiento de grupos como SL, en ellos quedó muy internalizado que la razón para que el grupo subversivo se alzara en armas fue “la lucha contra la pobreza”, y aunque en ningún momento justifican el hecho, su petición incesante va dirigida a evitar más sufrimientos.

En relación con lo que manifestaron que habría que hacer para que no se repitieran los hechos violentos, hubo dos corrientes principalmente, la que atribuyó al Estado la responsabilidad de acción y la que expresó que era la propia comunidad quienes debían hacer algo. Es interesante resaltar, que la mayoría optó por la segunda, y es que el distrito de Julcamarca y los centros poblados de Arcuilla, Cahua y Yuracocha han estado en una situación de aislamiento y desatención por parte de los organismos del Estado, lo cual hace lógico que ellos mismos asuman la responsabilidad de evitar futuros abusos.

*“El gobierno debe orientar, debe generar trabajo para todos, para que no haya delincuencia para que no haya rebrote de terrorismo, por que cuando engañan siempre va haber levantamientos”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Abrir el mercado, oportunidades de trabajo para los jóvenes más que nada, para que esa gente esté ocupada, porque cuando no estás ocupado eres una presa fácil para gente que se dedica a la violencia, a otros cosas ¿no?”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“El Estado prevendría la situación, porque la comunidad, cómo nosotros podemos prevenir, nosotros no podemos prevenir nada por nada, no cierto... él es el único que puede hacer algo pues, pa que no se vuelva a ocurrir... debe crear trabajo más que todo, por el trabajo, por esas cuestiones es que ha empezado el sendero no cierto, que hasta el momento puede haber esas situaciones... el responsable el Estado, pues el pueblo no es responsable de nada”.* Hombre habitante de Arcuilla.



*“Las autoridades tienen que buscar mecanismos, buscar estrategias, trabajar bastante en las comunidades, las autoridades locales, provinciales, regionales, nacionales, tienen que trabajar, como en la parte productiva, en salud, en educación, buscar el bienestar de la mayoría, no solamente de un grupo”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“El gobierno hará para que no suceda, ahora están agarrando, hay señores que están andando todavía, que agarren a esos señores, dónde estarán esos señores, en la selva pues, que no vuelva a ocurrir porque creo que no puedo soportar más esos tiempos como antes”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Hay mucho trabajo por hacer, con las reparaciones individuales, las reparaciones colectivas, también se tiene que terminar con ese mausoleo que ha quedado inconcluso al frente del cementerio y como que con todo eso la gente están casi perdiendo las esperanzas de las reparaciones, y que el gobierno los engañe, pienso cuando hay esas cosas puede haber rebrote de violencia también, si la gente no está conforme”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“En primer lugar, el Estado peruano por igual nos debería proporcionar, debería haber bastante trabajo en esta zona, debería haber obras de infraestructura, atención, a falta de eso nacen esas organizaciones. Debería haber un trato igual a todos, una atención de primera sobre todo a nosotros acá que somos prácticamente olvidados”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Si nos apoya el gobierno para que no vuelva la violencia, para defendernos, pero que nos reconozca siquiera con algo como campesinos”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“El Estado debería ver los problemas, una ley que pueda trazar el gobierno para que haya pacificación que no haya violencia porque sabemos muchos inocentes cuántos han muerto durante el tiempo”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“La comunidad debe organizarse, no debe permitir que eso pase, pero más que nada el gobierno central tiene que poner de su parte, no engañar al campesino más que nada, tiene que dar apoyo al campesinado, viene el apoyo a veces en el camino los concesionarios los que malogran, todo eso debe fiscalizar bien, ojala los apoyos lleguen a su destino bien”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Atención a las familias más necesitadas, buscar la justicia social. Porque todos los gobiernos de turno en el Perú, ya sean nacionales, regionales, locales, siempre se ha olvidado de los más pobres y la tendencia es a atender a los que más tienen”.* Hombre habitante de Yuracocha.

Es más que evidente que la población exige atención e inversión social por parte del Estado. El trabajo se convierte en el reclamo más repetido, otros asuntos como infraestructura en salud, educación y acciones encaminadas al bienestar social, son algunos de los que abarca la lista de peticiones de las víctimas. Adicionalmente, hay algunos que consideran las reparaciones como necesarias para garantizar la no repetición de los hechos.

Las responsabilidades también son atribuidas a la acción de la propia comunidad, en este punto se evidencia la importancia que tiene la estructura comunitaria en estas poblaciones.

*“Debemos organizarnos, cada comunidad debemos organizarnos, pero de todas maneras cuando aparece nuevamente nos puede vencer. La gente está despoblando, ya estamos poca gente”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Debemos organizarnos más en el pueblo. Sendero se ha aprovechado, antes no éramos tan organizados por eso se aprovechó Sendero, han engañado a mucha gente”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Los ronderos deben organizarse, solo así puede defenderse”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Tendríamos que ser unidos la gente también porque antes no era así pues cada uno por su lado estábamos y ahí apareció no podíamos como defender, ahora sería más organizada la gente, yo sé que no aparecería así como antes”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“La comunidad organizarnos también y creo que deberían conocer todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido también, las nuevas generaciones para que ellos también analicen que de bueno y que de feo han dejado. Hacer también de repente un análisis, como en muchos casos se hace estadísticamente, sea lo feo o lo bonito y sea en función a eso analizar también porque muchos jóvenes ya esas fechas no existían, han nacido han crecido, ellos no conocen todo lo que hemos vivido”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Debemos estar organizados la comunidad, deben saber los niños que vienen, deben estar informados más que nada”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Hay que educar a los jóvenes, hay que orientarle que esas cosas no debería ser, nuestro país todavía no está para eso”.* Mujer habitante de Julcamarca

*“Organizándose puede colaborar la comunidad... deben si ven algo, algo pasa, deben venir a avisar aquí, aquí a Julcamarca”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Cada uno de nosotros es responsable pues, claro porque no permitamos que ocurra eso, organizadamente, y nadie está de acuerdo, porque una población organizada difícil va a permitir que ocurra eso”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Debemos estar siempre en contacto, en comunicación con las autoridades. Debemos apoyarnos a nuestras autoridades, porque todos queremos vivir tranquilos y en paz”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Todo el pueblo peruano tenemos que estar organizados, muchas veces por acá por parte de la selva hay todavía enfrentamiento, ataques, principalmente en la selva todavía existen*

*esas cosas, más que en la sierra. También el Estado tiene el derecho de protegernos a nosotros, todos los seres humanos”.* Hombre habitante de Yuracocha.

*“Hay que hacer levantamiento, hay que ir a donde el presidente para que eso no se vuelva a repetir, tiene que haber una recompensa individual (reparación)”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“La comunidad deberíamos organizarnos bien, conocer bien nuestros derechos, nuestros deberes para poder vivir bien en armonía y en paz”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“La comunidad debe organizarse entre vecinos, pueblos, también puede venir el gobierno para capacitar pues a todas las comunidades para que puedan cambiar y que no piensen que vuelva el terrorismo, que no vuelvan esos engaños”.* Hombre habitante de Cahua.

*“La comunidad debe participar en reuniones, debe pedir, debe opinar, debe reclamar sus derechos que no haya esa violencia”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“La población no está bien organizada, tiene que nuevamente fortalecer el liderazgo de las familias a fin de organizarse y así salir adelante. Porque si no hay liderazgo, la comunidad no va a poder surgir, así haya apoyo del gobierno, necesita fortalecer las capacidades humanas”.* Hombre habitante de Yuracocha.

La comunidad se reconoce como agente de cambio, establecen que la organización es fundamental para lograr sus objetivos. El organizarse para “defenderse” parecería la aceptación y resignación que del Estado no se puede esperar algo. Algunas personas hacen énfasis en el papel que pueden jugar las nuevas generaciones en el proceso instando a su educación y a hacerlos partícipes de la historia de la comunidad. Asimismo, el fortalecimiento de habilidades en liderazgo y el reclamo de herramientas por parte del Estado para enfrentar su desarrollo hicieron parte de los testimonios.

### 5.2.5 Acciones de memoria

El último punto de las entrevistas hace referencia a las acciones de memoria, es decir acciones como fechas de conmemoración, monumentos, cambio de nombres de calles u otras destinadas al desarrollo de la memoria colectiva, que podrían categorizarse dentro de las llamadas reparaciones simbólicas. A la pregunta ¿se han realizado acciones de memoria en su comunidad?<sup>778</sup> Treinta y dos personas contestaron que no; dieciséis se refirieron a un monumento en Julcamarca que quedó inconcluso; una persona dijo que sí (una fecha de conmemoración) y otra persona no supo que responder. En cuanto a la opinión sobre si ¿se debería recordar los hechos violentos que sucedieron? La gran mayoría, cuarenta y tres, expresaron que sí, mientras solo siete personas manifestaron que no. Igualmente se planteó la pregunta ¿cree que es importante recordar? ¿Por qué? A continuación se presentan algunas de las respuestas de si se ha realizado alguna acción de memoria.

*“Anteriormente en la gestión del padre Salvador quien ha sido presidente del gobierno regional de Huancavelica, bueno durante eso años él ha sacado una ordenanza donde se conmemore a las víctimas de la violencia política el 1 de noviembre pero después como que también lo dejamos, ya no se hace ya, no hay otra institución, a veces siempre ya tiene que haber alguien que motive, entonces ahí como que lo hemos dejado y no hay fechas donde nosotros recordamos”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“No, nadie se acuerda, nadie hace nada”.* Mujer habitante de Arcuilla.

*“Acá en Julcamarca no”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“En la comunidad eso nosotros íbamos a hacerlo porque queríamos nosotros realmente en qué año fue desaparecido todas las personas, cómo fue no cierto, por qué, entonces íbamos a hablar pero no se ha podido porque a veces acordarles esos tiempos, muchos no, que*

---

<sup>778</sup> Cabe aclarar que esta pregunta, como algunas tras, no fue formulada textualmente, hubo que contextualizarla y explicarla de manera más amplia para que pudiera ser respondida por las personas entrevistadas.

*hemos visto realmente como se pasaban las cosas por esa causa es que no lo hemos hecho...a veces algunos no recordar por decir contar no, a veces yo digo, yo si le he visto ejecutada a la persona, así estaba, entonces otros ya no, algunos a veces por esas causas ya han quedado mal del cerebro".* Hombre habitante de Arcuilla.

*"Aquí nosotros en la comunidad, algunas autoridades que nosotros queríamos recordar las cosas, pero después decimos también, para qué recordarlo, ya pasó hace más de 20 años, mas no cierto, acordarnos, qué vamos a hacer, nada".* Hombre habitante de Arcuilla.

*"Los familiares hacen sus misas por su propia cuenta".* Hombre habitante de Arcuilla.

*"No tenemos absolutamente nada para recordar a las víctimas, creo que, me dijeron que habían designado en la gestión del alcalde anterior y no sé que habrá pasado, no han culminado, estaban construyendo algo cerca del cementerio, pero está inconcluso".* Hombre, habitante de Julcamarca.

*"Si, pueden hacer, porque estaban haciendo algo en el panteón, pero nos zafaron así no mas, no han terminado, dijeron que iban a hacerlo para todos los afectados, los que fallecieron, sus nombres, todo, pero hasta ahorita no".* Mujer habitante de Julcamarca.

*"Hay un monumento que han construido, que han hecho aquí en el cementerio, como un monumento que han hecho para recordar a la víctimas de la violencia pero no lo han terminado, yo no sé por qué motivo, no habrá habido dinero, se perdió, como le digo muchas veces llega acá y poco a poco se desaparece y muchas veces nunca se ejecuta lo que se quiere hacer".* Hombre habitante de Julcamarca.

*"En Julcamarca tengo que decir lo mismo, se inicio con tanta exigencia, teniendo en cuenta que el dinero sale de CMAN, no es del gobierno de regional, solamente los gobiernos regionales ejecutaban, pero para mi mala suerte de repente entraron en convenio con el alcalde, que nada absolutamente lo hicieron, tanta exigencia lo comenzaron a construir es Julcamarca está en la puerta del cementerio, quedo tal cual los*

*ingenieros... vinieron hasta tres ingenieros, saque algunos materiales que no estaban presupuestado de la tienda, tuve que pagarlos yo, con mi dinero, 300 soles, 298 para ser más exacto, los peones que trabajaron vinieron de diferentes lugares, maestros de obra, no fueron pagados con un solo sol, recuerdo que el año pasado, ante año pasado, en diciembre la gente quería llevar a su casa aun que sea un panetón para su familia, no tuvieron ni un solo sol, indignan estas cosas, pero a veces uno se siente impotente, cuando hago la denuncia en defensoría del pueblo, en la fiscalía, en la CMAN, repetidas veces en la CMAN, entonces ¿qué podemos hacer? Nos sentimos tan impotentes, desaparecieron los materiales, desaparecieron las herramientas, herramientas prestadas por el municipio porque jamás compramos una sola herramienta, yo también preste herramientas, desaparecieron sencillamente, o los peones que fueron impagos se quedaron con las herramientas que trabajaban y obviamente no lo devuelven ¿no?, pero da pena hablar de esto”. Hombre habitante de Julcamarca.*

*“No hay ningún monumento, porque aquí en Julcamarca estaban construyendo al lado del cementerio, pero en realidad no han terminado, nosotros hemos dicho para todos los anexos de Julcamarca para hacer algo como un recuerdo, grabar todas las fotografías con los nombres de los que han desaparecido, torturados, pero hasta ahorita lamentablemente no cumplen, solamente han hecho un murito no más”. Hombre habitante de Arcuilla.*

*“Justo estaban construyendo hace poco un monumento pero no han acabado, no han terminado por falta de dinero, no ha habido apoyo, así hemos quedado. Nosotros hemos dicho que por lo menos haya un día para reconocer para recordar a la gente que han caído en ese tiempo, pero no todavía”. Mujer habitante de Julcamarca.*

Las personas manifiestan que no hay algo con qué recordar a los que ya no están, la mayoría hace referencia al monumento que se inició a construir pero que por falta de recursos no se terminó. En una entrevista realizada al alcalde actual del distrito de Julcamarca se le cuestionó sobre este asunto, pero manifestó que había ocurrido en una administración anterior y que: “en principio, yo desconozco y el presupuesto que ellos han manejado no sé cómo lo han manejado, quién lo ha manejado y por qué no han concluido el

mausoleo, entonces por lo mismo yo no he visto la gestión anterior tampoco no he puesto ni una piedra, ni un ladrillo, entonces yo no sé dónde está el documento, los planos, toda la infraestructura si se quiere y si nosotros queremos conseguirlo. Entonces no tengo ni una base legal ni técnica para proseguir y tampoco tengo un documento oficial de los interesados en este caso, no tengo ningún documento por lo mismo para poder solicitar, para programar de los pocos recursos que tengo para poder de repente concluir”. Es común el malestar porque no se ha terminado el mausoleo y el interrogante sobre el destino de los recursos adjudicados para esto.

Finalmente, en cuanto a la importancia de recordar los hechos sucedidos las respuestas fueron las siguientes:

*“Yo creo que sí, claro, duele recordar pero también es bueno recordar, tener así fechas históricas, solo de esa manera, para que los que vienen atrás ellos sepan o las autoridades que no saben también se enteren por lo menos que es lo que ha pasado, quiénes son los fallecidos, quiénes son los que han desaparecido o qué es lo que ha pasado en tal pueblo, en tal comunidad, porque si no también va a quedar opacado”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Tener un monumento eso sería un milagro, un recuerdo, cuando vamos al cementerio, siempre vamos a leer, vamos a recordarnos lo que ha pasado, por lo menos ahora vienen los niños que están atrás, vienen ellos y van a mirar cómo han sucedido las cosas que han pasado, a lo menos eso, pero si no hay monumento, si no hay esa grabación, con qué los niños que están viniendo atrás con qué se van a recordarse, para eso deberían cumplir con ese monumento, es un recuerdo que debería de haber, es un milagro para nosotros, siempre y cuando vienen las visitas para que vean eso sería bueno, pero hasta ahorita no cumplen con eso”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Se debe recordar a tantos fallecidos porque en ese entonces no había respeto ni a mujeres ni a niños, esa gente en esa fecha no respetaba, cortaban el cuello como a perros, golpeaban”.* Mujer habitante de Cahua.



*“Si, para recordar a toda la gente, siquiera de esa manera algunas personas se habrían olvidado pero siquiera de esa manera podemos recordar como ha pasado, de nuestros seres queridos, siquiera un rato estaríamos con ellos”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Es importante recordar porque es nuestra familia, entonces a veces en el caso que de mí él estaría vivo, estaríamos juntos, pero ahora no sabemos dónde estará, como estará, esa vez si estaría vivo estaríamos juntos, pero él como no está nada, tenemos que recordar, eso es lo principal, queremos tener un año, un día de recuerdo que vamos a tener que ellos han estado existiendo, no nos olvidamos, tanto para nuestros hijos, acá esta muerto tu papa, acá está enterrado tu papá”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Sería bueno es la parte más principal, así en el parque o en un cerro, un lugar donde se puede hacer un monumento, identificar todos sus nombres de los afectados, porque pobrecitos también en qué sentido murieron, es importante porque es por salvar a los demás, han luchado ellos, ya hasta llegar a la muerte, para recordar, la familia, los hijos, los nietos”.* Mujer habitante de Julcamarca.

Muchas personas fueron conscientes de la necesidad de transmitir la historia a las nuevas generaciones para que no vuelva a ocurrir.

*“Para que no se vuelva a repetir así como dicen, para que no vuelva a repetir de repente por eso, para que de eso aprendamos justamente las personas”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Eso sería bonito, recordar. Hasta un día que habían matado... esa fecha creo que tenía seis años o cinco años, la primera vez que he visto que han entrado del cerro, bastante gente y ahí si mi mamá no me ha traído, me dejó en la casa, y ahí habían matado a varios acá en la plaza. Eso es lo que me han contado, entre niños nos contaban, le habían matado con soga, creo que le habían amarrado. Eso sería un día que siquiera por año recordemos*

*eso... Recordar todas esas cosas sería importante para que no vuelva hacerse*". Mujer habitante de Julcamarca.

*"Considero que sí, porque puede ser una manera para que nuestros niños, jóvenes, no supieron nada, no saben hasta hoy quizá, ellos también se involucren, que sepan cual es la verdadera historia, la historia continua, pero que sepan lo que sucedió, y que quizá así podamos evitar que vuelva a suceder hechos de esta naturaleza*". Hombre habitante de Julcamarca.

*"Hay que hacer un recordatorio porque si no es así, cuando pasan los años los días pasan ya se olvida, entonces cuando ya se ubiquen quién ha muerto, por qué, entonces la nueva generación también mira ah no hay que ser así, ya piensan ellos en otra mentalidad, ya no esa terrorista*". Hombre habitante de Cahua.

Otros piensan que se debe recordar a los que ya no están para hacerles un homenaje

*"Bueno pues, ellos están como si se estarían yendo a una guerra, algo por ahí similar han desaparecido... ellos han sido comuneros que han trabajado por la comunidad, siempre se han sacrificado, bueno sería bueno recordar*". Mujer habitante de Arcuilla.

*"Es importante recordar, para que sea conocido por las nuevas generaciones*". Mujer habitante de Arcuilla.

*"Debe ser importante para recordar que mes que fecha ha fallecido, porque hasta ellos mismos ya se han olvidado, si hacen ese festejo se recordarían como un cumpleaños de los fallecidos, de los desaparecidos. Los que vienen de otras generaciones también pueden ver, también pueden enterarse de la fecha de desaparición de esas personas, de los fallecidos*". Mujer habitante de Arcuilla.

*"Si dice, debe haber un reconocimiento a los seres humanos, que hace falta. Debe haber un reconocimiento*". Mujer habitante de Cahua.

*“Si es importante, son personas como nosotros tienen derecho de recordarlos”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Como héroes han muerto nuestros hermanos, puede ser una fecha para celebrar héroes, nuestros vecinos, nuestros hermanos”.* Hombre habitante de Julcamarca.

Algunos vieron en el recuerdo la posibilidad de llenar vacíos espirituales:

*“Para mí sería muy importante que se haga un monumento para tener un lugar donde rezar a nuestros muertos”.* Mujer habitante de Julcamarca.

*“Claro ahí iríamos uniéndonos, podríamos visitar y podríamos hacer su misa, porque si no hay nada no se puede, solamente yo hago su misa en las iglesias así no más”.* Mujer habitante de Arcuilla.

Pero también están los que no quieren recordar

*“Ya no quiero escuchar, no quiero monumentos, porque tengo mucho miedo”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Ya nos hemos olvidado, o ya nos estamos olvidando”.* Mujer habitante de Cahua.

*“Ya no creo, para que estar recordando, es mejor ya olvidarlo todo, a veces te hace recordar y te sientes mal, ya no debe haber nada ya. Olvidar simplemente, un buen nicho para nuestros padres y punto, sino nos hace recordar mucho la tristeza”.* Hombre habitante de Julcamarca.

*“Traumada he quedado ya, asustada, bastante gente ha matado los terroristas, no tenemos ganas”.* Mujer habitante de Cahua.

*“No se debería hacer cosas para recordar, si hay un monumento o un recordatorio, todavía esas épocas que se han vivido vamos a seguir transmitiendo a los que vienen después de nosotros también, van a tener ideas, pensamiento de que se ha vivido así”.* Hombre habitante de Arcuilla.

*“Pero a veces dicen que lo estamos haciendo los monumentos con plata de los afectados, al final de cuentas en qué sirve a los afectados ese monumento que van a hacer, nosotros no nos conviene que haya ese monumento, esas cosas”.* Hombre habitante de Julcamarca.

Finalmente, la gran mayoría afirmó que es bueno recordar, entre las razones manifestaban que es importante para recordar y tenerlo presente; para que las nuevas generaciones conozcan la historia y así no la repitan; para tener un lugar donde ir a rezarle a los muertos y para hacerles un homenaje por el valor que tuvieron durante el conflicto. Fueron pocos los que no querían recordar los hechos, argumentaron que esto resultaría doloroso, que tenían miedo, que era mejor olvidar las cosas. Y es lógico que el dolor no cese, si no ha habido un acompañamiento psicosocial que permita la elaboración del duelo.

#### ***6. El caso del Perú: un proceso de reparación difuso en el marco de una transición a medias***

Luego de haber leído y haber tenido un acercamiento a la percepción que tienen víctimas sobre el conflicto armado y la significación de las reparaciones para ellas, se seguirá con una reflexión sobre el proceso de reparación en el Perú dentro del marco de una sociedad post-transicional.

El conflicto armado interno en el Perú dejó secuelas muy profundas. La magnitud del conflicto acentuó la pobreza y la desigualdad, destruyó el débil sistema democrático,

agravó la discriminación y la exclusión, debilitó las redes sociales y propició una cultura del miedo y la desconfianza.<sup>779</sup>

Aunque la subversión no está entre los temas que preocupan al peruano promedio, es evidente que las secuelas de dos décadas de conflicto entre el Estado y movimientos como Sendero Luminoso y el MRTA son visibles en el Perú. “Las heridas dejadas en unos y otros distan mucho de haber sanado y los fantasmas creados por los años de violencia aún asustan”.<sup>780</sup>

Si bien los mayores logros de la justicia transicional se obtuvieron entre el 2000 y el 2003, la lucha por la rendición de cuentas continúa. Cuando los líderes políticos calculan que ganan más fortaleciendo las bases de una gobernabilidad efectiva y respetando las decisiones de las cortes en su tarea de aplicar la ley a todos sus ciudadanos, que protegiendo las fuerzas armadas del proceso de rendición de cuentas, la justicia transicional se convierte en realidad.<sup>781</sup> Desafortunadamente en el Perú no hay un debate sobre el proceso transicional, sobre las reformas institucionales necesarias para fortalecer el Estado de derecho, no hay un interés por conocer la verdad, no se ha dado un fortalecimiento de las instituciones judiciales y la poca atención que obtiene el sufrimiento de miles de familias víctimas del conflicto, es una triste comprobación de que una parte del país no ha aprendido aun a reconocer a la otra parte.<sup>782</sup>

A doce años de la finalización del conflicto armado, el gran peligro que hay es: “el rápido desprestigio de la democracia en una nación que históricamente ha estado más acostumbrada a regímenes de facto que a democracias, y que ha tratado de ver la solución a los inacabables problemas que tiene en las actitudes decisivas y decisorias, y generalmente,

---

<sup>779</sup> COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, cit., p.462.

<sup>780</sup> G. PEÑAFLOR, “Análisis del impacto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” en COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS et al. (ed.), *Informe Memoria y Justicia para la Inclusión*, cit., p.85.

<sup>781</sup> R. ROOT, “Through the window of opportunity: the transitional justice network in Peru”, cit., p.456.

<sup>782</sup> N. HENRÍQUEZ, *Cuestiones de género y poder en el conflicto armado en el Perú*, cit., p.144.

siempre falaces del caudillo del momento”.<sup>783</sup> Es preocupante además que en el Perú puedan aparecer en cualquier momento obstáculos que debilitan el proceso de rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad como la reciente Sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema<sup>784</sup> en la cual los jueces han incurrido en faltas graves al administrar justicia sobre la consideración del carácter de lesa humanidad, la rebaja de las penas al destacamento Colina, el cambio de la teoría mediata a la teoría de la coautoría de responsabilidad penal y la formación de los votos en la sentencia.<sup>785</sup> Con esta sentencia, no solamente podría ponerse en libertad a algunos miembros del grupo Colina, sino que además de contradecir Sentencias del la Corte IDH, del propio Tribunal Constitucional del Perú, transgrede el debido proceso.

Por esto, el compromiso con la justicia transicional significa enfrentar una serie de resistencias muy poderosas en el Perú: el rencor y la hostilidad de grupos de interés social y político muy influyentes, la apatía de las autoridades gubernamentales, inclusive la indiferencia de un sector de la población, seducido por los afanes del día a día o probablemente sumido en un desencanto político muy fuerte.<sup>786</sup> Lastimosamente, de lo que muchos peruanos no se han dado cuenta es lo mucho que está en juego con el Plan Integral de Reparaciones: “está en juego, nada menos, la posibilidad de que millares de personas reconstruyan sus vidas, así como la futura confianza de esas personas y sus allegados en las promesas de la democracia”.<sup>787</sup>

---

<sup>783</sup> G. GORRITI. Entrevista, cit.

<sup>784</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL PERÚ, Recusación No.4104-2010, Lima, 13 de junio de 2012.

<sup>785</sup> C. SILVA, “Por la destitución: familiares de víctimas de Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri presentan cargos contra la sala Villa Stein”, Informando Justicia, Boletín electrónico semanal, Justicia Viva, núm. 377, agosto 2012. Disponible en: <http://justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=871>

<sup>786</sup> G. GAMIO, *Tiempo de memoria. Reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional*, cit., p.109.

<sup>787</sup> S. LERNER, “Justicia y reparación para las víctimas de la violencia política”, cit., p.55.

## ***7. Una mirada al Plan Integral de reparaciones: la falta de voluntad política, la incapacidad estatal y los distintos mensajes enviados por el Estado***

En cuanto al diseño del PIR, muchas personas consideran que es teóricamente correcto. Sofía Macher, comisionada de la CVR, plantea que la propuesta y el diseño del PIR son académicamente buenos, “estos cubren una serie de aspectos que fueron afectados durante el conflicto como la parte económica, la salud, la educación, entre otros, pero el problema de la propuesta, el gran error fue partir de la existencia de una institucionalidad estatal que iba a ser capaz de implementar un plan integral”.<sup>788</sup> En la misma línea, Julie Guillerot, experta en el tema de género y reparaciones y parte del equipo de trabajo de la CVR, hace énfasis en que la recomendación que hizo la Comisión para un plan integral de reparaciones “en teoría es espectacular, pero es espectacular en un país que funcione, en un país con recursos, en un país con correlación de fuerzas políticas que favorecería estrategias de lucha contra la impunidad, de verdad, de reparación, esta propuesta fue muy principista y no tomó demasiado en cuenta la realidad política y estructural del país.”<sup>789</sup>

Por su parte, entre otras de las críticas que se le hacen al PIR es que no se tuvieron en cuenta las experiencias locales y los planes regionales que ya se encontraban en marcha; que no se dio un enfoque de género e interculturalidad de manera adecuada, especialmente teniendo en cuenta que hay un 83% de mujeres víctimas de violación sexual, precisamente las más excluidas y las más pobres; igualmente, no se incluyó a los pueblos indígenas, que fueron muy afectados por el conflicto armado interno; además está pendiente la reparación integral a las personas en situación de desplazamiento por la violencia, ellos también deben ser incorporados en las reparaciones colectivas.<sup>790</sup>

---

<sup>788</sup> S. MACHER. Entrevista realizada el 20 de abril de 2012 en la ciudad de Lima.

<sup>789</sup> J. GUILLEROT. Entrevista, cit.

<sup>790</sup> D. CAQUI, “Una ofrenda por la memoria y la justicia”, *Revista Páginas*, Centro de Estudios y Publicaciones, vol.32, núm.207, octubre, 2007, p.59.

En este sentido, es fundamental combinar un análisis del contexto socio-político con una mirada crítica del marco conceptual en el que se basan las reparaciones a las víctimas.<sup>791</sup> Si bien en el Perú el marco normativo necesario para que las políticas de reparaciones y las instituciones para su implementación se han establecido, el proceso de las reparaciones en si ha sido lento. Factores como la capacidad institucional existente y la voluntad política son claves para que un plan de reparaciones sea posible en la práctica. Y en este caso, “desde el Estado se aprecia un trabajo segmentado que no responde a una lógica nacional, sino más bien hay mucho desorden y no claridad sobre el papel del Estado de reparar a las víctimas y sus familiares como un deber y un derecho ganado por las mismas.”<sup>792</sup> Es claro entonces, que el Estado peruano tiene un problema estructural, no solo de infraestructura para ofrecer los servicios que requieren las víctimas, sino que también es urgente que den reformas institucionales para que el Estado pueda responder de mejor manera a sus obligaciones jurídico-políticas.

Es aquí donde surge el dilema de la voluntad política y el papel fundamental que ejerce ésta al momento de reparar a las víctimas. De acuerdo con Javier Torres, ex-asesor del Consejo de Reparaciones, “lo único que diferencia una reparación de cualquier otra acción del Estado es el gesto, el ritual. Es un gesto además que es considerado reparación si el que recibe la reparación lo percibe como tal, es decir, es una operación psicológica imposible en los términos de racionalidad burocrática de un Estado.”<sup>793</sup> Pero, ¿sería solo esa “racionalidad burocrática” lo que podría definir la voluntad política dentro de un proceso de reparaciones?

En el Perú, “las reparaciones como tal no han sido vistas de una forma integral por lo menos concurrentes en el tiempo y no ha habido forma de solucionarlo, siempre se ha dicho que es necesario hacerlo pero no ha habido la voluntad de implementarlas. Sabemos también que es muy complicado, costoso, difícil de hacerlo, pero no ha habido siquiera a

---

<sup>791</sup>J. GARCÍA-GODOS, “Victim reparations in the Peruvian truth commission and the challenge of historical interpretation”, cit., p.64.

<sup>792</sup>COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Informe anual 2009 – 2010, cit., p.125.

<sup>793</sup>J. TORRES. Entrevista, cit.



nivel de diseño una propuesta para hacerlo”.<sup>794</sup> Y una de las formas más claras de manifestar esa poca voluntad política, es la cuestión de la prioridad para asignar el presupuesto. Como lo asegura De Greiff, inclusive en los países pobres es posible movilizar algunos fondos a favor de las reparaciones, pero esto debe llegar a través de una lucha política y no a través de la aplicación “automática” de un criterio legal.<sup>795</sup> A pesar de la incansable insistencia de unas víctimas casi-invisibles o in-significantes para el Estado, ha sido imposible que el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas asignen una cantidad suficiente de dinero para lograr implementar un plan “integral” de reparaciones tal como se encuentra diseñado.<sup>796</sup>

Sí, ha habido algunas intenciones, pero son solo eso. “Se ha avanzado en dos programas, pero mucha gente no está muy contenta con esos programas y de los otros falta todavía hacer algo que pudiéramos haber hecho, por lo menos, a nivel de diseño hace ya varios años”.<sup>797</sup> El PIR “está diseñado para que sea integral, para que sean programas complementarios, entonces solamente se está implementando uno, el Programa de Reparaciones colectivas. Le empezamos a hacer seguimiento y la gente lo confundía y todavía lo confunde con cualquier programa social porque se trata de obras de infraestructura básica que en realidad es una labor del Estado, nos dimos cuenta que se estaba perdiendo ese componente simbólico que debe estar presente en todo acto de reparación, esa combinación material e inmaterial que debe tener cualquier actividad de reparación”.<sup>798</sup> Adicionalmente, “se ha creado un Vice-ministerio de Derechos Humanos, pero no hay mucho dinero para implementarlo. Se afirma que se han aumentado los fondos para las reparaciones, pero la cosa va muy lenta y creo que este gobierno ha entendido la inclusión social y los derechos humanos absueltos a través de los programas de asistencia, lo cual es una equivocación muy grande”.<sup>799</sup>

---

<sup>794</sup>G. HUERTA. Entrevista, cit.

<sup>795</sup>P.DE GREIFF, “The role of reparations in transition to democracy”, cit., p.7.

<sup>796</sup> A esto se le suma la espera de las víctimas de más de un año para que el injusto Decreto Supremo 051 sea modificado.

<sup>797</sup>G. HUERTA. Entrevista, cit.

<sup>798</sup>S. PAREDES. Entrevista cit.

<sup>799</sup>S. LERNER. Entrevista, cit.

Por esto, un acercamiento a las reparaciones basado en derechos fortalece la reivindicación de las víctimas, debido especialmente a las inestables condiciones políticas y económicas de un país como Perú. Enmarcar las reparaciones como derecho, no deja a éstas a discreción del Estado para ubicarla como una más entre sus necesidades sociales y como una pequeña parte en la repartición, en condiciones de escasez, de la torta. Si las reparaciones se dejan en el ámbito moral, continúan siendo una prerrogativa del Estado; pero si se establecen en términos de derechos, las víctimas tendrán más poder para exigirle al Estado su cumplimiento.<sup>800</sup>

A la falta de voluntad política se le suma el hecho de que el Estado envíe diferentes tipos de mensajes de “reparación”. El objetivo de la CVR en su plan de reparaciones fue homogenizar el universo de víctimas, de esta forma se consideran todas igualmente valiosas para su atención con base en lo que han sufrido.<sup>801</sup> Pero en el Perú, las reparaciones han generado mucha controversia y esto puede tener efectos que dividen a las comunidades. No es inusual escuchar acusaciones de manipulaciones políticas y la creencia que las reparaciones han sido entregadas solamente a ciertas familias influyentes urbanas.<sup>802</sup>

Un aspecto que habitualmente es fuente de conflictos es la relación de los casos ante el Sistema Interamericano y el resto de las violaciones. Si bien las sentencias o acuerdos inciden en garantizar la no repetición de los hechos, lo cual supone una contribución a la defensa de los derechos humanos, la ausencia de políticas de reparación, o estándares visiblemente menores cuando hay programas de reparación, suponen diferencias importantes entre situaciones similares.<sup>803</sup> Por ejemplo, por cada caso que tiene un resultado positivo en la Corte IDH, hay cientos de individuos que reclaman que ni siquiera

---

<sup>800</sup> L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.246.

<sup>801</sup> J. GARCÍA-GODOS, “Victim reparations in the Peruvian truth commission and the challenge of historical interpretation”, cit., p.81.

<sup>802</sup> C. DUGGAN et al, “Reparations for sexual and reproductive violence: prospects for achieving gender justice in Guatemala and Peru”, cit., p.210.

<sup>803</sup> C. BERISTAIN, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, cit., p. 177.

han sido registrados o reconocidos.<sup>804</sup> Es esta tipo de expectativas que pueden condenar a un programa de reparaciones al fracaso, porque comparado con los USD 100.000 aproximadamente que se paga por cada caso, los participantes de un programa masivo de reparaciones, quienes probablemente puedan recibir entre USD 5.000 y 10.000,<sup>805</sup> se sentirán, en las mejores circunstancias, terriblemente engañados.<sup>806</sup> “En derecho internacional existe la tensión entre las leyes nacionales de reparación y las ordenes de reparación de la Corte Interamericana y que no guardan ninguna relación. Si nosotros pudiéramos implementar la reparación de 120.000 dólares para todas las víctimas, simplemente no habría dinero para pagarles, entonces ¿cómo puede ser que la Corte esté divorciada de las situaciones y realidades de los Estados nacionales y su capacidad de reparar a miles de víctimas?”<sup>807</sup> Este es un dilema muy complejo que debería ser discutido.

Y es que Perú “cumple con las indemnizaciones, sí se ha pagado en el caso de Neira Alegría, en el caso Barrios Altos, en el caso La Cantuta, incluso en el caso Loaiza Tamayo se han pagado las indemnizaciones pecuniarias, pero con lo que no se cumple es con las reparaciones de carácter simbólico, con aquellas que van a significar la asunción de responsabilidad internacional del Estado y luego por la vía de la satisfacción, de reconocer que hubo una violación y que se implementen las medidas para que no vuelvan a cometerse los mismo hechos, es decir las garantías de no repetición.”<sup>808</sup> Entonces ¿cuál es el mensaje que le está enviando el Estado a las miles de víctimas del conflicto armado?

En el ámbito nacional el Estado también ha entregado mensajes difusos en cuanto a la reparación de las víctimas del conflicto armado. A finales de 1998 durante el gobierno de Fujimori se promulgó el Decreto Supremo 068 DE/SG que establece en su artículo 2 “resarcir a los miembros de los Comités de Autodefensa, que hayan perdido o sufrido daños en sus bienes como consecuencia del apoyo a las fuerzas del orden en su lucha contra la

---

<sup>804</sup> J. GARCÍA-GODOS, “Victim reparations in the Peruvian truth commission and the challenge of historical interpretation”, *cit.*, p.66.

<sup>805</sup> En el programa de reparaciones económicas en el Perú, como se mencionaba anteriormente, se están entregando 3.100 euros aproximadamente, los cuales tienen que ser dividido entre los hermanos y los padres o hijos de las víctimas directas, como en el caso de los desaparecidos.

<sup>806</sup> P.DE GREIFF, “The role of reparations in transition to democracy”, *cit.*, p.5.

<sup>807</sup> S. MACHER. Entrevista, *cit.*

<sup>808</sup> L. IBÁÑEZ. Entrevista, *cit.*

subversión”.<sup>809</sup> A este grupo de víctimas se les entregó 33.000 soles, que como precedente de las reparaciones actuales marcan una gran diferencia con respecto al monto. Queda claro que hay diferencias entre distintos tipos de beneficios para diferentes grupos de ciudadanos. Por ejemplo, los miembros de las fuerzas armadas, policía y servicio civil tienen sus propios programas de compensaciones, mucho más generosos que los de los Comités de Autodefensa.<sup>810</sup> Por lo tanto, ¿En qué lugar quedan las reparaciones económicas que se les están entregando a los campesinos quechuahablantes?

## **8. Las víctimas**

Las víctimas son conscientes que “la reparación es un derecho por el daño causado, y no es el precio de nuestro dolor, mucho menos el precio por la muerte, el encarcelamiento injusto o la desaparición de nuestros seres queridos”.<sup>811</sup> Luego de veinte años, a pesar del cansancio siguen luchando. Después de cinco años de haberse iniciado la implementación del PIR “nuestra sensación es que si bien ha habido avances, han sido menores que lo que se hubiera podido hacer y mucho menos aun en relación con las expectativas de las víctimas y sus organizaciones.”<sup>812</sup>

La investigación empírica ha demostrado que después de las atrocidades masivas, una gran mayoría de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos están mucho más preocupadas por sus necesidades inmediatas que por el procesamiento judicial de los perpetradores de esas violaciones. La justicia debe estar enfocada hacia las víctimas, se deben tener en cuenta los intereses y preocupaciones expresados por ellas acerca de los asuntos fundamentales para su bienestar, logrando de esta manera poder compensarlas y

---

<sup>809</sup> PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, *Decreto Supremo N° 068-DE-SG, Fijan montos de indemnización establecida en el Reglamento de Organización y Funciones de los Comités de Autodefensa*, Lima, 23 de diciembre de 1998.

<sup>810</sup> J. GARCÍA-GODOS, “Victim reparations in the Peruvian truth commission and the challenge of historical interpretation”, cit., p.71.

<sup>811</sup> D. CAQUI, “Una ofrenda por la memoria y la justicia”, *Revista Páginas*, cit., p.59.

<sup>812</sup> G. HUERTA, “Reparaciones: que no esperen sentados”, *Revista Ideele*, núm. 199, julio 2010. Disponible en: <http://www.revistaideele.com/archivo/node/725>

mejorar su vida.<sup>813</sup> La preferencia por un enfoque basado en las necesidades, indica que en la práctica la consideración del impacto de la justicia en la vida de las víctimas es fundamental.<sup>814</sup>

Lamentablemente, la realidad en el Perú es que el conjunto de las víctimas es “una población que no tiene ni voz ni voto en esta sociedad, que no le importa a nadie porque no ponen en riesgo sus poderes económicos. El movimiento de derechos humanos durante los cinco primeros años después de la entrega del Informe de la Comisión estuvo ahí luchando y se consiguieron muchas cosas: la ley, la misma normatividad, la institucionalidad, la CMAN, el Consejo de Reparaciones. Lo que sucede es que la agenda del movimiento de derechos humanos ha evolucionado también y el tema post-CVR, el tema de la verdad, de la reparación, ya no es consecuente con esta agenda”,<sup>815</sup> una agenda en que el tema prioritario son los llamados conflictos sociales que se refieren a las consecuencias que sufre la población en este país por la extracción de los recursos naturales.

Es urgente aliviar las heridas resultantes de la violencia en las poblaciones devastadas y promover una dinámica de incorporación de éstas a una comunidad política que ha sido tradicionalmente excluyente.<sup>816</sup> En la justicia transicional, las reparaciones se convierten en una manera de alcanzar la justicia y la reconciliación. A pesar de los avances parciales, el proceso de reparaciones no cuenta parte de una política pública nacional ordenada, incluyente y consistente, que entienda las reparaciones de manera integral, con un presupuesto establecido que sea consecuentes con esfuerzos en el proceso de búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares y la construcción de una memoria colectiva que sienta precedentes para el futuro.<sup>817</sup>

---

<sup>813</sup> A. AJETUNMOBI, “Victims’s responses after mass atrocities: a note on empirical finding”, cit., p.39.

<sup>814</sup> Ibid., p.47.

<sup>815</sup> J. GUILLEROT. Entrevista, cit.

<sup>816</sup> INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *El umbral de la memoria. Pasado, presente y futuro en las memorias de la violencia en Huancavelica*, cit., p.18.

<sup>817</sup> COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, *Informe anual 2011 – 2012*, p.50.  
Disponible en: [http://derechoshumanos.pe/informe\\_anual\\_2011\\_12/Reparaciones\\_a\\_las\\_victimas.pdf](http://derechoshumanos.pe/informe_anual_2011_12/Reparaciones_a_las_victimas.pdf)

Es así que el Perú no puede permitirse un fracaso en el cumplimiento de esta tarea. “Tampoco puede permitirse negligencias o frivolidades. No le es posible, por ejemplo, celebrar por un lado los excelentes rendimientos económicos, logros que todos reconocemos positivos y necesarios, y al mismo tiempo arrastrar los pies cuando se trata de atender a las víctimas de la violencia”.<sup>818</sup>

### ***9. ¿Cuál será el futuro de las reparaciones en el Perú?***

Todo indica que la implementación del PIR continuará con una dinámica parecida a la que ha llevado a cabo hasta el momento, tendiente a depender de los movimientos políticos del Estado sin convertirse en un asunto realmente prioritario.

La modificación del Decreto Supremo 051 sobre las reparaciones económicas seguirá siendo el centro de la lucha de las asociaciones de víctimas. Algunas personas creen que es viable, “yo creo que si es posible modificar el decreto, pero no hay la voluntad y en todo caso hay la resistencia sobre todo de parte de muchos sectores, tanto ideológicos como económicos”.<sup>819</sup> Para las reparaciones económicas individuales, la discusión es ¿se va a llegar a todas las víctimas bajo el decreto 051 o faltarán algunas?, es un tema presupuestal que de acuerdo con el decreto 051 faltarían cinco o seis años de acuerdo según el presupuesto actual para llegar a todas las víctimas. ¿Se modificará? no sabemos.<sup>820</sup>

Por su parte, el Vice-ministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia Daniel Figallo<sup>821</sup> considera que “no puede ocurrir que se establezca un sistema por el cual algunas víctimas si logren ingresar a un registro y otras víctimas no logren ingresar a un registro, porque todas son víctimas y afectaría el principio del derecho de igualdad, por lo pronto ahí hay un problema gravísimo, y gravísimo porque yo creo que es un problema de percepción

---

<sup>818</sup> S. LERNER, “Justicia y reparación para las víctimas de la violencia política”, cit., p.55.

<sup>819</sup> G. HUERTA. Entrevista, cit.

<sup>820</sup> Ibid.

<sup>821</sup> En la fecha de la entrevista, el Vice-ministro Figallo se desempeñaba como titular del Vice-ministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. El 31 de agosto del 2012 fue designado como nuevo Vice-ministro de Justicia.

y hay que generar la modificación normativa o la interpretación normativa para poder salir de ese impase”.

Asimismo, expresa que su labor de persuasión para la modificación de la norma es “una labor muy intensa y va a serlo mucho más. Yo tengo total confianza en que eso se va a cambiar así como también hemos presentado el proyecto de modificación de ley. Esos elementos que en la CMAN se aprobaron relacionados con la modificación del Decreto Supremo 051 son perfectamente atendibles de parte del Vice-ministerio y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi proyección, mi idea sobre este tema es que si se va a modificar, el registro se va a abrir, que el tema de la edad se va a dejar a cargo de la propia CMAN para poder determinar cuáles son los criterios para opción de la priorización de entrega que se va a extender una vez se agote el monto designado, de acuerdo a unos cálculos también se va a destinar una nueva cantidad de dinero”.<sup>822</sup>

En relación con el asunto del monto, para Figallo este es complicado “estamos haciendo los estudios de lo que significa una comparación, lo que puede significar diferentes opciones de reclamación indemnizatorias para poder promover ese asunto también, pero sin embargo lo que si no hemos borrado del mapa es que mientras no se hagan esos cambios yo no voy a boicotear el proceso de reparaciones. Lo que si encontramos es que se había detenido el proceso de reparaciones y eso para nosotros es casi un pecado, no puedes hacer eso, no puedes tu asumir el valor entre comillas de la dignidad, yo entiendo que tú puedas decir es indigno que recibas una cantidad tan poca, pero cuando tú tienes una necesidad tú dices venga eso y ojalá que venga más. Yo Estado no puedo decir paro porque quiero que sea más, no me corresponde a mi hacer eso, te corresponde a ti decir no recibo, por eso hay una opción que puedes decir si aceptas o no aceptas”.<sup>823</sup> Esto es fácil de plantear, pero la pobreza les niega a las víctimas la posibilidad de rechazar las opciones de reparaciones

---

<sup>822</sup> D. FIGALLO. Entrevista realizada el 13 de abril de 2012 en la ciudad de Lima.

<sup>823</sup> D. FIGALLO. Entrevista, cit.

económicas que el Estado les ofrece. Aquí, la ubicación social, económica e histórica de las víctimas moldea claramente sus concepciones de justicia y de su accesibilidad.<sup>824</sup>

El Secretario Ejecutivo de la CMAN manifiesta que “hay mucho trabajo, mucha gestión, hay bastante gerenciamiento, estamos tratando al máximo de evitar que se politice lo cual es inevitable, el tema es muy sensible pero evitar que se politice más, aquí lo que queremos hacer es que el Estado funcione en sus diferentes aspectos”.<sup>825</sup>

Igualmente indica que “para el año 2012 hay 100 millones de soles y el objetivo es que se ejecute todo en el tiempo más corto posible. Con miras al 2013 lo que pretendemos es que mediante convenios labor que promueve la CMAN sea una labor institucionalizada, no una labor personalizada que gracias a que está un funcionario que es mi amigo o que está muy comprometido con el tema que comprende bien entonces también se compromete con la problemática y compromete sus recursos, no, lo que queremos es que esté institucionalizado, por eso es que vamos a firmar una serie de convenios de manera que no importa quién esté en la CMAN o quién esté en el otro sector sencillamente hay un convenio que establece el vínculo, la comunicación, la modalidad en la que se trabaja de manera coordinada”.<sup>826</sup>

Sobre la implementación de las reparaciones colectivas se encuentran en el nivel de ejecución de un tercio de las comunidades. “La CMAN seguirá otros cinco o seis años adicionales, destinando presupuesto para eso, completando el 100% de comunidades, terminará eso, lo pasará a los gobiernos regionales como fue la intención en algún momento. Cuando se dice: *nosotros creemos que solamente se debe llegar a las comunidades con mayor afectación*, se está diciendo: mira vamos a llegar a éstas y el resto de víctimas dios verá, porque estás diciendo hasta aquí no más llegué, no lo dices como lo estoy diciendo yo, pero en términos prácticos es así”.<sup>827</sup>

---

<sup>824</sup>L. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, cit., p.243.

<sup>825</sup>A. CHAVARRY. Entrevista, cit.

<sup>826</sup>Ibid.

<sup>827</sup>G. HUERTA. Entrevista, cit.



Y sobre los otros programas se dice: “primero terminar la tarea, concluir los lineamientos, trabajar intervenciones presupuestales netas en ese sentido y desarrollar una forma de intervención muy clara, articulada desde el gobierno central, los gobiernos regionales y locales. Para eso tiene que haber, protocolos, procedimientos, formas de intervención en que se sepa qué hace cada cual y cuanto presupuesto se destina a ese fin. Eso es todavía una tarea pendiente, varias cosas son tareas pendientes y que de alguna manera no se han podido desarrollar, se han ido llevando propuestas, pero desde el Estado ha habido bastante lentitud para acoger ese tipo de cosas”.<sup>828</sup>

Finalmente, después de concluida la estancia de investigación se han dado a conocer un par de medidas de avances sobre el proceso de reparaciones. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha firmado con el Reniec<sup>829</sup> un convenio para que este último y la CMAN tramiten de forma gratuita el documento nacional de identidad (DNI) para aquellas personas que nunca lo han tenido por problemas derivados de acciones del conflicto armado interno, en el marco del Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos. Adicionalmente, el Ministerio de Salud ha aprobado los “Lineamientos para el acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas”,<sup>830</sup> en el marco del Programa de Reparación en salud.<sup>831</sup>

Pero si bien se llevan a cabo acciones dirigidas al desarrollo del PIR, el panorama sigue siendo sombrío para las víctimas en su lucha. A medida que pase el tiempo la situación será más compleja, los años pasan así como éstos en las víctimas, las comunidades se van despoblando, las heridas en las víctimas no sanan y ellas seguirán siendo excluidas. Hay gestos por parte del Gobierno, pero los gestos no son suficientes, la enorme incapacidad institucional hace más difícil la implementación del PIR, pero esa limitación no puede

---

<sup>828</sup> Ibid.

<sup>829</sup> MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Ministro de Justicia firma convenio con Reniec para entregar DNI a víctimas de la violencia terrorista, Lima, 27 de abril de 2012.

<sup>830</sup> MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ, *Resolución Ministerial N° 299-2012-MINSA, Lineamientos para el Acompañamiento Psicosocial a Familiares de Personas Desaparecidas*, Lima, 16 de abril de 2012.

<sup>831</sup> A. VALENCIA, “Reparaciones: las razones del descontento”, cit.

constituirse en una respuesta para los afectados, que tienen el derecho de obtener reparación.<sup>832</sup>

---

<sup>832</sup> S. RUBIO, “Julcamarca, la tierra del olvido...”, *Revista Ideele*, núm. 221, julio 2012. Disponible en: <http://www.revistaideele.com/ideele/?q=node/538>

## CONCLUSIONES

1. La justicia transicional se refiere a un conjunto de medidas diseñadas para enfrentar el legado de abusos sistemáticos de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que tienen como propósito administrar justicia de manera integral y promover la reconciliación. El diseño e implementación de estas medidas, llevan consigo el reconocimiento de que ha habido flagrantes violaciones a las normas de derechos humanos y del derecho internacional, y que éstas se encuentran vigentes.
2. La determinación de ejecutar medidas para un proceso de transición es una decisión fundamentalmente política. Si bien pueden existir factores externos como el seguimiento de un orden normativo internacional, ya establecido y en proceso de consolidación, y presiones por parte de la sociedad civil; lo que prima al momento de rectificar los hechos con los que se cometieron sistemáticas violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es la voluntad política de los gobiernos en el poder.
3. La justicia transicional, como conjunto de mecanismos, comprende varios elementos que diferentes autores han definido y estudiado a lo largo de las últimas décadas. Estos han evolucionado a lo largo de los años y no hay uniformidad estricta al momento de señalarlos, pero sí existe un consenso sobre los componentes básicos que debe incluir un proceso de justicia de transición: verdad, justicia, reparación y reformas institucionales.
4. Las comisiones de la verdad buscan establecer un archivo fidedigno acerca del pasado, esclarecer los hechos, romper el silencio y superar la negación de un período doloroso de la historia. El valor máximo de una comisión de la verdad reside en su capacidad para producir una versión oficial de los hechos de un período y una sociedad en particular. Si bien las comisiones de la verdad se han convertido en un mecanismo clave en los procesos transicionales, lo que determina que el proceso de transición iniciado por una comisión de la verdad sea exitoso o no es lo que sucede luego de la entrega del informe final.

5. Existen desafíos específicos que se le plantea a la justicia penal: la fragilidad institucional o la demora en el desarrollo de la transición. Los procesos penales llevados a cabo de manera prematura enfrentarán grandes desafíos. Lo más probable es que el sector que gobernó mantendrá el control del sistema judicial, los servicios de la fiscalía y las unidades de investigación policial; las transformaciones que puedan ser hechas en el sector tomarán tiempo, y esto contando con que los grupos de poder del régimen anterior no tengan influencia sobre el nuevo gobierno.

6. A pesar de lo anterior, los procesos penales son fundamentales en la justicia de transición porque: poseen la legitimidad para enfrentar el crimen, tienen la obligación de juzgar a los presuntos perpetradores de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y DIH, y porque fortalecen la democracia y una cultura de los derechos humanos.

7. Reformar las instituciones públicas es una tarea primordial durante la transición. Las instituciones públicas que perpetuaron el conflicto o que apoyaron el régimen autoritario necesitan ser transformadas en instituciones que apoyen el proceso de transición, mantengan la paz y preserven el Estado de derecho. Las instituciones que violaron los derechos humanos y que fueron partidarios de defender los intereses de unos pocos, necesitan transformarse en instituciones que protejan los derechos humanos, prevengan abusos y que sirvan a la sociedad de manera imparcial.

8. Luego de revisar los rasgos históricos de la justicia transicional se puede decir que las respuestas transicionales variaron dependiendo de cada país y sus circunstancias políticas. Una de las lecciones primordiales que nos dejan estos procesos indica que el valor de la justicia, su contenido y aplicación, varía entre individuos y grupos, así como dependiendo de las circunstancias socio-políticas en que éstos se encuentran. Lo que sí se puede afirmar es que los valores sociales contemporáneos incluyen la aspiración de alcanzar la justicia, entendiéndose esta en cada concepción particular.

9. La búsqueda internacional de justicia penal para las violaciones graves de derechos humanos han dado mayor impulso a la noción de rendición de cuentas por crímenes

cometidos en el pasado. El derecho internacional puede desempeñar un rol constructivo, proporcionando una fuerte alternativa de Estado de derecho para guiar los procesos nacionales en las sociedades en transición. En este sentido, las normas jurídicas internacionales son útiles para construir una percepción de continuidad y consistencia del Estado de derecho.

10. La participación y reparación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional ha constituido un hito en el desarrollo del derecho penal internacional. La posición procesal de las víctimas en las actuaciones ante la CPI ha sido considerada como uno de los avances más significativos del Estatuto de Roma, instrumento que ha marcado un significativo inicio desde la simple conceptualización de los derechos de las víctimas en términos de reparación. La Corte debe establecer los principios relacionados con la reparación a las víctimas, los cuales deberán incluir restitución, compensación y rehabilitación. Desafortunadamente tales principios no han sido todavía establecidos y los resultados de la primera decisión de la Corte sobre reparaciones en el Caso Lubanga dejan mucho que desear.

11. La relación complementaria entre la justicia internacional y el desarrollo del Estado de derecho, puede jugar un papel fundamental al momento de hacer que los Estados cumplan sus obligaciones de manera apropiada a la hora de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de serios crímenes. Pero además de reconocer y apoyar el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional, se debe hacer énfasis en la necesidad de llevar a cabo medidas prácticas que aseguren que los Estados que tengan la voluntad de investigar y enjuiciar tales crímenes, pero no puedan hacerlo, se les proporcione las herramientas necesarias para asumir sus responsabilidades. Los sistemas de justicia local deberían ser los primeros en buscar la rendición de cuentas, pero cuando las autoridades locales no lo deseen o no sean capaces, el papel de la comunidad internacional es crucial.

12. A lo largo de los años se ha podido observar que el desarrollo de los procesos de transición está inmerso en un ambiente de inestabilidad política constante y que se involucran diversas variables según las circunstancias. Razón por la cual, resulta difícil

determinar en la mayoría de los casos, cuándo una transición ha sido superada y se está en presencia de un Estado democrático consolidado. Se puede concluir que la justicia transicional se encuentra en una constante evolución. Su alcance se ha extendido para abordar diferente tipo de situaciones transicionales y para involucrar diversos actores en su desarrollo. Queda claro que los procesos de transición son continuos; que resurgen después del tiempo en el marco de circunstancias y entornos políticos propicios, y que necesita esfuerzos complementarios de parte de los Estados y de la comunidad internacional para su fortalecimiento.

13. Cabe resaltar la importancia que tienen los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, que fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2005 reafirmando de esta forma el derecho de las víctimas. A pesar que su desarrollo debe continuar, y hay todavía mucho por hacer en esta materia, esta resolución ha significado la consolidación de un amplio esfuerzo normativo y político en el marco del derecho internacional público.

14. La reparación es un requisito primordial de la justicia. El Estado tiene la obligación de rendir cuentas por las acciones cometidas en el pasado y es a través de la reparación que puede resarcir de manera directa a las víctimas por las violaciones y abusos cometidos contra ellas. El proceso de justicia transicional no puede ser entendido sin un profundo enfoque reparador, ya que de este depende no solo la reconstitución del Estado de derecho, sino la consolidación de un proceso de reconciliación en un país fragmentado.

15. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desempeñado un papel fundamental en el posicionamiento de los derechos de las víctimas en el derecho internacional. Su desarrollo como un sistema centrado en las víctimas ha sido reconocido internacionalmente y en el mundo de las reparaciones ha demostrado ser el sistema regional más comprensivo y progresivo. En comparación con otros organismos de derechos

humanos, la Corte Interamericana ha consolidado el ámbito de las reparaciones a través de una jurisprudencia de avanzada.

16. Por su parte, en el marco de programas masivos de reparaciones administrativas, las reparaciones no pueden pensarse términos de compensación en proporción al daño, sino en términos de crear un conjunto de beneficios que promueva tres valores: el reconocimiento a las víctimas y no solo por el hecho de ser víctimas, sino ciudadanos y ciudadanas; el desarrollo de la confianza cívica entre las víctimas y la institucionalidad y la solidaridad social.

17. Aunque no existe un único patrón a seguir para el diseño de un programa de reparaciones, hay que tener en cuenta las circunstancias socio-políticas del país en cuestión. Lo que si tiene que estar claro es que programa de reparación debe suministrar un apoyo sustentable que garantice la vida en dignidad de las víctimas y se haga cargo de las secuelas más graves; que comprenda los aspectos material y simbólico; que reconozca a todas las víctimas; que revierta la marginalidad histórica; que promueva la agencia de las víctimas y que responda a particularidades.

18. Los programas de reparación deben reflejar las necesidades de las víctimas, unas necesidades basadas en una estrategia de reparación extrajudicial. La justicia debe suponer el reconocimiento de ciertas necesidades socioeconómicas básicas de las víctimas (cuando estas hacen parte de grupos vulnerables), más allá de las demandas tradicionales de los derechos civiles y políticos que se realizan, especialmente en tiempos de transición.

19. En cuanto a los programas de reparación hay que reconocer que, en la mayoría de los casos, el contexto en que estos se llevan a cabo está caracterizado por una capacidad institucional debilitada, por una grave ruptura de la estructura social y por escasos recursos financieros para su ejecución; pero estos asuntos en la práctica no pueden convertirse en una excusa para su incumplimiento. Aunque en esencia la reparación hace referencia a un problema sin solución, existe la necesidad de un compromiso para restituir los derechos de

las víctimas y familiares, ayudarlas a enfrentar las consecuencias de las violaciones y promover su reintegración social.

20. Las reparaciones son más que un complemento que proporciona satisfacción temporal mientras se espera por el procesamiento penal, los programas de reparación no deben ser considerados solamente como la segunda mejor alternativa después de los procesos judiciales. Cada vez más se implementan programas de reparación, lo que comprueba que son una medida esencial de la justicia de transición, necesarios para cumplir con los requerimientos de justicia de la formula transicional y del concepto de justicia que articulan las víctimas. En muchos casos, los programas de reparaciones pueden responder a necesidades que una sentencia no puede lograr y como respuesta en casos de conflictos armados generalizados, tiene un alcance mucho mayor en número de víctimas.

21. A pesar de lo anterior, el castigo y la reparación no son diametralmente opuestos y ambos tienen un rol en la justicia transicional, en términos pragmáticos, las víctimas que no pueden obtener justicia por medios judiciales podrían verse beneficiadas, al menos, por los programa de reparación. Existe una distancia sustancial entre la teoría y la práctica cuando se hace referencia al derecho de las víctimas a la reparación de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y del DIH. La integralidad es un asunto fundamental, así como que las víctimas tengan acceso a ese “entramado” de medidas que, aunque en algunos casos se superponen (en el derecho internacional y los programas de reparación), deben ser implementadas de la mejor manera posible para resarcir los graves daños causados.

22. Desafortunadamente se puede afirmar que un gran número de víctimas siguen pasando desapercibidas, no son reconocidas o atendidas. Los sistemas socio-jurídicos siguen cometiendo actos en detrimento de las victimas como leyes inadecuadas, restricciones en la definición del alcance y la naturaleza de las violaciones, vigencia de leyes de amnistía e inmunidad, el impedimento en el acceso a la justicia, entre otros. Igualmente, no faltan los obstáculos políticos que ignoran los derechos e intereses de las víctimas, existe falta de voluntad por parte de las autoridades y la sociedad para reconocer los serios abusos que fueron cometidos.



23. En relación con el Perú, hay que mencionar que el conflicto armado interno dejó secuelas muy profundas en la sociedad. La magnitud del conflicto acentuó la pobreza y la desigualdad, destruyó el ya débil sistema democrático, agravó la discriminación y la exclusión, debilitó las redes sociales y propició una cultura del miedo y la desconfianza.

24. El compromiso con la justicia transicional en el Perú significa enfrentar una serie de resistencias muy poderosas. El rencor y la hostilidad de grupos de interés social y político muy influyentes, la indolencia de las autoridades gubernamentales, incluso la indiferencia de un sector de la población. Lastimosamente, muchos peruanos no se han dado cuenta que con la implementación efectiva del Plan Integral de Reparaciones está en juego la posibilidad de que millares de conciudadanos reconstruyan su vida en condiciones de dignidad.

25. Las víctimas de Julcamarca, Arcuilla, Cahua y Yuracocha reclaman su derecho a la reparación. Aunque existen víctimas que no tienen claro el significado de las reparaciones, todas son conscientes de que merecen o tienen derecho a algo. Los testimonios evidencian una frustración muy fuerte por el abandono del Estado y por ver que se les escapa la vida sin poder obtener siquiera un poco de justicia. Las víctimas demandan atención por parte de las instituciones del Estado, reconocimiento e inclusión, atención a sus necesidades básicas (alimento, educación para sus hijos, tratamiento psicológico, medios de subsistencia). Hay muchas personas que esperan la reparación con bastante expectativa, al ser ciudadanos con sus necesidades básicas insatisfechas, ven en la reparación la posibilidad de cubrir sus prioridades personales.

26. Las víctimas expresan su inconformidad con respecto al monto de la reparación económica individual, aunque son personas con dificultades económicas, razón por la cual podrían aceptarlas sin discusión, reiteran que deberían recibir una cantidad mínima digna que reconozca su derecho a la reparación. Debido a la priorización que el Estado ha establecido, existen muchas personas que han quedado fuera de la entrega de las reparaciones hasta que los criterios sean modificados.

27. La investigación empírica demuestra que después de las atrocidades masivas, una gran mayoría de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos están mucho más preocupadas por sus necesidades inmediatas que por el procesamiento judicial de los perpetradores de esas violaciones. La justicia debe estar enfocada hacia las víctimas, se deben tener en cuenta los intereses y preocupaciones expresados por ellas acerca de los asuntos fundamentales para su bienestar, logrando de esta manera poder compensarlas y mejorar su vida. La asociación de la justicia con su concepción restaurativa fue común entre las respuestas. Al afirmar que con la reparación económica individual sentirían que se ha hecho justicia, confirma la estrecha relación entre las expectativas de “reparación” y cubrir las “necesidades” básicas. Los testimonios también reflejan la exigencia de reconocimiento y atención que las víctimas le hacen al Estado. La justicia para algunos entrevistados requiere un reconocimiento de su situación que se traduzca en la atención de aquellas necesidades insatisfechas, son declaraciones que piden inclusión en la sociedad y el goce efectivo de sus derechos.

28. Hay quienes entienden la justicia desde una perspectiva retributiva – en menor cantidad que los que la asumen la justicia desde una perspectiva restaurativa - el que los perpetradores paguen sus culpas es una condición necesaria para sentirse reparado. Los clamores de justicia se materializan a través de expresar el descontento y la decepción que sienten por la acción y, en muchos casos, omisión de la responsabilidad del Estado.

29. En cuanto a la posibilidad de la repetición de los hechos de violencia, los entrevistados expresan pánico ante la posibilidad de que sucedan de nuevo y exigen que el Estado tome medidas para que estos no vuelvan a ocurrir. En relación con lo que manifestaron que habría que hacer para que no se repitieran los hechos violentos, hubo dos corrientes principalmente, la que atribuyó al Estado la responsabilidad de acción y la que expresó que era la propia comunidad quienes debían hacer algo, siendo esta última la mayoritaria. Décadas de aislamiento y desatención por parte de los organismos del Estado hace lógico que ellos mismos asuman la responsabilidad de evitar futuros abusos.

30. En los centros poblados visitados las pocas acciones de memoria que se han realizado han sido de manera aislada. La mayoría de las personas expresó que en el distrito de Julcamarca se empezó a construir un mausoleo pero no se finalizó, esta fue la única acción reconocida por ellas. La gran mayoría manifestó que era importante recordar los hechos ocurridos para que las nuevas generaciones lo tuvieran presente y no se repitieran, los pocos que dijeron que preferían olvidar basaron su opinión en el dolor que sienten al rememorar el pasado.

31. Es fundamental combinar un análisis del contexto socio-político con una mirada crítica del marco conceptual en el que se basan las reparaciones a las víctimas. Si bien en el Perú el marco normativo necesario para que las políticas de reparaciones y las instituciones para su implementación se han establecido, el proceso de las reparaciones en sí ha sido lento. Factores como la capacidad institucional existente y la voluntad política son claves para que un plan de reparaciones sea posible en la práctica. Desde el Estado se aprecia un trabajo segmentado que no responde a una política nacional de reparación. Es claro entonces que el Estado peruano tiene un problema estructural, no solo en términos de oferta de servicios requeridos por las víctimas, sino que también es urgente que realicen reformas institucionales para que el Estado pueda responder de mejor manera a sus obligaciones jurídico-políticas.

32. Finalmente, si bien durante los años que se lleva implementando el PIR – del 2007 al día de hoy –se han realizado acciones dirigidas a su desarrollo, el panorama sigue siendo sombrío para las víctimas en su lucha. A medida que pase el tiempo la situación será más compleja, los años pasan así como éstos en las víctimas, las comunidades se van despoblando, las heridas en las víctimas no sanan y ellas seguirán siendo excluidas. Hay gestos por parte del Gobierno, pero los gestos no son suficientes, la enorme incapacidad institucional hace más difícil la implementación del PIR, pero esa limitación no puede constituirse en una respuesta para las víctimas/supervivientes que tienen el derecho de obtener reparación.

## BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, P., “Justicia, política y Memoria: los legados del franquismo en la transición española” en A. BARAHONA DE BRITO et al (ed.), *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Istmo, Madrid, 2002.

AJETUNMOBI, A., “Victims’s responses after mass atrocities: a note on empirical finding”, *Contemporary Justice Review*, vol.15, núm 1, marzo, 2012, pp.39-56.

ALBON, M., “Project on justice in times of transition” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.1, Estados Unidos, 1995.

AMBOS, K. y DE HOYOS SANCHO, M. (ed.), *Cuestiones Esenciales en la Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional*, Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2010.

AMBOS, K. et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009.

AMBOS, K., *The Legal Framework of Transitional Justice*, estudio preparado para la conferencia internacional „Building a Future on Peace and Justice“, Nuremberg, 25 - 27 junio, 2007. Disponible en: [http://www.peace-justice-conference.info/download/Ambos\\_NurembergStudy\\_070512.pdf](http://www.peace-justice-conference.info/download/Ambos_NurembergStudy_070512.pdf)

AMES, R., “Violencia, verdad... ¿Reconciliación en el Perú?” en G. PACHECO et al. (ed), *Verdad, Justicia y Reparación. Desafíos para la democracia social*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005.

ANDREU-GUZMÁN, F., “Due process and vetting” en A. MAYER-RIECKH y P. DE GREIFF (ed.), *Justice as prevention. Vetting public employees in transitional societies*, International Center for Transitional Justice, Social Science Research Council, Nueva York., 2007.

BARAHONA DE BRITO, A. et al (ed.), *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Istmo, Madrid, 2002.

BARAHONA DE BRITO, A., “Verdad, justicia, memoria y democratización en el cono sur” en A. BARAHONA DE BRITO et al (ed.), *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Istmo, Madrid, 2002.

BARKAN, E., “Reparation: a moral and political dilemma” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*. Oxford University Press, 2007.

BASOMBRÍO, C. y ROSPIGLIOSI, F., *La seguridad y sus instituciones en el Perú a inicios del siglo XXI. Reformas democráticas o neomilitarismo*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2006.

BASSIOUNI, C., “From Versailles to Rwanda in seventy five years: the need to establish a permanent International Criminal Court”, *Harvard Human Rights Journal*, vol. 10, 1997, pp.11-62.

BASSIOUNI, C., “International recognition of victim’s rights”, *Human Rights Law Review*, vol. 6, issue 2, Oxford University Press, 2006, pp.203-279.

BASSIOUNI, C., “The Nuremberg legacy” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, Oxford University Press, Nueva York, 2008.

BELAY, R. et al.(ed.), *Memorias en conflicto: aspectos de la violencia política contemporánea*, Embajada de Francia - Instituto de Estudios Peruanos – Instituto Francés

de Estudios Andinos – Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Lima, 2004.

BERISTAIN, C., *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones de derechos humanos*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ecuador, Quito, 2009.

BIRO, M. et al., “Attitudes toward justice and social reconstruction in Bosnia and Herzegovina and Croatia” en E. STOVER y H. WEINSTEIN (ed.), *My neighbor, my Enemy: justice and community in the aftermath of mass atrocity*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

BRINTON, M. LYKES y MERSKY, M., “Reparations and mental health: psychosocial interventions towards healing, human agency, and rethreading social realities” en P. DE GREIFF, *The Handbook of Reparations*, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2006.

BUIGUES, G., *La rescisión de los hechos y actos jurídicos en derecho romano, premisas para un estudio de la restitutio in integrum*, Nomos, Valencia, 1992.

BURT, J. M., *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de sendero y la dictadura de Fujimori*, Instituto de Estudios Peruanos, Asociación de Servicios Educativos Rurales, Instituto Peruano de Antropología Forense, Segunda edición, Perú, 2011.

CALA, F., “Truth in the time of fear: Adiós, Ayacucho”s poetics of memory and the Peruvian transitional justice process”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol.6, issue 1, March 2012, pp.344-354.

CANO, G. y NINAQUISPE, K., “El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de la justicia”, en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, International Center for Transitional Justice, Perú, 2006.

CARRILLO, A., “Justice in context: the relevance of Inter-American human rights law and practice to repairing the past” en P. DE GREIFF (ed.), *Handbook of reparations*, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2006.

CASSESE, A. et al, *The Rome statute of the International Criminal Court: a commentary*, Oxford University Press, vol.1, Nueva York, 2002.

CASSESE, A. (ed.), *The Oxford companion to international criminal justice*, Oxford University Press, Nueva York, 2009.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS, *Políticas públicas de verdad y memoria en siete países de América Latina*, Programa Derechos Humanos y Democracia, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2011.

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y LEGALES, Lucha contra la Impunidad. Justicia, verdad y memoria, *Informe Anual 2001*, Buenos Aires, 2001. Disponible en: [http://www.cels.org.ar/common/documentos/informe\\_2001\\_cap\\_1.pdf](http://www.cels.org.ar/common/documentos/informe_2001_cap_1.pdf)

CHAPMAN, A., “Truth finding in the transitional justice process” en H. VAN DER MERWE et al. (ed.), *Assessing the impact of transitional justice: challenges for empirical research*, United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 2009.

CHINCHÓN, J., *Derecho Internacional y Transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia Iberoamericana*. Parthenon, Sevilla, 2007.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Segunda edición, Lima, 2008.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, *Informe Final*, CVR, Lima, 2003.

COMISIÓN ESPECIAL DEL SENADO SOBRE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA Y ALTERNATIVAS DE PACIFICACIÓN EN EL PERÚ, *Violencia y pacificación*, DESCO, Comisión Andina de Juristas, Perú, 1989.

COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *El derecho a interponer recursos y a obtener reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Guía para profesionales*, Ginebra, 2006.

COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, *Impunidad y graves violaciones de derechos humanos: guía para profesionales número 3*, Ginebra, 2008. Disponible en: <http://www.icj.org/dwn/database/PGNo-3-ElectrDistribution.pdf>

CONADEP, *Nunca Más*, Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, Eudeba, Buenos Aires, 1984.

CONSEIL CONSULTATIF DES DROIT DE L'HOMME y INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *The Rabat report. The concept and challenges of collective reparations*, CCDH, ICTJ, febrero, 2009. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-English.pdf>

CONTRERAS-GARDUÑO, D., “Are all the victims entitled to reparations? The case of the IASHR”, en A. MIHR (ed.), *Transitional justice: between criminal justice, atonement and democracy*, SIM SPECIAL 37, Utrecht University, Julio, 2012.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *La Corte Interamericana de derechos humanos: un cuarto de siglo 1979 – 2004*, San José, 2005.



COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, *Informe anual 2009 – 2010*. Disponible en: <http://derechoshumanos.pe/documentos/informe-anual/>

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, *Informe anual 2011 – 2012*. Disponible en: [http://derechoshumanos.pe/informe\\_anual\\_2011\\_12//Reparaciones\\_a\\_las\\_victimas.pdf](http://derechoshumanos.pe/informe_anual_2011_12//Reparaciones_a_las_victimas.pdf)

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, *Memoria y justicia para la inclusión*, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Project Counselling Services, International Center for Transitional Justice, Oxfam GB, Lima, 2005.

CROCKER, D., “Truth Commissions, Transitional Justice and Civil Society”, en R. ROTBERG y D. THOMPSON (ed.), *Truth v. Justice, The morality of Truth commissions*, Princeton University Press, New Jersey, 2000.

CUTTER PATEL, A. et al. (ed.), *Disarming the past: transitional justice and ex-combatants*, Social Science Research Council, Estados Unidos, 2009.

CUTTER PATEL, A., “Transitional Justice, DDR, and Security Sector Reform” en A. CUTTER PATEL et al. (ed.), *Disarming the past: transitional justice and ex-combatants*, Social Science Research Council, Estados Unidos, 2009.

CZARNOTA, A., “Transitional justice in post-communist central-eastern Europe: decommunisation and the rule of law” en N. PALMER et al. (ed.), *Critical perspectives in transitional justice*, Oxford Transitional Justice Research, Intersentia, Cambridge, 2012.

DEGREGORI, C., “Heridas abiertas, derechos esquivos: reflexiones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación” en R. BELAY et al.(ed.), *Memorias en conflicto: aspectos de la violencia política contemporánea*, Embajada de Francia - Instituto de Estudios Peruanos – Instituto Francés de Estudios Andinos – Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Lima, 2004.

DE GREIFF, P., “Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la justicia transicional”, *Anuario de Derechos Humanos*, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, núm.7, 2011, pp.17-39.

DE GREIFF, P. (ed.), *Handbook of reparations*, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2006.

DE GREIFF, P., *The role of reparations in transitions to democracy*, Justice and the World Economy Achieving Global Justice Seminar Series, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, New York, 2004, p.1. Disponible en: [http://www.carnegiecouncil.org/resources/articles\\_papers\\_reports/4980.html/res/id=sa\\_File/4980\\_Greiff\\_Reparations\\_and\\_Democracy.pdf](http://www.carnegiecouncil.org/resources/articles_papers_reports/4980.html/res/id=sa_File/4980_Greiff_Reparations_and_Democracy.pdf)

DE GREIFF, P. y DUTHIE, R. (ed.), *Transitional justice and development, making connections*, Social Science Research Council, Estados Unidos, 2009.

DE GREIFF, P., “Transitional justice, security and development”, Security and justice thematic paper, *World Development Report 2011 (Background paper)*, Banco Mundial, octubre, 2009. Disponible en: <http://wdr2011.worldbank.org/transitional%20justice>

DE GREIFF, P., “Articulating the Links Between Transitional Justice and Development: Justice and Social Integration”, en P. DE GREIFF y R. DUTHIE (ed.), *Transitional justice and development, making connections*, Social Science Research Council, Estados Unidos, 2009.

DE GREIFF, P., “Justice and reparations” en P. DE GREIFF (ed.), *Handbook of reparations*, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2006.

DE GREIFF, P., “Justice and reparations” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*. Oxford University Press, 2007.

DIAMANDOUROS, P., “Regime change and the prospects for democracy in Greece: 1974-1983” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

DU BOIS-PEDAIN, A., “Post-conflict accountability and the demands of justice: can conditional amnesties take the place of criminal prosecutions?” en N. PALMER et al. (ed.), *Critical perspectives in transitional justice*, Oxford Transitional Justice Research, Intersentia, Cambridge, 2012.

DUGARD, J., “Retrospective justice: international law and the South African model” en J. MCADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1997.

DUGGAN, C. et al, “Reparations for sexual and reproductive violence: prospects for achieving gender justice in Guatemala and Peru”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol.2, issue 2, 2008, pp.192-213.

ELSTER, J., *Rendición de cuentas, la justicia transicional en perspectiva histórica*, Katz Editores, Buenos Aires, 2006.

FALK, R., “Reparations, international law and global justice: a new frontier” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2006.

FERNÁNDEZ DE GURMENDI, S., “Definition of Victims and General Principles”, en R. LEE, *The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, Transnational Publishers, New York, 2001.

FORSBERG, T. y TEIVAINEN, T., “Injusticias del pasado en la política mundial: perspectivas de instituciones globales tipo comisiones de la verdad” en CNDDHH, *Memoria y justicia para la inclusión*, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Project Counselling Services, International Center for Transitional Justice, Oxfam GB, Lima, 2005.

GAMARRA, R., “Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional” en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, International Center for Transitional Justice, Perú, 2006.

GAMIO, G., “Justicia transicional y ética de la memoria”, en *Derecho y Sociedad*, año XIX, No.30, Lima, 2008, pp.216-218.

GAMIO, G., *Tiempo de memoria: reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional*, Instituto de democracia y derechos humanos (IDEHPUCP), Instituto Bartolomé de las Casas, Centro de Estudios y Publicaciones (CEP), Lima, 2009.

GARCÍA-GODOS, J., “Victim reparations in the Peruvian truth commission and the challenge of historical interpretation”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol.2, issue 1, 2008, pp.63-82.

GARCÍA, S., “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos en materia de reparaciones”, en CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *La Corte Interamericana de derechos humanos: un cuarto de siglo 1979 – 2004*, San José, 2005.

GEISS, R. y BULINCK, N., “Cuadro comparativo de los tribunales penales internacionales e internacionalizados”, *International Review of the Red Cross*, No. 861, marzo de 2006, pp.1-22.

GIL, A., “Informe de España” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009.

GÓMEZ ISA, F. (dir.), El derecho a la memoria, Departamento para los derechos humanos, el empleo y la inserción social de la diputación foral de Gipuzkoa, Bilbao, 2006.

GÓMEZ ISA, F., “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” en F. GÓMEZ ISA (dir.), El derecho a la memoria, Departamento para los derechos humanos, el empleo y la inserción social de la diputación foral de Gipuzkoa, Bilbao, 2006.

GOMEZ ISA, F., “Justicia y reparación para las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” en *Revista Crítica*, año 58, núm 954, 2008. Disponible en: <http://www.revista-critica.com/articulos.php?id=2051>

GÓMEZ ISA, F., “Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso de Colombia” en M. REED y M. RIVERA (ed.), *Transiciones en contienda: Disyuntivas de la justicia transicional en Colombia desde la experiencia comparada*. Centro Internacional para la Justicia Transicional, Bogotá, 2010.

GONZÁLEZ, C., “Depuración y justicia políticas en Europa del Este” en A. BARAHONA DE BRITO et al (ed.), *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Istmo, Madrid, 2002.

GOODHART, A., “The legality of the Nuremberg trials” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, Oxford University Press, Nueva York, 2008.

GUILLEROT, J., *Los desafíos de la perspectiva de género en un programa de reparaciones*, Seminario Internacional Derechos Humanos y Justicia Transicional:

gestionando el pasado, Ecola de Cultura de Pau, Barcelona, 1 de julio de 2008. Disponible en: <http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/seminariojt/tex12.pdf>

GUILLEROT, J., *Para no olvidarlas más. Mujeres y reparaciones en el Perú*, APRODEH-DEMUS-PCS, Lima, 2007.

GUILLEROT, J. y MAGARRELL, L., *Reparaciones en la Transición Peruana. Memorias de un Proceso Inacabado*, Asociación Pro – Derechos Humanos, International Center for Transitional Justice, Perú, 2006.

GUZMÁN, J., “Informe de Chile” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009.

HAMBER, B., “Narrowing the micro and macro: a psychological perspective on reparations in societies in transition” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2006.

HART, H., *El concepto de derecho*, trad. de G. Carrio, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1977.

HAYNER, P., *Unspeakable Truths, facing the challenge of truth commissions*, Routledge, Nueva York, 2002.

HAYNER, P., *Unspeakable truths: transitional justice and the challenge of truth commissions*, second edition, Routledge, 2010.

HENRÍQUEZ, N., *Cuestiones de género y poder en el conflicto armado en el Perú*, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Lima, 2006.

HERZ, J., “Desnazification and related policies” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

HERZ, J., “The purge of nazi personnel” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

HOYLE, C., “Can international justice be restorative justice? The role of reparations”, en N. PALMER et al. (ed.), *Critical perspective in transitional justice*, Intersentia, 2012.

HUERTA, G., “Reparaciones en la región de Huancavelica, Perú” en INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *Atención y reparación a las víctimas en lo local: las experiencias de Greensboro, Huancavelica, Tucumán y Medellín*, Bogotá, septiembre de 2010.

HUNTINGTON, S., *La Tercera Ola: la democratización a finales del siglo XX*, Paidós, Barcelona, 1998.

HUNTINGTON, S., “The third wave: democratization in the late twentieth century” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol. 1, Estados Unidos, 1995.

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *El Informe Final CVR – Huancavelica. Una compilación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*, Ediciones EIRL, Lima, 2005.

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *El umbral de la memoria. Pasado, presente y futuro en las memorias de la violencia en Huancavelica*, Área de Gobernabilidad y Derechos Humanos, Lima, 2007.

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *Protocolo para la investigación de casos de violación sexual en el conflicto armado interno*, Instituto de Defensa legal, Lima, 2010.

INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *From relief to reparations: listening the voices of victims in Nepal*, Nueva York, 2011. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-NPL-Relief-to-Reparations-Report-2011-English.pdf>

INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *Handbook on the special tribunal for Lebanon*, ICTJ, Friedrich Ebert Stiftung, abril, 2008. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-STL-Handbook-2008-English.pdf>

INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *Meeting Summary of the Retreat on Complementarity after Kampala: The Way Forward*, November 19, 2010. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Complementarity-Greentree-2010-English.pdf>

JELIN, E., *Los trabajos de la memoria*, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2002.

JELIN, E., “Public memorialization in perspective: truth, justice and memory past repression in southern cone of South America”, *International Journal of Transitional Justice*, vol. 1, issue 1, 2007, pp.138-156.

KAMINSKI, M. et al., “Normative and Strategic Aspects of Transitional Justice”, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 50, núm. 3, 2006, pp. 295-302.

KELSEN, H., “Will the judgement in the Nuremberg trial constitute a precedent in international law?” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, Oxford University Press, Nueva York, 2008.

KRANZBUHLER, O., “Nuremberg eighteen years afterwards” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, Oxford University Press, Nueva York, 2008.



KRAUS, M., "Settling accounts: postcommunist Czechoslovakia" en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

KRITZ, N. (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol. 1, Estados Unidos, 1995.

KRITZ, N. (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

LAPLANTE, L., "The Peruvian truth commission's historical memory Project: empowering truth-tellers to confront truth deniers", *Journal of Human Rights*, vol.6, issue 4, 2007, pp.433-452.

LAPLANTE, L. y THEIDON, K., "Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru", *Human Rights Quarterly*, vol.29, núm.1, 2007, pp.228-250.

LEE, R., *The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, Transnational Publishers, New York, 2001.

LENZERINI, F., "Reparations for indigenous peoples in international and comparative law" en F. LENZERINI (ed.), *Reparations for indigenous peoples. International and comparative perspectives*, Oxford University Press, 2008.

LIPPMAN, M., "Nuremberg forty five years later" en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, Oxford University Press, Nueva York, 2008.

LOTTMAN, H., "The purge: the purification of French collaborators after World War II" en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

LOVATÓN, D., “Condena judicial contra el ex Presidente Alberto Fujimori: mensaje contra la impunidad y Nuevo capítulo en la historia del Perú contemporáneo”, *Anuario de Derechos Humanos*, núm.6, 2010, pp.71-78.

LUNA, E., “La responsabilidad penal de los agentes del Estado”, en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, International Center for Transitional Justice, Perú, 2006.

LUNDY, P. y MCGOVERN, M., “The role of community in participatory transitional justice” en K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, Hart publishing, Oxford, 2008.

MACRIDIS, R., “France from Vichy to the fourth republic” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

MAGARRELL, L. y FILIPPINI, L. (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, International Center for Transitional Justice, Perú, 2006.

MAGARRELL, L. y FILIPPINI, L., “La Justicia penal y la verdad en la transición democrática” en L. MAGARRELL y L. FILIPPINI (ed.), *El legado de la verdad: la justicia penal en la transición peruana*, International Center for Transitional Justice, Perú, 2006.

MAGARRELL, L., *Reparations in theory and practice*, International Center for Transitional Justice, New York, 2007. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Reparations-Practice-2007-English.pdf>

MARAVALL, J. y SANTAMARÍA, J., “Political change in Spain and the prospects for democracy” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

MAYER-RIECKH, A. y DE GREIFF, P. (ed.), *Justice as prevention. Vetting public employees in transitional societies*, International Center for Transitional Justice, Social Science Research Council, Nueva York., 2007.

MAYER-RIECKH, A., “On Preventing Abuse: Vetting and Other Transitional Reforms” en A. MAYER-RIECKH y P. DE GREIFF (ed.), *Justice as prevention. Vetting public employees in transitional societies*, International Center for Transitional Justice, Social Science Research Council, Nueva York., 2007.

MCADAMS, J., “Communism on trial: The east German past and the German future”, en J. MCADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1997.

MCADAMS, J. (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1997.

MCCARTHY, C., “Reparations under the Rome Statute of the International Criminal Court and reparative justice theory”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol.3, issue 2, 2009, pp.250-271.

MCEVOY, K., “Letting go of legalism: developing a thicker version of transitional justice” en K. MCEVOY y L. MCGREGOR (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, Hart publishing, Oxford, 2008.

MCEVOY, K. y MCGREGOR, L. (ed.), *Transitional justice from below, grassroots activism and the struggle for change*, Hart publishing, Oxford, 2008.

MÉNDEZ, J., “In defense of transitional justice”, en J. McADAMS (ed.), *Transitional justice and the rule of law in new democracies*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1997.

METTRAUX, G., *Perspectives on the Nuremberg trial*, Oxford University Press, Nueva York, 2008.

MIHR, A. (ed.), *Transitional justice: between criminal justice, atonement and democracy*, SIM SPECIAL 37, Utrecht University, Julio, 2012.

MILLER, J. y KUMAR, R. (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*. Oxford University Press, Nueva York, 2007.

MINOW, M., *Between vengeance and forgiveness: facing history after genocide and mass violence*, Beacon Press, Boston, 1998.

MINOW, M., “The hope for healing: what can truth commissions do?”, en R. ROTBERG y D. THOMPSON (ed.), *Truth v. justice*, Princeton University Press, New Jersey, 2000.

MONTOYA, Y., “Limites y avances de la justicia penal frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período del conflicto armado interno en el Perú” en V. QUINTEROS (ed.), *Temas de derecho penal y violación de derechos humanos*, Instituto de Democracia y Derechos Humanos Pontificia Universidad Católica del Perú, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Lima, 2012.

MORATTI, M. Y SABIC-EL-RAYES, A., *Transitional Justice and DDR: the case of Bosnia and Herzegovina*, International Center for Transitional Justice, junio, 2009, p.6. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Bosnia-CaseStudy-2009-English.pdf>

NEIER, A., “Rethinking truth, justice and guilt after Bosnia and Rwanda” en C. HESSE y R. POST (ed.), *Human rights in political transitions: Gettysburg to Bosnia*, Zone books, New York, 1999.

NÍ AOLÁIMN, F. y CAMPBELL, C., “The paradox of transition in conflicted democracies”, *Human Rights Quarterly* 27, 2005, pp. 172-213.

NINO, C., *Radical Evil on Trial*, Yale University Press, New Haven, 1996.

NOVICK, P., “The resistance versus Vichy: the purge of collaborators in liberated France” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, *Rule of law tools for post conflict states: reparations programmes*, Nueva York, 2008, p.5. Disponible en: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ea6ebf2.html>

ODER, A., “The role of commission of inquiry into violations of human rights promotion in Uganda” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

OLÁSOLO, H., “Cuestiones Procesales y Procedimentales sobre la Posición de las Víctimas en las Actuaciones ante la Corte Penal Internacional”, en K. AMBOS y M. DE HOYOS SANCHO (ed.), *Cuestiones Esenciales en la Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional*, Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2010.

OLLÉ, M., *Justicia universal para crímenes internacionales*, Wolters Kluwer España, Madrid, 2008.

ORENTLICHER, D., *That someone guilty be punished: the impact of the ICTY in Bosnia*, Open Society Justice Initiative, Center for Transitional Justice, New York, 2010, p.13. Disponible en: <http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-FormerYugoslavia-Someone-Guilty-2010-English.pdf>

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *Rule of law tools for post-conflict states. Vetting an operational framework*, Ginebra, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006. Disponible en: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawVettingen.pdf>

OSIEL, M., “In defense of liberal show trials – Nuremberg and beyond” en G. METTRAUX (ed.), *Perspectives on the Nuremberg trial*, Oxford University Press, Nueva York, 2008.

OSIEL, M., *Mass atrocity, collective memory, and the law*, Transaction Publishers, New Jersey, 1997.

OSIEL, M., “Respuestas estatales a las atrocidades masivas”. en A. RETTBERG (ed.), *Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional*, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2005.

PACZOLAY, P., “Judicial review of compensation law in Hungary” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

PALIZA, M., *Y ahora le toca a la paz, análisis de la violencia política en el Perú: 1980-2000 propuestas políticas*, FDCL Editores, Berlín, 2007.

PALMER, N. et al. (ed.), *Critical perspectives in transitional justice*, Oxford Transitional Justice Research, Intersentia, Cambridge, 2012.

PARENTI, P. y PELLEGRINI, L., “Informe de Argentina” en K. AMBOS et al (ed.), *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009.

PAULSON, J., “Commentary on memory, ritual and apology” en N. PALMER et al. (ed.), *Critical perspectives in transitional justice*, Oxford Transitional Justice Research, Intersentia, Cambridge, 2012.

PEÑAFLORES, G., “Análisis del impacto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” en COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS et al. (ed.), *Informe Memoria y Justicia para la Inclusión*, Seminario Internacional, Lima, abril, 2005.

PHAM, P. et al., *Forgotten voices: a population-based survey on attitudes about peace and justice in Northern Uganda*, International Center for Transitional Justice, Human Rights Center – University of California Berkeley, Nueva York, p.37. Disponible en: <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-HRC-Uganda-Voices-2005-English.pdf>

PLATT, A. et al, “Compensating former political prisoners: an overview of developments in central and eastern Europe” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, *Vetting public employees in post-conflict settings: operational guidelines*, Bureau for crisis prevention and recovery, Nueva York, 2006. Disponible en: <http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-UNDP-Global-Vetting-Operational-Guidelines-2006-English.pdf>

PSOMIADES, H., “Greece: from the colonels” rule to democracy” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

QUINTEROS, V. (ed.), *Temas de derecho penal y violación de derechos humanos*, Instituto de Democracia y Derechos Humanos Pontificia Universidad Católica del Perú, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Lima, 2012.

RAWLS, J., *Teoría de la justicia*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1997.

RADBRUCH, G., *Arbitrariedad legal y derecho supralegal*, trad. de M. Azareto, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1962.

RAMÍREZ-BARAT, C., *La Justicia en el tiempo: una aproximación al concepto de justicia en los procesos de transición a la democracia*, Directores: Carlos Thiebaut Luis-André, Pablo de Greiff, Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguas, Teoría de la Literatura y Estudios Clásicos, 2007.

ROSENFELD, F., “Collective reparations for victims of armed conflict”, *International Review of the Red Cross*, vol. 92, núm. 879, septiembre, 2010, pp.731-764.

RETTBERG, A. (ed.), *Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional*, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2005.

ROBINSON, D., “Serving the interests of justice: amnesties, truth commissions and the International Criminal Court”, *European Journal of International Law*, vol. 14, núm 3, 2003, pp.481-505.

RODRÍGUEZ, J., “Sobre el terrorismo y sus víctimas”, *Revista Derechos y Libertades*, núm 27, época II, junio, 2012, pp.241-266.

ROOT, R., “Through the window of opportunity: the transitional justice network in Peru”, *Human Rights Quarterly*, vol.31, núm.2, 2009, pp.452-473.



ROTBERG, R. y THOMPSON, D. (ed.), *Truth v. justice*, Princeton University Press, New Jersey, 2000.

RUBIO-MARÍN, R., “Mujer y reparación: apuntes para la reflexión” en J. GUILLEROT, *Para no olvidarlas más. Mujeres y reparaciones en el Perú*, APRODEH-DEMUS-PCS, Lima, 2007.

RUBIO-MARÍN, R. y DE GREIFF, P., “Women and reparations”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol.1, Issue 3, 2007, pp.318-337.

RUMIN, S., “Gathering and Managing Information in Vetting Processes” en A. MAYER-RIECKH y P. DE GREIFF (ed.), *Justice as prevention. Vetting public employees in transitional societies*, International Center for Transitional Justice, Social Science Research Council, Nueva York., 2007.

SADURSKI, W., *Decommunisation, lustration and constitutional continuity: dilemmas of transitional justice in central Europe*, EUI working paper law No.2003/15, European University Institute, 2003.

SALMÓN, E., “La utilización del derecho internacional en la condena de Fujimori” en F. QUISPE y R. BUSTAMANTE (coords.), *Derechos humanos y lucha contra la impunidad: el caso Fujimori*, Dykinson S.L., Palestra Editores SAC, Madrid, 2011.

SATZ, D., “Countering the wrongs of the past: the role of compensation” en J. MILLER y R. KUMAR (ed.), *Reparations: interdisciplinary inquiries*, Oxford University Press, 2007.

SCHABAS, W., *An introduction to the International Criminal Court*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

SCHABAS, W., *The International Criminal Court, a Commentary on the Rome Statute*, Oxford University Press, New York, 2010.

SEGOVIA, A., “Financing reparations programs: reflections from international experience” en P. DE GREIFF (ed.), *The Handbook of Reparations*, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2006.

SOBERÓN, F., “Balance de las acciones del Estado en la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” en COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS et al. (ed.), *Informe Memoria y Justicia para la Inclusión*, Seminario Internacional, Lima, abril, 2005.

SOUTHERN, D., “Restitution or compensation: the property question” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice. How emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.2, Estados Unidos, 1995.

TEITEL, R., “Genealogía de la justicia transicional”, trad. de Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, en *Harvard Human Rights Journal*, vol. 16, 2003, pp.69-94.

TEITEL, R., “How are the new democracies of the southern cone dealing with the legacy of past human rights abuses?” en N. KRITZ (ed.), *Transitional justice: how emerging democracies reckon with former regimes*, United States Institute of Peace, vol.1, United States, 1995.

TEITEL, R., *Transitional Justice*, Oxford University Press, Nueva York, 2000.

UPRIMNY, R. y SAFFON, M., “Usos y abusos de la justicia transicional en Colombia”, *Anuario de Derechos Humanos*, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, núm.4, 2008, pp. 165-195.

VAN BOVEN, T., “The need to repair”, *The International Journal of Human Rights*, vol.16, núm.5, June, 2012, pp.694-697.

VAN DER MERWE, H. et al. (ed.), *Assessing the impact of transitional justice: challenges for empirical research*, United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 2009.

VAN DER MERWE, H., “Delivering justice during transition: research challenges” en H. VAN DER MERWE et al. (ed.), *Assessing the impact of transitional justice: challenges for empirical research*, United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 2009.

WALDORF, L., “Linking DDR and transitional justice” en A. CUTTER PATEL et al. (ed.), *Disarming the past: transitional justice and ex-combatants*, Social Science Research Council, Estados Unidos, 2009.

ZALAUQUETT, J., *Inaugural annual lecture on transition to democracy*, New York University, noviembre 18, 2004. Disponible en: [http://www.cdh.uchile.cl/conferencias\\_charlas/zalauquett/NYU\\_lecture.pdf](http://www.cdh.uchile.cl/conferencias_charlas/zalauquett/NYU_lecture.pdf)

## **Informes**

INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, *¿Cuánto se ha reparado en nuestras comunidades? Avances, percepciones y recomendaciones sobre reparaciones colectivas en Perú (2007-2011)*, ICTJ, APRODEH, Lima, 2011.

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, *Avances y desafíos en las reparaciones a las víctimas de la violencia política*, Área de Gobernabilidad y Derechos Humanos, Lima, agosto de 2011.

COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL, *Memoria 2006 - 2010, acciones de reparación realizadas en el marco de la ley No.28592*, Lima, abril de 2011.

CORREA, C., “Experiencias internacionales de reparaciones económicas” en INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, IDL, *¿Cómo cuantificar el dolor? Aportes para reparaciones económicas individuales para las víctimas del conflicto armado interno*, Lima, 2010.

## **Artículos en revistas de opinión**

CASSEL, D., “Por qué y para qué una comisión de la verdad?” *Revista Ideele*, No.135, Febrero, 2001. Disponible en: <http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/135/pag36.htm>

ESCOBAR, R., “Lo crudo y lo cocido”, *Revista Ideele*, No. 173, octubre 2005.

GARCÍA-SAYÁN, D., “Por qué y para qué una comisión de la verdad?” *Revista Ideele*, No.135, Febrero, 2001. Disponible en: <http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/135/pag36.htm>

HUERTA, G., “Reparaciones: que no esperen sentados”, *Revista Ideele*, núm. 199, julio 2010. Disponible en: <http://www.revistaideele.com/archivo/node/725>

MACHER, S., “Un camino arduo”, *Revista Ideele*, No.173, octubre, 2005.

RIVERA, C., “Crímenes contra la humanidad”, *Revista Ideele*, No.217, marzo 2012.  
Disponible en: <http://www.revistaideele.com/ideele/content/cr%C3%ADmenes-contra-la-humanidad>

RUBIO, S., “Julcamarca, la tierra del olvido...”, *Revista Ideele*, núm. 221, julio 2012.  
Disponible en: <http://www.revistaideele.com/ideele/?q=node/538>

SILVA, C., “Por la destitución: familiares de víctimas de Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri presentan cargos contra la sala Villa Stein”, *Informando Justicia*, Boletín electrónico semanal, Justicia Viva, núm. 377, agosto 2012. Disponible en: <http://justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=871>

VALENCIA, A., “Reparaciones: las razones del descontento”, *Revista Ideele*, núm. 219, mayo 2012. Disponible en: <http://www.revistaideele.com/ideele/content/reparaciones-las-razones-del-descontento-0>

### **Boletines y otras publicaciones**

S. LERNER, “Justicia y reparación para las víctimas de la violencia política”, *Revista Páginas*, Centro de Estudios y Publicaciones, vol. 32, No.207, octubre, 2007.

D. CAQUI, “Una ofrenda por la memoria y la justicia”, *Revista Páginas*, Centro de Estudios y Publicaciones, vol.32, núm.207, octubre, 2007.

J. LOMBAKU, “La CPI bajo escrutinio luego de su primer veredicto de culpabilidad: ¿Cómo podemos garantizar reparaciones significativas?”, *Boletín del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Víctimas*, REDRESS, edición 20, primavera, 2012.

## Otros recursos

CARRANZA, R., *Lubanga reparations decision should be celebrated, but only when victims receive compensation*, Podcast, ICTJ, 13 de agosto de 2012. Disponible en: <http://ictj.org/news/drc-lubanga-reparations-decision-should-be-celebrated-only-when-victims-receive-compensation>

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, Audiencias Públicas, Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Disponible en <http://www.memoriapara losderechoshumanos.pe/pedido/index.jsp>

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Comunicado de prensa conjunto, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Ministro de Justicia del Perú Diego García-Sayán, Washington, 22 de febrero de 2001.

COMISION MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL, *Definición Plan Integral de Reparaciones* - PIR, CMAN, Lima, 2005. Disponible en: [http://cman.pcm.gob.pe/index.php?option=com\\_content&view=article&id=70&Itemid=55](http://cman.pcm.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=55)

COMISION MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL, *Definición Programa de Reparaciones Económicas*, CMAN, Lima. Disponible en: [http://cman.pcm.gob.pe/index.php?option=com\\_content&view=article&id=72&Itemid=172](http://cman.pcm.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=172)

CORREA, C., “Cómo hacer efectivos los derechos de víctimas de violaciones sistemáticas”, *Seminario sobre Terrorismo, Justicia Transicional y Grupos Vulnerables*, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, mayo 5 de 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, Evolución de la pobreza en el Perú al 2011, Lima, mayo 2012. Disponible en: [http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza\\_ExposicionJefe.pdf](http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_ExposicionJefe.pdf)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, Población en situación de pobreza por departamentos, Lima, 2010. Disponible en: <http://www.inei.gob.pe/Sisd/index.asp>

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Ministro de Justicia firma convenio con Reniec para entregar DNI a víctimas de la violencia terrorista, Lima, 27 de abril de 2012. Disponible en: [http://cman.pcm.gob.pe/index.php?option=com\\_content&view=article&id=138:-ministro-de-justicia-firma-convenio-con-reniec-para-entregar-dni-a-victimas-de-violencia-terrorista-&catid=37:ultimas-noticias&Itemid=56](http://cman.pcm.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=138:-ministro-de-justicia-firma-convenio-con-reniec-para-entregar-dni-a-victimas-de-violencia-terrorista-&catid=37:ultimas-noticias&Itemid=56)

## **Jurisprudencia internacional**

(En orden cronológico)

### **Corte Interamericana de Derechos Humanos**

Caso Velásquez-Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia Reparaciones y Costas, 21 de julio de 1989.

Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam, Reparaciones, Sentencia del 10 de septiembre de 1993.

Caso El Amparo Vs. Venezuela, Reparaciones, Sentencia de 14 de septiembre de 1996.

Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, Reparaciones y costas, 19 de septiembre de 1996.

Caso de Loayza Tamayo Vs. Perú, Sentencia del 17 de septiembre de 1997.

Caso Castillo Páez Vs. Perú, Reparaciones, Sentencia del 27 de noviembre de 1998.

Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Reparaciones, Sentencia del 20 de enero de 1999.

Caso Blake Vs. Guatemala, Reparaciones, Sentencia del 22 de enero de 1999.

Caso Castillo Petrucci y otros Vs. Perú, Sentencia del 30 de mayo de 1999.

Caso Barrios Altos Vs. Perú, fondo, Sentencia de 14 de marzo de 2001.

Caso Panel Blanca Vs. Guatemala, Reparaciones, Sentencia del 25 de mayo de 2001.

Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, reparaciones y costas, Sentencia de 26 de mayo de 2001.



Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, Reparaciones, Sentencia del 3 de diciembre de 2001.

Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala Reparaciones, Sentencia del 22 de febrero de 2002.

Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, Reparaciones, Sentencia del 27 de febrero de 2002.

Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, interpretación de la sentencia de excepción preliminar, fondo y reparaciones, Sentencia de 26 de noviembre de 2003.

Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2004.

Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala, Reparaciones y Costa, Sentencia de 19 de noviembre 2004.

Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de septiembre de 2005.

Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2005.

Caso La Cantuta Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006.

## **Tribunal Europeo de Derechos Humanos**

Caso Papamichalopoulos y otros Vs. Grecia, Sentencia del 31 de octubre de 1995.

Caso Selçuk y Asker Vs. Turquía, Sentencia del 24 de abril de 1998.

Caso Gençel Vs. Turquía, Sentencia del 23 de octubre de 2003.

Caso Üküñç y Günes Vs. Turquía, Sentencia del 18 de diciembre de 2003.

Caso Ipek Vs. Turquía, Sentencia del 17 de febrero de 2004.

Caso Assanidze Vs. Georgia, Sentencia del 8 de abril de 2004.

Caso Broniowski Vs. Polonia, Sentencia del 22 de junio de 2004.

Caso Somogyi Vs. Italia, Sentencia del 18 de mayo de 2004.

## **Corte Internacional de Justicia**

Case concerning the factory at Chorzów, twelfth ordinary session, series A - No. 9, collection of judgments, A.W. Sijthoff's Publishing Company, Leyden, 1927.

## **Tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales**

(En orden cronológico)

### **Organización de las Naciones Unidas**

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 21 de diciembre de 1965.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966.

Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, 10 de diciembre de 1984.

Declaración sobre los principios fundamentales para las víctimas de delitos y abuso de poder, Asamblea General, resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985.

Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989.

Resolución 808, Consejo de Seguridad, U.N. Doc. S/RES/808, 22 de febrero de 1993.

Resolución 955, Consejo de Seguridad, U.N. Doc. S/RES/955, 8 de noviembre de 1994.

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener reparación, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, versión revisada del 16 de enero de 1997.

Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political), Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1., 2 de octubre de 1997.

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, 18 de enero de 2000.

Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts, Comisión de Derecho Internacional, sesión 53, 2001.

Rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, Report of the Secretary-General to Security Council, S/2004/616, 23 de agosto de 2004.

Impunidad, Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General, Resolución 60/147, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006.

Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, Res. 61/295, 13 de septiembre de 2007.

Cuarto Informe periódico Argentina, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Comité de Derechos Humanos, Doc. CCPR/C/ARG/4, 13 de marzo de 2008.

Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice, Nueva York, marzo, 2010.

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Asamblea General, resolución 64/163, 28 de Julio de 2011.

Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non recurrence, Human Rights Council, A/HRC/18/L.22, septiembre 26 de 2011.

El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, Nueva York, 12 de octubre, 2011.

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Misión a Túnez, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/19/61/Add.1, 2 de febrero de 2012.

## **Sistemas Regionales**

CONSEJO DE EUROPA, *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*, Roma, 4 de noviembre de 1950.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, San José, Costa Rica 22 de noviembre de 1969.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. *Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos*, Nairobi, Kenia, 27 de julio de 1981.

## **Derecho Internacional Humanitario**

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, *Convención de la Haya de 1907 sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (H.IV)*, 18 de octubre de 1907.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, *III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra*, 12 de agosto de 1949.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, *Protocolo Adicional de las Convenciones de Ginebra sobre Protección a Víctimas de Conflictos Armados Internacionales*, 8 de junio de 1977.

## **Corte Penal Internacional**

Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998.

Situation in the Democratic Republic of Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Public Submission on reparation issues, ICC-01/04-01/06, 10 de mayo de 2012.

Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, 7 de agosto de 2012.

## **Otros**

DECLARACIÓN DE POTSDAM, Foreign Relations of the United States: The Conference of Berlin, 2 vols. (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1960), II, 147-1476, Harry S. Truman Library and Museum.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Convenio No.169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 7 de junio de 1989.

## **Otra normativa**

(En orden cronológico)

### **Perú**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, *Decreto Supremo N° 068-DE-SG, Fijan montos de indemnización establecida en el Reglamento de Organización y Funciones de los Comités de Autodefensa*, Lima, 23 de diciembre de 1998.

PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, Resolución Suprema 304-2000-JUS, Lima, 9 de diciembre de 2000.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Decreto Supremo 065-2001-PCM, Lima, 4 de junio de 2001.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, *Decreto Supremo N° 011-2004-PCM, Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional*, Lima, febrero de 2004.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, *Ley sobre los desplazamientos internos, ley N° 28223*, Lima, 19 de mayo de 2004.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, *Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, Ley N° 28592*, Lima, 29 de julio de 2005.

MINISTERIO DE SALUD, *Decreto Supremo N° 006-2006-SA*, Lima, 23 de junio de 2006.

MINISTERIO DE JUSTICIA, *Decreto Supremo N° 015-2006-JUS*, Lima, julio de 2006.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, *Resolución Ministerial 373-2006-PCM*, Lima, 19 de octubre de 2006.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, *Decreto Supremo DS 051-2011-PCM*, Lima, 15 de junio de 2011.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, *Decreto Supremo DS No.102-2011-PCM*, Lima, 22 de febrero de 2012.

MINISTERIO DE SALUD, *Resolución Ministerial N° 299-2012-MINSA, Lineamientos para el Acompañamiento Psicosocial a Familiares de Personas Desaparecidas*, Lima, 16 de abril de 2012.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Recusación No.4104-2010, Lima, 13 de junio de 2012.

## **España**

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.



## LISTA DE ABREVIATURAS

CONADEP: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina

CNVR: Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Chile

CNRR: Corporación Nacional para la Reparación y Reconciliación

RDA: República Democrática de Alemania (Alemania Oriental)

Stasi: Policía secreta de Alemania

StB: Policía secreta de Checoslovaquia

UNMIK: Misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

TPIY: Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia

TPIR: Tribunal Penal Internacional para Ruanda

CPI: Corte Penal Internacional

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

ICTJ: International Center for Transitional Justice

CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos

CADHP: Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos

PCP-SL/SL: Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso

MRTA: Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

CVR: Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú

PIR: Plan Integral de Reparaciones

CMAN: Comisión Multisectorial de Alto Nivel

CR: Consejo de Reparaciones

RUV: Registro Único de Víctimas

## ANEXOS

### *Precisiones metodológicas del estudio empírico*

#### A) Entrevistas a las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos

La fuente de información principal consistió en una entrevista en profundidad (a través de visitas domiciliarias) que se realizó entre los días 1 y 12 de marzo del 2012 a cargo de la autora y con la asistencia de una intérprete para las entrevistas realizadas en quechua (20 de las 50 entrevistas realizadas a las víctimas). Se entrevistaron a un total de cincuenta (50) personas de las comunidades de Arcuilla, Cahua y Yuracocha y de la capital del distrito de Julcamarca, en el departamento de Huancavelica en el Perú. En Arcuilla se entrevistaron a 8 personas, en Cahua a 12 personas, en Yuracocha a 5 personas y en Julcamarca 25 personas. En cuanto al sexo de los entrevistados, 28 fueron mujeres y 22 hombres, todos mayores de edad, entre 25 y 70 años.

El método de obtención de información directa indispensable para este estudio fue la entrevista cualitativa en profundidad; de ella se capturó información acerca de los conocimientos, los significados, las interpretaciones, los valores, las actitudes y los comportamientos de las víctimas del conflicto armado peruano, en términos del tipo de violencia sufrida; los procesos de aceptación y duelo por la pérdida; de reconocimiento como víctima y sujeto de derecho; de integrante en un Estado democrático y la relación con la institucionalidad. Asimismo, se obtuvo información sobre la construcción de nuevas redes sociales y de una memoria colectiva.

La entrevista se realizó teniendo como base una guía de preguntas que permitió identificar las variables establecidas para la obtención de la información necesaria para su posterior análisis. Este instrumento de investigación estuvo comprendido metodológicamente por siete secciones: En primer lugar, por la información personal; en segundo lugar, la afectación por el conflicto armado (a nivel individual y a nivel colectivo); en tercer lugar, el

conocimiento y percepción sobre temas de reparación; en cuarto lugar, la percepción sobre la justicia; en quinto lugar, la repetición de los hechos; en sexto lugar, la percepción sobre las acciones del Estado para la no repetición de los hechos y por último, las acciones de memoria.

#### B) Entrevistas a académicos, expertos y funcionarios

En cuanto a las entrevistas realizadas a los funcionarios de las instituciones públicas pertinentes y a los académicos y expertos en temas de justicia transicional y reparaciones, se realizaron entrevistas temáticas diseñadas individualmente según el área de estudio o trabajo del entrevistado. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos.

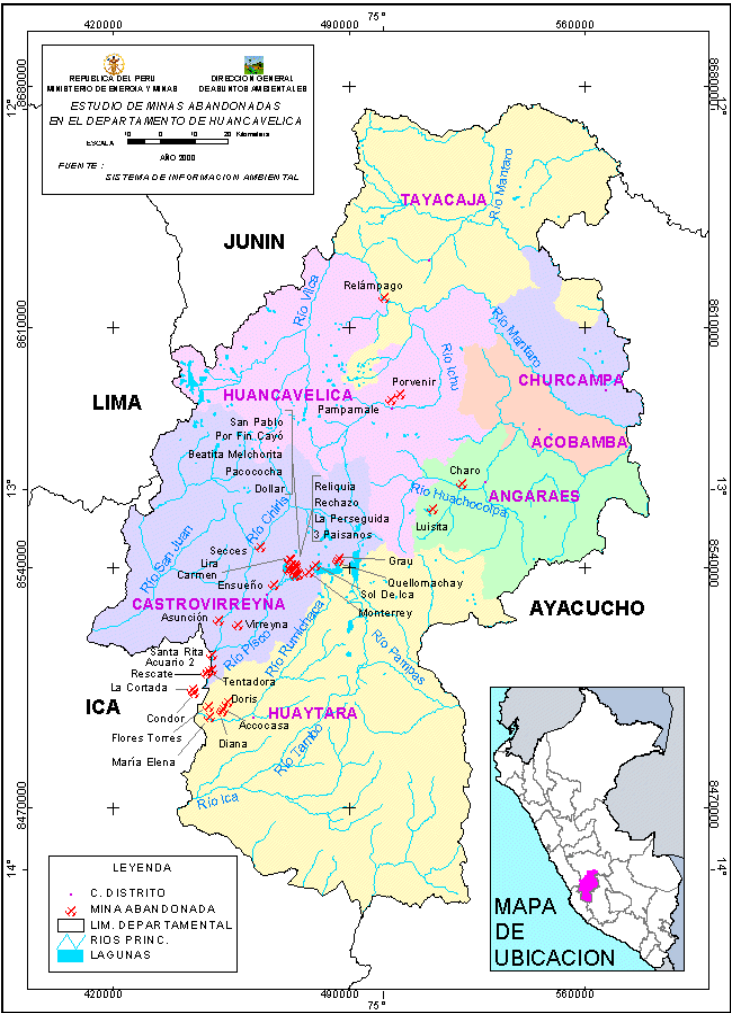
Las transcripciones de todas las entrevistas pueden ser consultadas en la versión electrónica de este trabajo de fin de máster.

**Tabla 5. Académicos, expertos y funcionarios entrevistados**

<b>Salomón Lerner Febres</b>	Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Rector emérito de la Universidad Pontificia Católica del Perú
<b>Sofía Macher</b>	Comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Presidenta del Consejo de Reparaciones. Vice-presidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de las Islas Salomón
<b>Daniel Figallo</b>	Vice-ministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (en el momento de la entrevista). Actualmente Vice-ministro de Justicia.
<b>Adolfo Chavarry</b>	Secretario Ejecutivo de la CMAN (Ente encargado de la implementación del Plan Integral de Reparaciones)
<b>Sonia Paredes</b>	Ex-consultora ICTJ Perú. Responsable del proyecto de monitoreo del programa de reparaciones colectivas en el Perú. Actualmente consultora de ICTJ Colombia.
<b>Julie Guillerot</b>	Miembro del grupo de trabajo de la CVR sobre género. Ex consultora del ICTJ para Perú y Marruecos. Experta en temas de reparación y género.
<b>Gustavo Gorriti</b>	Periodista experto en el tema de Sendero Luminoso y el conflicto armado peruano.
<b>Luz del Carmen Ibañez</b>	Fiscal Superior Titular de Lima. Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional. Fiscal superior en los casos El Frontón y Los Cabitos.
<b>Carlos Rivera Paz</b>	Director del Área Jurídica del Instituto de Defensa Legal. Abogado de la parte civil en el juicio contra Fujimori. Abogado de las víctimas en los casos de la masacre de Accomarca y de las violaciones sexuales en las bases militares de Manta y Vilca.
<b>Gino Huerta</b>	Representante de las organizaciones de la sociedad civil ante la CMAN. Experto en el tema de reparaciones.
<b>Exaltación Laura</b>	Alcalde del distrito de Julcamarca
<b>Javier Torres</b>	Miembro del Comité Directivo de la Asociación SER. Director de Noticias SER. Ex-asesor del Consejo de Reparaciones.
<b>Ana María Caro</b>	Área de evaluación y calificación del Registro Único de Víctimas

Fuente: realización propia

Gráfico 5. Mapa de Huancavelica (Perú)



Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú. 2000.